



ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3918 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ABR. 30 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 466 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE BANCO DE TIEMPO “BOGOTÁ RECÍPROCA”....	31577
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 467 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL MODELO DE URBANISMO SEGURO EN LAS ZONAS PRIORIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31587
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 468 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.”	31614
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 469 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y COMPLEMENTA EL ACUERDO 537 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31621
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 470 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31636
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 471 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA GESTIONAR LA FATIGA Y EL CANSANCIO EN LOS CONDUCTORES QUE OPERAN EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31646
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 472 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31672
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 473 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE LA GESTIÓN DEL CONTROL POLÍTICO LOCAL EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (JAL) DE BOGOTÁ MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE PASANTES DE PREGRADO Y PROGRAMAS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO CAPITAL.”	31690
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 474 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”	31699

TABLA DE CONTENIDO	Pág.
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 475 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA SOLIDARIDAD SOCIAL CON LAS ESCOBITAS DE BOGOTÁ: ACCIONES AFIRMATIVAS ORIENTADAS A LA DIGNIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE ASEO EN VÍA Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CAPITAL”	31709
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 476 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE CREA EL EVENTO CULTURAL Y MUSICAL AÑOS DORADOS AL PARQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	31728
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 477 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PROMOVER LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL”	31748
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 478 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA “AULAS DOMICILIARIAS””	31777
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 479 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.”	31793
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 480 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS TRANS A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS CON PLENA GARANTÍA DE DERECHOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	31803

PROYECTO DE ACUERDO NO 466 DE 2025

PRIMER DEBATE

**"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE BANCO DE TIEMPO
“BOGOTÁ RECÍPROCA””**

1. OBJETO DEL PROYECTO.

El Proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración del honorable Concejo, tiene como objetivo implementar la estrategia comunitaria de banco de tiempo mediante el programa “Bogotá recíproca”. Este tiene como objetivo fomentar el intercambio de servicios y habilidades entre los ciudadanos de Bogotá sin necesidad de usar dinero. Esto permitirá

fortalecer el sentido de pertenencia, el arraigo y la convivencia comunitaria y mejorar la confianza entre los ciudadanos y las entidades distritales, desarrollando y creando el tejido social.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La percepción positiva de la ciudadanía en Bogotá ha crecido recientemente. Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, en 2024, más de la mitad de los habitantes se sienten orgullosos y satisfechos de vivir en Bogotá, con un aumento del 20% y del 10% respectivamente (Bogotá Cómo Vamos, 2024). Sin embargo, los resultados también muestran que la confianza de la ciudadanía es baja, tanto en las entidades distritales (solo el 12% afirmó tener confianza) como en los conciudadanos (solo el 4% afirmó tener confianza en otros habitantes).

A pesar del creciente orgullo por vivir en Bogotá, persiste una baja confianza entre los residentes, quienes no confían en la capacidad de las entidades distritales para resolver sus necesidades ni en sus conciudadanos. Esto resalta la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria en la ciudad.

Es importante reconocer la multiplicidad de necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Aunque, según la encuesta de percepción ciudadana, los temas que más preocupan a los ciudadanos son la salud, el empleo, la pobreza, la educación, la seguridad, la movilidad y la vivienda (BCV, 2024), estas preocupaciones varían según el estrato socioeconómico, la zona de la ciudad, la edad y el género. Con esto en mente, y buscando generar una alternativa que responda a las dinámicas y necesidades locales, complementando lo realizado por la administración distrital y fortaleciendo el tejido social, se propone el programa **“Bogotá Recíproca”**, basado en la herramienta del banco de tiempo.

Esta herramienta puede aprovechar la multiplicidad de talentos y conocimientos de los habitantes para enfrentar desafíos urbanos de manera colaborativa. Un ejemplo de esto es el banco de tiempo de Sants, en Barcelona, donde se promueve el intercambio de servicios y conocimientos usando el tiempo como forma de pago, sin importar el tipo de servicio intercambiado (Banco de tiempo de Sants, s.f.). A través de este intercambio, es posible crear una red de ayuda mutua y contribuir a cubrir ciertas necesidades de las personas.

Con la participación de la ciudadanía, este programa involucrará a los habitantes en la construcción y formación de la ciudad, generando una responsabilidad compartida en el fortalecimiento de las comunidades locales. Además, teniendo en cuenta la limitación de recursos y las mayores preocupaciones de la ciudadanía, esta alternativa permitirá desarrollar espacios académicos, culturales, de recreación y de servicio al ciudadano, reconociendo la experiencia y el conocimiento de cada uno de los bogotanos.

De esta manera, se puede mejorar la confianza entre la ciudadanía, fomentar la participación ciudadana y construir el tejido social. El programa **“Bogotá Recíproca”** reconocerá el conocimiento y la experiencia de cada ciudadano en la

capital, bajo la premisa de que “así como todos podemos aprender cosas nuevas, también tenemos la capacidad de brindar a nuestra comunidad los conocimientos o habilidades que poseemos” (Sorae, 2019).

Aunque la Administración Distrital ofrece diversos servicios a la ciudadanía, este proyecto permitirá ampliar la formación y participación ciudadana mediante el conocimiento de los mismos bogotanos. Así, se realizaría un esfuerzo paralelo para impulsar el tejido social y el crecimiento comunitario.

En resumen, el programa “Bogotá Recíproca” es una iniciativa local que permite el intercambio de servicios y habilidades sin necesidad de usar dinero. Aquí, los ciudadanos ofrecerán horas de su conocimiento y recibirán esa misma cantidad de tiempo en servicios ofertados de su interés. En lugar de pagar por los servicios, los participantes intercambian tiempo. Por ejemplo, una hora de ayuda en jardinería puede ser “depositada” en el banco de tiempo, y luego se puede “retirar” una hora para recibir ayuda en algo que necesiten, como clases de inglés.

Esta es una alternativa que ha permitido fortalecer el tejido social y los lazos comunitarios en distintos lugares del mundo. Los bancos de tiempo se han implementado en lugares como Barcelona, Madrid, Valencia, Ciudad de México y Sao Paulo (Time over flow, s.f.).

Dicho programa, contará con el siguiente orden:

1. Desarrollo de un portal web o aplicativo: en este, se realizarán las inscripciones previas para revisión del programa a ofertar.
2. Revisión del servicio a ofertar: se revisará, de manera general, que sí corresponda a los servicios o productos ofertados.
3. Confirmación de servicio y creación de perfil: una vez aprobado el perfil del ciudadano, con base en los servicios ofrecidos se creará su perfil para que, a través de la plataforma, se pueda hacer revisión de los servicios disponibles para intercambiar.
4. Una vez tomado el servicio, la plataforma registrará tendrá contabilizadas las horas invertidas en el espacio y permitirá usarlas como “canje” para dar el servicio ofertado por el usuario inicialmente.
5. Para asegurar el equilibrio entre oferta y demanda se establece un límite de saldo negativo de 10 horas.

Ahora bien, para garantizar el debido cumplimiento de las funciones de las organizaciones y de los participantes será importante establecer las reglas, criterios, derechos, deberes, e incentivos para quienes participen. En este sentido, se establecerían los siguientes ejes fundacionales:

A. Definiciones:

Bogoluntarios de “Bogotá Recíproca”: toda persona natural que, libre y responsablemente, sin recibir remuneración económica, ofrece y recibe tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, respondiendo a las necesidades locales, a través de entidades distritales.

B. Derechos y deberes: con base en el Acuerdo 841 de 2022, se desarrollaron los siguientes derechos y deberes:

1. ***DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES.*** Las personas que participen en el programa “Bogotá Recíproca”:
 - a. Participar activa y libremente en el programa, recibiendo la debida información sobre la misma y en especial sobre sus fines, estructura organizativa y funcionamiento.
 - b. Colaborar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los productos y servicios que oferta, así como tener la oportunidad de dar su opinión sobre aspectos del programa.
 - c. Recibir el apoyo técnico, humano, formativo y los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen, desde el momento de su ingreso a la tarea y durante el desarrollo de su actividad voluntaria.
 - d. Recibir un trato justo y no discriminatorio, que se respete su libertad, dignidad, intimidad, creencias y al tratamiento sin discriminación alguna, así como a la confidencialidad de los datos del voluntario.
 - e. Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad, protección e higiene en función de la naturaleza y características de la tarea.
 - f. Ser reconocido por el valor social de su contribución.
 - g. Recibir la respectiva certificación y cualificación de su actuación acorde con las horas de su servicio prestado.
2. ***OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES.*** Son deberes de los voluntarios los siguientes:
 - a. Actuar con responsabilidad y entregar de manera generosa lo mejor de sí mismo.
 - b. Prestar al otro una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar ningún tipo de compensación económica a cambio.
 - c. Reconocer, respetar y defender activamente la autonomía, la dignidad personal de los otros.
 - d. Propiciar siempre un clima de respeto mutuo.

C. Incentivos

Además de poder recibir otro servicio ofertado en el programa, sea para su formación, o recreación y deporte, el aplicativo podrá certificar las horas entregadas al servicio comunitario.

D. Fortalecimiento de la identidad local

Dado que cada necesidad, problemática o interés es distinto según el lugar, los servicios, conocimientos o espacios ofertados por localidad dependerán de la demanda de los habitantes. Así, se atenderán las preocupaciones de la ciudadanía, y se podrá responder a los intereses y/o necesidades de cada lugar, optimizando los recursos y fortaleciendo la participación ciudadana.

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa no tiene antecedentes en el Concejo de Bogotá.

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. ODS 1: Fin de la pobreza

El programa “Bogotá recíproca”, que usa la herramienta de banco de tiempo, representa un rol importante en la asistencia a comunidades que enfrentan situaciones de pobreza. Este, además de fomentar acciones que promueven la inclusión social y el acceso a oportunidades de desarrollo, oferta servicios de formación académica y recreación que, en condiciones habituales, pueden ser más difíciles de acceder.

2. ODS 3: Salud y bienestar.

El presente proyecto, al fomentar la oferta de servicios de recreación y deporte, por parte de los ciudadanos, en las localidades, desempeña un papel fundamental en la promoción de la salud y el bienestar. Así, los diferentes tipos de servicios contribuyen a fortalecer la salud pública en nuestra ciudad, como, por ejemplo, campañas voluntarias de revisión médica general, clases de baile, o clases de música.

3. ODS 4: Educación de calidad.

El proyecto fomenta participantes en los que personas profesionales en licenciatura, docentes, etc., aportan su conocimiento y experiencia para aportar a la educación en lugares en los que niños y jóvenes no tienen acceso. De esta manera se incentiva la educación en la comunidad y promueve el aprendizaje a lo largo de la vida.

4. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

El reconocimiento del Embajador de “Bogotá recíproca” como experiencia laboral valida las habilidades adquiridas y mejora la empleabilidad. Además, incentiva la creación de redes de apoyo y colaboración interinstitucional, facilitando la inserción laboral de jóvenes sin experiencia.

5. ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

El impulso del programa en Bogotá juega un papel fundamental en la creación de una ciudad más sostenible, a través de acciones comunitarias que enriquecen la calidad de vida en las localidades. Iniciativas como la recuperación de espacios públicos, enseñanza, la asistencia en situaciones de emergencia y los proyectos ambientales son solo algunas de las formas en que el Banco de Tiempo contribuye a forjar una Bogotá más sostenible y comunitaria.

5. MARCO JURÍDICO

a. Del Orden Constitucional:

En virtud de la Constitución Política de Colombia:

- i) Artículo 1: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
- ii) Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
- iii) Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
- iv) Artículo 8 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
- v) Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación .
- vi) Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

- vii) Artículo 71: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

b. De orden legal:

- i) Ley 743 de 2002: Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal.
- ii) Ley 720 de 2001: Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos

c. De orden distrital:

- i) Acuerdo 841 de 2022: Por el cual se implementa, promueve y fomenta el ejercicio de la acción voluntaria y el servicio del voluntariado en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones.
- ii) Acuerdo 607 de 2015: POR EL CUAL SE FOMENTA Y APOYA EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO CAPITAL.

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...)

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Los autores argumentan que las iniciativas propuestas no tienen acciones que impliquen una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

No obstante, en este punto es de resaltar, que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C- 911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Por su parte, el artículo 13, del mismo decreto, señala:

“Artículo 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Por lo tanto, el Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con facultades y competencia para dictar las normas introducidas mediante el presente Proyecto de Acuerdo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo 841 de 2022. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124859>
- Bogotá Cómo Vamos. (2024). Encuesta de Percepción Ciudadana 2024. Recuperado de <https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>
- Banco de Tiempo de Sants. (s.f.). Normas del Banco de Tiempo. Recuperado de <https://bancdetempsdesants.org/es/normas-del-banco-de-tiempo/>

- Elias Soae. (2019). Voluntariado en la seguridad comunitaria.
- TimeOverflow. (s.f.). Organizations. Recuperado de <https://www.timeoverflow.org/organizations>

Cordialmente,

ANDRES BARRIOS BERNAL
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 466 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA 'BOGOTÁ RECÍPROCA' PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y HABILIDADES ENTRE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ”

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los numeral 1 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Creación del programa 'Bogotá Recíproca'. Créase el programa 'Bogotá Recíproca', a través de la herramienta del banco de tiempo, con el objetivo de fomentar el intercambio de servicios y habilidades entre los ciudadanos de Bogotá, sin necesidad de usar dinero con la intención de construir tejido social.

Parágrafo 1. Se desarrollará una página y/o aplicativo web para tener registro de los servicios ofertados, las horas entregadas y recibidas y el envío de los certificados de horas entregadas expedidos por la Administración Distrital.

ARTÍCULO 2. Objetivos del programa. El programa 'Bogotá Recíproca' tendrá los siguientes objetivos:

1. Fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria en la ciudad.
2. Mejorar la confianza entre los ciudadanos y las entidades distritales.
3. Fomentar la participación ciudadana y la construcción del tejido social.
4. Reconocer y aprovechar la multiplicidad de talentos y conocimientos de los habitantes de Bogotá.

ARTÍCULO 3. Participación ciudadana. El programa involucrará a los habitantes en la construcción y formación de la ciudad, generando una responsabilidad compartida en el fortalecimiento de las comunidades locales.

ARTÍCULO 4. Desarrollo de espacios. El programa desarrollará espacios académicos, culturales, de recreación y de servicio al ciudadano, reconociendo la experiencia y el conocimiento de cada uno de los bogotanos a través del fomento de la construcción comunitaria. Lo anterior, obedecerá a las demandas y necesidades de las localidades.

ARTÍCULO 5. Funcionamiento del banco de tiempo. El banco de tiempo funcionará de la siguiente manera:

1. Inscripciones y la revisión de los servicios a ofertar en el aplicativo: los ciudadanos que deseen ser *Boguntarios* del programa, realizarán su inscripción en el aplicativo y se revisará que el contenido del servicio ofertado corresponda debidamente a lo expuesto en la lista de servicios ofertados.
2. Creación de perfil: una vez revisado y aprobada la inscripción del participante, se creará su perfil en la plataforma para que pueda intercambiar servicios.
3. Registro de horas: la plataforma registrará las horas invertidas y permitirá usarlas como "canje" para recibir otros servicios.
4. Límite de saldo negativo: se establece un límite de saldo negativo de 10 horas para asegurar el equilibrio entre oferta y demanda.
5. Expedición de certificado: el participante tendrá la posibilidad de solicitar un certificado de las horas dadas y recibidas en el aplicativo. Esto, para fortalecer su experiencia y hoja de vida.

ARTÍCULO 6. Promoción del programa por parte de la Administración Distrital. La Administración Distrital promoverá activamente el programa 'Bogotá Recíproca' mediante campañas de difusión y pedagogía.

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 467 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL MODELO DE URBANISMO SEGURO EN LAS ZONAS PRIORIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****1. OBJETO DEL PROYECTO**

Este proyecto de acuerdo tiene como objetivo implementar un modelo de urbanismo seguro en las zonas priorizadas de Bogotá, donde existen altos índices de inseguridad, ocupación indebida del espacio público, acumulación de basuras y falta de iluminación. El propósito es transformar estos espacios en lugares más seguros, accesibles, limpios y acogedores, a través de un enfoque integral que incluya mantenimiento constante, instalación de infraestructura tecnológica, participación activa de la comunidad y colaboración entre las entidades públicas y privadas.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La implementación de un modelo de urbanismo seguro en zonas priorizadas en Bogotá por la Administración Distrital, especialmente caracterizadas por altos índices de criminalidad, ocupación indebida del espacio público, acumulación de basuras y falta de alumbrado, mejoramiento y mantenimiento, responde a la necesidad urgente de transformar estas áreas en espacios más habitables, seguros y sostenibles. Las intervenciones no solo se centran en la infraestructura, sino también en promover la convivencia, la participación de la comunidad en la gestión del espacio público, así como la colaboración interinstitucional. En conjunto, estas acciones tienen el potencial de mejorar la calidad de vida, reducir la criminalidad y fortalecer el tejido social en estas zonas.

Contexto y Relevancia del Proyecto:

Bogotá enfrenta retos urbanos y sociales significativos, como la inseguridad, el deterioro de la infraestructura pública y la baja participación ciudadana en la gestión del espacio urbano. Según el informe de la Policía Nacional (2023), la ciudad registró un aumento del 10% en los delitos de hurto y un 7% en homicidios en comparación con 2022, concentrándose principalmente en zonas periféricas y de alta vulnerabilidad. Además, el 65% de los ciudadanos reportan sentirse inseguros en espacios públicos mal iluminados o descuidados (Encuesta de Percepción Ciudadana, Bogotá Cómo Vamos, 2023). Estos problemas se concentran principalmente en las áreas de mayor problemática de la ciudad, donde han generado una creciente sensación de inseguridad y desconfianza, lo que contribuye a la expansión de la delincuencia y el desorden en el espacio público.

Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 resalta la importancia de generar espacios públicos seguros para toda la población, mientras que la Nueva Agenda Urbana promueve la creación de espacios públicos inclusivos, seguros y libres de violencia. En este contexto, el urbanismo seguro se presenta como una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas, reducir la criminalidad y fomentar la participación en la gestión del entorno urbano. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura y la seguridad en estas áreas específicas, sino también comprometer a la ciudadanía en la creación de espacios públicos accesibles, agradables y adecuados para todos.

Los Seis Pilares del Urbanismo Seguro:

La implementación del urbanismo seguro en Bogotá se basa en siete pilares fundamentales, que deben ser tratados de manera integral para lograr los objetivos del proyecto. A continuación, los pilares son representados junto a experiencias exitosas a nivel nacional e internacional.

- 1. Mejoramiento y mantenimiento permanente de los espacios públicos:** El mejoramiento y mantenimiento continuo de los espacios públicos es fundamental para crear un entorno urbano seguro y acogedor. No se trata solo de mantener los espacios en buen estado, sino de mejorar constantemente la infraestructura, asegurando que los lugares sean funcionales, accesibles y agradables para todos. Un entorno bien cuidado fomenta el sentido de pertenencia de la comunidad y contribuye directamente a la seguridad. La presencia de basura, mobiliario deteriorado, infraestructura rota o señales vandalizadas no solo afecta la funcionalidad del espacio, sino que también crea una sensación de abandono, lo cual puede aumentar la incidencia delictiva.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado bajo la teoría de las "ventanas rotas" (Broken Windows Theory), formulada por James Q. Wilson y George L. Kelling (1982). Esta teoría sostiene que si en un entorno urbano se permite que una ventana rota permanezca sin reparar, ese pequeño signo de desorden puede escalar a formas mayores de incivilidad y

crimen, al enviar un mensaje de que "no hay control" y que "todo vale" en ese espacio. (Wilson, J. Q. & Kelling, G. L. (1982). *Broken Window*)

Un ejemplo destacado de cómo el mantenimiento continuo y permanente de los espacios públicos beneficia a la población es el caso de Bogotá, Colombia. Durante los primeros 100 días de la administración distrital en 2024. Se implementaron las siguientes estrategias para revitalizar y mantener el espacio público:

-Revitalización del Centro Histórico: A través de la campaña #ElCentroVive, se transformaron más de 11,000 metros cuadrados del Centro Histórico de Bogotá. Se limpiaron, intervinieron y pintaron 961 elementos de mobiliario urbano, como postes, cajas telefónicas y fachadas, mejorando así la estética y funcionalidad del área. (Alcaldía Mayor de Bogotá (2024). #ElCentroVive: 40 jornadas transformadoras para Bogotá.)

-Estrategia "Puentes que Unen": Se intervinieron bajo puentes en zonas clave de la ciudad, revitalizando más de 2,026 metros cuadrados. Estas áreas, anteriormente asociadas con inseguridad y descuido, se transformaron en entornos más seguros y atractivos para los ciudadanos. Alcaldía Mayor de Bogotá (2024). *Puentes que Unen*.

Estas intervenciones no solo mejoraron la infraestructura urbana, sino que también promovieron un sentido de pertenencia y civismo entre los ciudadanos, fomentando la apropiación del espacio público y contribuyendo a una mayor seguridad y bienestar en la ciudad.

Este es un claro ejemplo de la efectividad que ha generado en Bogotá y que podríamos seguir realizando en las zonas que sean designadas para el modelo de urbanismo seguro y así seguir desarrollando el urbanismo seguro en la ciudad.

- 2. Iluminación adecuada para espacios más seguros:** La iluminación en el espacio público no solo cumple una función estética o técnica, sino que es un factor decisivo en la prevención del delito y en la percepción de seguridad. La falta de iluminación en ciertas zonas de Bogotá incrementa la sensación de inseguridad y facilita la actividad delictiva.

El Crime Lab de la Universidad de Chicago, en colaboración con la Oficina del Alcalde de Justicia Criminal de Nueva York, la Policía de Nueva York (NYPD) y la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), llevó a cabo un experimento aleatorizado controlado (RCT) para evaluar el impacto de la iluminación pública en la criminalidad. El estudio mostró que las comunidades que recibieron iluminación adicional experimentaron una reducción significativa en los delitos nocturnos al aire libre. Después de tener en cuenta posibles efectos indirectos, se encontró que la provisión de luces callejeras llevó, como mínimo, a una reducción del 36% en los delitos nocturnos al aire libre. (Chalfin, A., Hansen, B., Lerner,

J., & Parker, L. (2021) Reducing Crime Through Environmental Design: Evidence from a Randomized Experiment of Street Lighting in New York City)

Un estudio realizado por la personería de Bogotá hecho durante un recorrido de verificación sobre el corredor de la Autopista Sur, la Avenida NQS y Autopista Norte en la noche del 17 de agosto con el objetivo de observar el estado de la iluminación. Se encontró que en 21 de los 69 polígonos persisten fallas en la infraestructura de iluminación que generan oscuridad y pueden afectar la seguridad de los habitantes de los sectores que transitan y habitan en estos sectores. Personería de Bogotá (2023). *La iluminación deficiente facilita el accionar de la delincuencia*.

3. **Seguridad:** La seguridad en el espacio público no se limita a la presencia policial, sino que requiere un enfoque integral que combine patrullaje, tecnología y participación comunitaria.

En Colombia, la Policía Nacional reportó que el fortalecimiento de patrullajes en zonas priorizadas generó una reducción del 12%-15% en delitos de alto impacto en 2022, según cifras del sistema SIEDCO y boletines estadísticos institucionales (Policía Nacional de Colombia, Boletín de Seguridad Ciudadana, 2023).

Un estudio de Clarion Security Systems estima que en 2022 Londres tenía más de 942,562 cámaras de CCTV desplegadas en espacios públicos, transporte y zonas comerciales. Este sistema contribuyó a una reducción en robos en áreas monitoreadas, actuando tanto como medida disuasiva como herramienta para la identificación de delincuentes. Un caso emblemático fue el atentado terrorista de 2017 en el Puente de Londres, donde las cámaras permitieron rastrear y detener rápidamente a los responsables. Aunque críticos señalan preocupaciones sobre privacidad, las autoridades británicas destacan que la vigilancia tecnológica, combinada con inteligencia policial, ha sido clave para mantener bajos los índices de criminalidad en la capital. (BBC News Mundo 2019) y (Clarion Security Systems (2022). How Many CCTV Cameras Are in London?

Estos resultados muestran que la seguridad efectiva se construye con presencia activa del Estado, infraestructura tecnológica y alianzas con la comunidad.

4. **Entornos Limpios:** La limpieza del espacio público es fundamental no solo para la salud pública, sino también para generar una sensación de bienestar y seguridad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2024), las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria y la fiebre amarilla, representan más del 17% de las enfermedades infecciosas y causan más de 700,000 muertes al año. La OMS enfatiza que una gestión adecuada de residuos y un control efectivo de vectores son fundamentales para

reducir la incidencia de estas enfermedades, especialmente en comunidades vulnerables. Organización Mundial de la Salud (2024). *Vector-borne diseases*.

Sídney, Australia – De vertedero a parque olímpico

El área que hoy alberga el Parque Olímpico de Sídney fue anteriormente un vertedero industrial. Mediante un proceso de rehabilitación ambiental, se transformó en un espacio verde urbano que ahora ofrece servicios ecosistémicos y áreas recreativas, mejorando la calidad de vida y la seguridad en la región. MDPI (2023). *Urban Regeneration and Green Space at Sydney Olympic Park*.

5. **Participación ciudadana:** Fomentar la participación activa de los ciudadanos en el diseño y cuidado del espacio público es crucial para el éxito del urbanismo seguro. Diversas ciudades del mundo han demostrado que la participación comunitaria transforma la seguridad urbana. Un ejemplo académico sobre la importancia de la participación ciudadana en el urbanismo seguro es el planteado por el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (FAU–IU UCV, 2024), que destaca cómo el urbanismo participativo permite a las comunidades incidir activamente en el diseño y gestión de sus entornos. A través de mecanismos como audiencias públicas y procesos de co-creación, este enfoque fortalece el sentido de pertenencia y promueve la apropiación del espacio público, factores que inciden directamente en la reducción del delito y mejora de la seguridad urbana al fomentar vigilancia comunitaria y corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

En Oslo, se implementó la aplicación "Traffic Agent", que permite a los niños reportar problemas de seguridad en sus rutas escolares mediante una interfaz lúdica. La información recopilada ha llevado a la reconstrucción de cruces peligrosos y la mejora de aceras, promoviendo entornos más seguros para los peatones jóvenes. Metropolis (2022). *The Traffic Agent – Oslo*.

Estas experiencias demuestran que la participación ciudadana es clave para el éxito de iniciativas de urbanismo seguro. En Bogotá, se podrían implementar programas similares que involucren a la comunidad en la identificación de problemas y la co-creación de soluciones, adaptando las estrategias a las necesidades locales para mejorar la seguridad y la calidad de vida en la ciudad.

6. **Colaboración Interinstitucional:** El modelo de urbanismo seguro requiere de la actuación activa de la administración distrital y para ello se debe contar con la participación de las diferentes entidades en el marco de cada una de sus competencias. Esta actuación va de la mano con la integración con el sector privado y las asociaciones sin ánimo de lucro,

interesadas en propender por la seguridad de la ciudad, mejorando la infraestructura, la iluminación y el manejo de residuos en los espacios públicos.

¿Por qué es crucial implementar el urbanismo seguro en Bogotá?

- 1. Mejora de la seguridad ciudadana:** Bogotá enfrenta altos índices de inseguridad. De acuerdo con el boletín mensual de indicadores de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá a enero de 2025, se incrementaron 4 delitos de alto impacto respecto al año pasado: homicidios (+40,0%), extorsión (+15,1%), lesiones personales (+8,2%) y violencia intrafamiliar (+47,5%). Además, los incidentes al número único de seguridad y emergencias NUSE-123 por riñas, consumo o ventas de sustancias psicoactivas, disparos y ruido aumentaron en enero de 2025 respecto al mismo mes del 2024.

Consecuentemente, las estrategias de urbanismo seguro buscan reducir estos índices mediante un diseño de espacio público que favorezca la seguridad. Las estrategias clave incluyen la iluminación adecuada, la instalación de cámaras de vigilancia, y la presencia coordinada de la policía y seguridad privada. Estas iniciativas son pertinentes pues de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, en 2024, las capturas gracias a cámaras de videovigilancia aumentaron un 72% en comparación con 2023, alcanzando un total de 647 personas detenidas (Cámaras de seguridad, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2025).

- 2. Recuperación y mantenimiento del espacio público:** La recuperación y mantenimiento del espacio público en Bogotá han demostrado ser estrategias efectivas para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en 2024, la estrategia 'El Centro Vive' logró revitalizar más de 40.600 metros cuadrados en el centro histórico de la ciudad, mediante jornadas de limpieza, pintura y embellecimiento, con la participación de más de 30 entidades del Distrito y voluntarios del sector privado y académico ('El Centro Vive' ha recuperado en 2024, más de 40 mil metros cuadrados de espacio público en el corazón de Bogotá, DADEP, 2024). Estas acciones no solo mejoran la percepción de seguridad, sino que también fomentan el sentido de pertenencia y el uso adecuado de los espacios públicos por parte de la comunidad.

Además, intervenciones específicas en zonas críticas han tenido un impacto positivo en la seguridad. En la localidad de Los Mártires, la recuperación de 1.500 metros cuadrados de espacio público en los alrededores de la plaza de Paloquemao, con la participación de más de 120 uniformados y 50 gestores de convivencia, permitió mitigar fenómenos delictivos y fomentar el cuidado y conservación de estos entornos. Estas iniciativas demuestran que el

urbanismo seguro, a través de la recuperación y mantenimiento del espacio público, es una herramienta clave para la prevención del delito y la promoción de entornos urbanos más seguros y habitables.

3. **Fortalecimiento de la Participación Ciudadana:** Implementar estrategias de urbanismo seguro en Bogotá requiere fortalecer la participación ciudadana en la gestión del espacio público. El Plan Institucional de Participación Ciudadana 2025, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, establece mecanismos para asegurar decisiones inclusivas y representativas en la gestión pública. Además, el Observatorio de Participación Ciudadana, bajo la dirección del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), consolida y analiza información sobre las dinámicas participativas en la ciudad, facilitando una gestión urbana más transparente y efectiva (Estrategias de participación para instrumentos de planeación 2024, Alcaldía de Bogotá. 2025).

Casos de éxito en Bogotá demuestran el impacto positivo de la participación ciudadana en la transformación de espacios urbanos. Por ejemplo, el proyecto de urbanismo táctico con enfoque de género en el barrio Santa Fe revitalizó áreas deterioradas mediante intervenciones artísticas y de diseño urbano, mejorando la percepción de seguridad y fomentando el uso del espacio público por parte de la comunidad. Estas iniciativas no solo embellecen el entorno urbano, sino que también fortalecen la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos (Renovación y regeneración de espacio público mediante urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá, Archdaily, 2020).



Fuente: Renovación y regeneración de espacio público mediante urbanismo táctico con enfoque de género en Bogotá, Archdaily, 2020.
Tomado de: <https://www.archdaily.co/co/933210/renovacion-y-regeneracion-de-espacio-publico-mediante-urbanismo-tactico-con-enfoque-de-genero-en-bogota>

- 4. Beneficios Económicos y Sociales:** Un entorno seguro y bien gestionado tiene un impacto directo en la economía local. Según el Banco Mundial (2022), la inversión en seguridad urbana puede generar un retorno económico de hasta 6 veces su costo inicial. En Ciudad de México, la recuperación de espacios públicos generó un aumento del 20% en el valor de las propiedades y un incremento del 25% en la actividad comercial local (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, CDMX, 2022).

Además, la recuperación de espacios públicos ha sido una prioridad en la ciudad. Hasta abril de 2024, se habían recuperado más de 35.800 metros cuadrados de espacio público en diversas localidades de Bogotá, con una meta de alcanzar los 300.000 metros cuadrados para finales de ese año. Estas acciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también fomentan el desarrollo económico al revitalizar zonas que anteriormente estaban deterioradas o subutilizadas. La mejora en el entorno urbano incentiva la apertura de nuevos negocios y aumenta el valor de las propiedades, generando un círculo virtuoso de desarrollo económico y social (Cerca de 35.803,34 m2 de espacio público recuperados Bogotá durante este 2024, Alcaldía de Bogotá, 2024).

- 5. Sostenibilidad:** Implementar estrategias de urbanismo seguro en Bogotá no solo mejora la seguridad y la calidad de vida, sino que también contribuye significativamente a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. La incorporación de prácticas de ecourbanismo, como la instalación de iluminación eficiente, la conservación de zonas verdes y una adecuada gestión de residuos, son fundamentales para construir una ciudad más resiliente frente a los desafíos del cambio climático. Estas acciones no solo reducen el impacto ambiental, sino que también promueven entornos urbanos más saludables y habitables para todos los ciudadanos.

Un ejemplo destacado de intervención a pequeña escala en Bogotá es la recuperación del espacio público en la estación de TransMilenio Salitre El Greco. En junio de 2024, se recuperaron 5.800 metros cuadrados de espacio público peatonal, beneficiando a más de 9.500 usuarios del sistema de transporte. La intervención incluyó la eliminación de elementos que contribuyen a la contaminación visual y auditiva, como estructuras deterioradas y fuentes de ruido, mejorando así la calidad del entorno urbano. Este tipo de acciones demuestra cómo la recuperación y adecuación de espacios públicos pueden tener un impacto positivo en la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos (Intervenciones para recuperar el Espacio Público de Bogotá, Observatorio del Espacio Público de Bogotá, 2024).

Estrategias para la Implementación del Proyecto:

La implementación de este modelo de urbanismo seguro implica transformar el espacio público a través de intervenciones en las dimensiones social y ambiental, así como la integración activa de la ciudadanía (Urbanismo ciudadano en América Latina, Superlibro de acciones cívicas para la transformación de las ciudades, 2022).

En este sentido, y con el objetivo de optimizar el uso de los recursos físicos, económicos y humanos del Distrito, es fundamental que se adelante, como primera medida, una priorización de los espacios públicos a intervenir, considerando sus características sociodemográficas, el nivel de acceso y la calidad actual de estos.

Asimismo, es necesario realizar un mapeo de actores que permita identificar a las partes interesadas en la intervención, seguido del diseño de un plan de acción que establezca de manera clara los roles y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados. Finalmente, debe desarrollarse una evaluación del impacto de la intervención para medir su efectividad y orientar futuros procesos de mejora (BID, Los espacios públicos en América Latina y el Caribe: guía práctica para su reactivación en la pospandemia, 2020. pág. 46).

A continuación, se detallan las estrategias clave:

- 1. Mejorar la seguridad mediante la colaboración entre Policía y Seguridad Privada:** La presencia visible de las autoridades y la integración de estrategias de seguridad pública y privada garantizará una cobertura más amplia y efectiva. En este sentido, es clave la articulación entre la Policía Nacional y las empresas de seguridad privada.

- **Acciones específicas:**

- Aumentar la presencia policial en las zonas prioritarias y de alta vulnerabilidad, con patrullas regulares y puestos de vigilancia fijos.
- Capacitar y coordinar a los agentes de seguridad privada, quienes pueden apoyar en la vigilancia de sectores específicos (comerciales, residenciales, etc.), bajo la supervisión de las autoridades.
- Integración de cámaras de vigilancia y sistemas de alarma comunitarios, conectados con las fuerzas de seguridad, para responder rápidamente a incidentes.
- Se propone un programa de capacitación y certificación para los líderes comunitarios, fomentando la creación de comunidades organizadas que gestionan de manera efectiva la seguridad. Esta iniciativa ha evolucionado con el tiempo, incorporando capacitación comunitaria, tecnología y un sistema de evaluación continua para fortalecer la prevención del delito, optimizar la comunicación y garantizar respuestas de seguridad más efectivas.

Además, se espera que estas acciones sean adaptables y sostenibles, promoviendo una sensación de seguridad real en las comunidades.

- 2. Mejora de la iluminación pública:** Una de las medidas más efectivas para aumentar la seguridad y la percepción de seguridad es mejorar la iluminación pública en toda la ciudad. Las áreas oscuras son focos de inseguridad y, por lo tanto, su transformación en espacios bien iluminados disuade comportamientos delictivos.

- **Acciones específicas:**

- Reemplazo de luminarias tradicionales por luces LED, que no solo mejoran la calidad de la iluminación, sino que también son más eficientes y ecológicas.
- Recorridos nocturnos periódicos para revisar el funcionamiento de las luminarias y asegurarse de que no existan áreas oscuras que puedan ser aprovechadas por los delincuentes.
- Implementación de un sistema de monitoreo de la iluminación pública para garantizar su mantenimiento y funcionamiento continuo.
- Involucrar a la comunidad en el cuidado de la infraestructura de iluminación, reportando fallas y participando en campañas de sensibilización.

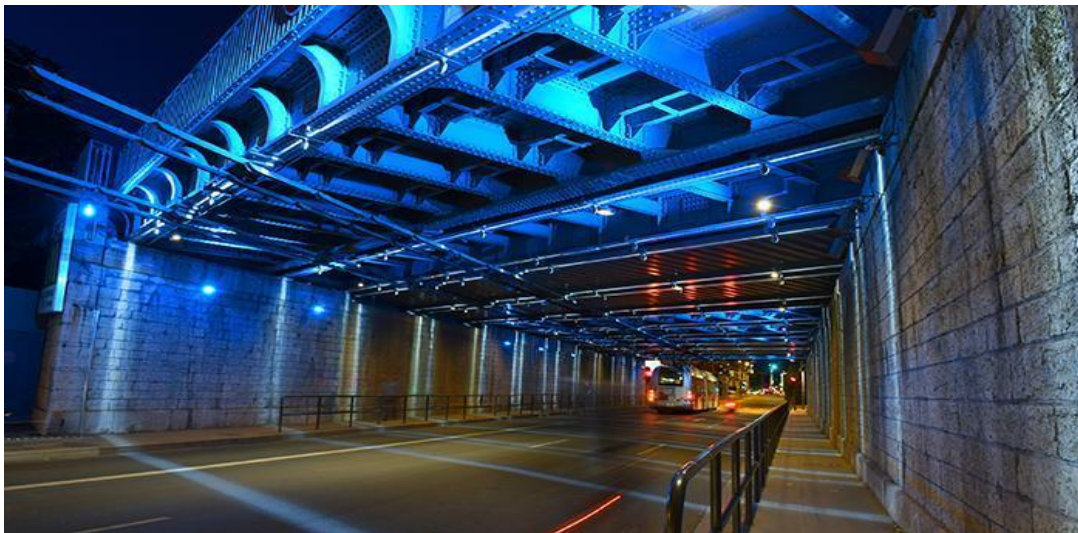
Una iluminación adecuada mejora la sensación de seguridad de los ciudadanos y fomenta la convivencia nocturna, permitiendo que los espacios públicos sean utilizados a cualquier hora del día. Contar con una iluminación pública bien diseñada no solo contribuye a que las personas se sientan más seguras, sino que también incentiva el uso de los espacios públicos durante la noche, promoviendo la vida urbana en horarios extendidos.

En Lyon, Francia, se ha desarrollado un plan integral conocido como Plan Lumière, cuyo enfoque va más allá de simplemente iluminar. Este proyecto busca integrar criterios técnicos y de sostenibilidad en la planificación, operación y mantenimiento del alumbrado urbano. Durante su segunda fase, se incorporaron tecnologías innovadoras con el doble objetivo de mejorar la calidad de la iluminación y, al mismo tiempo, reducir tanto el consumo de energía como los efectos negativos de la contaminación lumínica. Un aspecto clave de esta estrategia ha sido adaptar la intensidad y funcionamiento del alumbrado según los distintos momentos del día y las dinámicas ciudadanas, priorizando así un uso más eficiente y sensible del recurso (Revista de Iluminación, Illuminet, Iluminación urbana en Lyon: Resultados a través del tiempo y la constancia, 2022)

Foto X. Paso subterráneo de la Avenue Félix Faure.



Foto X. Rue des Émeraudes



Tomado de: Site Officiel Lyon Mairie du 6, extraído de: <https://mairie6.lyon.fr/actualite/projets-urbains/mise-en-lumiere-de-4-ouvrages-sncf-lyon> y de <https://iluminet.com/iluminacion-urbana-lyon-tres-etapas/> . Consultado el 15 de abril de 2025

3. Gestión Integral de residuos y limpieza del espacio público: Un espacio limpio y bien mantenido no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar colectivo. El urbanismo seguro requiere de una gestión eficiente de los residuos y de una limpieza integral del espacio público.

- **Acciones específicas:**

- Establecer un sistema de limpieza eficiente y regular, que garantice la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos en condiciones óptimas.
- Implementar campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos, promoviendo el uso adecuado de los recipientes de basura.
- Recuperar espacios verdes y zonas deterioradas, transformándolos en lugares agradables para el esparcimiento y la convivencia.
- Fortalecer la colaboración con el sector privado, incentivando a los comercios locales a participar activamente en el mantenimiento de sus alrededores y la disposición adecuada de residuos.
- Incluir la participación comunitaria en las jornadas de limpieza y embellecimiento, promoviendo un sentido de corresponsabilidad entre los vecinos.

La limpieza y el buen mantenimiento del espacio público no solo son un factor de salud, sino que también reducen el riesgo de delitos y mejoran la imagen de la ciudad.

4. Fomento de la participación ciudadana: El sentido de pertenencia y corresponsabilidad en el cuidado del espacio público es esencial para el éxito de cualquier proyecto de urbanismo seguro. La comunidad debe ser un actor activo en el diseño, implementación y seguimiento del proyecto. En ese sentido, es fundamental la descentralización de la gestión y el mantenimiento del espacio público, de manera que se promueva la acción y el involucramiento de los ciudadanos organizados (BID, 2022).

El Plan Distrital de Desarrollo es una herramienta valiosa para este propósito. El artículo 167, titulado “Instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público”, contempla la promoción, creación e implementación de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS) como un instrumento de iniciativa privada. Estos están diseñados para complementar las intervenciones del Distrito Capital en áreas específicas de la ciudad, en aspectos relacionados con el mejoramiento, administración, mantenimiento, embellecimiento, gestión de la publicidad exterior y el aprovechamiento económico del espacio público.

- **Acciones específicas:**

- Establecer comités de seguridad y participación integrados por representantes de diversas comunidades, asociaciones y organizaciones.
- Organizar talleres y espacios de diálogo entre autoridades, ciudadanos y sectores privados para definir prioridades de intervención y mejorar la gestión de los espacios públicos.
- Crear canales de comunicación abiertos para recibir sugerencias, comentarios y denuncias de la comunidad sobre problemas de seguridad y mantenimiento.

La participación activa de los ciudadanos no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece el tejido social, crea un ambiente de confianza y promueve la convivencia pacífica.

Conclusión:

La implementación de un modelo de urbanismo seguro en las zonas priorizadas por la Administración, debido a sus problemáticas de infraestructura, mantenimiento, seguridad, iluminación, manejo de basuras y uso indebido del espacio público, es fundamental para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A partir de este enfoque, se busca transformar estas zonas para mejorar las condiciones físicas, el fortalecimiento de la seguridad y la participación activa de la comunidad, con el fin de construir una ciudad más accesible, habitable y segura para todos.

Por todo esto, solicitamos al Concejo de Bogotá que apruebe este proyecto, ya que es clave para transformar la ciudad en un lugar más habitable y organizado, beneficiando especialmente a las áreas más vulnerables.

5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

5.1 DE ORDEN INTERNACIONAL

5.1.1 RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Se tiene que esta iniciativa se enmarca en los ODS:

- **Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles**

- **Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países**

- **Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible**

Para la implementación de un urbanismo seguro en Bogotá este se encuentra respaldado por varios instrumentos y compromisos adoptados en el ámbito global, particularmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 11, que establece el compromiso de "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Este objetivo se apoya en la necesidad de promover el acceso a viviendas adecuadas, la creación de espacios urbanos resilientes ante desastres y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano.

La Nueva Agenda Urbana, adoptada en 2016 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, establece principios para el desarrollo urbano sostenible, enfocándose en la equidad, la resiliencia y la inclusión social. La Declaración de Quito subraya la importancia de la planificación urbana inclusiva y resiliente, refuerza la necesidad de adoptar un enfoque integral para la sostenibilidad de las ciudades, destacando la seguridad, la equidad y la participación de las comunidades.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966 establece el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, lo que incluye la vivienda, el acceso a servicios básicos y un entorno saludable. Estos derechos son fundamentales para el urbanismo seguro, ya que garantizan que las políticas de desarrollo urbano respeten los derechos humanos.

Asimismo, las Directrices Internacionales para la Construcción de Ciudades Resilientes de la ONU proporcionan un marco de acción que promueve la integración de medidas de prevención y

adaptación a riesgos naturales en la planificación urbana. Estos principios orientan la creación de ciudades que no solo sean habitables, sino que también protejan a sus habitantes de los peligros que pueden surgir.

5.2. DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Para sustentar jurídicamente el modelo de urbanismo seguro en el orden constitucional de Colombia, es necesario referirse a diversas normas y principios establecidos en la Constitución Política de 1991, así como a leyes y jurisprudencia que regulan aspectos relacionados con la seguridad, la calidad de vida, y el manejo del espacio público.

Artículo 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Principio de la responsabilidad del Estado en el orden público y la seguridad: El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la convivencia pacífica, la seguridad y el orden público, que son aspectos clave para un urbanismo seguro. El modelo propuesto refuerza este principio al integrar acciones del Estado, la comunidad y el sector privado en la mejora de la seguridad y el espacio público.

Artículo 11: *“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.*

Derecho a la vida y a la seguridad: La Constitución Política de 1991 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la seguridad personal, un derecho esencial para la convivencia pacífica y la dignidad humana. El artículo 11 de la Constitución establece que “el derecho a la vida es inviolable”. Este derecho es clave para justificar el enfoque de urbanismo seguro, ya que busca crear un entorno urbano que proteja a los ciudadanos de la delincuencia y otros riesgos, mejorando su bienestar y seguridad.

Artículo 48: *“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. (...)”*

Artículo 49: *“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.*

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.”

Derecho a la salud, relacionado con entornos urbanos saludables: la Constitución Política de Colombia establece que la salud es un derecho fundamental, y el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos. Este derecho también incluye la creación de condiciones para una vida saludable, lo que abarca la construcción de entornos urbanos saludables. Un entorno urbano saludable no solo se refiere al acceso a servicios médicos, sino también a factores como la calidad del aire, agua, el ruido, la seguridad y el acceso a espacios públicos. La planificación adecuada de las ciudades juega un papel clave en la prevención de enfermedades, la promoción de la actividad física y la mejora de la salud mental, a través de la creación de áreas verdes y espacios recreativos.

Artículo 58: *“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. (...)”*

Artículo 79: *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Derecho a un ambiente sano: La Constitución reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en el artículo 79, lo cual justifica las iniciativas de mantenimiento del espacio público y recuperación del entorno urbano como un deber del Estado y de la ciudadanía. Este derecho se conecta directamente con el urbanismo seguro, que busca asegurar que los espacios públicos sean adecuados, bien iluminados, limpios y cuidados por todos los actores del territorio.

Artículo 82: *“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.*

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”

Derecho a la propiedad y al espacio público: El derecho a la propiedad y la protección del espacio público son fundamentales en el contexto de la planificación urbana. El urbanismo seguro promueve un uso adecuado y responsable del espacio público, el cual debe ser protegido por el Estado y respetado por la ciudadanía, para garantizar su disfrute y accesibilidad.

Artículo 95: *“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...)”*

Principio de solidaridad y corresponsabilidad social: El urbanismo seguro se fundamenta también en el principio de solidaridad y corresponsabilidad que impone la Constitución a los ciudadanos. No solo es un deber del Estado generar políticas públicas de seguridad y orden, sino también de la comunidad colaborar activamente para mantener y proteger el espacio público, para contribuir a un entorno más seguro y habitable.

Artículo 113: *“Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”*

Principio de coordinación entre entidades del Estado: La implementación de medidas de seguridad, iluminación, limpieza y mantenimiento del espacio público requiere la articulación de varias entidades públicas, lo que se ajusta al principio de coordinación entre las ramas y niveles del poder público.

Artículo 365: *“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.”*

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

Derecho a la seguridad social y la calidad de vida: La Constitución reconoce que el Estado debe promover y proteger la calidad de vida de todos los ciudadanos, lo que incluye asegurar que puedan vivir en un entorno urbano adecuado, seguro, y saludable. El urbanismo seguro también se alinea con los principios de la seguridad social y el bienestar general, facilitando que las comunidades disfruten de espacios públicos que fomenten la convivencia social, el esparcimiento, y la seguridad.

JURISPRUDENCIA:

La Corte Constitucional ha dictado varias sentencias que han abordado la importancia de la seguridad y la calidad del espacio público. Por ejemplo, en la Sentencia C-265 de 2002, *“La generación de proyectos que estructuran la ciudad no son únicamente el resultado de un Plan de Ordenamiento Territorial, son la materialización de una necesidad colectiva plasmada en nuestra Carta para la realización de normar que con el tiempo se convierten en tipologías o modelos para ser implementados en otros lugares por su validez como solución a un problema urbano”*.

“La calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad”.

La Corte señaló que el espacio público no solo es un bien de uso común, sino un escenario que debe ser protegido por el Estado para garantizar la dignidad humana, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

5.3. DE ORDEN LEGAL

Varios cuerpos legales apoyan y refuerzan las propuestas presentadas en el modelo de urbanismo seguro:

- **Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:** El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece normas sobre la seguridad y el comportamiento cívico en los espacios públicos. Esta ley tiene como propósito mejorar la convivencia, garantizar la seguridad en los espacios públicos y regular la participación ciudadana en la prevención de delitos y la protección de la seguridad.

Artículo 1: *“OBJETO. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el*

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.”

Este artículo establece el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro, que es la base del urbanismo seguro, y resalta la importancia de la prevención del delito en los espacios públicos.

Artículo 2: *“OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código son los siguientes:*

- 1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trascienden a lo público.*
- 2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.*
- 3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares.*
- 4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de Policía.*
- 5. Establecer la competencia de las autoridades de Policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial.*
- 6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.”*

Este artículo establece los principios fundamentales de la convivencia y la seguridad, y regula el uso de tecnologías para fortalecer la seguridad en las zonas urbanas, como las cámaras de vigilancia y sistemas de alarmas.

Artículo 91: *“COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Los comportamientos que afectan la actividad económica comprenden comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública.”*

Este artículo establece la importancia de garantizar la limpieza en los espacios públicos donde se desarrollan las diferentes actividades económicas y establece sanciones para quienes arrojen basuras o escombros en la vía pública.

Artículo 103: *“COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) Y ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA. Los siguientes comportamientos afectan las áreas protegidas del Sistema Nacional*

de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial importancia ecológica y por lo tanto no se deben efectuar:

- 1. Ocupar ilícitamente áreas protegidas, de manera temporal o permanente.*
 - 2. Suministrar alimentos a la fauna silvestre.*
 - 3. Alterar elementos naturales como piedras, rocas, peñascos, árboles, con pintura o cualquier otro medio, que genere marcas.*
 - 4. Transitar con naves o vehículos automotores no autorizados, fuera del horario y ruta establecidos y/o estacionarlos en sitios no señalados para tales fines.*
 - 5. Vender, comerciar o distribuir productos comestibles de cualquier índole, con excepción de aquellos autorizados expresamente.*
 - 6. Ingresar sin permiso de la autoridad ambiental competente.*
 - 7. Permanecer en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales más tiempo del autorizado.*
 - 8. No exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes la autorización respectiva cuando se requiera.*
 - 9. Promover, realizar o participar en reuniones o actividades que involucren aglomeración de público no autorizadas por la autoridad ambiental.*
 - 10. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos y desechos sólidos.*
 - 11. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas.*
 - 12. Alterar, modificar o remover señales, avisos o vallas destinados para la administración y funcionamiento de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.*
- (...).*”

Este artículo refuerza el concepto de convivencia ciudadana, lo cual es clave para el éxito del modelo de urbanismo seguro.

- **Ley 675 de 2001 – Ley de Propiedad Horizontal:** Aunque se refiere a la propiedad horizontal, esta ley tiene un impacto en la gestión de la propiedad privada dentro del contexto urbano y de los espacios comunes en edificaciones de uso colectivo. El urbanismo seguro se ve reflejado en la promoción de una gestión eficiente de los bienes comunes y en la creación de entornos habitables, seguros y bien mantenidos.
- **Ley 142 de 1994 – Ley de Servicios Públicos Domiciliarios:** La Ley 142 de 1994 regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que son fundamentales para el funcionamiento de los entornos urbanos, como el suministro de energía eléctrica para la iluminación pública o el servicio de aseo para la limpieza del espacio público.

- **Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre:** Regula aspectos relacionados con la seguridad en el espacio público, especialmente en lo que se refiere a la circulación peatonal y vehicular. Las medidas de seguridad y la infraestructura adecuada, como la iluminación pública y el ordenamiento de los espacios, son fundamentales para la seguridad vial y peatonal.
- **Ley 1882 de 2018 - Fortalecimiento a la Ley de Infraestructura en Colombia:** Esta ley da lineamientos de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de obras relacionadas con la infraestructura del país y los proyectos de Asociación Público Privada (APP), para la construcción de vías, que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la ciudad.
- **Ley 489 de 1998 – Régimen Jurídico de las Entidades del Estado:** Regula la organización y funcionamiento de las entidades públicas en Colombia, estableciendo la forma en que las autoridades deben coordinarse para llevar a cabo proyectos interinstitucionales como el urbanismo seguro.

5.4 DE ORDEN DISTRITAL

- **RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027”**

Propone implementar intervenciones de urbanismo seguro en las zonas más inseguras de la ciudad, donde se registran altos índices de criminalidad, mal uso del espacio público, acumulación de basuras y deficiencias en el alumbrado público. Esta estrategia busca transformar estos espacios en entornos habitables, seguros y sostenibles, promoviendo no solo mejoras físicas, sino también la participación comunitaria y la convivencia ciudadana. El contexto urbano de Bogotá muestra un aumento preocupante en delitos como el hurto y el homicidio, particularmente en zonas periféricas y vulnerables. Además, una mayoría de ciudadanos percibe inseguridad en espacios públicos mal mantenidos. En respuesta, este proyecto plantea una transformación integral del entorno urbano que involucre a la comunidad en la recuperación del espacio público, con el objetivo de reducir la delincuencia, mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

- **8.5. Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo:**

Bogotá garantizará que el uso del espacio público por la ciudadanía se ejerza sin temor a la violencia o las amenazas que comprometan la vida de las personas, en especial los riesgos que afrontan las mujeres. Por otro lado, se fortalecerá la administración de los parques con la implementación de la estrategia de guardaparques, ampliaciones de horarios y el mejoramiento de su iluminación. Se realizarán intervenciones artísticas y culturales en el espacio público que busquen promover la convivencia ciudadana para fortalecer el papel del arte, la cultura y el patrimonio como derecho en la ciudad.

- **14.3. Programa 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad.**

Este cambio de paradigma incluye la incorporación de capacidades locales y desarrollos tecnológicos, en consonancia con la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y los estudios técnicos en curso para actualizar el marco tarifario e implementar el concepto de Basura Cero previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

- **5.1. Bogotá avanza en seguridad:**

Bogotá debe ser una ciudad en la que todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres puedan caminar sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencia y violento. Para ello, se debe construir una ciudad en la que se respete la vida, la diferencia, la propiedad y donde se construyan y fortalezcan lazos de confianza entre las personas, así como entre la ciudadanía y sus instituciones. De esta manera se garantiza el bienestar de las personas y el desarrollo del potencial de la ciudad.

- **8.5. Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo.**

Bogotá garantizará que el uso del espacio público por la ciudadanía se ejerza sin temor a la violencia o las amenazas que comprometan la vida de las personas, en especial los riesgos que afrontan las mujeres.

- **14.1. Programa 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo.**

Este programa aborda desafíos como la planificación territorial y la gestión del espacio público, destacando la integración regional, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible. Se enfoca en la armonización de instrumentos de planeación mediante la colaboración con municipios vecinos y autoridades regionales, con énfasis en la mitigación de impactos ambientales y sociales. Se prioriza la identificación y atención de zonas vulnerables, con acciones para fortalecer la resiliencia de las comunidades mediante mejoras en la infraestructura, prácticas sostenibles y programas sociales. También, se busca garantizar la apropiación social del espacio público con medidas de seguridad, iluminación, arte urbano y participación ciudadana en su gestión, así como el desarrollo de mecanismos para su sostenibilidad.

- **14.4. Programa 26. Movilidad Sostenible.**

Por esto, es necesario superar el rezago en infraestructura para la movilidad mediante la ejecución de nuevos proyectos, así como la culminación de las obras que vienen en

ejecución. Así mismo, contener el aumento de siniestros con fatalidades, mejorando las condiciones del espacio público para la movilidad con accesibilidad universal.

- **Artículo 167. Programa de recuperación, revitalización y fortalecimiento de las capacidades de control urbano.**

Créese el programa de recuperación, revitalización y fortalecimiento del control urbano en la localidad de Usme, con el objetivo de formular y adoptar proyectos, estrategias, protocolos o lineamientos de intervención, que garanticen un control urbano efectivo, evitando la ocupación ilegal de zonas que pongan en riesgo la vida de sus moradores y generen un deterioro social, urbanístico y ambiental. Esta actividad será articulada por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Secretaría Distrital de Gobierno con las diferentes entidades de orden local, distrital, regional y nacional que tengan competencia en el objetivo.

POLÍTICA DISTRITAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS):

Bogotá tiene una política de gestión de residuos sólidos que busca mantener la ciudad limpia y en condiciones de habitabilidad. Las medidas propuestas en el modelo de urbanismo seguro, como la limpieza integral del espacio público y la colaboración con la comunidad en la recolección de residuos, se ajustan a esta política y contribuyen al cumplimiento de sus objetivos.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT 555

El Proyecto de Urbanismo Seguro se alinea con esta visión, especialmente en los componentes de inclusión, equidad y cuidado del entorno, al proponer intervenciones integrales en las zonas más vulnerables de la ciudad.

El POT se fundamenta en principios como la sostenibilidad, la inclusión socio-espacial, la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre actores públicos y privados (Artículo 6), que son igualmente pilares del modelo de urbanismo seguro propuesto en el proyecto de acuerdo.

MANUAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ 2023

El Manual del Espacio Público de Bogotá 2023 es una guía técnica desarrollada por la Secretaría Distrital de Planeación que establece los lineamientos para el diseño, construcción, mantenimiento y gestión del espacio público en la ciudad. Su objetivo principal es garantizar que estos espacios sean accesibles, sostenibles, seguros, incluyentes y de calidad, promoviendo así una mejor convivencia urbana y un desarrollo territorial equilibrado. El manual define criterios normativos, tipologías de espacio público, y orientaciones de diseño con el fin de asegurar la integración entre el entorno construido y natural, fomentando una ciudad más habitable y con mayor bienestar para todos los ciudadanos.

6. COMPETENCIA

De conformidad con las disposiciones que facultan al Concejo de Bogotá para desarrollar su función normativa, se encuentra que esta Corporación cuenta con la competencia y la iniciativa para dictar normas sobre la materia que trata el presente Proyecto de Acuerdo.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio [...].

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen [...].”

Por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá, establece de manera específica las atribuciones del Concejo Distrital:

“ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito [...].”

Por lo anterior, se concluye que el Concejo de Bogotá tiene la competencia otorgada por la Constitución y la Ley para presentar, conocer, debatir y pronunciarse sobre este proyecto de acuerdo.

7. IMPACTO FISCAL

En observancia de la Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*, específicamente lo dispuesto en su artículo 7º que establece:

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

Se concluye que esta propuesta normativa no genera un impacto fiscal adicional, considerando que esta iniciativa, se encuentran ya prevista dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, dentro del presupuesto asignado y en otras disposiciones distritales vigentes, entre estas el Plan Distrital de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, la ejecución de esta iniciativa no requiere recursos adicionales a los ya aprobados.

Cordialmente,

SANDRA FORERO RAMÍREZ

Concejal de Bogotá D.C

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 467 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL MODELO DE URBANISMO SEGURO EN LAS ZONAS PRIORIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

CAPÍTULO I: OBJETO Y PILARES DEL URBANISMO SEGURO

Artículo 1. Objeto:

El presente acuerdo tiene por objeto establecer un modelo de urbanismo seguro en las zonas que priorice la administración distrital, mediante la intervención integral de infraestructura, seguridad ciudadana, participación comunitaria y sostenibilidad ambiental, con el fin de mejorar la calidad de vida, reducir la criminalidad y promover la convivencia pacífica en la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 2. Definiciones: Para efectos del presente acuerdo, entiéndase por:

2.1. Urbanismo Seguro: Modelo de intervención urbana que integra elementos de diseño, infraestructura, mantenimiento, participación comunitaria y vigilancia para fomentar espacios públicos seguros y accesibles, que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

2.2. Zonas priorizadas: Áreas de la ciudad definidas por la administración distrital que presentan altos índices de vulnerabilidad en seguridad, iluminación, basuras y ocupación indebida del espacio público

Artículo 3: El modelo de urbanismo seguro se fundamenta en los siguientes pilares:

3.1. Mejoramiento y mantenimiento: El mejoramiento y mantenimiento de los espacios públicos previene el deterioro y fomenta el sentido de pertenencia, creando entornos seguros y agradables para la comunidad.

3.2 Iluminación: Promover la instalación y mantenimiento de alumbrado público para disuadir el delito y mejorar la percepción de seguridad.

3.3. Seguridad: Prevención del delito mediante intervenciones de las entidades competentes en acciones físicas, tecnológicas y de participación comunitaria.

3.4. Entornos limpios: Promoción del cuidado del entorno a través de la recolección y manejo adecuado de residuos, mantenimiento y corresponsabilidad ciudadana para lograr espacios saludables y agradables.

3.5. Participación ciudadana: Involucramiento activo de la comunidad en el cuidado, diseño y vigilancia de los espacios objeto de las intervenciones del urbanismo seguro.

3.6. Colaboración interinstitucional: Articulación entre las diferentes entidades del distrito, el sector privado y la comunidad.

CAPÍTULO II: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN:

Artículo 4. La implementación del modelo de urbanismo seguro se llevará a cabo:

4.1. Recuperación del Espacio Público: Rehabilitación de zonas deterioradas mediante la restauración, mejoramiento de la infraestructura, el mobiliario urbano y accesibilidad. Mejora de la iluminación pública con la instalación de luminarias en áreas clave para aumentar la percepción de seguridad. Habilitación y mantenimiento de zonas verdes, parques y áreas recreativas.

4.2 Fortalecimiento de la Seguridad: Priorización de la presencia policial mediante patrullaje focalizado en zonas de mayor riesgo y establecimiento de puntos de vigilancia estratégicos. Creación y fortalecimiento de frentes de seguridad ciudadanos con participación activa de residentes. Implementación de sistemas de vigilancia tecnológica, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos conectadas a centros de monitoreo. Promoción de la colaboración entre la Policía Nacional y las empresas de seguridad privada.

4.3 Gestión Integral de Residuos y Limpieza del Espacio Público: Implementación de sistemas eficientes de recolección y disposición de residuos. Instalación de puntos ecológicos y zonas de reciclaje en áreas estratégicas. Recuperación de espacios públicos afectados por acumulación de residuos. Conformación de equipos dedicados a la limpieza y mantenimiento permanente de los espacios intervenidos. Desarrollo de campañas de educación y sensibilización sobre manejo adecuado de residuos.

4.4 Participación Ciudadana: Generar espacios de participación en los que los residentes y actores clave puedan involucrarse en las actividades de mejora, conservación, gestión y apropiación de estos espacios, así como la seguridad de sus comunidades.

4.5 Educación y Sensibilización: Campañas educativas y de cultura ciudadana sobre el respeto por el espacio público, la convivencia pacífica, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en la zona.

CAPÍTULO III: COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Artículo 5. Definición de las Zonas Priorizadas: La administración Distrital, con las entidades competentes realizará los estudios técnicos y diagnóstico necesarios, para definir dentro del primer trimestre de cada año, las zonas a priorizar para la implementación de este Acuerdo.

Artículo 6. Responsabilidades de la Administración Distrital: La administración Distrital, a través de las entidades competentes, tendrá la responsabilidad de:

- Diseñar y ejecutar planes integrales para el mantenimiento, mejoramiento, recuperación y conservación de espacios públicos y la seguridad en las zonas priorizadas.
- Permitir y fomentar la participación ciudadana en todas las fases del proyecto.
- Realizar la evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos
- Articular el modelo de urbanismo seguro por zonas priorizadas anualmente.

Artículo 7. Coordinación Interinstitucional y colaboración con el Sector Privado: La Administración Distrital, a través de las entidades competentes, promoverá la articulación interinstitucional, con el propósito de coordinar con el Gobierno Nacional, el sector privado y las organizaciones sociales, para la implementación del Urbanismo Seguro en las zonas priorizadas.

Parágrafo 1. La Administración Distrital podrá celebrar convenios de asociación con organizaciones sin ánimo de lucro para la implementación conjunta de acciones en el marco del modelo de urbanismo seguro.

CAPÍTULO IV: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Artículo 8. Monitoreo y Evaluación:

La Administración Distrital realizará seguimiento periódico a la seguridad, calidad del espacio público, impacto económico y participación ciudadana en las zonas priorizadas, para lo cual rendirá un informe anual contado desde el momento en que se intervengan estas zonas, el cual será presentado ante el Concejo de Bogotá, las alcaldías locales y la ciudadanía mediante publicación en su sitio web oficial.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9. Vigencia:

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 468 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1938 se construyó en Bogotá el máximo escenario de la capital para la realización de eventos deportivos: El Campin. Este estadio empezó a tener uso constante a finales de la década del 40 cuando se inauguró el fútbol profesional colombiano. En 1962 unos comerciantes arrendaron unos predios cercanos al Campin a la Alcaldía. Así fue como nació el Palacio del Colesterol.

Todo este proceso se dio para solucionar algo que, al Alcalde de la época, Jorge Gaitán Cortés le pareció problemático, que las ventas cerca al Campin estuvieran sueltas así que facilitó este predio para hacer una reagrupación. El lugar fue construido por los abuelos y padres de quienes hoy en día luchan porque no los saquen. El Palacio del Colesterol abrió sus puertas los días de partido, que antes solo eran los domingos. Fritanga, gallina, cocho, chicharrón, morcilla, longaniza, etc. son los productos que se vendían hasta las 10 de la noche durante estos días

La gastronomía que hace parte de los usos, costumbres y prácticas que son activos del patrimonio inmaterial, son integradoras ya que permiten que confluyan distintas propuestas que recogen la gastronomía del altiplano que coexisten con las culturas ancestrales y prehispánicas, representativas porque fortalecen el patrimonio a través del reconocimiento de técnicas y recetas culinarias, sabores tradicionales populares que convergen hoy en día en el estadio el campin y que permiten un crecimiento económico para los distintos sectores y poblaciones que allí habitan, trabajan, estudian, visitan y transitan, y esta internalizada en el arraigo del lugar, haciéndose parte de la comunidad quienes revitalizan la esencia de la gastronomía del sector.

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto **reconocer y declarar el Palacio del Colesterol como espacio gastronómico de interés cultural, social y turístico del Distrito Capital**, y establecer las directrices para su recuperación, preservación, protección y reactivación económica como parte del patrimonio inmaterial de Bogotá.

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

Importancia para la ciudad

Las tradiciones construyen hábitos y estos representan una forma de vivir. El plan de ir a ver fútbol se complementaba con muchas más cosas. Llevar la radio, ir con amigos, llegar antes a escuchar historias mágicas, tomar una cerveza y comer algo en el Palacio del Colesterol. Esto viéndolo desde la ventana, con solo ser un asistente a este lugar. De las familias que actualmente trabajan en el Palacio de Colesterol hay algunas que están presentes desde la época en que se vendía alrededor del estadio. Lo que ejemplifica lo que ha sido el proceso de apropiación de este espacio y su importancia en las personas que viven de esta economía.

El estadio El Campin es, sin duda, un epicentro del deporte y la cultura popular bogotana. Sin embargo, la experiencia de asistir al estadio, de vivir el fútbol en toda su dimensión social, no está completa sin un espacio que ha sido históricamente parte integral de esa vivencia: el Palacio del Colesterol. Este emblemático lugar, ubicado justo detrás del estadio, ha sido durante décadas el punto de encuentro de miles de hinchas de todos los equipos, una plazoleta de comidas que va mucho más allá de la simple oferta gastronómica.

Desde 1962, el Palacio del Colesterol ha alimentado no solo estómagos, sino también memorias, tradiciones y afectos. Allí, entre cazuelas humeantes de cuchuco con espinazo, longaniza, chicharrón y morcillas, se han tejido historias, se han consolidado amistades, se han aliviado penas futboleras y se ha celebrado la pasión por el juego. Esta plazoleta es un testimonio vivo del espíritu popular que ha hecho del fútbol en Bogotá una manifestación cultural tan poderosa como entrañable.

No obstante, desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19, el Palacio del Colesterol cerró sus puertas.

Con la reapertura del Palacio del Colesterol y su reactivación económica después de la pandemia. Es, ante todo, un acto de reconocimiento al patrimonio inmaterial de la ciudad, un esfuerzo por preservar un espacio profundamente arraigado en la memoria de generaciones de bogotanos. Es también una medida para recuperar el tejido social, apoyar la economía popular y devolverle a la ciudad un rincón donde se mezcla el sabor, la pasión y la identidad.

Por ello, este proyecto de acuerdo busca que el Distrito priorice el fomento de este citado sector, en virtud de la memoria del palacio del colesterol como espacio gastronómico de interés turístico y cultural en ciudad de Bogotá”.

Asimismo, se busca **garantizar el desarrollo digno y sostenible de la actividad comercial popular** que históricamente se ha ejercido en este espacio, reconociendo su papel como lugar emblemático en la experiencia cultural del fútbol, en la memoria colectiva de la ciudad y en el fortalecimiento del tejido social y económico de la zona circundante al Estadio Nemesio Camacho El Campin.

III. MARCO JURÍDICO

DE ORDEN NACIONAL

DECRETO 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fède Bogotá".

ARTÍCULO. - 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

Ley 397 de 1997: Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Artículo 1°. De los principios fundamentales y definiciones de esta Ley.

"1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.
10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica.
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.

“Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”. (Cursiva fuera de texto).

Artículo 17. Del fomento.

“El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica”. (Cursiva fuera de texto).

Artículo 27. El creador.

“Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país”. (Cursiva fuera de texto).

Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. (Ley de Patrimonio cultural de la Nación).

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así:

"Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. Ver el Decreto Nacional 763 de 2009, Ver la Resolución del Min. Cultura 330 de 2010, Ver la Resolución del Min. Cultura 983 de 2010.

Ley 1493 de 2011 "Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones".

DE ORDEN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 1º. Atinente a los principios fundamentales, que determina:

"Colombia es un Estado social de derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana, y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

ARTÍCULO 2º. Referente a los fines del Estado:

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; ...

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTÍCULO 8º. Riquezas culturales: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. (Cursivas fuera de texto).

ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

ARTÍCULO 70. Derecho a la cultura:

"El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. (Cursivas fuera de texto).

ARTÍCULO 333. Protección a la actividad económica:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. (Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

NORMATIVIDAD DISTRITAL

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.(...)

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

JOSE DEL CARMEN CUESTA NOVOA
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 468 DE 2025**PRIMER DEBATE****PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE AL PALACIO DEL COLESTEROL COMO ESPACIO GASTRONÓMICO DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.**

El Concejo de Bogotá D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1º. Reconózcase al Palacio del Colesterol, ubicado en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, como un espacio de interés cultural, social y turístico del Distrito Capital, por su valor histórico, simbólico, gastronómico y patrimonial en la construcción de la identidad bogotana y el fortalecimiento de la economía popular.

ARTICULO 2. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 469 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y COMPLEMENTA EL ACUERDO 537 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo, tiene como objeto actualizar y complementar el acuerdo 537 de 2013, Específicamente en lo concerniente a la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas, cuya competencia recae en la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas y fortalecer la inclusión social de la población en el distrito de Bogotá.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Colombia, las enfermedades huérfanas se definen como aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y tienen una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), durante el primer semestre de 2023 se notificaron 6.284 nuevos casos de estas enfermedades en el país, lo que representa una disminución del 6,7 % en comparación con el mismo periodo de 2022¹.

De acuerdo al Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas con corte al 10 de abril del 2024, se identificaron 84.175 personas². Y la

¹ Informe de evento de Primer Semestre, enfermedades Huerfanos – raras, 2023. Instituto Nacional de Salud. Pág. 5. Recuperado de: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/ENFERMEDADES%20HUERFANAS%20INFORME%20PRIMER%20SEMESTRE%202023.pdf>

² Ministerio de Salud y Protección Social. Información del Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. SISPRO. [Consultado el 16 de abril de 2024]

distribución geográfica de los casos según el Instituto Nacional de Salud, muestra que el 69,4 % se concentró en Bogotá, Antioquia y Cali. Bogotá registró 1.822 casos, Medellín 1.327 y Cali 866. Además, se notificaron casos en 505 municipios, siendo más frecuentes en áreas urbanas con más de 100.000 habitantes. En total, se reportaron casos de 679 enfermedades diferentes, de las cuales 665 presentaron menos de 100 casos cada una³.

AVANCES Y RETRASOS EN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS

Si bien la población con enfermedades huérfanas ha venido siendo visibilizada dentro de la sociedad, a través del logro de herramientas jurídicas como la Ley 1392 de 2010, lo que ha permitido el avance en un número de decreto, resoluciones que incluyen logros como Un Observatorio Interinstitucional de enfermedades Huérfanas, un listado actualizado que permita la identificación de las enfermedades, la definición clara de lo que es una enfermedad huérfana aterrizada a la realidad colombiana; la forma en que se diagnostica la enfermedad; el logro del registro de los pacientes de enfermedades huérfanas en Colombia, lo que permite entre otras cosas, conocer el costo y disponer del presupuesto necesario para su atención.

Distintas acciones institucionales, normativa, jurídicas y especialmente en cabeza de organizaciones sociales, de pacientes y sus cuidadores, que han permitido avances alrededor de mejorar el acceso, los tiempos de diagnóstico y el manejo de las enfermedades debido al reconocimiento de las mismas.

Debemos recordar que las personas con enfermedades huérfanas, también son merecedores del Derecho a la Salud sin ningún tipo de barreras, especialmente al tratarse de sujetos de especial protección. Pese a que se han logrado avances, aún existen barreras por la falta de conocimiento y educación en estos diagnósticos como barreras administrativas para lograr atención

³ Informe de evento de Primer Semestre, enfermedades Huerfanas – raras, 2023. Instituto Nacional de Salud. Pág. 8. Recuperado de: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/ENFERMEDADES%20HUERFANAS%20INFORME%20PRIMER%20SEMESTRE%202023.pdf>

integral y de calidad, creando la necesidad en los pacientes de acudir a procesos jurídicos para obtener los servicios en atención en salud.

Entre las tareas pendientes por lograr se encuentra el abordaje especial de los pacientes en centros especializados cuya oferta se dé de manera centralizada evitando la dispersión de los servicios. Extender la protección y garantía en derechos a su familia y cuidadores y la creación un mecanismo integral de participación para el mejoramiento de atención en salud e inclusión educativa, laboral, cultural para las personas diagnosticadas y sus cuidadores en el distrito.

El 16 de diciembre del 2021, La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce a las personas con enfermedades Huérfanas y sus familias e instó a los Estados parte a trabajar por la atención, detección y tratamientos e inclusión de las personas que conviven con una enfermedad rara⁴.

De igual forma, en el tercer Foro Distrital de Enfermedades Huérfanas desarrollado el pasado 5 de marzo de 2025, se establecieron compromisos de crear este proyecto para apoyar el mejoramiento de esta población y su inclusión efectiva en la sociedad.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Plan Nacional de Gestión de Enfermedades Huérfanas del Ministerio de Salud es un instrumento de política pública que ha sido diseñada como una estrategia para atender de manera integral a esta población con un abordaje especial, equitativo y articulado con el fin de mejorar el acceso a la salud y el bienestar de los pacientes.

Entre sus objetivos se encuentra “formular acciones que promuevan el acceso efectivo a la atención integral e integrada de salud en el marco de la atención Primaria en Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las personas con enfermedades Huérfanas/raras,

⁴ Resolución A/RES/76/132. 16 de diciembre del 2021. Asamblea General de las Naciones Unidas.

sus familiares y cuidadores, así como la inclusión y participación social en el territorio colombiano”⁵.

Grafica 1. Líneas estratégicas del PNGEHR

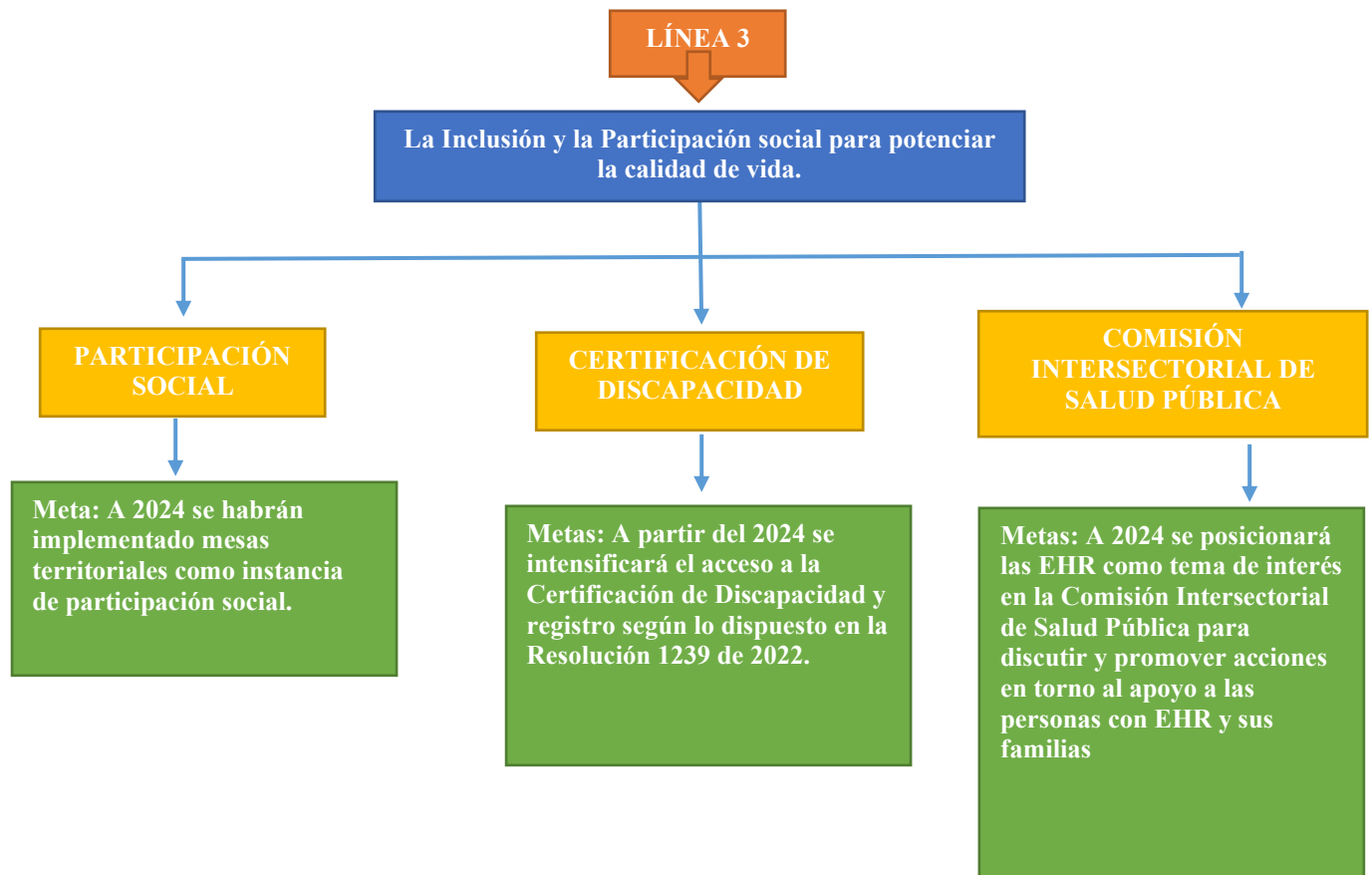
Líneas Estratégicas

- 1 **Fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo en Salud .**
- 2 **Organización de la atención integral en todos los grados de complejidad incluyendo los Centros de Referencia .**
- 3 **La inclusión y la participación social para potenciar la calidad de vida.**
- 4 **Desarrollo del conocimiento y la información para la toma de decisiones.**
- 5 **Financiación de las EHR, manteniendo la sostenibilidad financiera del SGSSS .**

mejorar la prevención y detección temprana de estas enfermedades, mejorar el diagnóstico y especialmente una atención especializada multidisciplinaria más allá de los aspectos en salud para trasladar la garantía de derechos a todos los ámbitos de la vida humana y en articulación y participación de todos los sectores y actores de la sociedad colombiana.

Entre sus líneas estratégicas, encontramos la Línea 3 de La Inclusión y la Participación social para potenciar la calidad de vida, en el cual incluyen personas familias y red de apoyo social hacia un trabajo y articulación intersectorial para promover la participación incidente en la toma de decisiones de política pública.

⁵ Plan Nacional de Gestión para las Enfermedades Huérfanas/raras. Ministerio de Salud y Protección social. Abril 2024. [Consultado 22 de abril de 2025]



Gráfica elaboración propia. Fuente: Plan Nacional de Gestión para las Enfermedades Huérfanas/raras. Ministerio de Salud y Protección social. Abril 2024

Teniendo en cuenta estos nuevos lineamientos ordenamos por el Plan Nacional es menester actualizar el Acuerdo que trabaja la Mesa Técnica Distrital de enfermedades Huérfanas del Distrito orientada al fomento y fortalecimiento de la participación incidente de los pacientes, sus familias y cuidadores con el fin de fortalecer la toma de decisiones y la gestión local integral para esta población.

¿POR QUÉ PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece la posibilidad de todos los ciudadanos a participar e incidir activamente en la gestión local, regional y nacional. No solo en aspectos de evaluación de la acción pública sino incluso desde la planeación e implementación de las políticas públicas.

Preámbulo de la constitución:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, **dentro de un marco jurídico, democrático y participativo** que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política”.

En el Artículo 270 “La Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

Además de la Constitución Política, existen numerosos antecedentes legales de la participación como:

- Ley 734 de 2022, Nuevo Código Único Disciplinario
- Ley 962 de 2005, Ley Antitrámites
- Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamenta las Veedurías Ciudadanas.
- Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Ley 489 de 1998, Sistema de Desarrollo Administrativo.
- Ley 472 del 1998, Sobre las acciones populares y de grupos.
- Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento,
- Ley 80 de 1993, sobre Contratación.
- Ley 1150 de 2007, modifica la ley 80 de 1993 – contratación estatal.
- Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana
- Ley 142 de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios
- Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo ley

de Planeación Participativa

- Ley 87 de 1993, de Control Interno
- Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción
- Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la ley 190 de 1995
- Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994
- Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
- Decreto 306 de 1992, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
- Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
- Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.
- Ley 1757 de 2015 Iniciativa Popular y Normativa ante las Corporaciones públicas.

Este avance jurídico y legal es evidencia de una constante preocupación en la gestión pública en aras de aumentar la incidencia e influencia ciudadana en las decisiones y gestión pública. Así lo señala Chamorro (2016).

“Desde las Constituciones Nacionales hasta las leyes especiales, mecanismos de participación como el referéndum, los consejos participativos, las audiencias públicas, el presupuesto participativo, el libre acceso a la información pública gubernamental, entre otros, han tomado un lugar preponderante y ahora ocupan parte inevitable de las agendas públicas de los diferentes gobiernos del continente” (p. 36).

Esto llevó a un desarrollo social que se pensara al ejercicio de ciudadanía e incidencia política más allá del voto, de manifestar las demandas, necesidades, orientando los esfuerzos institucionales y de presión ciudadana a la mejora de las herramientas y mecanismos que permitan el entorno de incidencia real en la política.

En este sentido, la necesidad de posibilitar los espacios actualizados, en armonía con los instrumentos nacionales hacen necesario actualizar el Acuerdo con el fin de cumplir en el avance en atención integral de las personas con enfermedades huérfanas-raras y sus familiares.

3. MARCO JURÍDICO

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, **fundada en el respeto de la dignidad humana**, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para **proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida**, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

3.2 LEYES Y SENTENCIAS

LEY ESTATUTARIA No. 1751/2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

ARTÍCULO 11. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.

De la misma manera protege a los afectados por Enfermedades Raras en su Artículo 15, el cual se encarga de las exclusiones del Plan de Beneficios:

ARTÍCULO 15. PRESTACIONES DE SALUD. El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.

Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

Reconoce la violencia económica y el daño patrimonial, situaciones que pueden exacerbase en un contexto de trabajo de cuidado no remunerado.

En su **ARTÍCULO 2** define la violencia económica como “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”.

En el **ARTÍCULO 3** define daño patrimonial como la “Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.” (literal d);

En el **ARTÍCULO 12** como una medida en el ámbito laboral establece lo siguiente: “Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial”.

LEY 1346 DE 2009 QUE RATIFICA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD establece que “los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad”.

Ley 1413 de 2010 “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”.

Establece en su **ARTÍCULO 2** define la economía del cuidado como el “(...) trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una sociedad”.

LEY 2055 DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA «CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES», ADOPTADA EN WASHINGTON, EL 15 DE JUNIO DE 2015”

Establece como uno de sus principios generales “El bienestar y cuidado” así como “La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.”

3.3 SENTENCIAS

SENTENCIA T-760/08. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. Estructura de la decisión

(...) Primero, se señala que el derecho a la salud es un derecho fundamental, así sea considerado usualmente por la doctrina como un derecho social y, además, tenga una importante dimensión prestacional (...) (subrayado fuera de texto).

El derecho a la salud como derecho fundamental

El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna. A continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los términos en que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y la jurisprudencia.

Noción de salud

La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud "(...) es un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor medida en la vida del individuo."⁶ La 'salud', por tanto, no es una condición de la persona que se tiene o no se tiene. Se trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada específicamente en cada caso. Así pues, la salud no sólo consiste en la 'ausencia de afecciones y enfermedades' en una persona. Siguiendo a la OMS, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la salud es 'un estado completo de bienestar físico, mental y social' dentro del nivel posible de salud para una persona.⁷ En términos del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva. No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que la noción de salud no es unívoca y absoluta. En estado social y democrático de derecho que se reconoce a sí mismo como pluriétnico y multicultural, la noción constitucional de salud es sensible a las diferencias tanto sociales como ambientales que existan entre los diferentes grupos de personas que viven en Colombia.⁸ (Subrayado fuera de texto).

El derecho fundamental a la salud.

"Hoy se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse, en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria y directa la dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) se pregona de un sujeto de especial protección constitucional³⁵ y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer ese derecho.

Lo anterior, justamente por cuanto el Estado - bajo aplicación de los principios de equidad, solidaridad, subsidiariedad y eficiencia - ha de racionalizar la prestación satisfactoria del servicio de salud a su cargo o a cargo de los particulares que obran en calidad de autoridades públicas, atendiendo, de modo prioritario, a quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias mencionadas con antelación. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado mediante jurisprudencia reiterada que, bajo estas circunstancias, aún tratándose de prestaciones excluidas del POS, del POSS, del PAB, del PAC y de aquellas obligaciones previstas por la Observación General 14, procede la tutela como mecanismo para obtener el amparo del derecho constitucional fundamental a la salud."³⁶ (Subrayado fuera de texto).

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece:

(...) DECRETO 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ

ARTÍCULO 12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003: En cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto y que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivo, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Con la presente iniciativa se considera que no se compromete asignar apropiaciones presupuestales diferente a las inherentes al desarrollo de las funciones de las entidades enunciadas y que se encuentran como responsables de cada meta. En conclusión, el impacto fiscal del presente

**proyecto de acuerdo en nada modifica el marco fiscal de mediano plazo
presentado por la Administración Distrital.**

Atentamente,

CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO

Concejal de
Bogotá Partido
Liberal
Colombiano

PROYECTO DE ACUERDO NO 469 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y COMPLEMENTA EL
ACUERDO 537 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

La competencia del Concejo de Bogotá D.C., en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece:

DECRETO 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ

ARTÍCULO 12- ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1- **Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito**
- 2-

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Actualizar y complementar el acuerdo 537 de 2013, Específicamente en lo concerniente a la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas, cuya competencia recae en la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas y fortalecer la inclusión social de la población en el distrito de Bogotá.

ARTÍCULO 2. ACTUALIZACIÓN. La Administración Distrital establecerá procesos para actualizar la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas con las distintas entidades parte y la sociedad civil para hacer seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas para Bogotá.

ARTÍCULO 3 CONFORMACIÓN. Conformaran la mesa técnica distrital de enfermedades huérfanas o raras:

1. Secretaría Distrital de Gobierno.
2. Secretaría Distrital de Salud.
3. Secretaría Distrital de Planeación.
4. Secretaría Distrital de la Mujer.
5. Secretaría de Educación del Distrito.
6. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7. Secretaría distrital de Integración social
8. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
9. Secretaría distrital de Movilidad.
10. Secretaría distrital de Hábitat.
11. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
12. Representante de las organizaciones de Pacientes elegido por

Asamblea.

13. Representante de las organizaciones de cuidadores y cuidados comunitarios elegido por Asamblea.

ARTÍCULO 4 ELECCIÓN INTEGRANTES DE LA MESA TÉCNICA DISTRITAL DE ENFERMEDADES HUÉRFANAS. La elección de los integrantes de esta Mesa se realizará bajo el mecanismo de asamblea para seleccionar las organizaciones que serán parte o que serán removidas.

ARTÍCULO 5. SESIONES. La mesa técnica distrital de enfermedades huérfanas sesionara de manera periódica cada dos meses para hacer seguimiento al plan de acción establecido desde su conformación.

ARTÍCULO 6. FORO DISTRITAL DE CONMEMORACIÓN. La Administración Distrital, llevará a cabo la realización del Foro Distrital en el marco de la Conmemoración del Día Mundial de enfermedades Huérfanas para educar, visibilizar y mostrar avances en beneficio a esta población.

ARTÍCULO 7. IMPLEMENTACIÓN. La administración tendrá un plazo de tres (3) meses para su implementación y marcha.

ARTÍCULO 8.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C. a los _____ días del mes de _____ de 2025.

PROYECTO DE ACUERDO NO 470 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene como finalidad la promoción y reconocimiento de todas las formas y expresiones de educación libre al declarar el día de la Libertad para Educar en Bogotá, como una manera de promover este derecho y sensibilizar a la comunidad, a la sociedad en general y a las autoridades sobre su importancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sensibilizar a la población bogotana sobre la importancia de la libertad educativa a través de la celebración del "Día de la Libertad Educativa" y la realización de actividades educativas y culturales.
2. Facilitar un espacio de diálogo y reflexión en el Foro sobre Libertad Educativa, donde los concejales, representantes de la sociedad civil y autoridades puedan intercambiar ideas, experiencias y propuestas para promover políticas que respeten y fortalezcan la diversidad de enfoques educativos.

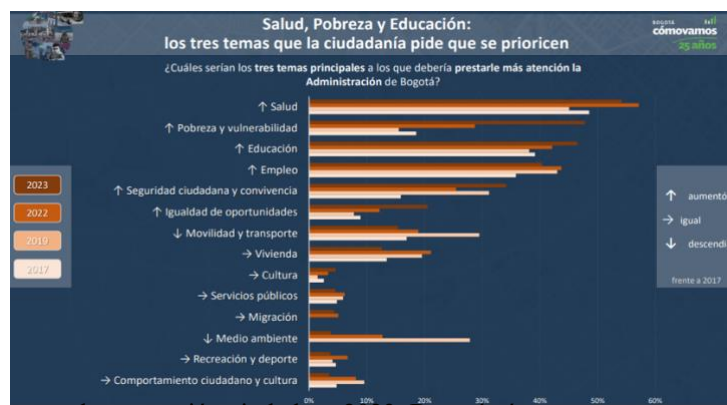
II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La libertad para educar es un tema de vital importancia en la sociedad actual, y para Bogotá no es la excepción. En este contexto, es fundamental promover y defender todas las expresiones de educación libre, reconociendo el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.

Como lo señala la UNESCO “La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, y también es un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales”

La libertad para educar se vuelve fundamental para ofrecer oportunidades de formación que preparen a los jóvenes para acceder al mercado laboral y enfrentar los retos económicos del país. Esta libertad permite que las familias puedan elegir entornos educativos en los que los maestros puedan ejercer su labor con pasión y dedicación, garantizando un aprendizaje significativo y enriquecedor para los estudiantes.

Gráfica. Temas que la ciudadanía pide que se prioricen en 2023.



Tomado de: Encuesta de percepción ciudadana 2023. Bogotá como vamos.

La educación representa un tema importante para los bogotanos, según la encuesta de percepción ciudadana del 2023 de Bogotá Cómo Vamos, la educación es el tercer principal tema al cual los ciudadanos consideran que la Administración Distrital debería prestarle más atención, de acuerdo a esta medición, la educación desde el 2017 es uno de los temas que viene aumentando.

La educación con libertad permite entender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni tienen los mismos intereses y talentos. Si no se fomenta la libertad para educar en el sistema educativo, se niega la diversidad y se limita la capacidad de los padres de elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos.

La educación es un derecho fundamental y la libertad para educar ayuda a su implementación, porque promueve la diversidad de enfoques pedagógicos y brinda opciones educativas a los padres y estudiantes lo que contribuye a un sistema más inclusivo, equitativo y a que los niños y jóvenes desarrollen su máximo potencial y se conviertan en ciudadanos pensantes y comprometidos con la sociedad.

La realización del día de la libertad para educar una vez al año en el Distrito, sería un escenario propicio para entender la importancia de este derecho y reconocer el papel fundamental que tiene la administración para velar que se garantice y se pueda ejercer sin restricciones.

CONTEXTO DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR

La libertad para educar se refiere al derecho que tienen los padres, los estudiantes y los docentes de elegir el tipo, el modelo y el proyecto educativo que más se ajuste a sus intereses, necesidades y convicciones. Además, implica el respeto a la diversidad, la pluralidad y la autonomía de las instituciones educativas, así como la participación de la comunidad educativa en la definición de las políticas y los planes educativos.

Uno de los desafíos ha sido la implementación de la Ley 115 de 1994, que estableció las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y la formación en las instituciones educativas, así como los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias.

Aunque esta ley buscaba garantizar una educación común y de calidad para todos los estudiantes, también ha generado críticas, entre ellas que limita su alcance, porque el artículo 20 señala que uno de los objetivos de la educación es preparar a los estudiantes para *“los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo”*.

Estas críticas están basadas en el desempeño que tienen otros sistemas educativos en el mundo que obtienen mejores resultados y cuyo enfoque es más amplio.

Por tal razón, es importante que en el tema educativo se promueva, reconozca y respete todas las formas de educación libre, reconociendo la diversidad de visiones y enfoques educativos presentes en la sociedad. La libertad para educar es fundamental para garantizar una educación de calidad, inclusiva y acorde con los principios y valores de cada familia y comunidad.

Al respecto, se considera que defender la libertad para educar es importante en los siguientes 4 aspectos:

1. La educación contribuye a mejorar las habilidades laborales y las oportunidades de empleo.

El desempleo es un flagelo que afecta de manera significativa a Colombia, especialmente a los jóvenes. Según el DANE, la tasa de desempleo de la población joven para el mes de julio de 2024 fue del 17,5%. La tasa de desempleo en este grupo fue mayor que la del total nacional, la cual fue del 9,9% para el mes de julio de 2024 (DANE). Estas cifras alarmantes indican que los jóvenes enfrentan más dificultades para acceder al mercado laboral que el resto de la población.

Tabla. Jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados Colombia.

Total Nacional	Mayo - julio 2024	
	Población (miles)	Proporción %
Población en edad de trabajar de 15 a 28 años	11.226	
Jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	2.597	23,1
Jóvenes hombres entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	881	7,8
Jóvenes mujeres entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	1.716	15,3

Tomado

de: Boletín técnico Mercado laboral de la Juventud Julio 2024. DANE

Por otro lado, según el DANE para el trimestre de mayo-julio 2024 existen en Colombia 2,5 millones de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados, de estos 1,7 millones son mujeres jóvenes y 881 mil hombres jóvenes, lo que implica un reto mayor, y sin duda es una situación que preocupa a las familias.

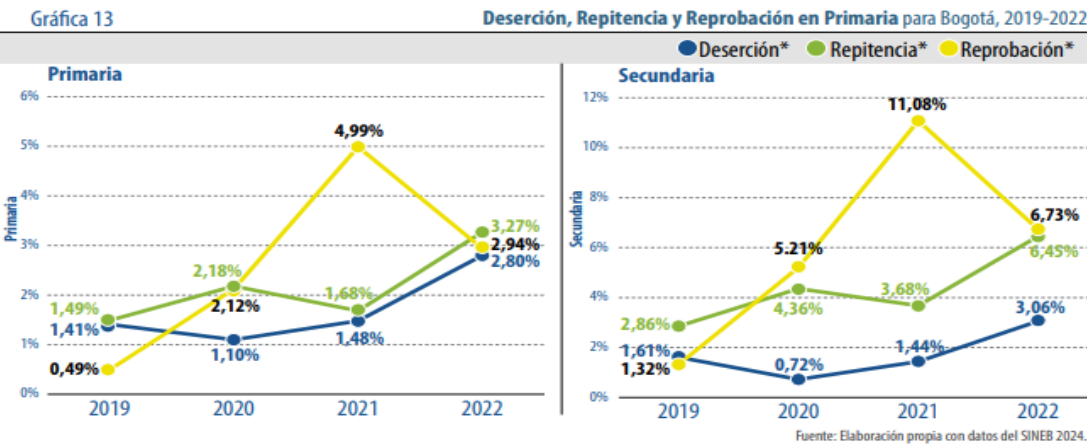
Existen diversas causas que contribuyen a esta situación: la falta de experiencia laboral, la baja calificación, la informalidad, la competencia y la discriminación son algunas de las posibles razones que dificultan la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.

Es fundamental promover la libertad para educar en Bogotá para que las familias tengan la posibilidad de desarrollar alternativas educativas que potencien las habilidades laborales de sus hijos y tengan mayores oportunidades de empleo. Esto implica que se debe también fomentar un enfoque educativo que se actualice en sintonía con las demandas cambiantes del mercado laboral y que brinde a los jóvenes las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los retos del mundo profesional.

2. Las familias en Bogotá no quieren que haya deserción escolar.

La tasa de deserción y el bajo nivel de aprendizaje son factores que impactan negativamente en el libre desarrollo y el futuro de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario promover la libertad para educar como una vía para ofrecer una educación más personalizada y acorde a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes.

Gráfica. Deserción repitencia y reprobación en Primaria y Secundaria. Bogotá 2019-2022.



Frente a la deserción escolar, según datos del SINEB las estadísticas revelan un aumento en la tasa de deserción, alcanzando un 4,05% en 2022 en preescolar, para educación primaria también se evidencia un aumento en la tasa de deserción del 2,8% y para secundaria del 3,06%. Como lo señala el informe de calidad de vida de 2023 de Bogotá cómo vamos esto es preocupante porque *“más niñas, niños y jóvenes están abandonando sus estudios y no están teniendo los rendimientos suficientes para conseguir avanzar de grado”*.

La deserción escolar según datos del SINEB para el 2022 fue mucho mayor en las instituciones oficiales con una tasa del 3,3% en primaria, y 3,7% en secundaria, mientras que para las instituciones no oficiales fue del 1,8% tanto para primaria como para secundaria en el año 2022.

Según el Ministerio de Educación, *“las causas de la deserción escolar pueden ser variadas y complejas, entre las cuales se encuentran el bajo rendimiento escolar, las dificultades académicas, el trabajo, falta de apoyo familiar, dificultades económicas, así como otros factores sociales y emocionales”*.

Por lo tanto, es necesario que se permitan e impulsen las iniciativas de educación libre en Bogotá. De esta manera, se pueden ofrecer currículos que permitan enfrentar de manera efectiva las causas de la deserción.

La libertad para educar es clave para fomentar una educación personalizada y relevante, que responda a las necesidades individuales de cada estudiante y contribuya a reducir la deserción escolar.

3. Las familias quieren una educación de calidad.

Además de la problemática de la deserción escolar, se debe considerar el fenómeno de la deserción invisible, que afecta a aquellos niños que asisten a la escuela, pero no están obteniendo una educación de calidad. Estos estudiantes simplemente cumplen con asistir a clases, pero no están aprendiendo de manera efectiva.

Al respecto el Informe de calidad de vida de Bogotá cómo vamos del 2023, señala que en los últimos 4 años los colegios calendario A y B en Bogotá han tenido comportamientos opuestos en las pruebas de SABER11, mientras que el primer grupo ha presentado una mejora constante, pasando de 265,8 puntos en promedio de puntaje global a 270,2 puntos entre 2019 y 2023, el segundo pasó de 350 a 338,6 puntos en el mismo periodo, presentando una disminución sostenida del puntaje global en la prueba

Por otro lado, en el ciclo 2022 de PISA los estudiantes de Bogotá tuvieron un desempeño mejor al de Colombia tanto en Matemáticas (423 contra 383), como en Lectura (462 contra 409) y ciencias (459 contra 411) Los resultados de las Pruebas PISA de 2022 revelan que Colombia e incluso Bogotá obtuvo un puntaje por debajo del promedio de la OCDE.

Es crucial reconocer que cada niño es único, con diferentes habilidades, intereses y formas de aprender. Si se fomenta la libertad para educar, se abrirán oportunidades para adaptar los currículos a las necesidades y preferencias de cada estudiante, lo que promovería un aprendizaje más significativo y motivador.

La libertad para educar puede convertirse en una herramienta que ayude a mejorar la calidad educativa, y de esta manera lograr un aprendizaje más significativo y preparar a los jóvenes para un futuro exitoso.

4. Empodera a los maestros.

La educación sin libertad tiende a reducir el papel de los maestros a simples operarios técnicos, limitando su capacidad para ser agentes transformadores en el proceso educativo.

Según Grundy, el currículo se puede clasificar en tres tipos: el Currículo Técnico, el Currículo Práctico y el Currículo Emancipador. El Currículo Técnico se enfoca en el control y la eficiencia, buscando transmitir conocimientos y habilidades de manera estandarizada y uniforme. El Currículo Práctico se centra en la experimentación y la comprensión de símbolos, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos en situaciones prácticas. Por último, el Currículo Emancipador se preocupa por potenciar la autonomía, la responsabilidad y la autorreflexión, permitiendo a los estudiantes tomar decisiones informadas basadas en ciertos tipos de saber y en el contexto social y cultural.

En un contexto de educación sin libertad, es común que se privilegie el Currículo Técnico, buscando control y eficiencia en la enseñanza. Esto limita el papel de los maestros a elementales transmisores de conocimiento, siguiendo un plan de estudios predefinido sin espacio para la creatividad, la innovación y la participación activa de los estudiantes.

Sin embargo, al reducir el rol de los maestros a operarios técnicos, se pierde la oportunidad de aprovechar su experiencia y habilidades para ser agentes de cambio en el proceso educativo. Los maestros desempeñan un papel crucial en la formación integral de los estudiantes, no solo transmitiendo conocimientos, sino también fomentando la autonomía, la responsabilidad y la autorreflexión.

El enfoque del Currículo Emancipador permite que los maestros actúen como facilitadores del aprendizaje, promoviendo la autonomía de los estudiantes, su capacidad de tomar decisiones informadas y su reflexión crítica sobre el conocimiento. Esto implica una visión de los maestros como profesionales que no solo transmiten información, sino que también guían y empoderan a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos activos y reflexivos.

Si se adopta una perspectiva del currículo basada en la teoría del conocimiento propuesta por Grundy y Habermas, se reconoce la importancia de fomentar el currículo emancipador, que promueve la autonomía, la responsabilidad y la autorreflexión de los estudiantes. Al hacerlo, se reconoce el papel esencial de los maestros como facilitadores del aprendizaje y agentes transformadores en la educación.

MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR

No se puede concluir esta reflexión sin destacar el esfuerzo incansable de diversas organizaciones sociales y de padres de familia en la defensa del derecho fundamental a la libertad de educar. Mucho antes de que se propusiera reglamentar la conmemoración de este derecho mediante Proyecto de Acuerdo, la libertad para educar ha sido promovida por la sociedad civil a través de múltiples asociaciones y movimientos ciudadanos.

En el año 2017, el Foro Nacional de la Familia jugó un papel clave en la difusión de esta causa. Junto a otras organizaciones, apoyó el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, documento al que se unieron más de 40 entidades tanto nacionales como internacionales. Con gran entusiasmo, estas organizaciones participaron en un evento conmemorativo celebrado en el Capitolio Nacional, que marcó un momento crucial en esta lucha.

El 10 de agosto de 2016 fue testigo de una manifestación histórica en Colombia. Más de un millón de padres de familia salieron a las calles para exigir al Estado el respeto por su derecho a ser los primeros responsables de la educación de sus hijos.

Este manifiesto que dio forma al 10 de agosto como el día de la Libertad para Educar, es una declaración firme que sigue resonando en los gobiernos de Colombia y Latinoamérica, recordándoles la importancia de velar por el desarrollo saludable de los niños y el respeto por el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.

III. MARCO JURÍDICO

SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" se enmarca y adecua dentro de un conjunto de normas y directrices que regulan la educación y los derechos humanos en Colombia.

3.1 Aspectos Constitucionales

Constitución Política de Colombia

Artículo 27: Garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Artículo 44: Reconoce los derechos fundamentales de los niños, incluidos el derecho a la educación y la cultura.

Artículo 67: Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con una función social.

Artículo 68: Reconoce que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores.

Además, las expresiones de educación libre cuentan con respaldo jurisprudencial, como lo establece la **Sentencia C – 1003 de 2007 de la Corte Constitucional**. En esta sentencia, se reconoce que la patria potestad es un régimen de protección del hijo menor no emancipado, conferido a los padres independientemente de su estado civil, y que su ejercicio corresponde tanto al padre como a la madre, conjuntamente.

Este régimen de patria potestad no se limita al ámbito del matrimonio, sino que se extiende a todas las familias, incluyendo aquellas conformadas por parejas no casadas o padres solteros. Este respaldo legal y jurisprudencial fortalece la legitimidad de las expresiones de educación libre, al reconocer el derecho de los padres a tomar decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, en línea con sus convicciones y valores familiares.

También es relevante la **Sentencia C – 145 de 2010 de la Corte Constitucional**, que reafirma la naturaleza de la patria potestad como el conjunto de derechos y facultades atribuidos por la ley tanto al padre como a la madre sobre la persona y bienes de los hijos no emancipados. Esta sentencia subraya que la patria potestad tiene como finalidad garantizar la protección, bienestar y formación integral de los hijos desde el momento mismo de la concepción y hasta que alcancen la mayoría de edad o se emancipen.

Además, destaca que este régimen de protección parental no está condicionado al estado civil de los padres, ya que surge por ministerio de la ley y se ejerce de manera privativa y conjunta. En ausencia de uno de los padres, el otro puede ejercer la patria potestad de manera exclusiva, y también existe la posibilidad de delegarla entre los progenitores. Esta sentencia consolida aún más el respaldo jurídico a las expresiones de educación libre, al reconocer el derecho de los padres a tomar decisiones en beneficio de sus hijos, en concordancia con sus valores y convicciones familiares.

Derechos Humanos y Convenios Internacionales

Convención sobre los Derechos del Niño: Establece que los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la educación y aseguraron que la educación se dirija al desarrollo de la personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades.

Declaración Universal de los Derechos Humanos: El artículo 26 proclama que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos.

Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que asegura el derecho a la instrucción y subraya la importancia de respetar la libertad de los padres para proporcionar educación de acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas.

Este principio refuerza la idea de que la educación debe ser inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural y de pensamiento en nuestra sociedad. Por lo tanto, propongo que respaldemos un acuerdo de ciudad que garantice el pleno ejercicio de este derecho en Bogotá, asegurando así una educación que promueva la igualdad, el respeto y la autonomía de las familias en la elección educativa de sus hijos.

En esta línea, el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirma el compromiso de los Estados Partes de respetar la libertad de los padres y tutores legales para asegurar que los hijos reciban una educación religiosa y moral acorde a sus propias convicciones. Este compromiso internacional resalta la importancia de proteger la diversidad de pensamiento y creencias en el ámbito educativo. Por ende, abogamos por la promulgación de un acuerdo de ciudad que salvaguarde este derecho fundamental en Bogotá, promoviendo así una educación que fomente la tolerancia, el respeto y la pluralidad de ideas en nuestra comunidad.

En coherencia con lo anterior, el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, también establece que los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y tutores legales para elegir escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre y cuando estas instituciones satisfagan las normas mínimas en materia de enseñanza. Además, se asegura el derecho de los hijos o pupilos a recibir educación religiosa o moral conforme a las convicciones de sus padres. Este compromiso refuerza la importancia de garantizar la diversidad de opciones educativas y el respeto a las creencias individuales en Bogotá. Por tanto, es esencial respaldar un acuerdo de ciudad que promueva y proteja esta libertad educativa en nuestra comunidad.

3.2. Del Orden Legal:

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación

Artículo 5: Reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos.

Artículo 7: Define los fines de la educación, entre los cuales se encuentra el respeto por la diversidad cultural y las distintas formas de ser, pensar y actuar.

Se reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el principal responsable de la educación de los hijos. En este sentido, se enfatiza que corresponde a los padres matricular a sus hijos en instituciones educativas que satisfagan sus expectativas. Además, se destaca la responsabilidad de los padres en educar a sus hijos y proporcionarles un ambiente adecuado para su desarrollo integral en el hogar. Estos principios resaltan la importancia de que cualquier política educativa en Bogotá promueva la colaboración y participación activa de la familia en el proceso educativo de sus hijos, así como garantice que las instituciones educativas cumplan con las expectativas de los padres y proporcionen un entorno propicio para el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes.

Artículo 23: Promueve la educación personalizada y la atención a las diferencias individuales.

Decreto 1860 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

Artículo 1: Reglamenta la Ley General de Educación y establece directrices para la organización de la educación formal en el país.

Artículo 9: Asegura la participación de la comunidad educativa en el proceso educativo, promoviendo la inclusión de diversas expresiones culturales y pedagógicas.

Ley 1620 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de

Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden Nacional y Territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar Sentencias de la Corte Constitucional: Varias sentencias han reafirmado el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, incluyendo la **C-376 de 2010**, que enfatiza la importancia de respetar la diversidad educativa y cultural.

Además, es importante destacar que existen decretos, como el **Decreto 1075 del 2015**, que respaldan la posibilidad de validar grados en el sistema educativo formal. Según el **Artículo 2.3.3.3.4.1.1** de dicho decreto, se regula la validación por grados de los estudios de la educación formal, permitiendo que aquellos estudiantes que demuestren haber adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para los diferentes niveles educativos, puedan acceder a la validación de sus grados. Esta disposición abre la puerta a las familias que optan por una educación libre, ofreciendo una vía para que sus hijos puedan certificar sus estudios de manera formal, respetando así su elección educativa y su derecho a una educación integral.

Asimismo, el **Artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 del 2015** establece el procedimiento para llevar a cabo esta validación de grados. Según este artículo, los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento y que demuestren un desempeño académico destacado, como estar ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada en las pruebas de competencias SABER o en el Examen de Estado en categoría alta, están autorizados para realizar la validación de estudios de manera gratuita.

Este proceso se lleva a cabo mediante evaluaciones o actividades académicas, y está dirigido a personas que se encuentren en situaciones académicas particulares, como haber realizado estudios en otro país sin legalización de certificados o no haber cursado uno o varios grados en el sistema educativo formal. Esta disposición proporciona una oportunidad concreta para aquellas familias que optan por una educación libre, permitiendo la validación de los estudios de sus hijos de manera oficial y respetando así su elección educativa.

Adicionalmente, el acuerdo de ciudad de libertad educativa se encuentra respaldado por disposiciones del **Código Civil**, específicamente en los **Artículos 288 y 253**, que regulan la patria potestad y el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos.

Según el Artículo 288, la patria potestad es el conjunto de derechos conferidos a los padres sobre sus hijos no emancipados, con el fin de facilitarles el cumplimiento de los deberes que esta condición implica. Esto implica que los padres tienen la facultad de tomar decisiones respecto a la educación de sus hijos, en concordancia con sus convicciones y valores. Además, el Artículo 253 establece que corresponde a los padres, o al padre o madre sobreviviente en ausencia del otro, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos.

3.3 Normas Distritales

Acuerdo 273 de 2007: Declara a Bogotá como territorio de inclusión y respeto por la diversidad promoviendo políticas públicas que reconozcan y respeten las distintas formas de educación y expresión cultural.

Política Pública de Educación para la Ciudad de Bogotá: Promueve una educación inclusiva y respetuosa de las diversas expresiones culturales y educativas de los habitantes de la ciudad.

Estas Leyes Constitucionales, normativas y directrices proporcionan un marco legal sólido y claro para la implementación de políticas y acuerdos que promuevan y respeten todas las expresiones de educación libre en Bogotá, garantizando el derecho a una educación inclusiva, diversa y respetuosa de las distintas culturas y formas de aprendizaje.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

Decreto Ley 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”

“Artículo 12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

De conformidad con la anterior disposición es competencia del Concejo de Bogotá, D.C. tramitar la presente iniciativa.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con la Ley 819 de 2003, el presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, porque no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones presupuestales adicionales, porque su implementación obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades responsables de implementar esta iniciativa.

Cordialmente:

CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 470 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR EN EL DISTRITO
CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Concejo de Bogotá D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 12 de la Ley 1801 de 2016, y los numerales 1º, 8º y 18º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: PROMOCIÓN. Promuévase el derecho a la libertad para educar en los colegios públicos y privados del distrito de acuerdo a lo establecido en los Artículos 27, 44, 67, 68 de la Constitución Política de Colombia.

ARTÍCULO 2: DÍA DISTRITAL DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR. Se declara el 10 de agosto de cada año como el Día de la Libertad para Educar en Bogotá, con el propósito de promover y celebrar los principios fundamentales de la libertad en la educación consignados en los Artículos 27, 44, 67, 68 de la Constitución Política de Colombia.

ARTÍCULO 3: FORO DISTRITAL SOBRE LA LIBERTAD PARA EDUCAR. Se organizará un foro sobre libertad educativa que tendrá lugar en el Concejo de Bogotá. Este foro se llevará a cabo con el objetivo de sensibilizar sobre la trascendencia del respeto y la promoción de la libertad educativa en Bogotá. Se dedicará especial atención a discutir políticas y medidas que fomenten la diversidad de enfoques educativos y garantice el ejercicio pleno de este derecho.

ARTÍCULO 4: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 471 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA GESTIONAR LA FATIGA Y EL CANSANCIO EN LOS CONDUCTORES QUE OPERAN EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objeto del Proyecto de Acuerdo

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer un protocolo para gestionar la fatiga y sueño en los conductores que salen de los terminales de transporte terrestre de Bogotá, como una medida que busca disminuir los niveles de accidentabilidad causados por escenarios de microsueño, cansancio y somnolencia durante el traslado de pasajeros por carretera.

II. Antecedentes

La presente iniciativa no ha sido sometida a consideración de la Corporación en oportunidades anteriores.

III. Sustento jurídico de la iniciativa

Existen distintas normas que sustentan jurídicamente la procedencia de la iniciativa. Sin embargo, en el presente apartado se incluyen aquellas directamente relacionadas con lo pertinente a la regulación por parte de la nación y el distrito en materia de control y vigilancia a las terminales de transporte. A continuación, se citan y organizan, conforme a su jerarquía normativa, las disposiciones legales que guardan relación directa con el objeto del presente proyecto de acuerdo y que constituyen el fundamento jurídico de esta iniciativa.

Marco constitucional

Este proyecto de acuerdo se fundamenta en los derechos y normas constitucionales asociados a la movilidad de la siguiente manera:

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” El artículo 11 de la Constitución establece que “*el derecho a la vida es inviolable*”; el artículo 24 dicta que “*todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él*”. En este sentido, la Carta Magna protege el derecho a la vida, la seguridad de las personas y el derecho a la locomoción.

Aunado a esto, el artículo 26 de la Constitución establece que *“toda persona es libre de escoger su profesión u oficio. (...) Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. (...)”*. La conducción de vehículos de transporte público intermunicipal constituye una de estas actividades, dada su incidencia directa en la seguridad vial y en la vida de los pasajeros, transeúntes y demás actores viales.

Desde esta perspectiva se reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental e inviolable; en consecuencia, la movilidad debe desarrollarse en condiciones de seguridad. Esto quiere decir que el Estado está en la obligación de regular los comportamientos asociados a la movilidad que pueden poner en peligro la vida de las personas. Esto a su vez garantiza el derecho a la locomoción de las personas en territorio colombiano, debido a que las condiciones de seguridad son necesarias para que los ciudadanos y residentes de se puedan mover libremente por el territorio nacional.

Cabe resaltar que el derecho a la libre circulación, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, no tiene carácter absoluto. Su ejercicio se encuentra condicionado por los límites que impone el orden jurídico, especialmente en lo relativo a la seguridad, el bienestar general y los derechos de terceros. En este sentido, toda persona debe ejercer su derecho a la movilidad de forma razonable, respetuosa y responsable, sin afectar negativamente la seguridad vial, el entorno ambiental u otros bienes jurídicamente protegidos.

En consecuencia, y considerando que la actividad de conducción, especialmente en el transporte público intermunicipal, representa un riesgo social elevado, el Estado tiene no solo la facultad, sino el deber de intervenir mediante medidas regulatorias orientadas a prevenir conductas que puedan comprometer la vida e integridad de las personas y perturbar la convivencia pacífica.

Es por ello que se hace necesaria la adopción de una norma que permita identificar, medir y controlar los niveles de fatiga en los conductores de buses intermunicipales. Dada la naturaleza exigente de esta labor —caracterizada por extensas jornadas laborales y descanso insuficiente— se deben establecer mecanismos que garanticen condiciones mínimas de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios del sistema de transporte.

En concordancia con lo anterior, es pertinente resaltar los artículos constitucionales que amparan los derechos de los trabajadores, especialmente en lo relacionado con su salud, seguridad y bienestar. El artículo 53 de la Constitución Política establece los principios mínimos fundamentales del trabajo, entre los cuales se incluyen expresamente la seguridad laboral y el descanso necesario, elementos esenciales para garantizar condiciones dignas y justas en el ejercicio de cualquier actividad económica.

Por su parte, el artículo 93 de la misma norma superior dispone que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Colombia, prevalecen en el orden interno y hacen parte del bloque de constitucionalidad. En virtud de esta disposición, adquieren fuerza vinculante instrumentos como el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, y el Convenio 187 de la OIT, que refuerza el derecho de los trabajadores a un entorno laboral seguro y saludable.

Marco legal:

El legislador mediante la Ley 1503 de 2011 estableció como herramienta para la prevención y control de los riesgos asociados a la accidentalidad, entre otros, los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV).

Con relación a la **definición de los PESV** el literal a) del artículo 2.3.2.1 Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, estableció lo siguiente:

*"a) **Plan Estratégico de Seguridad Vial:** Herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, implementación, seguimiento y mejora que deben adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado de conformidad con el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, **encaminadas a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos.** "*

(Negrilla fuera del texto)

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 toda empresa, entidad u organización que cuente con más de 10 vehículos automotores o no automotores debe diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial.

***Artículo 12.** Modificado por el art. 110, Decreto Nacional 2106 de 2019. Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST. En ningún caso el Plan Estratégico de Seguridad Vial requerirá aval para su implementación.*

Con relación al **contenido mínimo que deben tener los planes PESV**, la norma ibídem establece lo siguiente:

(...)

Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que contendrá como mínimo:

1. Diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, asociados a la flota de vehículos o al personal de conductores.

2. Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad, organización o empresa independientemente del cargo o rol que desempeñe.
3. Compromisos claros del nivel directivo de la entidad, organización o empresa orientados al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial.
4. Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad Organización o empresa incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento misional de su objeto o función.

Con relación a la **metodología, diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial**, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20223040040595 de 2022. Esta resolución contiene un anexo técnico detallado que deben cumplir las empresas y entidades obligadas.

Dentro de las obligaciones establecidas por la resolución, y que guardan relación con el propósito del Proyecto de Acuerdo, se destacan las siguientes:

- a) Se define la creación de un Comité de Seguridad Vial
Dentro de las obligaciones a cargo de este Comité se encuentra la de:
*“e) **Analizar los indicadores de siniestralidad vial, las investigaciones internas de siniestros viales y realizar seguimiento a los planes de acción que surgen de los resultados o conclusiones de las investigaciones, teniendo en cuenta que se deben investigar todos los siniestros viales donde se ven involucrados colaboradores de la organización que realizan desplazamientos laborales, donde se presentan muertos, lesionados o daños de la organización o de terceros**”.*
- b) La organización o empresa obligadas debe diseñar e implementar, entre otros, los siguientes programas:
 - Programa de Gestión de la Velocidad Segura
 - **Programa de Prevención de la Fatiga**
 - Programa de Prevención de la Distracción
 - Programa de Cero Tolerancia a la conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias Psicoactivas:

Con relación al **programa de prevención de la fatiga**, el anexo técnico de la resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte estableció lo siguiente:

*“Procedimiento para controlar la jornada de trabajo, horas de conducción y **descanso de los conductores**, debe contener: mecanismo o equipo de medición que se va a utilizar; **revisión y cumplimiento de las políticas laborales en cuanto a los tiempos de conducción y jornada de trabajo**; **planificación de los viajes para evitar excesos en las jornadas de trabajo**; responsable(s) del programa; frecuencia de evaluación de los resultados; **procedimiento en caso de encontrar excesos en las jornadas de trabajo u horas de conducción** y casos reiterativos por parte de planificadores de ruta y conductores”.*

*Los factores de desempeño de la prevención de la fatiga, entre otros pueden ser: **promover el cumplimiento de la jornada laboral del personal que conduce un vehículo** para los desplazamientos laborales; **sustituir incentivos de pago asociados al exceso de kilómetros recorridos diariamente**; **controlar la jornada de descanso entre turnos**; **controlar los sitios y horarios de descanso durante la jornada laboral**”. (Negrilla fuera del texto).*

Respecto de la verificación de la implementación y el cumplimiento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, el artículo 1° de la Ley 2050 de 2020 señaló:

*“La verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial corresponderá a la Superintendencia de Transporte, **los organismos de Tránsito** o el Ministerio de Trabajo, quienes podrán, cada una en el marco de sus competencias, **supervisar la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV)**. Las condiciones para efectuar la verificación serán establecidas en la Metodología que expida el Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 110 del Decreto ley 2106 de 2019 o la norma que la modifique, sustituya o derogue”;*

Por otra parte el artículo 2.3.2.3.2. del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 1252 de 2021, con relación a la competencia de las entidades para la verificación de los PESV definió:

(...)

Para el caso del Sector Transporte, la verificación se realizará por las siguientes autoridades en el marco de sus competencias, de la siguiente manera:

a. Por la Superintendencia de Transporte a las empresas que presten servicio público de transporte terrestre de pasajeros, carga y mixto, en las modalidades de radio de acción nacional.

b. Por los Organismos de Tránsito en su jurisdicción, a las empresas que prestan el servicio público de transporte terrestre de pasajeros y mixto en el radio de acción municipal, distrital, o metropolitano”.

El artículo 2.3.2.3.2 del Decreto número 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, establece que las entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado de las que trata el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, deben diseñar e implementar los PESV de acuerdo con su misionalidad y tamaño, así mismo deben articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SGSST), según lo establecido en la metodología de Diseño, Implementación y Verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, adoptada el Ministerio de Transporte, la cual se encuentra en la Resolución.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y prevención de los accidentes de tránsito

El Artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en lo relacionado con el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo estableció lo siguiente:

*"Artículo 2.2.4.6.4. **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST).** El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar **los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.***

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar. Hacer. Verificar y Actuar). (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Normas Distritales

El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 257 de 2006, efectuó la creación de la Secretaría Distrital de Movilidad, antes Secretaría de Tránsito y Transporte (art. 105).

Como misión del sector movilidad se estableció: "El Sector Movilidad tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte" (art. 104).

Entre las entidades vinculadas al sector se encuentra como Sociedad de Economía Mixta: la Terminal de Transporte S.A. (literal b, artículo 107)

Dentro de las funciones de la Secretaría se encuentran las siguientes:

*“a. Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el **mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte.***

b. Fungir como autoridad de tránsito y transporte.

g. Orientar, establecer y planear el servicio de Transporte Público Urbano, en todas sus modalidades, en el Distrito y su área de influencia.

h. Participar en el diseño de la política y de los mecanismos de la construcción y explotación económica de las terminales de transporte de pasajeros, de carga y de transferencia.

l. Controlar, de conformidad con la normativa aplicable, el transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital.

m. Administrar los Sistemas de información del sector”

(Negrilla fuera del texto).

Por su parte mediante el Decreto Distrital 672 de 2018, se modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad. La función de control del transporte intermunicipal en el Distrital antes mencionada y definida en el Acuerdo 257, fue recogida en este Decreto en cabeza del despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad, así:

“Artículo 4. Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad. Son funciones del Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad las siguientes:

13. Orientar las acciones de control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital, de conformidad con las normativas, políticas y referentes aplicables” (art. 4).

IV. Justificación del Proyecto de Acuerdo

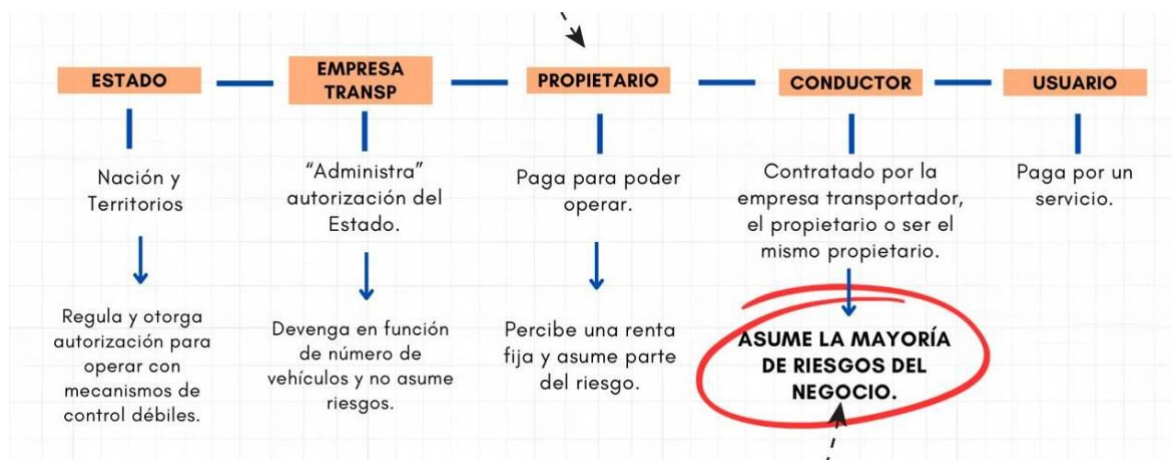
Una vez expuesta la argumentación jurídica del proyecto, este apartado le corresponde exponer los fundamentos técnicos que sustentan la pertinencia de crear un protocolo para gestionar la fatiga de los conductores en los terminales de transporte del distrito, con el propósito conocer las condiciones físicas y mentales que aquejan a los conductores que realizan rutas de corta, media y larga distancia a interior del país.

De esta forma, con el objetivo de realizar una exposición detallada de los argumentos que sustentan la iniciativa, el análisis se estructura de la siguiente manera: En primera instancia se describe el funcionamiento del transporte terrestre intermunicipal en Colombia, en segunda instancia, se señala la importancia de gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores de transporte terrestre; en una tercera instancia se presentan las estadísticas sobre los informes de siniestros viales que se generan

en carretera; y por último, se mencionan las múltiples desafíos en materia operativa por parte de los sectores competentes.

a. Funcionamiento del transporte terrestre intermunicipal en Colombia.

Como se señaló con anterioridad en el marco normativo del proyecto, el transporte terrestre intermunicipal es un servicio público regulado por el Ministerio de Transporte, vigilado y controlado de manera permanente por la Superintendencia de Puertos y Transporte, reglamentado por la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996. Es un servicio que funciona a través de intermediación con empresas privadas, en el cual, el Estado concede el permiso para operar las rutas y estas son administradas por empresas de transporte quienes bajo propiedad o con afiliados están a cargo de contratar a los conductores para el traslado de los pasajeros que diariamente (...), representado visualmente de la siguiente manera:



Fuente: Elaboración con información obtenida de "Fatiga y condiciones laborales en conductores de transporte terrestre de pasajeros en una terminal de Colombia".

En relación con el presente proyecto de acuerdo, el esquema evidencia que, aunque la regulación del servicio de transporte en el país recae directamente en el Ministerio de Transporte, esta entidad trabaja de manera coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad a nivel territorial para supervisar y garantizar el seguimiento operativo de las rutas que salen desde Bogotá. Además, se observa que la relación entre las empresas y los conductores está mediada por los propietarios de los vehículos. En este modelo, *"las empresas ganan según el número de afiliados, los propietarios que afilian sus vehículos perciben una cuota fija por parte de los conductores, y estos últimos ganan bajo dos modalidades: por pago fijo, por ruta o turno realizado, eso depende de la modalidad de contratación"* (Miranda Jiménez, 2014, p. 22). Sin embargo, es importante destacar que los riesgos directos recaen sobre los conductores, quienes asumen la responsabilidad final del traslado seguro de los usuarios.

Ahora bien, en lo relacionado con el funcionamiento de la red intermunicipal desde el nivel distrital, el observatorio de movilidad de Bogotá, como una herramienta fundamental para recopilar, estandarizar y difundir la información relacionada con los diversos aspectos que componen la movilidad del distrito y la región, destaca que el servicio de transporte de pasajeros por carretera opera bajo tres categorías de rutas: corta, media y larga distancia. Además, señala que los servicios intermunicipales ingresan a la ciudad a través de ocho corredores principales: Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Avenida Cota-Suba, Autopista Norte, Vía La Calera-Bogotá, Vía Choachí-Bogotá y Avenida Villavicencio y que en Bogotá existen tres terminales de transporte terrestre: la Terminal del Sur, la Terminal del Norte y la Terminal Salitre (también conocida como Terminal de Transporte).

Dichos desplazamientos entre Bogotá y los diferentes territorios del país, permiten que la definición de políticas públicas de movilidad, se articulen a la comprensión del modelo de Región Metropolitana en términos de conectividad, sostenibilidad y eficiencia. Entre los beneficios de esta integración el ABC de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca resalta los siguientes:

- Facilita la planificación y ejecución de proyectos de transporte que mejoren la conectividad entre los municipios de la región.
- Disminuye los costos del transporte público intermodal para los ciudadanos que se desplazan entre los municipios de la región.
- Contribuye a aliviar la congestión y evitar la saturación en las vías de acceso a los centros poblados.
- Promueve la integración entre el transporte privado, público y de carga intermunicipal.
- Abre la posibilidad de desarrollar nuevos corredores para la circulación de personas y mercancías. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2023)

b. Experiencia del Distrito para el manejo de la fatiga en el transporte público.

Una vez revisado de manera general el funcionamiento del transporte terrestre intermunicipal y la normatividad que lo regula, es importante señalar para la justificación del acuerdo el trabajo que se ha hecho desde otras administraciones distritales, para capacitar y gestionar la carga laboral en el recurso humano que opera el transporte público y privado de la ciudad.

En este sentido, en el marco de la política internacional conocida como "Visión Cero", cuyo objetivo es *"reducir a cero el número de víctimas fatales y heridos graves en siniestros viales"*, la Alcaldía de Enrique Peñalosa, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptó en 2016 un enfoque de seguridad vial internacional en el que se reconoce que ninguna muerte en el tránsito es aceptable y todas se pueden evitar. Este enfoque fue implementado gracias a la participación de Bogotá en la iniciativa para la Seguridad Vial Global de Bloomberg Philanthropies, tras ser seleccionada entre las diez ciudades del mundo para formar parte de esta estrategia. El propósito principal de su aceptación fue reducir la cantidad de siniestros viales y adoptar esta visión como hoja de ruta para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

De manera complementaria, y como medida para implementar la política de "Visión Cero", la Secretaría Distrital de Movilidad lanzó una propuesta participativa denominada Red Empresarial de Seguridad Vial, cuyo propósito fue promover la participación interinstitucional entre entidades públicas y privadas, fomentando actividades y espacios de diálogo que sensibilicen a los diferentes actores viales sobre su papel como responsables directos en la tarea de salvar vidas en las vías.

Así, para dar cumplimiento a los cuatro principios de Visión Cero, los cuales son: i) Las fatalidades y lesiones graves son prevenibles; **ii) El sistema de transporte debe ser seguro;** iii) Cometer errores es de humanos; iv) A mayor velocidad, mayor es la gravedad del siniestro; la administración distrital debido al nivel de siniestralidad vial que estaba entrando a formar parte de los problemas de salud pública encaminó gran parte su política pública de movilidad a la protección de las vidas en el tránsito, mediante las siguientes acciones:

Acciones del distrito para salvar vidas en las vías.



1. Cambios a los diseños de las calles e intersecciones.



2. Control policial al exceso de velocidad y embriaguez.



3. Programa distrital #GózateLaCalle.



4. Plan de Seguridad Vial del Motociclista.



5. Acciones para la seguridad vial en el transporte público.



6. Programa de Cultura Ciudadana.



7. Campañas de comunicación masiva.

Nota: Elaboración Propia con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Considerando que se ha descrito de manera general el contenido de Visión Cero y su impacto en el distrito, es importante anotar que cada una de las acciones relacionadas en la ilustración anterior generó resultados individuales, sin embargo, para el contexto de la justificación del acuerdo, **el ítem número cinco (5) asociado a la seguridad vial en el transporte público, desarrolló una serie de programas y talleres a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial, encaminados a fortalecer la seguridad de los trabajadores, evitar las bajas laborales y promover la responsabilidad social de los actores viales, aspectos esenciales para el desarrollo de la presente iniciativa.**

En este contexto, se realizaron un total de ocho (8) talleres en los que participaron diferentes empresas, conductores y pasajeros sobre los diversos temas que engloba el programa "Visión Cero Bogotá". Mediante la Red Empresarial de Seguridad Vial se diseñaron capacitaciones y actividades conforme a lo establecido en el Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 y fueron adaptadas a los

distritos actores viales involucrados. Durante las sesiones se expuso el diagnóstico de siniestralidad vial en la ciudad, en el que se denotaron datos representativos como el hecho de que en Bogotá fallecen 7.5 personas por cada 100.000 habitantes a causa de siniestros viales convirtiéndose en un problema de salud pública, así como, el desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y acompañamiento enfocadas en los factores de riesgo a los que diariamente están expuestos los actores viales.

Por lo tanto, se considera pertinente comprender de manera concisa el contenido de cada taller y su respectiva cartilla, con el propósito de comprender la relación estrecha que existe entre las condiciones físicas y mentales de los conductores -incluyendo factores como la fatiga o el cansancio- con las causas de siniestralidad vial que se presentan en el distrito.

Cartilla

Contenido general de las cartillas asociado a las estrategias y causas de la siniestralidad vial en Bogotá

<i>Cartilla 1 - Visión Cero</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estrategia para reducir siniestros viales a cero. - Identificación de actores viales vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas). - Importancia de la infraestructura segura y el control de velocidad. - En Bogotá, mueren 7.5 personas por cada 100,000 habitantes en siniestros viales. - Entre 2003 y 2016, el 96% de las fatalidades fueron peatones, ciclistas y motociclistas. - Un peatón tiene 85% de probabilidad de morir si es atropellado a 50 km/h, pero solo 10% a 30 km/h.
<i>Cartilla 2 - Responsabilidad Social.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Seguridad vial como parte de la responsabilidad social empresarial. - Beneficios de invertir en seguridad vial para la empresa y la sociedad. - En 2017, hubo 546 muertos y 14,882 lesionados en siniestros viales en Bogotá. - Empresas que invierten en seguridad vial reducen costos por bajas laborales, accidentes y daño a la reputación

Cartilla 3 - Eco-Conducción.

- Técnicas de conducción eficiente para reducir consumo de combustible y contaminación.
- Impacto positivo en seguridad vial al evitar frenadas y aceleraciones bruscas, con el uso de tecnologías para optimizar el rendimiento del vehículo.
- La fatiga provoca pérdida de paciencia, microsueños y dificultad para calcular distancias, es por ello que se debe evitar manejar con sueño o estrés para prevenir accidentes.
- El transporte consume 44% de la energía primaria del país.
- Conducir con presión baja en llantas aumenta el consumo de combustible 3%
- La eco-conducción puede reducir siniestros en un **40%**.

Cartilla 4 - Prácticas Seguras en Dos Ruedas

- Estrategias para mitigar riesgos en motociclistas y ciclistas.
- Uso obligatorio de elementos de protección certificados.
- Importancia de la formación y auditoría de seguridad vial.
- En 2017 en siniestros viales fueron motociclistas.
- 35% de los motociclistas fallecidos sufrieron trauma craneoencefálico.
- No hay regulación estricta sobre la venta de elementos de protección personal.

Cartilla 5 - Transporte de Carga

- Importancia de la planeación de rutas y el control de vehículos.
- Capacitación en seguridad vial y mantenimiento vehicular.
- Implementación de incentivos para conductores con buenas prácticas, junto con recomendaciones para promover pausas activas y tiempos de descanso.
- Control de horarios de tránsito y tiempos de conducción para evitar fatiga.
- Entre 2015 y 2017, hubo 1,466 muertes y 8,689 lesionados en siniestros con vehículos de carga.
- La instalación de cintas retrorreflectivas reduce accidentes en condiciones de baja visibilidad.

***Cartilla 6 -
Transporte de
Pasajeros***

- Responsabilidad del conductor con los pasajeros.
- Control de velocidad y cumplimiento de normas de tránsito.
- Uso de tecnologías y herramientas de capacitación innovadoras.
- Regulación de horarios de conducción y descanso.
- Importancia del bienestar del conductor para evitar riesgos en el servicio.
- En 2018, 361 personas fallecieron en siniestros viales en Colombia, de las cuales 17 estaban en taxis.

***Cartilla 7 - Control
de la Fatiga en el
Transporte Público***

- Impacto de la fatiga en los accidentes de tránsito.
- Estrategias empresariales para reducir la fatiga en conductores.
- Consecuencias del sueño insuficiente en la seguridad vial.
- Dormir entre **7 y 8 horas** para un mejor desempeño.
- Evitar cafeína y alcohol antes de dormir.
- Hacer **pausas de 15 minutos** cada 2 horas de conducción.
- No manejar más de **8 horas al día**.
- Mantener buena ventilación en la cabina para evitar somnolencia.
- Evitar turnos mayores a **10 horas continuas**.
- **4% de los accidentes en TransMilenio** están relacionados con fatiga.
- Un microsueño de **2 segundos a 60 km/h** equivale a recorrer **33 metros sin control**.
- **90% de los siniestros viales** están relacionados con **factores humanos**.

Cartilla 8 - Efectos de la Velocidad en Siniestros

- Relación entre la velocidad y la gravedad de los accidentes.
- Estrategias de gestión de velocidad en empresas.
- A 50 km/h, un peatón tiene 85% de probabilidad de morir en un accidente, pero a 30 km/h solo 10%.
- Las empresas que controlan la velocidad reducen costos en seguridad social, seguros y reparaciones.

Cómo se logra evidenciar en el taller tres (3) y siete (7) la presencia de fatiga o cansancio en los conductores representa un gran riesgo para todos los actores viales, es fundamental como se demostrará en el siguiente apartado mantener prácticas que disminuyan riesgos asociado a situaciones de adormecimiento o desmayo, dificultad para calcular distancias, aumento de estrés y pérdida de paciencia en la vía. Igualmente, como se señala en la *cartilla de Eco-conducción* el evitar el cansancio a la hora de manejar afecta la eficiencia en el consumo de combustible y la sostenibilidad del transporte. Adoptar hábitos de conducción responsable, como realizar pausas activas, mantener una buena hidratación y asegurar un descanso adecuado, contribuye a una movilidad más segura y eficiente, alineándose con los principios de la eco-conducción (Secretaría Distrital de Movilidad, 2017).

c. Control de la fatiga y el cansancio en los conductores de buses de las terminales de transporte terrestre de Bogotá.

A este apartado le corresponde explicar de manera detallada la definición de fatiga, sus causas y consecuencias en la salud mental y física de los conductores, así como, los signos que permiten identificarla y gestionarla, por parte de las empresas como responsables de la contratación y de los conductores quienes son los directamente afectados con este problema teniendo en cuenta las condiciones a las que diariamente se ven expuestos con horarios extendidos de trabajo, situaciones de estrés y cansancio acumulado.

De manera recurrente se suele asociar el cansancio y la fatiga como conceptos similares, sin embargo, desde diferentes posturas, se relaciona a esta última con síntomas generales como ansiedad, depresión, dolor generalizado, alteraciones del sueño, la memoria, la concentración, del estado de vigilia y de la capacidad para realizar tareas de manera segura. (ARL SURA, 2017; Infosalus, 2021).

Según la Secretaría de Movilidad, las causas de la fatiga en los conductores están asociadas principalmente a jornadas de conducción extensas, situaciones de estrés laboral debido a la presión en el cumplimiento de tiempos en las rutas asignadas, escenarios de tráfico, malos hábitos de alimentación, descanso, higiene ocupacional y descuido en las valoraciones de salud. En este sentido, las precauciones que recomienda la entidad están vinculadas a la importancia de descansar,

controlar e identificar las actividades que generan fatiga y realizar una verificación permanente del estado de salud y los exámenes de alcoholimetría (p.6).

Como se señala en la cartilla número 7 *“el control de la fatiga en el espacio público”* La fatiga al conducir se manifiesta a través de diversas señales físicas y de comportamiento. Según investigaciones de Sura, una persona que se mantiene alerta parpadea de manera rápida, con cierres de ojos inferiores a un segundo, permanece consciente de su entorno, coordina adecuadamente sus movimientos corporales y mantiene una actitud conversadora y activa. En contraste, cuando una persona se encuentra fatigada, tiende a realizar parpadeos largos (de dos segundos o más), sostiene la mirada fija, disminuye la interacción con el entorno, reduce su actividad física y puede experimentar episodios breves de sueño conocidos como microsueños (Sura, 2017).

Es por ello, que detectar estos síntomas resulta fundamental, ya que el cansancio compromete las capacidades sensoriales, la percepción, la coordinación motriz y los procesos de razonamiento, afectando gravemente la capacidad para reaccionar ante los riesgos en la vía (Sura).

Igualmente, dentro de las recomendaciones que se plantean al interior de la plantilla se señala que para la debida gestión de la fatiga, para los conductores es importante realizar pausas de al menos quince minutos cada dos horas de trayecto, con el fin de descansar y recuperar energía, así como, mantener un ambiente agradable dentro del vehículo que ayude a evitar el cansancio; para ello, se sugiere ventilar la cabina periódicamente, permitiendo el ingreso de aire fresco del exterior.

Así mismo, en situaciones donde se perciban signos de cansancio, es fundamental no intentar compensar el agotamiento excediendo los límites de velocidad, es necesario mantenerse atento a la conducta de otros vehículos, en particular a quienes invaden bermas o carriles de forma involuntaria, ya que estos comportamientos pueden ser señales de fatiga en otros conductores.

Como última recomendación, se señala que una buena preparación para el viaje implica alistar el vehículo el día anterior y asegurar un descanso adecuado, procurando dormir entre siete y ocho horas por noche. En este sentido, para favorecer un sueño reparador, se debe evitar el consumo de bebidas con cafeína al menos seis horas antes de dormir, así como abstenerse de consumir alcohol y tabaco en ese mismo periodo. (p.10)

A partir de lo expuesto, se puede concluir que factores como los extensos horarios de trabajo, la monotonía de las rutas, la falta de pausas adecuadas para el descanso y la repetición constante de movimientos mecánicos y rutinarios incrementan significativamente el riesgo de fatiga y somnolencia en los conductores de transporte intermunicipal. Esta condición no solo compromete la seguridad del propio operador, sino que también pone en riesgo la vida de los pasajeros y demás actores viales. En este sentido, se reitera la necesidad y pertinencia de fortalecer iniciativas como la propuesta, orientadas a la prevención y gestión de la fatiga en las terminales de transporte terrestre automotor del Distrito Capital.

d. Estadísticas de siniestros viales de buses en carretera

El transporte intermunicipal en Bogotá y su área metropolitana constituye una parte fundamental de la movilidad regional, conectando a miles de personas diariamente con municipios como Soacha,

Chía, Zipaquirá, Facatativa, entre otros. Sin embargo, este servicio también enfrenta desafíos en materia de seguridad.

Análisis de causas de siniestros

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y reportes de Secretaría de Movilidad de Bogotá, las principales causas de siniestros en este tipo de transporte son:

- **Exceso de velocidad:** especialmente en corredores como la Autopista Norte y la calle 80.
- **Fatiga y cansancio de los conductores:** el 65% de los conductores en rutas aledañas a Bogotá trabajan más de 12 horas diarias (encuesta sector de Transporte, 2023). Turnos nocturnos: la falta de descanso en horarios biológicamente críticos (12:00 am. - 5:00 am) aumentan el riesgo de microsueños.
- **Condiciones climáticas adversas:** lluvias frecuentes afectan la visibilidad y adherencia del pavimento.
- **Mal estado de las vías:** huecos o señalización deficiente en zonas rurales o de alto tráfico.
- **Fallas mecánicas:** buses sin mantenimiento adecuado o con revisiones técnico-mecánicas vencidas.

Cuadro Comparativo de siniestros de buses intermunicipales (2023 y 2024)

Categoría	2023	2024 (enero-marzo)
Total de siniestro Bogotá	200	45
Total de siniestros Cundinamarca	350	85
Víctimas fatales	22	4
Causas más comunes	Velocidad, fatiga, fallas	Velocidad, fatiga, fallas
Corredores críticos	Autopista Sur, Norte, Calle 80	Autopista Sur, Norte, Calle 80

Elaboración propia

Durante el año 2023, se registraron aproximadamente 200 siniestros viales en los que estuvieron involucrados buses intermunicipales en Bogotá. En el departamento de Cundinamarca, esta cifra fue la más elevada, alcanzando cerca de 350 siniestros en vías que conectan municipios cercanos con la capital. Para el primer trimestre de 2024, se observa una pequeña reducción en el número de siniestros en comparación con el mismo periodo del año anterior. Bogotá reportó 45 siniestros,

mientras que en Cundinamarca se registraron 85 lo que representa una disminución estimada del 5% y 3% respectivamente.

Entre las causas más frecuentes de estos incidentes se destacan el exceso de velocidad, la fatiga del conductor, fallas mecánicas y las condiciones climáticas adversas. Los corredores viales con mayor incidencia son la Autopista Sur, Autopista Norte, Calle 80 y la salida hacia Soacha. En cuanto a las consecuencias, si bien el número de víctimas fatales es bajo comparado con otros actores viales como motocicletas, en 2023 se registraron 22 fallecimientos en siniestros que involucran buses intermunicipales en la región Bogotá-Cundinamarca. En los primeros tres meses de 2024 la cifra asciende a 4 víctimas fatales, manteniéndose en niveles similares.

Este comportamiento muestra un leve avance en materia de seguridad vial, aunque persiste la necesidad de reforzar controles, capacitaciones y un monitoreo constante de flotas intermunicipales. Además los municipios aledaños a Bogotá, concentran un alto flujo de buses intermunicipales debido a la movilidad laboral, estudiantil y comercial. Estas zonas registran siniestros viales frecuentes por factores como congestión, condiciones climáticas y fallas humanas.

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). (s.f.). *Histórico de víctimas*. Observatorio de Seguridad Vial. Gobierno de Colombia. Recuperado el [fecha de consulta], de <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas>.

Según los datos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la ANSV, los municipios con más accidentes de buses intermunicipales son:

Municipio	Ruta principal	% de siniestros	Causas comunes
Soacha	Autopista sur	23%	Exceso de velocidad Invasión de carril
Facatativá	Calle 13	15%	Choques laterales Motocicletas
Mosquera	Vía Bogotá - Facatativá	12%	Nieblas y cuervas peligrosas
Funza	Bogota - Funza	10%	Fatiga de conductores
Girardot	Vía Bogotá – Girardot	8%	Peatones cruzando indebidamente

Fuente: ANSV (2023), Policía de Carreteras.

Como vemos en el cuadro, Soacha registra el porcentaje más alto de siniestros, con un 23%, concentrados principalmente en la Autopista Sur. Las causas más recurrentes en esta zona son el exceso de velocidad y la invasión de carril, lo que sugiere problemas relacionados con el comportamiento imprudente de los conductores. Le sigue Facatativá, con un 15% de siniestros en la calle 13, donde predomina los choques laterales y la presencia de motocicletas, factores que podrían estar asociados a una alta densidad de tráfico o falta de señalización adecuada.

En Mosquera, la vía Bogotá-Facatativá acumula un 12% de los siniestros, atribuidos principalmente a condiciones ambientales y geométricas de la vía, como nieblas y curvas peligrosas, que aumentan el riesgo de accidentes. Por su parte, Funza reporta un 10% de siniestros en la vía Bogotá-Funza, donde la fatiga de los conductores emerge como una de las causas principales, posiblemente por trayectos largos o horarios de conducción extendidos.

Finalmente, Girardot presenta el menor porcentaje de siniestralidad (8%) en la vía Bogotá-Girardot, siendo la principal causa los peatones que cruzan indebidamente. Esto indica una necesidad de reforzar la educación vial y la implementación de pasos peatones seguros en esta zona. En conjunto, los datos revelan que las rutas conectadas con Bogotá son las más críticas, con causas que varían desde factores humanos hasta condiciones adversas de las vías, lo que demanda estrategias diferentes para reducir la siniestralidad en cada municipio.

Secretaría Distrital de Movilidad. (s.f.). *Resultados de búsqueda: "buses intermunicipales"*. Movilidad Bogotá. Recuperado el [fecha de consulta], de <https://www.movilidadbogota.gov.co/web/search/node/buses%20intermunicipales?page=1>

Estadísticas de siniestros y noticias en Bogotá.

En 2024, se registró un total de 12,912 siniestros viales en Bogotá, de los cuales 12,361 dejaron lesionados y 551 resultaron fallecidos. Del total de víctimas mortales (551), el 55% estuvieron relacionadas con choques, mientras que el 38% correspondió a atropellos. La mayor incidencia de estos siniestros fatales ocurrió durante las horas de la tarde-noche y la madrugada, específicamente entre las 15:00 y 18:00 horas y desde las 22:00 hasta las 4:00 horas.



Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2025). *[Siniestro graves (con lesionados y con fallecidos)]*

Lo que observamos en el gráfico es la evolución de los siniestros viales graves, aquellos con lesionados y fallecidos, registrados entre el 2015 al 2024. Los datos muestran fluctuaciones significativas a lo largo de estos periodos.

Entre 2015 y 2018, se observa una tendencia a la baja en el número de siniestros graves. El año 2015 inició con 12.500 casos, seguido de un descenso hasta alcanzar el punto más bajo en el 2018 con 10,926 incidentes. Esta reducción se atribuye a las campañas de seguridad vial, mejoras en la infraestructura y mayor control por parte de las autoridades. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió abruptamente en 2019, cuando se registró el pico más alto del periodo con 13,071 siniestros. Este incremento súbito podría relacionarse con un aumento en el parque automotor, relajación de medidas de control en los sistemas de reporte.

En el año 2020 marcó el inicio de un descenso, con 12,871 casos, seguido de una caída drástica en 2021, cuando los siniestros graves se redujeron a 8,936. Esta disminución coincide con los periodos más críticos de la pandemia de covid 19, donde las cuarentenas y restricciones de movilidad generaron una reducción significativa en el tráfico vehicular. A partir de 2022 con el levantamiento de las restricciones, los números comenzaron a subir de nuevo, registrando 11.467 casos ese año, y continuaron su tendencia al alza en 2023 (12.887) y 2024 (12,912).

Estos datos reflejan la influencia de factores externos, como la pandemia, en la siniestralidad vial, pero también se destaca la necesidad de mantener políticas públicas efectivas para prevenir accidentes. Los problemas estructurales, como el exceso de velocidad, el incumplimiento de normas de tránsito, la fatiga y el cansancio o las deficiencias de las vías, para reducir estos indicadores, es fundamental reforzar la educación vial, además reforzar la educación de las pausas activas en los conductores, también promover tecnologías que mejoren la seguridad en las carreteras.

De los 12.361 siniestros con lesionados, el 69% estuvo relacionado con choques seguido por atropello en un 20%, la ocurrencia de estos lesionados tuvo mayor incidencia en el periodo comprendido entre las 5:00 a las 9:00 y 16:00 a las 20:00. La localidad que registró un mayor número de siniestros con fallecidos y lesionados fueron Kennedy (fallecidos 69, lesionados 1740), Engativá (fallecidos 53, lesionados 1.092), Suba (fallecidos 49, lesionados 1.062).

Gráfica 3



Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2025). *[Siniestro con fallecidos]*

La gráfica 3 refleja la evolución anual de fallecidos por siniestros desde 2015 hasta 2024. En 2015 se registraron 517 víctimas mortales, cifra que incrementó a 543 en 2016. Posteriormente, se observó un descenso durante tres años consecutivos: 523 fallecidos en 2017, 485 en 2018 y 469 en 2019.

El año 2020 marcó un mínimo histórico (356 casos), atribuible a las restricciones por la pandemia. Sin embargo, a partir de 2021 se evidenció una tendencia alcista: 452 fallecidos (2021), 516 (2022), 526 (2023) y un máximo de 551 en 2024, superando incluso los registros iniciales de 2015-2016.

V. Competencia del Concejo de Bogotá

De conformidad con lo establecido por el Decreto 1421 de 1993 —Estatuto Orgánico de Bogotá—, el Concejo de Bogotá es competente para conocer y tramitar la presente iniciativa. Dentro de las atribuciones contempladas en el artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 se encuentra la siguiente:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

VI. Impacto Fiscal

La ley orgánica de presupuesto 819 de 2003 establece en su artículo séptimo lo siguiente:

Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

Se considera que el presente proyecto de acuerdo no ordena gastos adicionales para el Distrito ni otorga beneficio tributario alguno.

VII. Referencias bibliográficas

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2023). *ABC de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca*. Recuperado de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/abece-de-la-region-metropolitana-bogota-cundinamarca>

- Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. (s.f.). *Histórico de víctimas en siniestros viales*. Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Gobierno de Colombia. Recuperado el [fecha de consulta], de <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). (s.f.). *Histórico de víctimas*. Observatorio de Seguridad Vial. Gobierno de Colombia. Recuperado el [fecha de consulta], de <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial [ANSV]. (n.d.). *Estadísticas históricas de víctimas de siniestros viales*. Observatorio de Seguridad Vial. Recuperado de <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas>
- Miranda Jiménez, R. J. (2014). *Fatiga y condiciones laborales en conductores de transporte terrestre de pasajeros en una terminal de Colombia* (Trabajo de investigación para optar al título de Magister en Salud Pública). Universidad El Bosque, Facultad de Medicina.
- Movilidad Bogotá. (2017). *Buenas prácticas empresariales en el transporte de carga*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Buenas prácticas empresariales en el transporte en dos ruedas*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Conductas seguras en el transporte de pasajeros*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Control de la fatiga en el transporte público*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Eco-conducción*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Efectos de la velocidad y siniestros viales*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Movilidad Bogotá. (2017). *Responsabilidad social en el transporte*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co

- Movilidad Bogotá. (2017). *Visión Cero*. Red Empresarial de Seguridad Vial. Recuperado de redempresarial.movilidadbogota.gov.co
- Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2025, abril 10). *Anuario de siniestralidad vial 2024 (Versión Digital 1.0)*. Secretaría Distrital de Movilidad. Recuperado de https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/sites/observatorio.movilidadbogota.gov.co/files/2025-04-10/pub/ANUARIO%20SINIESTRALIDAD%20VIAL%202024-Digital-1_0.pdf
- Secretaría Distrital de Movilidad. (s.f.). *Resultados de búsqueda: "buses intermunicipales"*. Movilidad Bogotá. Recuperado el [fecha de consulta], de <https://www.movilidadbogota.gov.co/web/search/node/buses%20intermunicipales?page>
- Terminal de Transporte S.A. (2025). *Informe de gestión 2024 (Versión Final 1)*. Recuperado de <https://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/20250217-Informe-de-gestion-2024-VF-1.pdf>

VIII. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 471 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA GESTIONAR LA FATIGA Y EL CANSANCIO EN LOS CONDUCTORES QUE OPERAN EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA EN BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el numeral 1, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. Establecer un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que operan rutas desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá (sedes Salitre, Satélite Norte y Satélite Sur).

Artículo 2. Fases del protocolo. El presente protocolo deberá estructurarse en cuatro fases principales:

1. **Prevención:** Se deben incluir acciones dirigidas a evitar la aparición de la fatiga y cansancio a través de campañas de activas y jornadas informativas sobre el riesgo que representa la fatiga al volante.
2. **Monitoreo y control:** Se deberá integrar un sistema de registro de las horas de conducción acumuladas por cada conductor, así como la implementación de mecanismos automáticos de rotación laboral que impidan jornadas excesivas que pongan en riesgo la integridad del conductor y los pasajeros.
3. **Intervención inmediata:** Una vez detectado el escenario de fatiga, se dará la activación de protocolo de respuesta cuando se detecte algún grado de fatiga, permitiendo el relevo inmediato del conductor, la disponibilidad de zonas adecuadas de descanso, y la atención médica básica.
4. **Evaluación y seguimiento:** Se establecerán indicadores de implementación del protocolo, se verificará el uso de las zonas de descanso, y se consolidará la información sobre siniestros asociados a fatiga para ser considerada en los ajustes

Artículo 3. Contenido mínimo del protocolo. El protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que operan en desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de

pasajeros por carretera en Bogotá (sedes Salitre, Satélite Norte y Satélite Sur), deberá contener, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Espacios de descanso: la Terminal de Transporte S.A deberá contar con zonas equipadas adecuadamente para que los conductores puedan descansar y recuperarse antes y después de los trayectos de las rutas que operen con origen o destino Bogotá D.C.
2. Mecanismo de control para la rotación del personal: Las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas con origen o destino Bogotá D.C., deberán implementar mecanismos estandarizados para evitar excesos en las horas continuas de conducción, la repetición injustificada de turnos, y los intervalos inadecuados e insuficientes entre trayectos por parte de los conductores.

Dentro de este componente, y de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demás autoridades competentes, la Terminal de Transporte S.A definirá los estándares mínimos de control para la rotación de personal (máximo de horas permitidas de conducción continua, intervalos adecuados de descanso entre trayectos, pausas activas, entre otros) y los comunicará oportunamente a las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas con origen o destino Bogotá D.C.

La Terminal de Transporte S.A establecerá los mecanismos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los criterios de control para la rotación del personal a los que hace referencia el presente numeral.

3. Identificación de los conductores que operan rutas desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá: la Terminal de Transporte S.A definirá los mecanismos necesarios para digitalizar y garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios sobre la identificación de cada conductor que opera rutas desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá. La información de cada conductor contemplará, como mínimo: i) nombre completo; ii) empresa a la que se encuentra vinculado; iii) ruta o rutas que opera en tiempo real; iv) restricciones o limitaciones para conducir; v) estado de salud; vi) controles de fatiga realizados en su última jornada; y vii) horas acumuladas continuas de conducción.
4. Información del estado del vehículo: la Terminal de Transporte S.A definirá los mecanismos necesarios para digitalizar y garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios sobre la información del vehículo que opera cada ruta desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá en tiempo real (placa, ruta, hora de salida, empresa operadora, modelo, verificación de revisión técnico mecánica, horas continuas de operación, entre otros).

5. Modernización de los mecanismos para la detección de fatiga y el cansancio: la Terminal de Transporte S.A y las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas con origen o destino Bogotá D.C, aunarán esfuerzos para incorporar la última tecnología disponible para detectar signos de fatiga y cansancio en los conductores (sensores de parpadeo, inteligencia artificial aplicada a cámaras, entre otros.).
6. Identificación de patrones de fatiga: la Terminal de Transporte S.A deberá establecer criterios clínicos y conductuales que permitan la detección temprana y la identificación de patrones de fatiga en los conductores que opera rutas desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá, así como protocolos para actuar en caso de materializarse los riesgos de fatiga.

Artículo 4. Caracterización de la siniestralidad vial asociada a las rutas que operan desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá (sedes Salitre, Satélite Norte y Satélite Sur). La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con el Observatorio de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A, deberán elaborar anualmente un informe técnico que caracterice la siniestralidad vial vinculada asociada a las rutas que operan desde y hacia terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en Bogotá (sedes Salitre, Satélite Norte y Satélite Sur), haciendo énfasis en los factores de riesgo asociados a la fatiga y el cansancio de los conductores, los tiempos acumulados de conducción, las rutas con mayor exposición al riesgo y las posibles fallas en los mecanismos de control y rotación de personal.

Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Cordialmente,

RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO
Concejal de Bogotá D.C

PROYECTO DE ACUERDO NO 472 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la formulación de la política pública Integral de fomento al emprendimiento liderado por mujeres y se dictan otras disposiciones.

Con esta iniciativa, se busca unificar la oferta pública destinada a las mujeres emprendedoras bajo un mismo criterio orientador, y que la misma tenga una continuidad que garantice la conformación de todo un ecosistema emprendedor liderado por mujeres, resaltando así su participación en el tejido empresarial de la ciudad.

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto de Acuerdo es autoría de la Honorable Concejal Clara Lucía Sandoval.

3. JUSTIFICACIÓN

Dos narrativas de política pública han orientado la presente iniciativa. En primer lugar, la sociedad colombiana y bogotana avanza en la discusión de soluciones a los problemas que más aquejan a las mujeres. Más allá de discursos políticos, las mujeres necesitan soluciones reales que mitiguen las brechas económicas y sociales que históricamente las han afectado.

En segundo lugar, los últimos tres años han estado marcados por profundas crisis económicas, la primera derivada de la pandemia por el Covid-19, y la segunda por una desaceleración de la economía, más ligada a variables externas. Bogotá no ha sido ajena a estas dos problemáticas, la pandemia destruyó un gran número de puestos de trabajo y a pequeños negocios, y generó un panorama desalentador para las mujeres, especialmente a quienes asumen la cabeza del hogar como madres solteras.

Para darle solución a la crisis económica, la Administración Distrital impulsó el programa “Mujer Emprendedora y Productiva”, que después se unificaría a la estrategia “Bogotá Local” en donde se ofrecieron talleres y actividades de formación en habilidades blandas, y se otorgaron incentivos económicos no reembolsables de hasta tres millones de pesos para las unidades productivas que aplicaran a ciertos criterios de favorabilidad.

Paralelo a esto, para hacerle frente a la situación que viven las mujeres en la ciudad, y que se agudizó durante la pandemia, la Alcaldía Mayor de Bogotá impulsó el Sistema Distrital del Cuidado, y bajo su estrategia de las

Manzanas del Cuidado se canalizó toda la oferta institucional para mejorar las condiciones de vida de las mujeres más vulnerables de la ciudad.

La presente iniciativa, busca afrontar ambos desafíos. Por un lado, es una respuesta a la desaceleración de la economía y la destrucción del tejido empresarial en la ciudad, lo cual obliga a la formulación de iniciativas osadas e innovadoras que estimulen la reactivación económica y le hagan frente a la crisis, y, por otro lado, fórmula instrumentos que mejoren considerablemente las condiciones de la mujer en el mercado laboral.

Este proyecto de Acuerdo es una iniciativa transversal, que le da continuidad a los avances hechos tanto en materia de reactivación económica, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, como a la mejora de la calidad de vida de las mujeres de la ciudad, a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer. Ambos actores se encuentran en esta iniciativa y suman esfuerzos de manera coordinada para impulsar su implementación.

El emprendimiento ha demostrado ser una herramienta efectiva en el cierre de las desigualdades entre hombres y mujeres, un emprendimiento femenino es una ventana de oportunidades. La mujer que genera sus propios ingresos es una mujer que se aleja de los círculos de violencia por dependencia económica, detrás de una mujer emprendedora hay niños que logran avanzar en su etapa escolar y reducen su riesgo de desnutrición, y detrás de una mujer emprendedora hay una persona con discapacidad y con dependencia del cuidado que subsiste de los ingresos que esa unidad productiva renta.

Pero sumado a esto, el emprendimiento femenino es garantía de resiliencia y persistencia, virtudes propias de toda mujer, lo cual permite que su unidad productiva no naufrague en su etapa de crecimiento. Es así como el emprendimiento femenino debe ser una gran apuesta en materia de política económica y social para la Administración Distrital.

Durante la etapa de elaboración del presente proyecto de Acuerdo, se pudo identificar que la ciudad no tiene un criterio unificado que oriente a toda la oferta pública institucional relacionada con el emprendimiento femenino, más allá de algunos Acuerdos. En ese orden, se sigue la línea de política pública establecida por el Gobierno nacional, que separó al emprendimiento transversal (Ley 2069 de 2020 - CONPES 4011 de 2020) del emprendimiento femenino (Ley 2125 de 2021), así como ya lo había hecho con el emprendimiento juvenil (Ley 1780 de 2016) y que posteriormente lo haría con el emprendimiento social (Ley 2234 de 2022).

Actualmente, la política Pública Distrital de emprendimiento reconoce factores de discriminación positiva en favor de las mujeres, y ha orientado iniciativas como el programa “Creo en mi” (<https://bogota.gov.co/servicios/oportunidades-y-apoyos/creo-en-mi>) y el programa “Mujer Emprendedora y Productiva” (<https://desarrolloeconomico.gov.co/micrositios/mujer-productiva-emprendedora/>) que hicieron parte de la estrategia de reactivación económica. Sin embargo, esta oferta pública depende de la ejecución de toda la política de emprendimiento, y está ligada a la disponibilidad de recursos y a los objetivos de cada administración, con lo cual las estrategias no logran generar un gran impacto, y carecen de instrumentos certeros de medición.

Este proyecto propone la formulación de una nueva política pública independiente, así como lo propuso el Congreso de la República en la Ley 2125 de 2021, para abordar de manera integral y diferencial el emprendimiento liderado por mujeres, garantizando así que se formulen más y mejores programas, con mejores instrumentos de medición y que tengan un mayor impacto en la ciudad. De esta manera, el Concejo de Bogotá busca contribuir a los avances hechos en la ciudad en materia de equidad de género y reactivación económica.

Más allá de un diferenciador normativo, el abordaje del emprendimiento por grupos poblacionales permite diseñar instrumentos de política pública focalizados y estructurados según las necesidades y desafíos de cada población, esto permite atender los fenómenos más apremiantes y reconoce su contribución a la economía local.

3.1. Emprendimiento femenino

El emprendimiento femenino tiene una naturaleza única, lo cual lo convierte en un importante motor de la actividad económica a escala. Hay mucha evidencia que muestra que el trabajo, cuando es realizado por mujeres, es ejercido desde criterios para solucionar necesidades y poco y nada para acumular. Es decir, el ingreso no tiene un fin acumulativo en sí. El dinero, cuando lo generan las mujeres, es una oportunidad para dar respuesta a las necesidades de vida.

A diferencia de los emprendimientos por oportunidad, los emprendimientos por necesidad son más vulnerables y caracterizados por la informalidad, la ausencia de capacidades y habilidades especializadas, la ausencia de redes de contactos y el bajo acceso a capital y recursos financieros.

En economías caracterizadas por la innovación y la eficiencia, el emprendimiento masculino predomina, mientras que, en economías dependientes de la agricultura y la extracción de materias primas y menos intensivas en innovación, hay mayores tasas de emprendimiento femenino.

¿Cuáles son los obstáculos y desafíos que enfrentan los emprendimientos femeninos de base?

1. **Los retos ligados a condiciones de vida propias de las mujeres:** nivel de ingresos, escolaridad, habilidades, condición de migrante, discapacidad, maternidad, etc.
2. **Los desafíos asociados a condiciones socioculturales:** roles en el hogar, tradición y cultura, acceso a activos y a medios de producción: tierra, agua, tecnología, recursos financieros.
3. **Los retos en el plano organizacional y empresarial:** capacidades organizacionales y empresariales, educación financiera, plan de negocios, recursos humanos y financieros, etc.
4. **Los desafíos ligados al territorio, a sus características geográficas, a la presencia de una institucionalidad de apoyo:** acceso a servicios públicos, servicios financieros, logística, ecosistema de apoyo, infraestructura, vías, etc.
5. **Los desafíos asociados a la dinámica económica local y a los patrones de compra y consumo:** patrones de consumo, oportunidades y condiciones de compra de bienes y servicios por parte de empresas, comercio y sector público.

Según Perilla L. et. al. (2022), es posible denotar tres aspectos de relevancia que diferencian al emprendimiento femenino del resto: que estos se soportan en las características individuales y el conocimiento empírico adquirido por las mujeres a lo largo de los años, la sostenibilidad de los negocios y el sentido de pertenencia de las emprendedoras.

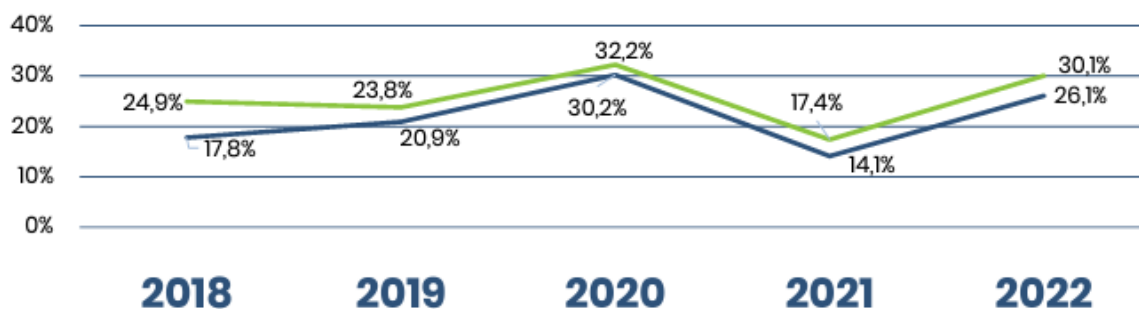
Al tiempo, los investigadores Jia, Parvin y Rahman (2012) encontraron que los factores con mayor relación con el emprendimiento de mujeres son (Kargwell, 2012):

- La libertad para trabajar,
- El deseo de mayores ingresos,
- Alcanzar un mayor estatus social,
- Mayores niveles educativos,
- Tamaño de la familia,
- Relaciones familiares,
- Muerte del esposo o cabeza de familia,
- La motivación de familiares y/o amigos,
- Acceso al crédito y entrenamiento en emprendimiento,
- Apoyo gubernamental,
- Pertenencia a asociaciones de emprendedores,
- Acceso a información del negocio,
- Infraestructura favorable al emprendimiento.

Es así como el entorno en el que se desarrolla la mujer, y las diferencias estructurales y desventajas que afronta, terminan siendo los detonantes que la impulsan a iniciar una actividad productiva. Muchos estudios señalan que las mujeres, a diferencia de los hombres, concilian sus roles de cuidado y su vida familiar, con la oportunidad de autoempleo y generación de ingresos.

Sin embargo, el cierre de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un problema a resolver. Según el Global Entrepreneurship Monitor Colombia 2022 - 2023, históricamente se ha mantenido una brecha considerable entre hombres y mujeres al momento de iniciar una unidad productiva. Según cifras del GEM, durante la pandemia la brecha se cerró a solo un 2%, pero en el año 2022 nuevamente se amplió hasta 4 puntos.

Gráfica 1. Propensión hacia la actividad empresarial TEA por género en Colombia (2018- 2022)



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Colombia 2022 - 2023

Según cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que consolida información de las 57 Cámaras de Comercio del país, el 62,5% de las empresas de personas naturales creadas durante 2022, que ascienden a 143.466 unidades productivas, son iniciativas lideradas por mujeres. El mayor número de estas empresas está en los sectores de comercio al por mayor y al por menor (45%), alojamiento y servicios de comida (20,5%) e industrias manufactureras (9,1%).

Para los primeros meses de 2022, el liderazgo femenino tuvo un incremento del 82%, donde nacieron cerca de 70.318 empresas, en comparación a los 38.558 correspondientes a los mismos primeros cinco meses del 2020.

En materia de empleo, del total de las 310.731 empresas creadas el 2022, el 20% tienen al menos una mujer dentro de su planta de personal, y 6,3% tiene al menos una mujer en cargos directivos. En la creación de empresas de acuerdo con su tamaño, el 29,6% de empresas grandes emplean al menos una mujer. Para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas la proporción es del 20%, 19,9% y 18,8% respectivamente.

En el trimestre de octubre a diciembre de 2022, la tasa de ocupación fue de 69,6% para hombres y de 44,4% para mujeres, de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De allí que, para el primer mes del 2023, "la población ocupada del país tuvo un aumento anual cerca de 796.000 personas", donde las mujeres lideraron la recuperación "con 476.000 nuevas plazas".

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, los emprendimientos liderados por mujeres han tenido un impacto mayor en la economía y la sociedad. Las mujeres en la capital constituyen un 46,6% de la fuerza laboral de la ciudad. Así las cosas, de los 571.329 micronegocios de la ciudad, el 34,8% son de mujeres, según la encuesta de Micronegocios del DANE 2022.

Este panorama, ha conducido a este Concejo a considerar la presentación de un proyecto de Acuerdo que integre todas las acciones en favor del emprendimiento femenino y crear las condiciones habilitantes para su expansión y promoción en la ciudad de Bogotá, a través de una Política pública integral.

3.2. Política pública de Emprendimiento femenino

Esta no es la primera iniciativa normativa que propone la formulación de una Política pública de emprendimiento femenino. Ya lo hizo el Congreso de la República con la Ley 2125 de 2021. A nivel regional ha sido Chile uno de los países más interesados en promover este tipo de instrumentos de planeación, al considerar que el ecosistema emprendedor necesita de coordinación y evaluación.

La propuesta que aquí se plantea, va en concordancia con los avances hechos desde el orden nacional, de la actual coyuntura económica que afronta el país, y de la necesidad de presentar soluciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la ciudad. Al formular una Política pública, es posible orientar acciones a largo plazo y de manera transversal con múltiples actores, y especialmente, entrega instrumentos de seguimiento y medición para evaluar el verdadero impacto de las acciones tomadas sobre el tejido empresarial.

Para seleccionar las dimensiones que tendrá la Política pública, se identificaron como base los criterios definidos por el Banco Mundial en la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras "We-Fi" (<https://we-fi.org/>) y que son desarrollados a lo largo del articulado propuesto.

La iniciativa We-Fi, fundada en octubre de 2017, fue diseñada para ayudar a los Gobiernos a crear entornos propicios para las mujeres empresarias, desbloquear financiación para empresas dirigidas o propiedad de mujeres en países en desarrollo, y para ampliar el acceso a mercados, redes, mentores y canales de información.

Los programas estructurados por We-Fi en los países interesados deben cumplir los siguientes objetivos:

1. Mejora el acceso a financiamiento,
2. Mejora el acceso a mercados,
3. Mejora el acceso a capacitación, mentoría y redes,
4. Mejora las condiciones para que sean propicias.

Gráfica 2. Ciclo de “Las 4 F” en la formulación de la Política pública



Fuente: Elaboración propia

La incorporación de estas dimensiones tiene dos objetivos. En primer lugar, se busca orientar las acciones del formulador de la Política pública de manera ordenada, que faciliten un seguimiento constante y que se acerquen a la realidad del ecosistema emprendedor. En segundo lugar, es posible ubicar cada dimensión dentro de la estructura administrativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a fin de facilitar la asignación de tareas en el ciclo de la Política.

Dimensión 1: Formación - Subdirección de Emprendimiento y Negocios.

Dimensión 2: Formalización - Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial.

Dimensión 3: Financiación - Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera.

Dimensión 4: Fomento - Subdirección de Emprendimiento y Negocios.

Claro está que esta es una mera suposición, la norma no puede desconocer la autonomía del ordenador del gasto y restringir las acciones y decisiones internas que debe tomar al momento de formular la Política.

La propuesta de “Las 4 F” no puede ser vista como un proceso lineal, sino como un ciclo. Es necesario proponer espacios de **Formación** constante y cercana, que fortalezcan a las mujeres emprendedoras en habilidades blandas y que sean espacios de fácil acceso, así como auspiciar conexiones a redes de apoyo y mentorías. La Política debe propender también por encaminar a las unidades productivas hacia la

Formalización, no solo en el acceso al registro mercantil, sino también en el pago de impuestos, realizar su registro INVIMA, registro de marca y patentes, y todas las acciones que aseguren la sostenibilidad jurídica del negocio.

Desde la Política se deben eliminar las barreras que limitan el acceso a **Financiamiento**, por lo cual se deben estructurar programas para la mitigación del riesgo crediticio y el acceso a créditos blandos. Finalmente, se deben abrir espacios de **Fomento**, como ferias en las localidades, ruedas de negocios, conexiones con potenciales compradores, entre otras acciones.

Para las mujeres que ejercen tareas del cuidado, el proyecto de Acuerdo es cauteloso, en la medida que el emprendimiento liderado por mujeres cuidadoras puede ser una oportunidad de generación de ingresos, o por el contrario, puede suscitar una carga insostenible para su condición. En ese sentido, la Política pública a formular debe garantizar una correcta articulación con el Sistema Distrital del Cuidado, y que sea el diagnóstico propio de esta población el que oriente el cumplimiento de metas.

Muchos de los proyectos productivos liderados por mujeres, se caracterizan por ubicarse en sectores de la economía del cuidado y de servicios, que son mayoritariamente demandados y desarrollados por mujeres. Es así como el fortalecimiento del emprendimiento femenino es, en sí mismo, una oportunidad para generar más plazas de trabajo para mujeres. El impulso del emprendimiento femenino desde la Política pública, puede traer consigo la recuperación del mercado laboral en la ciudad.

Los estudios indican que el principal desafío que enfrentan los emprendimientos liderados por mujeres es el precario acceso a financiación, lo que se convierte también en la principal causa de fracaso para este tipo de emprendimientos, a diferencia de los negocios liderados por hombres, donde la causa de fracaso más importante es la baja rentabilidad.

Gran parte de los emprendimientos femeninos empiezan con baja inversión y encuentran barreras financieras para crecer. Las brechas de bancarización de la mujer en América Latina son importantes. Según los datos del Global Findex de 2017 (World Bank, 2018), en América Latina y el Caribe, el 51 % de las mujeres tiene acceso a una cuenta bancaria pero sólo el 9,3% ha ahorrado en una institución financiera formal, lo que las pone en condiciones desfavorables a la hora de iniciar y/o expandir su emprendimiento.

Es así como el proyecto de Acuerdo propone dentro de los lineamientos formulación de instrumentos que faciliten el acceso al crédito de manera favorable, con un factor diferenciador como es la mitigación del riesgo crediticio a partir de la firma de convenios y demás figuras de asociatividad entre co financiadores públicos y privados. Pero esto es posible si va de la mano con espacios de formación en microfinanzas dirigido a las emprendedoras.

Las mujeres siguen siendo las más afectadas en la brecha digital por género, y sobre todo, en la adquisición de habilidades digitales. Según datos de la CEPAL (2020), la tasa genérica de uso de internet de las mujeres es, en promedio, un 8,5% menor a la de los hombres en no menos de 10 países de América Latina. Esa diferencia se hace aún mayor en el caso de los hogares en pobreza ya que tienen barreras también para acceder al servicio eléctrico y a conexiones estables.

Será esencial avanzar en esta dirección para que los proyectos productivos liderados por mujeres puedan aprovechar las oportunidades de la digitalización y no queden excluidos de los circuitos de generación de riqueza donde estos procesos tienen creciente participación. Se requiere entonces contrarrestar la doble exclusión que enfrentan hoy las mujeres en condición de pobreza en la ciudad: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso a internet.

Asimismo, el menor acceso y vinculación a redes de apoyo de parte de las emprendedoras es otro de los desafíos particulares de los emprendimientos femeninos y un factor condicionante de su éxito. Conectarse con el ecosistema de organizaciones de apoyo es clave para que puedan acceder a mentorías, acompañamiento, intercambio de aprendizajes, inversiones y recursos y conexiones que faciliten el acceso estable al mercado.

3.3. Las disposiciones del proyecto de acuerdo

A continuación, se transcriben cada uno de los artículos del proyecto de Acuerdo, junto con una breve justificación de su necesidad:

“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública Integral de fomento al emprendimiento liderado por mujeres y se dictan otras disposiciones”	
ARTÍCULO	JUSTIFICACIÓN
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá D.C., con el fin de aumentar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de toda la población.	Inicia la propuesta de articulado con el objeto, el cual introduce y presenta el contenido que se desarrollará a lo largo del texto.
ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA. Los lineamientos que podrá contemplar la Administración Distrital para el diseño y formulación de la Política pública de la que trata el presente Acuerdo son, entre otras, las siguientes: 1. Identificar actores involucrados en el emprendimiento liderado por mujeres. 2. Promover la participación activa del Distrito en conjunto con la sociedad civil en la identificación, creación, incubación y aceleración de emprendimientos	Se incorporan 12 lineamientos para la política pública. Estos lineamientos se sustentan en el diagnóstico económico, social y jurídico del proyecto.

<p>3. Crear programas con sectores y actores del nivel distrital para incentivar el emprendimiento.</p> <p>4. Articular el emprendimiento liderado por mujeres con el ecosistema de emprendimiento.</p> <p>5. Fortalecer la cultura del emprendimiento.</p> <p>6. Vincular a la academia, el sector privado y el fortalecimiento del emprendimiento.</p> <p>7. Promover Formalización laboral, respeto y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social de los trabajadores para los casos en los cuales aplique.</p> <p>8. Crear programas de apoyo en los procesos de formalización para el cumplimiento de requisitos legales y consolidación de los emprendimientos.</p> <p>9. Desarrollar y fortalecer las competencias emprendedoras y empresariales.</p> <p>10. Promover la generación de instrumentos de financiación que respondan a las necesidades de las emprendedoras.</p> <p>11. Promover el emprendimiento y generar nuevas oportunidades que impulsen el desarrollo social y económico de la ciudad.</p> <p>12. Capacitar a las mujeres que lideran emprendimientos.</p>	
<p>ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, serán principios orientadores de la Política pública de la que trata el presente Acuerdo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos de la mujer consagrados en la Constitución y la Ley. 2. El componente de integración para la participación de la mujer emprendedora en la economía de su 	<p>Los principios son orientados según los establecidos en el artículo 3 de la Ley 2125 de 2021.</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168050</p>

<p>territorio, ofreciendo oportunidades de igualdad y equidad.</p> <p>3. La concertación con las comunidades, organizaciones y grupos sociales en general que desarrollen actividades a favor de la mujer en la ciudad.</p> <p>4. La armonización de elementos económicos, sociales y culturales del contexto y entorno de las mujeres beneficiarias con las estrategias, acciones, programas y lineamientos a implementar.</p> <p>5. La generación y difusión de información veraz y oportuna sobre los beneficios que se establezcan para la mujer emprendedora y empresaria.</p> <p>6. El fomento, estructuración y desarrollo de mecanismos de financiación y de sostenibilidad financiera para el impulso del emprendimiento femenino.</p> <p>7. La vinculación de la academia, el sector privado y organizaciones del tercer sector, en el fortalecimiento del emprendimiento femenino en la ciudad.</p> <p>8. Promover los procesos de innovación social, el valor compartido y los principios del comercio justo entre los emprendimientos, empresas y organizaciones lideradas por mujeres.</p>	
--	--

<p>ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN. La definición de emprendimientos y empresas de mujeres se acogerá según lo que establezca el Gobierno nacional en su potestad reglamentaria, de conformidad con los establecido en la Ley 2069 de 2020 y Ley 2125 de 2021.</p>	<p>El artículo 32, parágrafo 1, de la Ley 2069 de 2020; así como la Ley 2125 de 2021, en su artículo 2, ordena que sea el Gobierno nacional quien reglamente la definición de lo que se debe comprender como “emprendimiento femenino”.</p> <p>En cumplimiento de dicha disposición, se modificó el Decreto 1082 de 2015, por medio del Decreto 1860 de 2021, a través del cual se incorpora el Artículo 2.2.1.2.4.2.14.</p> <p>En este nuevo artículo se describe la definición oficial de emprendimiento femenino, la cual se debe considerar a lo largo de la iniciativa.</p> <p>https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=71552#2.2.1.2.4.2.14</p>
<p>ARTÍCULO 5. POLÍTICA PÚBLICA. La Administración Distrital, en cabeza la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico implementará y evaluará una Política Pública Integral de fomento al emprendimiento liderado por mujeres, con miras a desarrollar el presente Acuerdo y ejecutar en debida forma sus principios.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. En el marco de la Política Pública a formular, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico elaborará una ruta de atención integral de servicios para las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha Política.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. La Política Pública a formular incorporará las acciones previstas en el Acuerdo 847 de 2022, el Acuerdo 819 de 2021, y demás normas vigentes relacionadas con el fomento y el fortalecimiento del emprendimiento femenino en la ciudad de Bogotá D.C.</p> <p>PARÁGRAFO 3o. Las disposiciones de la Política Pública se desarrollarán y reglamentarán mediante procesos amplios de participación de las mujeres de las 20 localidades del Distrito Capital, incluyendo las instancias de participación de mujeres vigentes.</p>	<p>El proyecto de Acuerdo plasma las bases para la formulación de la Política Pública de emprendimiento femenino.</p> <p>La Administración Distrital contará con un año para la formulación y puesta en marcha de la Política Pública, tiempo razonable para efectuar una correcta formulación.</p> <p>La Política aterrizará los aspectos establecidos en la Ley 2125 de 2021 y la Ley 2069 de 2020 a la realidad y contexto de la ciudad de Bogotá.</p> <p>En el parágrafo 1 se incorpora un principio transversal, para alinear bajo una misma Política Pública a todos los planes, programas y proyectos diseñados para la promoción de derechos y la equidad de la mujer, y tengan como sustento el apoyo al emprendimiento. Esto, sin vulnerar su autonomía presupuestal y administrativa.</p> <p>El parágrafo 3 busca correlacionar a la Política Pública con la normatividad vigente relacionada con el emprendimiento femenino, evitando así la duplicidad de funciones.</p> <p>En el parágrafo 3 se propone que, en la etapa de formulación, la Política Pública cuente con la mayor socialización de los actores locales involucrados.</p>

<p>ARTÍCULO 6. EMPRENDIMIENTO RURAL. A través de la Política Pública a formular, se establecerán lineamientos para el diseño de planes, programas y proyectos en favor del emprendimiento liderado por mujeres rurales y campesinas.</p> <p>En la Política Pública, se reconocerá a la mujer campesina como sujeto de especial protección, según lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución Política. De esta manera, se le dará una atención prioritaria y diferencial en toda la oferta institucional en favor del emprendimiento.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, junto al IPES - Instituto para la Economía Social, realizará un rastreo e identificación de los proyectos productivos liderados por mujeres a lo largo de la cadena de valor en la producción agrícola y de alimentos de la ciudad, con el propósito de segmentar sus necesidades y atender sus requerimientos.</p>	<p>En la Política Pública también habrá espacio para las mujeres rurales que lideren sus proyectos productivos, o que hagan parte de la cadena de valor de productos agrícolas o alimentarios.</p> <p>A través de esta iniciativa se busca la promoción y protección de los emprendimientos liderados por mujeres rurales, y en el acompañamiento se busca llevar a los proyectos hacia la formalidad, como oportunidad para acceder a múltiples beneficios incorporados en la Política.</p>
<p>ARTÍCULO 7. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.</p>	<p>Vigencia.</p>

4. MARCO JURÍDICO.

El proyecto de Acuerdo que ahora se somete a consideración del Concejo de Bogotá está fundamentado en una serie de normas de rango internacional, constitucional, legal y reglamentario. Estas normas parten de una serie de principios y valores constitucionales, que deben plasmarse en mandatos concretos a medida que se descende en la jerarquía normativa.

4.1. Marco internacional

Entre las declaraciones de rango internacional que justifican la adopción del presente proyecto de Acuerdo, se encuentran las siguientes:

- El documento ODS: Los retos para 2030, hace visible la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte del Estado colombiano, en especial el objetivo 5, el cual establece como una de las metas:

La reducción de las desigualdades que pueden generar un efecto multiplicador y catalizador sobre el cumplimiento de otros objetivos. Por ejemplo, el cierre de brechas de género en el mercado laboral incentiva mecanismos de trabajo decente, el empoderamiento de las mujeres y la reducción de la pobreza, contribuyendo al avance en el cumplimiento de distintas metas de forma simultánea. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Colombia, 2018, p. 42).

4.2. Marco constitucional

Entre las normas constitucionales que justifican la emisión del presente proyecto de Acuerdo, están:

- El artículo 1, por virtud del cual se indica que Colombia es un Estado Social de Derecho, y el deber del aparato administrativo por la promoción y protección de los derechos de todos sus habitantes.
- El numeral 1 del Artículo 313 de la Constitución que reglamenta las funciones del Concejo de Bogotá.

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

- La participación de la mujer en el ámbito empresarial es tomada en cuenta en la Constitución Política (Art. 43) que propende por la equidad de género al reconocer la igualdad de derechos para hombres y mujeres señalando “que la mujer no podrá ser sometida a ningún tipo de discriminación”.

4.3. Marco legal

- **Ley 2125 de 2021 "Por medio de la cual se establecen incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y**

medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley Creo en Tí".

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168050>

- ***Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el Emprendimiento en Colombia”.***

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966>

- ***Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"***

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054>

4.4. Marco reglamentario

- ***Decreto 1074 de 2015 Sector Comercio, Industria y Turismo - SECCIÓN 5 (Sección adicionada por el Decreto 761 de 2022) “Marca de certificación para la formalización y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres”***

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608>

- ***Decreto 2733 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008” - Programa Nacional de Equidad Laboral para las Mujeres***

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51082>

- ***CONPES 4011 de 2020 “Política Nacional de Emprendimiento”***

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4011.pdf>

- ***CONPES 3866 de 2016 “Política Nacional de Desarrollo Productivo”***

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf>

- Acuerdo 847 de 2022 “*Por medio del cual se crean estrategias para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá D.C.*” <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127202>
- Acuerdo 819 de 2021 “*Por el cual se integran acciones para fomentar el emprendimiento de mujeres “EME” - empresas con manos de mujer dentro de las estrategias de la secretaría de desarrollo económico y se dictan otras disposiciones*” <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=116186>

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente Proyecto de Acuerdo en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política, 1 y 7 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, y los artículos 12 y 13 de la Ley 1801 de 2016.

5. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se debe precisar que el presente proyecto de Acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación del marco fiscal de mediano plazo, en tanto la materialización de las reglas contenidas en él no representa ningún gasto adicional para el Distrito.

6. REFERENCIAS

- Araya, F., Kuschel, K., & Alsua, C. (2022). Recomendaciones para una política nacional de emprendimiento femenino en Chile. 360: Revista De Ciencias De La Gestión, (7). <https://doi.org/10.18800/360gestion.202207.004>
- CEPAL (2020). Índice de feminidad en hogares pobres. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Tomado de <https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres>
- Kargwell, S. (2012). *A comparative study on gender and entrepreneurship development: still a male's world within UAE cultural context*. International Journal of Business and Social Science, 3, (6), 44-55.
- Orihuela-Ríos, N.C. (2022). *Emprendimiento femenino: características, motivos de éxito, limitantes, involucrados y consecuencias*. INNOVA Research Journal, 7(1), 109-122. <https://doi.org/10.33890/innova.v7.n1.2022.1946>.
- Perilla, L. Ruíz M C; Yarime, Peña, L. (2022) *Female entrepreneurship for the achievement of financial empowerment*. Desarrollo Gerencial. vol. 14, núm. 2, 2022. Universidad Simón Bolívar, Colombia. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/722/7223646002/>.

H.C. CLARA LUCÍA SANDOVAL

Concejal de Bogotá
Partido Liberal

PROYECTO DE ACUERDO NO 472 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

El Concejo de Bogotá D.C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución, los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 12 y 13 de la Ley 1801 de 2016,

ACUERDA

ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es establecer los lineamientos para la formulación de la política pública Integral de fomento al emprendimiento liderado por mujeres y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA. Los lineamientos que podrá contemplar la Administración Distrital para el diseño y formulación de la Política pública de la que trata el presente Acuerdo son, entre otras, las siguientes:

1. Identificar actores involucrados en el emprendimiento liderado por mujeres.
2. Promover la participación activa del Distrito en conjunto con la sociedad civil en la identificación, creación, incubación y aceleración de emprendimientos
3. Crear programas con sectores y actores del nivel distrital para incentivar el emprendimiento.
4. Articular el emprendimiento liderado por mujeres con el ecosistema de emprendimiento.
5. Fortalecer la cultura del emprendimiento.
6. Vincular a la academia, el sector privado y el fortalecimiento del emprendimiento.
7. Promover Formalización laboral, respeto y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social de los trabajadores para los casos en los cuales aplique.
8. Crear programas de apoyo en los procesos de formalización para el cumplimiento de requisitos legales y consolidación de los emprendimientos.
9. Desarrollar y fortalecer las competencias emprendedoras y empresariales.

10. Promover la generación de instrumentos de financiación que respondan a las necesidades de las emprendedoras.

11. Promover el emprendimiento y generar nuevas oportunidades que impulsen el desarrollo social y económico de la ciudad.

12. Capacitar a las mujeres que lideran emprendimientos.

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, serán principios orientadores de la Política pública de la que trata el presente Acuerdo :

1. La defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos de la mujer consagrados en la Constitución y la Ley.
2. El componente de integración para la participación de la mujer emprendedora en la economía de su territorio, ofreciendo oportunidades de igualdad y equidad.
3. La concertación con las comunidades, organizaciones y grupos sociales en general que desarrollen actividades a favor de la mujer en la ciudad.
4. La armonización de elementos económicos, sociales y culturales del contexto y entorno de las mujeres beneficiarias con las estrategias, acciones, programas y lineamientos a implementar.
5. La generación y difusión de información veraz y oportuna sobre los beneficios que se establezcan para la mujer emprendedora y empresaria.
6. El fomento, estructuración y desarrollo de mecanismos de financiación y de sostenibilidad financiera para el impulso del emprendimiento femenino.
7. La vinculación de la academia, el sector privado y organizaciones del tercer sector, en el fortalecimiento del emprendimiento femenino en la ciudad.
8. Promover los procesos de innovación social, el valor compartido y los principios del comercio justo entre los emprendimientos, empresas y organizaciones lideradas por mujeres.

ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN. La definición de emprendimientos y empresas de mujeres se acogerá según lo que establezca el Gobierno nacional en su potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y Ley 2125 de 2021.

ARTÍCULO 5. POLÍTICA PÚBLICA. La Administración Distrital, en cabeza la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico implementará y evaluará una Política Pública Integral de fomento al emprendimiento liderado por mujeres, con miras a desarrollar el presente Acuerdo y ejecutar en debida forma sus principios.

PARÁGRAFO 1o. En el marco de la Política Pública a formular, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico elaborará una ruta de atención integral de servicios para las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha Política.

PARÁGRAFO 2o. La Política Pública a formular incorporará las acciones previstas en el Acuerdo 847 de 2022, el Acuerdo 819 de 2021, y demás normas vigentes relacionadas con el fomento y el fortalecimiento del emprendimiento femenino en la ciudad de Bogotá D.C.

PARÁGRAFO 3o. Las disposiciones de la Política Pública se desarrollarán y reglamentarán mediante procesos amplios de participación de las mujeres de las 20 localidades del Distrito Capital, incluyendo las instancias de participación de mujeres vigentes.

ARTÍCULO 6. EMPRENDIMIENTO RURAL. A través de la Política Pública a formular, se establecerán lineamientos para el diseño de planes, programas y proyectos en favor del emprendimiento liderado por mujeres rurales y campesinas.

En la Política Pública, se reconocerá a la mujer campesina como sujeto de especial protección, según lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución Política. De esta manera, se le dará una atención prioritaria y diferencial en toda la oferta institucional en favor del emprendimiento.

PARÁGRAFO 1o. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, junto al IPES - Instituto para la Economía Social, realizará un rastreo e identificación de los proyectos productivos liderados por mujeres a lo largo de la cadena de valor en la producción agrícola y de alimentos de la ciudad, con el propósito de segmentar sus necesidades y atender sus requerimientos.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 473 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE LA GESTIÓN DEL CONTROL POLÍTICO LOCAL EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (JAL) DE BOGOTÁ MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE PASANTES DE PREGRADO Y PROGRAMAS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO CAPITAL.”

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El proyecto de acuerdo tiene como objetivo fortalecer la gestión del control político en las Juntas Administradoras Locales (JAL) del Distrito Capital de Bogotá, mediante la incorporación de pasantes que cursen un programa de pregrado o un programa tecnológico profesional para que estos sean asignados de manera única a cada edil o edilesa en ejercicio activo de su curul, con el fin de proporcionar apoyo en las labores de control político.

Para ello, se implementará un programa de pasantías en el que estudiantes de pregrado o de programas tecnológicos puedan realizar sus prácticas profesionales apoyando técnica y documentalmente a los ediles y edilesas en ejercicio activo.

Con la iniciativa se busca mejorar el desempeño del control político, la administración local y el seguimiento a los recursos públicos sin generar nuevos costos fiscales. También busca dar una oportunidad a los jóvenes que deseen realizar sus prácticas profesionales en las Juntas Administradoras Locales del Distrito Capital.

2. ANTECEDENTES

Las Juntas Administradoras Locales, conforme a la Constitución Política de 1991, artículo 318, y el Decreto Ley 1421 de 1993, tienen como función principal ejercer control político en las localidades. Sin embargo, los recursos limitados y la falta de apoyo técnico especializado han restringido la capacidad de los ediles para llevar a cabo una supervisión efectiva sobre la ejecución de los presupuestos locales y la gestión de las políticas públicas.

En los últimos años, se ha evidenciado una creciente necesidad de generar oportunidades de formación práctica para los jóvenes en diferentes sectores del distrito. En particular, las Juntas Administradoras Locales (JAL), como órganos de representación de la comunidad, requieren el apoyo de personal capacitado para llevar a cabo sus funciones de control y seguimiento de la gestión pública local. La inclusión de jóvenes practicantes contribuye a la formación de nuevos líderes, promueve la participación ciudadana y fortalece los procesos de descentralización y democracia local.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En el contexto del Distrito Capital de Bogotá, las Juntas Administradoras Locales (JAL) representan un pilar fundamental en la democratización de la gestión pública y en la articulación con las comunidades. Sin embargo, es evidente la brecha significativa en los recursos asignados para fortalecer la labor de los ediles, quienes, a pesar de ser responsables de ejercer control político local, seguimiento al gasto público y representación comunitaria, carecen de un apoyo técnico y administrativo que potencie su gestión. Este contraste es particularmente llamativo cuando se observa que los concejales del Distrito cuentan con una Unidad de Apoyo Normativo (UAN), además de poder contar, si así lo desean, con un equipo de pasantes, todo esto financiado por el distrito.

En vista de la situación, inevitablemente surge la pregunta: ¿por qué esta disparidad en el fortalecimiento institucional, cuando los ediles desempeñan un rol igualmente crítico e importante en la gobernanza local?

Históricamente, el control político ejercido desde las JAL ha enfrentado desafíos asociados a la limitada capacidad técnica y administrativa. Las pasantías, constituyen una herramienta eficaz para mitigar estas limitaciones, ya que permiten canalizar el talento joven a labores de impacto social, mientras se fomenta su inserción laboral y desarrollo profesional.

Este proyecto propone un enfoque innovador al incorporar pasantes de programas de pregrado y tecnológicos profesionales, asignados de manera exclusiva a los ediles y edilesas en ejercicio. Lo que permitirá no solo el fortalecimiento de la capacidad técnica de las JAL.

Finalmente, cabe señalar que este proyecto de acuerdo responde a un reclamo de equidad en el ejercicio de las funciones de control político, fortaleciendo la labor de los ediles y promoviendo una gobernanza local más cercana, eficiente y participativa.

La implementación de un programa de pasantías para las JAL de Bogotá beneficiará a los estudiantes, a los ediles y al distrito. El aporte de los pasantes en la elaboración de informes, análisis de presupuestos y seguimiento a la ejecución de proyectos locales permitirá un desarrollo idóneo de las funciones por parte de ediles y edilesas lo cual redundará en una gestión más eficiente.

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de promover la inclusión social y laboral de los jóvenes en el Distrito Capital, alineándose con las políticas públicas de empleo juvenil y prácticas profesionales. El marco jurídico se apoya en las disposiciones constitucionales y normativas que facultan al Concejo de Bogotá para regular aspectos relacionados con la administración territorial y la inclusión de la juventud en el ámbito laboral.

A través de esta iniciativa, se busca que las JAL, como espacios de participación ciudadana y gestión local, se beneficien del talento joven, mientras que los estudiantes adquieren valiosas competencias que les permitirán enfrentar de manera más efectiva el mercado laboral. El desempleo juvenil en Bogotá es un problema estructural que afecta gravemente la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral formal. Las prácticas profesionales remuneradas constituyen un mecanismo efectivo para la integración de los jóvenes al sector público, permitiendo adquirir experiencia laboral y facilitar su acceso a oportunidades de empleo a futuro.

Las JAL, como órganos territoriales de gestión local, juegan un papel fundamental en la articulación de políticas públicas con las necesidades de las comunidades. No obstante, los ediles, en su calidad de servidores públicos de elección popular, no cuentan con los recursos suficientes para vincular talento joven de manera formal. Este proyecto de acuerdo pretende subsanar esa carencia a través de un auxilio de sostenimiento, a través de lo establecido en el Acuerdo 260 de 2020.

4. SUSTENTO JURÍDICO

- **De orden constitucional**

ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

ARTÍCULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones:

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.

- **De orden legal**

Decreto Ley 1421 de 1993 - Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

Artículo 69: Determina la competencia de las JAL en el ejercicio del control político en las localidades del Distrito Capital.

Artículo 70: Asigna funciones a las JAL en la elaboración de proyectos y la vigilancia del cumplimiento de las normas locales.

Ley 489 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Esta ley establece las bases de la organización y funcionamiento de las entidades del Estado, promoviendo la descentralización y participación de la comunidad en la gestión pública.

Ley 1780 de 2016 - “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”.

Esta ley otorga incentivos a las empresas que contraten a jóvenes y promueve programas de empleo y prácticas laborales.

- **De orden distrital**

Acuerdo 01 de 1998 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá): Establece las funciones del Concejo en la expedición de acuerdos y el control político en la ciudad.

Acuerdo 645 de 2016: Fortalece el control social en las localidades a través de las JAL, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en el seguimiento a la gestión de las alcaldías locales.

Decreto Distrital 579 de 2021: Regula el programa de incentivos para la participación de jóvenes en el sector público del Distrito Capital.

Acuerdo 527 de 2013: Refuerza los mecanismos de participación juvenil en el Distrito, estableciendo responsabilidades para las JAL en el fomento de espacios de participación.

Acuerdo 260 de 2020: Establece auxilios de sostenimiento para los jóvenes practicantes en entidades públicas del Distrito, sirviendo como referencia normativa para ampliar este beneficio a las JAL y sus ediles.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo, en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.

6. IMPACTO FISCAL.

El proyecto de acuerdo no generará un impacto fiscal adicional, ya que se basa en el aprovechamiento de los recursos asignados por el Acuerdo 260 de 2020.

Esto garantiza que el proyecto pueda implementarse sin generar costos adicionales para el presupuesto de las localidades ni para el Distrito Capital.

7. CONCLUSIONES

El proyecto de acuerdo propuesto se alinea con las necesidades de los jóvenes bogotanos y los ediles de las JAL, que requieren personal capacitado para realizar funciones de apoyo en las labores de control político, social y seguimiento a la gestión local. Al promover la integración de jóvenes en las JAL mediante prácticas, se generan beneficios tanto para los practicantes como para los ediles, quienes contarán con un mayor respaldo técnico y administrativo.

La inclusión de pasantes se traducirá en una mayor capacidad para realizar control político. Al mismo tiempo, los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos en un contexto real, contribuyendo al desarrollo de las políticas locales. Este proyecto se apoya en los principios de eficiencia y eficacia administrativa, y se basa en el uso de recursos ya existentes.

El fortalecimiento de la gestión en las JAL a través de la profesionalización del apoyo técnico también genera valor social, al incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la calidad de la gestión pública en las localidades de Bogotá.

8. TÍTULO - ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS: **Título:** "Por medio del cual se fortalece la gestión del control político local en las Juntas Administradoras Locales de Bogotá mediante el apoyo de pasantes que desarrollen sus prácticas profesionales en el distrito capital".

Autor

Atentamente

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS

PROYECTO DE ACUERDO NO 473 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE LA GESTIÓN DEL CONTROL POLÍTICO LOCAL EN LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (JAL) DE BOGOTÁ MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE PASANTES DE PREGRADO Y PROGRAMAS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO CAPITAL.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Atribuciones:

“En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales que le confieren al Concejo de Bogotá, en especial lo dispuesto en los artículos 313 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en el Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), Ley 2116 de 2021 (Por medio del cual se modifica el Estatuto Orgánico de Bogotá), la Ley 789 de 2002, la Ley 1429 de 2010, y demás normas aplicables, se presenta este proyecto de acuerdo con el propósito de incentivar la formación y práctica profesional de los jóvenes en el Distrito Capital”

CONSIDERANDOS:

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos.

Que el artículo 313 de la Constitución otorga a los concejos municipales y distritales la función de ejercer control político sobre los actos de la administración local.

Que las Juntas Administradoras Locales son actores fundamentales en la implementación de políticas públicas, programas y proyectos a nivel territorial, y requieren de un fortalecimiento continuo en sus capacidades técnicas y operativas para ejercer eficientemente sus funciones.

Que el Acuerdo 260 de 2020 de Bogotá regula la vinculación de estudiantes de educación superior al sector público a través de programas de pasantías, fomentando la formación de los jóvenes en la práctica profesional en el ámbito de la gestión pública, sin generar impacto fiscal significativo.

Que la asignación de pasantes a las JAL permitirá mejorar la gestión documental y técnica de las actividades de control político y participación ciudadana, optimizando los recursos disponibles y fomentando la participación activa de jóvenes en la construcción de políticas locales.

Que el artículo 45 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de los jóvenes a recibir protección y formación integral por parte del Estado, la sociedad y la familia, garantizando su participación activa en los procesos sociales, económicos y culturales del país.

Que el Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá) otorga al Concejo de Bogotá la facultad de regular la administración y organización del Distrito Capital y las Juntas Administradoras Locales, asegurando el desarrollo integral de sus ciudadanos.

Que la Ley 2116 de 2021 (Por medio del cual se modifica el Estatuto Orgánico de Bogotá) modificó lo correspondiente a las atribuciones de las juntas administradoras locales y el apoyo técnico que estas deben recibir

Que la Ley 789 de 2002 y la Ley 1429 de 2010 buscan la generación de empleo juvenil, el apoyo a la formación académica y la inserción de jóvenes en el ámbito laboral, mediante incentivos a la práctica profesional remunerada y la creación de mecanismos de sostenimiento económico durante su periodo de aprendizaje.

Que la administración pública del Distrito Capital debe fortalecer la vinculación de los jóvenes a través de prácticas profesionales, promoviendo la equidad de género, la inclusión social y el acceso a oportunidades de desarrollo profesional.

Que las Juntas Administradoras Locales (JAL) cumplen un papel esencial en la toma de decisiones a nivel territorial, y es fundamental que cuenten con jóvenes en formación que apoyen el desarrollo de proyectos locales, a la vez que adquieren experiencia y conocimientos valiosos para su vida laboral.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. Fortalecer la gestión de las Juntas Administradoras Locales mediante la implementación de un programa de pasantías, que permita la asignación de estudiantes de programas de pregrado o tecnológicos profesionales a ediles y edilesas en ejercicio activo, con el fin de apoyar sus funciones de control político y gestión administrativa local.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este acuerdo será de obligatorio cumplimiento en todas las localidades de Bogotá y estará enfocado en fortalecer las capacidades técnicas de los ediles y edilesas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 3. Atribuciones de los ediles y edilesas. Los ediles y edilesas serán responsables de:

- Brindar orientación y formación a los pasantes asignados, enfocándose en las tareas que refuercen el control político, la gestión administrativa y la participación ciudadana.
- Definir, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno y las universidades, las actividades a realizar por los pasantes.
- Hacer seguimiento y evaluación del desempeño de los pasantes en sus funciones.

Artículo 4. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

- **Jóvenes practicantes:** Estudiantes de programas de educación técnica, tecnológica y profesional que deseen realizar práctica laboral con alguna JAL del Distrito, y que sean seleccionados para realizar dicha práctica.

Artículo 5. Responsabilidades de las Juntas Administradoras Locales. Las JAL que reciban practicantes serán responsables de:

1. Garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado, que permita el desarrollo profesional y personal del practicante.
2. Supervisar y evaluar el desempeño del joven practicante.

Artículo 6. Funciones de los pasantes. Los pasantes asignados a los ediles y edilesas tendrán como funciones:

- Brindar apoyo técnico en la elaboración de informes y documentos relacionados con el control político y la gestión administrativa local.
 - Realizar investigaciones que permitan fortalecer la toma de decisiones locales basadas en datos y análisis rigurosos.
 - Apoyar la planeación y seguimiento de políticas locales, promoviendo la participación ciudadana.
 - Participar en la organización de eventos y actividades de socialización y rendición de cuentas.
- Las actividades que se definan de forma coordinada de acuerdo con lo mencionado en el artículo 3.

Parágrafo 1. Cada edil o edilesa en ejercicio podrá contar con un pasante a lo largo del periodo que dure la práctica profesional, el cual no podrá exceder de doce meses continuos.

Artículo 7. De la coordinación interinstitucional. La JAL de cada localidad junto a la Secretaría Distrital de Gobierno será la encargada de coordinar, en conjunto con las universidades o instituciones educativas, la implementación del programa de pasantías, estableciendo convenios y mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño de los pasantes en las JAL

Artículo 8. Vigencia y reglamentación. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PROYECTO DE ACUERDO NO 474 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”.*****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo promover la interculturalidad en Bogotá a través de la realización de un festival, que se realizaría cada año, como un evento artístico y cultural de libre acceso para todos los bogotanos. Que permitan visibilizar y fortalecer la diversidad étnica, cultural y social del Distrito Capital. A través de este festival, se busca fomentar el respeto, la inclusión, y la integración de las distintas comunidades, contribuyendo a la cohesión social y al enriquecimiento cultural de la ciudad.

- Fomentar el turismo a partir de una oferta cultural y gastronómica entorno al festival.
- Promover la visibilización de artistas locales, distritales y nacionales.
- Fortalecer y reconocer la labor de los músicos y compositores de los grupos étnicos y dar a conocer las tradiciones que se envuelven en estas comunidades.
- Impulsar emprendimientos que a través de sus productos resalten lo étnico.

2. ANTECEDENTES

Bogotá es una ciudad caracterizada por su diversidad cultural, producto de la convergencia de diversas comunidades étnicas, migratorias y sociales que coexisten en su territorio. La Constitución de 1991 en Colombia, por ejemplo, marcó un cambio hacia la inclusión y la valoración de diversas expresiones culturales, permitiendo así una interrelación entre lo urbano y lo rural. Aunque persisten desafíos en la implementación efectiva de este reconocimiento, la transformación de la cultura ha permitido de los movimientos sociales que utilizan nuevos códigos culturales como herramientas de resistencia y lucha por derechos. Asimismo, estos movimientos están redefiniendo la política y promoviendo una lucha por la visibilidad y el reconocimiento de identidades históricamente marginadas. En este contexto, la cultura se convierte en un espacio de insurgencia y resignificación que busca transformar tanto la política como el Estado. Desde la Constitución Política de 1991, Colombia ha reconocido su carácter multicultural y pluriétnico, por lo cual se han desarrollado políticas públicas enfocadas en la promoción de la cultura y la inclusión social. A nivel distrital, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha implementado acciones para fomentar la participación de las comunidades a través de actividades culturales.

“El reconocimiento de la cultura como un valor universal y de nuestras culturas como parte integral de dicho valor; El reconocimiento y la legitimación de la pluralidad y la diversidad cultural; La democratización del acceso a bienes y servicios culturales; La difusión y el apoyo a las distintas manifestaciones artísticas y culturales teniendo en cuenta las expresiones de las comunidades afrocolombianas, indígenas, pueblo Rom y de las personas con limitaciones y sus cultores en los medios de comunicación; La recuperación de la importancia de lo público para el debate ciudadano; La aplicación de las recomendaciones sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de la UNESCO” IDCT (2003, p.49).

Desde la perspectiva multicultural de las Políticas Culturales Distritales 2001- 2004, las políticas culturales se desarrollan a partir del reconocimiento y la pluralidad cultural como principios directrices para la convivencia y el respeto dentro de la diferencia cultural “Su punto de partida es la valoración positiva de las diferencias culturales. Ahora bien, la política

distrital de cultura desde 2004- 2016 realizó reformas a la administración distrital de 2006 y se crearon otros instrumentos de política, como el Instituto Distrital de las Artes. Qué surge, con el propósito de implementar las estrategias culturales que hagan posible la transformación social mediante la promoción de actividades y convocatorias que den forma a las dinámicas cambiantes de la ciudad y a la vida.

Sin embargo, es necesario fortalecer la oferta de eventos y festivales que promuevan la interculturalidad de manera más integral y sostenible en el tiempo. Ahora bien, en el plano internacional se vienen desarrollando líneas orientadoras a las políticas y programas de los Estados como lo son los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los cuales plantean que “El conocimiento de las acciones humanas en el entorno y las relaciones sociales, deben orientarse a la transformación de los modos de estar juntos en un territorio”.

Por último, un precedente es la agenda 21 de cultura la cual es un documento de carácter mundial que “Plantea un compromiso por parte de las ciudades y los gobiernos locales del mundo para el desarrollo cultural”. Lo que propone esta agenda es combinar el componente cultural con pilares como el económico, social y ambiental para así garantizar el desarrollo sostenible. En este sentido, cabe anotar que Bogotá se encuentra adscrita a la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), así que es una de las ciudades que adopta como horizonte esta agenda para el accionar de la gestión pública de la cultura.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá, como epicentro del país es una de las ciudades ha venido fortaleciendo el reconocimiento de la interculturalidad como un eje fundamental y esencial para la construcción de una sociedad más integral, democrática y justa. Es decir, establecer la multiculturalidad como una de las bases para mejorar la convivencia y visibilizar a los diferentes sectores sociales que componen esta sociedad. Ahora bien, la realización de festivales y eventos culturales proporciona una plataforma para el intercambio de saberes, costumbres y tradiciones entre diferentes grupos sociales, contribuyendo a la reducción de la discriminación y la xenofobia.

Este proyecto no solo permite la difusión de la riqueza cultural de las diversas comunidades étnicas, sino que también genera espacios de diálogo y cohesión en los que se fortalecen los lazos entre los ciudadanos. Por último, permite la promoción de la interculturalidad, como un mecanismo eficaz para la integración social y el desarrollo humano, lo que respalda la pertinencia de esta iniciativa en Bogotá.

Ahora bien, cabe mencionar que para el año 2023 se entregaron 45 mil millones de pesos a 1.786 propuestas del programa Distrital de Estímulos, el programa distrital de apoyos concertados y es cultura local. En este sentido, Bogotá cuenta con un importante posicionamiento en cuanto a la formulación e implementación de las políticas públicas culturales. De manera que, garantice los derechos culturales de cada uno de los ciudadanos, en este caso, de todas las comunidades étnicas.

Debe resaltarse que es importante el diálogo intercultural que se gesta en este proyecto de acuerdo, porque logra congrega las diferentes visiones y cosmovisiones de los pueblos étnicos que componen el país. Además, se plantea como un espacio de participación que reúne a personas étnicas y no étnicas, en pro de construir una mejor sociedad y ciudadanía de paz.

La implementación de un festival étnico enfocado en la interculturalidad resulta pertinente para consolidar una ciudad más democrática e incluyente. Bogotá, al ser una de las ciudades más diversas de Colombia, necesita de mecanismos que

permitan a las comunidades expresar y compartir su cultura. La iniciativa promueve espacios donde se respeten las diferencias y se valoren las contribuciones de cada grupo a la identidad cultural de la ciudad.

Desde un enfoque económico, el desarrollo de estos eventos tiene el potencial de dinamizar el sector cultural y turístico de la ciudad, atrayendo tanto a locales como a visitantes. Además, fortalece las economías creativas y fomenta el emprendimiento en el ámbito cultural, con un impacto positivo en la generación de empleo y en la activación de otros sectores productivos.

El establecimiento de un programa destinado a promover la interculturalidad a través de la realización del festival étnico en el Distrito Capital de Bogotá tendría un impacto significativo y positivo en los pueblos indígenas en condición de ciudad asentados en Bogotá. Además, generaría transformaciones profundas en diversos escenarios de la vida cotidiana en la ciudad, asimismo, se detalla el impacto en áreas clave para la aplicación, desarrollo y ejecución de este tipo de iniciativas que pretenden mejorar la calidad de vida de estas comunidades.

Impacto en el ámbito educativo: La incidencia del festival étnico es promover la interculturalidad y brindar a los pueblos indígenas, la oportunidad de compartir y transmitir sus conocimientos, lenguas, cosmovisiones y saberes ancestrales en los espacios educativos. Esto no solo enriquecería los contenidos educativos para los estudiantes no indígenas, sino que también fortalecería el sentido de identidad de los niños y jóvenes indígenas al ver reflejada su cultura en la enseñanza formal.

Por otro lado, fomentar la presencia activa de las culturas indígenas en los colegios y universidades crearía un espacio de diálogo intercultural, donde se reconocen las diversas formas de entender el mundo, promoviendo el respeto mutuo y reduciendo los prejuicios o estereotipos.

La educación es uno de los pilares fundamentales y más importantes de la sociedad sino el más importante, por lo tanto, tiene el reto de formar personas integrales que cultiven y trabajen por la diversidad de pensamientos. En este sentido, la educación es la puerta para alcanzar una sociedad mayoritariamente crítica y armoniosa con las diferentes manera de pensar.

Impacto social: En el ámbito social, el festival étnico contribuiría a visibilizar a las comunidades étnicas urbanas, muchas veces invisibilizadas o estigmatizadas. A través de estos espacios, la sociedad bogotana podría conocer de cerca la diversidad cultural que habita en su ciudad, lo que fomentaría la tolerancia, la buena convivencia, solidaridad y el respeto hacia la diferencia.

Además, este encuentro fortalecería los lazos interculturales entre los propios pueblos étnicos, que suelen vivir dispersos en diferentes zonas de la ciudad. Asimismo, se favorece el intercambio de experiencias que refuerzan el tejido comunitario y social, y permite la participación de diferentes sectores que habitan la ciudad.

Impacto cultural: La realización de este festival étnico permitiría que las músicas tradicionales, danza tradicional y gastronomía tradicional, sigan resistiendo y perviviendo en el tiempo. Asimismo, se fortalezcan las sonoridades y las distintas expresiones inmersas en la cosmovisión de los pueblos étnicos y florezcan en el entorno urbano. Ahora bien, donde usualmente estas expresiones culturales tienden a diluirse, este tipo de iniciativas servirían como una herramienta para preservar el patrimonio inmaterial de estas comunidades, evitando la pérdida de prácticas y saberes ancestrales.

De manera simultánea, se generaría un tejido intercultural entre indígenas y no indígenas, al compartir espacios de encuentro y aprendizaje conjunto. Este intercambio permitiría que la ciudadanía de Bogotá conozca y valore la riqueza cultural que aportan los pueblos indígenas a la identidad multicultural del Distrito Capital.

Impacto emocional y psicológico: Desde el punto de vista emocional y psicológico, la promoción de la interculturalidad a través del festival étnico permitiría reforzar el sentido de pertenencia e identidad de los pueblos étnicos en la ciudad. Ya que, muchas personas étnicas enfrentan procesos de desarraigo, debido a que han tenido que abandonar sus territorios ancestrales para asentarse en Bogotá, lo que genera sentimientos de aislamiento o desconexión con su cultura.

El festival étnico sería un espacio para la autoafirmación y el orgullo étnico, al visibilizar sus raíces y aportar a la sociedad desde su identidad. Asimismo, el participar en estos eventos también fortalecería la autoestima individual y colectiva, promoviendo una mejor salud mental y emocional entre los indígenas urbanos, quienes muchas veces enfrentan discriminación y marginación en el entorno urbano.

Impacto psicológico en el contexto de integración social: Este evento funcionaría como catalizador de procesos de integración social, por lo cual, las comunidades étnicas participarían activamente en el ámbito cultural y urbano. Por un lado, al interactuar con otros grupos poblacionales, se fortalecería su identidad indígena en el contexto urbano. Esta integración permitiría mejorar la percepción de los pueblos étnicos en la ciudad, y disminuir la exclusión social y fomentando la inclusión en diferentes áreas de la vida ciudadana.

Impacto en el ámbito económico: El festival étnico también pretende tener un impacto en la economía local y apoyar a las economías propias de los pueblos étnicos. En tanto, que ayudaría a promover los emprendimientos étnicos a través de la articulación del festival con una feria que se realice dentro de la misma y se potencien los productos tradicionales de cada pueblo. Asimismo, se generarían oportunidades de negocio para la comercialización de los productos que hacen comunidades étnicas

Lo cual, promovería el mejoramiento de su autonomía económica en la ciudad y a fortalecer la valorización de sus productos y conocimientos en un contexto tan competitivo como Bogotá. En tanto, sería una plaza para dar a conocer sus emprendimientos y alcanzar un mayor impacto en la ciudad y que posiblemente genere un mayor alcance de negocios.

Impacto en el ámbito emocional colectivo: El fortalecimiento del sentido comunitario y la celebración de las raíces culturales contribuirían a generar un arraigo más profundo y unión entre los pueblos étnicos en Bogotá. La recuperación de los espacios públicos para realizar eventos culturales genera un entorno de bienestar donde los pueblos indígenas no solo se ven reconocidos, sino que pueden expresar su identidad sin temor a la discriminación, lo cual es esencial para la sanación emocional colectiva después de enfrentar procesos históricos de marginalización.

El desarrollo y ejecución de este programa de interculturalidad fomentaría el diálogo y la convivencia pacífica entre diferentes grupos étnicos y sociales que coexisten en Bogotá. Sería una herramienta poderosa de inclusión, al visibilizar las aportaciones culturales de los pueblos indígenas en un contexto urbano donde tienden a ser marginados. Además, este tipo de programas tienen la capacidad de generar empatía y conciencia en la sociedad mayoritaria, ayudando a reducir las barreras de discriminación que muchos indígenas enfrentan en su vida diaria.

4. SUSTENTO JURÍDICO

Este proyecto encuentra su sustento en varios instrumentos legales, entre los cuales se destacan:

Contexto Internacional

- I.1 La diversidad cultural** es el principal patrimonio de la humanidad. Es el producto de miles de años de historia, fruto de la contribución colectiva de todos los pueblos, a través de sus lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. La cultura adopta formas distintas, que siempre responden a modelos dinámicos de relación entre sociedades y territorios. La diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva,

moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas” (Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3), y constituye uno de los elementos esenciales de transformación de la realidad urbana y social.

I.2 Los gobiernos locales reconocen que los derechos culturales forman parte indisoluble de los derechos humanos y toman como referencia básica la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional Relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001). En tal sentido, se ratifica que la libertad cultural de los individuos y las comunidades resulta condición esencial de la democracia. Ninguna persona puede invocar la diversidad cultural para atentar contra los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance.

I.3 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972

"A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las Zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico".⁶

I.4 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial-UNESCO 2003

En el 2003 la UNESCO promulga la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la cual hace advertencia de los peligros inminentes de la globalización para las expresiones de un mundo plural y diverso. Destaca, como aspecto importante, el hecho del reconocimiento que se hace a las comunidades portadoras, para que sean éstas las que tomen decisiones respecto a cómo salvaguardar su patrimonio cultural.

“Artículo 16 – Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

- 1. A fin de asegurar una mejor visibilidad del patrimonio cultural inmaterial y la conciencia de su significado, y fomentar un diálogo que respete la diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, establecerá, mantendrá actualizado y publicará un Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

⁶ <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios para el establecimiento, actualización y publicación de esta Lista Representativa.”⁷

I.5 UNESCO - Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro) 2020

La Unesco en dicha declaración señaló que:

“La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adaptadas y adulteradas para el mercado turístico. Si bien el turismo puede contribuir a reavivar las artes del espectáculo tradicionales y dar un “valor de mercado” al patrimonio cultural inmaterial, también puede tener un efecto deformante, ya que a menudo las representaciones se simplifican y acortan para mostrar una serie de “escenas culminantes” adaptadas para responder a la demanda turística. A menudo las formas artísticas tradicionales se convierten en productos de diversión, con la consiguiente pérdida de importantes formas de expresión comunitaria.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:

Artículo 7: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana."

Artículo 70: "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, mediante una política permanente de democratización de la cultura nacional e internacional."

Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura): En su artículo 1 establece que el Estado promoverá la cultura en todas sus manifestaciones y reconocerá la pluralidad y la diversidad cultural de Colombia.

Ley 1757 de 2015 (Ley de Participación Ciudadana): Artículo 2 reconoce el derecho a la participación en los asuntos culturales y establece mecanismos para la incidencia ciudadana en la planeación y ejecución de políticas culturales.

Ley 724 de 2001: Establece que el Estado debe garantizar la promoción y el respeto de las culturas indígenas, afrocolombianas y de otras comunidades minoritarias en Colombia.

NORMATIVIDAD DISTRITAL:

Decreto Distrital 456 de 2013: Reglamenta la organización de festivales y eventos culturales en Bogotá, otorgando a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte la facultad de apoyar este tipo de actividades.

⁷ <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n>

Acuerdo 635 de 2016: Crea la política pública distrital de atención y reconocimiento a los grupos étnicos y minorías culturales en Bogotá.

Acuerdo 927 de 2024, Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”

- 10.8. Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 323 de la Constitución Política de Colombia, así como en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá tiene competencia para expedir acuerdos que promuevan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital. En este sentido, la promoción de la interculturalidad a través de festivales y eventos culturales es una competencia directa del Concejo, en consonancia con las políticas nacionales y distritales en materia de cultura y diversidad.

6. IMPACTO FISCAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, todo Proyecto de Acuerdo debe incluir en su exposición de motivos un análisis explícito del impacto fiscal, el cual debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En atención a este requisito, se establece que el presente proyecto no genera impacto fiscal, dado que no representa una afectación al Marco Fiscal de Mediano Plazo no requiere nuevas partidas presupuestales o adiciones presupuestales. Los posibles gastos derivados de su implementación están contemplados dentro de los programas y proyectos ya incluidos en los presupuestos de inversión anual y en el Plan Operativo Anual de Inversiones de las entidades competentes, particularmente de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y otras entidades con responsabilidad sectorial.

Además, la iniciativa se alinea con los objetivos establecidos en el Acuerdo 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2020–2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, específicamente en el Programa 26: *Bogotá-Región, el mejor destino para visitar*, que contempla acciones estratégicas para el posicionamiento turístico y cultural de la ciudad mediante la formulación de productos culturales y de bienestar, y la ejecución de eventos y ferias que fortalecen la economía y el tejido social.

Igualmente, el artículo 35 del mencionado Plan de Desarrollo establece la priorización de acciones del sector Cultura, Recreación y Deporte, orientadas a la reactivación económica y social, mediante el uso eficiente de los recursos asignados. En este marco, la ejecución de la presente iniciativa se integra a metas y programas ya definidos, sin comprometer recursos adicionales.

Se prevé, además, que los eventos y actividades culturales derivados del proyecto puedan ser implementados mediante convocatorias públicas ya existentes y financiados, en parte, mediante alianzas estratégicas con el sector privado y organizaciones internacionales, lo que refuerza su viabilidad financiera sin necesidad de modificar el presupuesto distrital vigente.

Finalmente, se recuerda lo señalado por la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, según la cual el análisis del impacto fiscal no puede convertirse en un obstáculo que limite la competencia normativa de las corporaciones públicas. Dicho análisis debe ser una herramienta para garantizar la sostenibilidad fiscal, pero no puede interpretarse como un mecanismo de veto ni de bloqueo a la función legislativa de los concejos.

En suma, esta iniciativa cumple con los requisitos de sostenibilidad y compatibilidad fiscal, está articulada con el marco normativo y programático del Distrito, y no representa una carga fiscal adicional.

7. CONCLUSIÓN

En conclusión, la creación de un programa que promueva la interculturalidad a través de festivales y eventos culturales tendría efectos profundamente positivos en la vida diaria de los pueblos indígenas asentados en Bogotá, mejorando su integración social, su bienestar emocional y psicológico, y contribuyendo a la preservación y valoración de su patrimonio cultural.

8. TÍTULO - ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS: **Título:** " Por medio del cual se promueve la interculturalidad a través de la realización del festival Etnia al parque en el Distrito Capital de Bogotá".

PROYECTO DE ACUERDO NO 474 DE 2025**PRIMER DEBATE**

““POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia establece que "el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana", y que corresponde a las entidades territoriales la promoción de la inclusión y el respeto por esta diversidad.
2. Que la Ley 397 de 1997, o Ley General de Cultura, tiene como uno de sus fines la preservación y promoción de las culturas en su diversidad y riqueza, reconociendo la importancia de su transmisión, y que la interculturalidad contribuye al desarrollo humano y social.
3. Que el Distrito Capital de Bogotá es un territorio pluricultural y multiétnico, en el que coexisten comunidades provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero, por lo que es imperativo generar espacios donde todas las manifestaciones culturales puedan ser reconocidas y celebradas.
4. Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha resaltado la importancia de la interculturalidad como un motor para la paz, el diálogo y la inclusión, y que los festivales culturales son un instrumento eficaz para promover estos valores.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Créase el festival intercultural “Etnia al Parque” como un evento artístico, gastronómico y cultural para la promoción y participación de las diversas comunidades étnicas presentes en el Distrito y en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte diseñará, ejecutará y coordinará las acciones, actividades, convocatorias y demás disposiciones necesarias para la realización del festival, garantizando la participación activa de las comunidades étnicas que habitan en el Distrito y las comunidades fuera del distrito que manifiesten su interés.

ARTÍCULO 3. El Distrito garantizará las condiciones necesarias para la realización anual del festival intercultural “Etnia al Parque”.

ARTÍCULO 4. Las entidades públicas y privadas que colaboren en la organización y realización del festival deberán garantizar que los eventos sean incluyentes, accesibles y que promuevan el respeto mutuo entre las diversas culturas.

ARTÍCULO 5. La programación del festival intercultural “Etnia al Parque”, será coordinada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con la participación activa de las Alcaldías Locales y de las comunidades étnicas que habitan en el Distrito. Estas comunidades presentarán manifestaciones artísticas, gastronómicas, musicales y de otras expresiones que resalten su identidad cultural, sin que ninguna manifestación prevalezca o se imponga sobre las demás.

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), Canal Capital y otros actores del sector cultural desarrollarán estrategias de comunicación para garantizar la promoción y divulgación del festival y de sus eventos en todo el territorio distrital, incluyendo medios digitales, radiales y televisivos.

ARTÍCULO 7. En el marco del festival intercultural “Etnia al Parque”, la Secretaría de Educación promoverá jornadas de sensibilización y formación en interculturalidad dirigidas a estudiantes de las instituciones educativas distritales, fomentando la comprensión y el respeto por la diversidad cultural.

ARTÍCULO 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Cordial Saludo,

OSCAR BASTIDAS JACANAMIJOY

Vocero del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 475 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA SOLIDARIDAD SOCIAL CON LAS ESCOBITAS DE BOGOTÁ: ACCIONES AFIRMATIVAS ORIENTADAS A LA DIGNIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE ASEO EN VÍA Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CAPITAL ”*****I. Objetivo del Proyecto de Acuerdo**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo dignificar la labor del personal que integra el esquema de aseo en Bogotá (barrenderos, conductores de vehículos, operadores de limpieza y recolectores) mediante el reconocimiento de su labor y el despliegue de servicios institucionales tendientes al desarrollo íntegro de la vida. Así las cosas, se propone institucionalizar el Día del Barrendero y promover acciones que mejoren su calidad de vida a nivel laboral, territorial, social, familiar y educativo.

II. Antecedentes

La iniciativa no ha sido sometida a consideración de la Corporación en oportunidades anteriores.

iii. Sustento jurídico de la iniciativa

A continuación, se citan y organizan, conforme a su jerarquía normativa, las disposiciones legales que guardan relación directa con el objeto del presente proyecto de acuerdo y que constituyen el fundamento jurídico de esta iniciativa.

a. Marco constitucional

Este proyecto de acuerdo se fundamenta en los derechos y normas constitucionales asociados a la dignificación del personal que integra el esquema de aseo de Bogotá —como barrenderos, conductores, recolectores y operarios de limpieza—, en particular por su exposición a riesgos laborales, el estigma social que enfrentan y la necesidad de mejorar su calidad de vida mediante acciones públicas y privadas.

El preámbulo de la Constitución Política de Colombia establece como propósito fundamental la protección de la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático que garantice un orden social justo. Sin duda, este espíritu orientador del legislador es plenamente coherente con el objetivo del proyecto.

“En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:”

Ahora bien, de manera específica, el artículo 1º de la norma constitucional, consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, lo cual obliga a las autoridades a garantizar condiciones que permitan el desarrollo integral del personal de aseo del Distrito. A su vez el artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre ellos el trabajo en condiciones dignas y justas.

“ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

El artículo 13, dispone la igualdad ante la ley y la obligación del Estado de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, especialmente para los grupos discriminados o marginados, como ocurre frecuentemente con los operarios del servicio de aseo.

“ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

El artículo 25 reconoce que el trabajo es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. El artículo 48 consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social, incluido el acceso a programas de prevención en salud, lo cual es especialmente importante dada la explosión del personal de aseo a condiciones de alto riesgo.

“ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.”

Es importante hacer la salvedad de que la seguridad social es un servicio público obligatorio y un derecho irrenunciable, que debe presentarse con eficiencia, universalidad y solidaridad, bajo la dirección del Estado.

El artículo 53 ordena la expedición del estatuto del trabajo y fija principios mínimos fundamentales, como la remuneración mínima vital y móvil, la estabilidad en el empleo, la seguridad social, la capacitación y el descanso necesario.

“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.”

El artículo 49 establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado y que debe garantizarse de manera oportuna y eficiente, lo que aplica de manera prioritaria a trabajadores cuya salud está constantemente amenazada por sus condiciones laborales.

“ARTÍCULO TRANSITORIO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.”

El artículo 209 íbidem establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe ejercerse con base en principios como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la economía y la publicidad. También obliga a las autoridades a coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, lo cual es esencial cuando se trata de garantizar derechos laborales mediante acciones interinstitucionales.

“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

El artículo 365 prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Esto refuerza la obligación estatal de garantizar condiciones laborales adecuadas en sectores como el del aseo.

“ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

El artículo 367 precisa que la ley definirá las competencias relacionadas con la prestación, cobertura, calidad y financiación de los servicios públicos domiciliarios, así como el régimen tarifario y las entidades responsables. Esta disposición es clave para comprender el marco institucional en el cual se insertan las empresas concesionarias de aseo en Bogotá.

“ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

Este conjunto de disposiciones constitucionales ofrece un sólido fundamento jurídico al presente proyecto de acuerdo, el cual no se limita al reconocimiento simbólico de la labor del personal de aseo, sino que propone la adopción de medidas institucionales y comunitarias concretas orientadas a mejorar sus condiciones de vida de manera integral, abarcando las dimensiones laboral, social, familiar, educativa y de salud, en consonancia con los fines del Estado social de derecho y el principio de dignidad humana.

b. Marco legal

Además del fundamento constitucional, esta iniciativa se apoya en una base normativa sólida que respalda la obligación del Estado y las empresas concesionarias de garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y justas para el personal del esquema de aseo en Bogotá.

En este sentido, la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones; regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo el de aseo, definido como la recolección de residuos sólidos y sus actividades complementarias: transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Estas leyes establecen que la prestación debe ser eficiente, continua y orientada al bienestar colectivo, lo cual sustenta la intervención del Estado para garantizar la dignidad laboral del personal involucrado.

“ARTÍCULO 2. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.

2.7. Obtención de economías de escala comprobables.

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación.

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.

(...)

*14.24. **Servicio público domiciliario de aseo.** Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.” (Negrilla fuera de texto).*

El Decreto 1713 de 2002 se encargó de reglamentar la gestión integral del servicio de aseo, detallando las actividades que lo componen: recolección, barrido, limpieza de vías, corte de césped, poda, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Este Decreto evidencia la diversidad y complejidad del trabajo que realizan los operarios de aseo, quienes requieren que sus condiciones laborales se ajusten a las exigencias que se les imponen.

“Artículo 2°. Contenido y alcance del decreto. El presente Decreto establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios.”

Adicionalmente, el artículo 3° del Decreto ídem resalta la relevancia estratégica del trabajo realizado por los operarios del aseo, al establecer los principios básicos que orientan la prestación del servicio. En este sentido, se reconoce que de su labor depende no solo la continuidad y calidad del servicio, sino también la construcción de una cultura ciudadana de la no basura, así como la minimización de los impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de gestión de residuos, reforzando el fundamento del presente proyecto de acuerdo, en tanto la labor de los operarios del aseo es **indispensable** para la ciudad.

“Artículo 3°. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En la prestación del servicio de aseo, se observarán como principios básicos los siguientes: garantizar la calidad del servicio a toda la población, prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías de escala comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, desarrollar una cultura de la no basura, fomentar el aprovechamiento, minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente, ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los residuos sólidos, es decir en todos los componentes del servicio.”

Por otra parte, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, en particular, el artículo 161 define la jornada máxima legal de trabajo (42 horas semanales). La ley también establece que en los casos de labores especialmente insalubres o peligrosas se reduzca la jornada de trabajo. Esto nos sirve de base para cuestionar las cargas excesivas (sobre todo físicas) que enfrentan muchos operarios del aseo, tal como lo documenta el proyecto.

ARTÍCULO 161. DURACIÓN. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las siguientes excepciones:

a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto.

(...)

Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria, de conformidad con el artículo 160 de Código Sustantivo del Trabajo.

También son relevantes los artículos que regulan las condiciones de seguridad, higiene y protección, debido a que el proyecto busca que estas se apliquen de manera uniforme por todas las empresas concesionarias.

“ARTÍCULO 348. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Todo {empleador} o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio; de conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca el Ministerio del Trabajo.

ARTÍCULO 349. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 352. VIGILANCIA Y SANCIONES. Corresponde al Ministerio del Trabajo, por conducto de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, atender las reclamaciones de empleadores y obreros sobre transgresión de sus reglas, prevenir a los remisos, y, en caso de reincidencia o negligencia, imponer sanciones, teniendo en cuenta la capacidad económica del transgresor y la naturaleza de la falta cometida.”

Siguiendo esta línea normativa, la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, define el Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de entidades, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a enfermedades y accidentes derivados de su actividad laboral. Asimismo, establece que la Salud Ocupacional —hoy entendida como Seguridad y Salud en el Trabajo— tiene como objetivo la mejora continua de las condiciones laborales y del entorno de trabajo, con miras al bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

“ARTÍCULO 1º. Definiciones:

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales.

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el

medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
(...)”

Estas disposiciones adquieren especial relevancia en el marco del presente proyecto de acuerdo, en tanto la labor del personal de aseo en vía pública implica una exposición constante a riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales, y requiere de una acción coordinada entre las autoridades distritales y las empresas concesionarias para garantizar la implementación efectiva de medidas de protección, prevención y promoción de la salud laboral. De esta manera, el proyecto busca no solo dar cumplimiento a la normatividad vigente, sino fortalecer la aplicación práctica de los principios de salud y seguridad en el trabajo en un sector históricamente marginado y vulnerable.

Ahora bien, la Resolución 0312 de 2019 define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que se aplican a todos los trabajadores independientemente del contrato por el cual desempeñan sus labores. Entre los estándares mínimos exigidos a empresas con más de 50 trabajadores encontramos: i) *asignar recursos para el Sistema de Gestión en SST* (asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión SST); ii) *garantizar que todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación o contratación estén afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales*; iii) *identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el decreto 2090 de 2003*; iv) *Conformar el Comité Prioritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y capacitar a sus integrantes*; v) *Realizar programas de capacitación anual*; vi) *establecer por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo*.

“Artículo 2. Campo de aplicación. La presente Resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.”

Para terminar se van a enunciar otras disposiciones que pueden ser relevantes para el presente proyecto de acuerdo: El Decreto 1477 de 2014 establece la tabla de enfermedades laborales, incluyendo el síndrome de agotamiento profesional (burnout) o el trastorno del sueño debido a factores no orgánicos como enfermedades derivadas de condiciones laborales extremas, frecuente en trabajos con alta carga física, estrés constante y falta de reconocimiento.

GRUPO IV – TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			
ENFERMEDAD	CÓDIGO CIE - 10	AGENTES ETIOLÓGICOS / FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL	OCUPACIONES / INDUSTRIAS <small>El listado de ocupaciones e industrias no es exhaustivo. Se mencionan las más representativas, pero pueden existir otras circunstancias de exposición ocupacional.</small>
Trastornos del sueño debidos a factores no orgánicos	F51.2	Jornada de trabajo: (Horarios y jornadas laborales extenuantes) trabajos por turnos, trabajo nocturno, trabajadores que laboran en campamentos en regiones diferentes a su domicilio. Deficiencia sobre la organización y duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante la jornada, diferentes al tiempo para las comidas,	Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad (policías), bomberos, editores de medios visuales de comunicación, vigilancia privada, vigilancia de centros penitenciarios, enfermeras y enfermeros, profesionales de medicina y técnicos afines, conductores de transporte de distancias largas, obreros de empresas de trabajo continuo, personal que labora en establecimientos que prestan servicios durante las 24 horas etc.

		trabajo nocturno; tipo y frecuencia de rotación de los turnos; número y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia de los descansos semanales. Circunstancias relativas a las condiciones de trabajo.	Controladores de tráfico aéreo.
Síndrome de agotamiento profesional (Síndrome de Burnout)	Z73.0	Condiciones de la tarea: (Demandas de carga mental (velocidad, complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y definición de roles.	Actividades del sector educativo, servicios sociales y de salud. Atención a niños y adolescentes en circunstancias de vida difíciles, a personas privadas de la libertad, a farmacodependientes. Atención a usuarios, atención a víctimas, personas con discapacidad, pacientes terminales, personas que trabajan en levantamiento de cadáveres.

La **Resolución 2046 de 2008** define factores de riesgo psicosocial, esfuerzo físico, efectos en la salud y en el trabajo, incluyendo variables como el ausentismo, la rotación laboral y el deterioro del clima organizacional. Estas condiciones son identificadas como desafíos estructurales en el sector del aseo y respaldan la necesidad de intervención estatal.

- **Factores de riesgo Psicosocial:** condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.
- **Factor protector Psicosocial:** condición del trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajo.
- **Estrés:** Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales.
- **Esfuerzo físico:** Esfuerzo Fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico.
- **Patologías derivadas del estrés:** aquellas en las que las reacciones del estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad, activan mecanismos fisiopatológicos en una enfermedad.
- **Condiciones de trabajo:** Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes; y/o servicios conocimientos.
- **Efectos en la salud:** alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico.
- **Efectos en el trabajo:** consecuencias con el medio laboral y en los resultados del trabajo.

El **Decreto 2981 de 2013** regula integralmente la prestación del servicio público de aseo, determinando las responsabilidades de los prestadores y los estándares de calidad. Sustenta la obligación de los concesionarios de brindar condiciones adecuadas para el personal que ejecuta estas tareas, en concordancia con las políticas de salud pública, sostenibilidad y equidad social.

La **Resolución 2404 de 2019** establece la guía técnica para la prevención e intervención de los factores psicosociales en el trabajo. Reafirma el papel del Ministerio del Trabajo en la promoción de entornos laborales saludables, lo cual se articula con las metas del presente proyecto.

La **Resolución 350 de 2022 del Ministerio de Salud** define protocolos específicos para el manejo seguro de residuos, con énfasis en bioseguridad, separación adecuada y protección del personal operativo. Esta norma cobra relevancia frente a los operarios de aseo debido a los riesgos inherentes a la labor.

IV. Justificación del proyecto de acuerdo

El proyecto surge de la necesidad y el interés por aportar en la dignificación de la labor que realizan los esquemas de aseo y limpieza en vías y áreas públicas, de esta manera, se divide la justificación en dos problemas, a saber: el desconocimiento de la labor y las situaciones que impiden el desarrollo de la vida en condiciones dignas y justas. En el primer componente, se caracteriza el oficio del personal de aseo en vía en el marco de las operaciones de aseo en Bogotá, luego se exponen los aportes de este oficio en la construcción de barrios, el cuidado al medio ambiente y los servicios de saneamiento prestados a la ciudad y finalmente, se aborda el desconocimiento y estigmatización que vive la población de barrenderos durante sus jornadas de trabajo.

Para tratar el segundo componente, se propone identificar las condiciones en las que laboran, resaltando los riesgos y limitaciones que conlleva los trabajos en vía pública; la atención a riesgos desigual que brindan las empresas concesionarias de aseo y la relación entre las condiciones laborales y sus proyecciones de vida.

1. Desconocimiento de la labor del personal de aseo en vía pública

1.1. Caracterización del oficio de barrido y limpieza en espacios públicos en el marco de las operaciones de aseo de Bogotá.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Público - UAESP es la entidad encargada de regular, planificar y controlar los servicios de aseo en Bogotá lo que implica supervisar las empresas de aseo, diseñar estrategias de gestión de residuos, realizar campañas de concientización ciudadana que fomenten una cultura de responsabilidad ambiental, asignar zonas de operación y responder a situaciones de acumulación masiva de residuos coordinando acciones rápidas. En ejercicio de sus funciones, la UAESP desde enero del 2018 adjudicó a cinco (5) empresas concesionarias la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos, barrido manual y mecánico, limpieza en vías y el mantenimiento de áreas públicas, la asignación zonal se dispone por localidades de la siguiente manera:

Tabla 1. Asignación de Localidades de acuerdo con la empresa de aseo responsable de la zona

Área de Servicio Exclusivo-ASE	Empresa prestadora del Servicio	Localidad
1	Promoambiental Distrito SAS ESP (710 mil usuarios)	Sumapaz, La Candelaria, Usme, Chapinero, San Cristobal, Usaquén y Santa Fe (7)
2	Limpieza Metropolitana S.A E.S.P - LIME	Ciudad Bolivar, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Tunjuelito, Los Mártires, Bosa, Teusaquillo (8)

3	Ciudad Limpia	Fontibón y Kennedy (2)
4	Bogotá Limpia	Engativá y Barrios Unidos (2)
5	Área Limpia	Suba (1)

Fuente: Elaboración propia con información de UAESP 2025

Todas ellas son empresas especializadas en el manejo de residuos sólidos, así como, en prácticas que contribuyen a la conservación del medio ambiente y el espacio público como la educación ambiental, el corte de césped, la poda de árboles, etc. Para cada empresa se realizó un contrato de concesión englobada en un solo proceso, así las cosas, se relaciona la empresa junto con el contrato que celebra la concesión:

- Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P- Contrato 283 de 2018
- Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - Contrato 284 de 2018
- Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P - Contrato 285 de 2018
- Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. - Contrato 286 de 2018
- Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P - Contrato 287 de 2018

Los cinco contratos tienen en común el objetivo, plazo y obligaciones, de esta manera, las concesiones se proyectan para 8 años a partir de enero de 2018 y contemplan que el objeto es *“Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final”*.

Por su parte, se destacan las obligaciones contractuales que atienden al objetivo del presente proyecto comenzando con las operativas que indica la obligación de “tener a disposición de los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, la información requerida y necesaria para garantizar la articulación en la prestación del servicio. En cuanto a las obligaciones en seguridad e higiene industrial se encuentran: Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y ocupacionales; Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal acorde con la labor que desempeñen; Cumplir con normas de seguridad industrial; Identificar, enumerar, sistematizar, evaluar y controlar los riesgos y adoptar las medidas tendientes a proteger, conservar y mejorar la salud de los trabajadores e; Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Asimismo, en las obligaciones de carácter social, se dicta desarrollar las gestiones institucionales y de gestión social establecidas en el Reglamento Técnico Operativo para el Programa de Gestión Social y el anexo de articulación con la Actividad de Aprovechamiento del Servicio Público de Aseo para involucrar a los entes Distritales y a los ciudadanos en la mejora permanente de la prestación del servicio público de aseo. Es importante mencionar, que de acuerdo con la Resolución 895 de 2021 la metodología de implementación del Plan de Gestión Social de la Prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo, los Planes de Aseguramiento y Gestión Social deben tener como mínimo: Antecedentes, Objetivo General, Objetivos Específicos, Alcance, Criterios de Priorización, Metas, Indicadores, Actividades y Productos, Financiación, Presupuesto y Cronograma.

Ahora bien, la fuerza de trabajo que garantiza la funcionalidad del sector la componen entre 20.000 y 25.000 personas para el año 2024, particularmente, la población objetivo del presente acuerdo se caracteriza a continuación:

- **Barrenderos:** Encargados de mantener limpias las calles, aceras y espacios públicos mediante el barrido manual.

- **Conductores de vehículos:** responsables de operar camiones y maquinaria especializada para la recolección de residuos y la limpieza mecánica.
- **Recolectores:** personal dedicado a la recogida de basura y desechos en diferentes puntos de la ciudad.
- **Operarios de limpieza:** Trabajadores que se ocupan de tareas específicas como la limpieza de alcantarillas, parques y zonas comunes

Estos cargos se distribuyen por empresa de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución del personal de aseo en vía para Bogotá por cargo y empresa para el año 2024

Cargo	Empresa prestadora del servicio				
	Promoambiental	LIME	Ciudad Limpia	Bogotá Limpia	Área Limpia
Conductores	186	284	185	147	113
Barredores	603	16	467	397	351
Tripulantes	316	1411	239	704	193
Total	1105	1711	891	1248	657

Fuente: Elaboración propia con datos de derecho de petición UAESP

Para tener un panorama sobre la carga laboral de los esquemas de aseo manual, la empresa Bogotá Limpia en un ejercicio de evaluación integral de prestadores, manifiesta que cada uno de sus trabajadores de barrio recorre semanalmente 56.75 kilómetros (Superservicios, 2020, pág. 62), lo cual es equivalente a caminar desde la Plaza de Bolívar ubicada en el centro de Bogotá hasta el municipio de Zipaquirá en Cundinamarca

1.2. Aporte del gremio a la ciudad

Mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores que constituyen los esquemas de aseo no solo impacta su desarrollo individual, también, trae consecuencias positivas para la sociedad en tanto son una parte esencial para la construcción de ciudades habitables y el cuidado del medio ambiente.

Usualmente, cuando se habla de los aportes que un grupo o gremio le hace a la ciudad se usan criterios económicos como la generación de empleo, el saneamiento de las vías para el consumo, la recuperación y mantenimiento de servicios de movilidad para el flujo de mercancía, mano de obra y capital y el aumento de la percepción de seguridad, así como, la garantía de realizar estos intercambios económicos en zonas seguras; no obstante existen otros aportes relacionados con las condiciones físicas y espaciales que alientan el desarrollo de las ciudades para la vida, dichas condiciones se expresan en la generación de identidad y arraigo hacia el territorio donde transcurre la cotidianidad a partir de la construcción de recuerdos y vivencias colectivas en el espacio público. Así las cosas, los esquemas de aseo, a través del saneamiento de espacios públicos, aportan tanto a la consecución de transacciones económicas en la ciudad como a la generación de condiciones para la apropiación territorial (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, pp. 17-24)

Por otro lado, los trabajadores son la barrera principal entre los residuos no aprovechables y la estructura ecológica de la ciudad, principalmente cuerpos de agua como ríos, cuencas, acuíferos, entre otros. Así las cosas, su trabajo disminuye la cantidad de residuos que contaminan las fuentes hídricas que atraviesan la ciudad, además, aportan en la reducción de elementos que afectan el flujo en el sistema de alcantarillado, prolongando la vida útil de las tuberías y preservando su correcto funcionamiento en temporadas de lluvia.

Cabe resaltar, que el cuidado de los cuerpos de agua es crucial para la protección de fauna y flora nativa y migratoria que alberga la ciudad, ya que alrededor del agua es donde se encuentra el alimento, el refugio y un lugar para reproducirse.

Incluso a nivel internacional se reconoce su aporte al objetivo del ODS 11.6 que busca reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. Asimismo, el oficio contribuye el indicador 11.6.1 referido al porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente con descarga final adecuada respecto al total de los desechos generados por la ciudad (ONU HÁBITAT, 2018)

1.3. Desconocimiento y estigmatización de la población durante sus oficios

El primer pilar para garantizar la dignificación del trabajo es que la autopercepción de cada trabajador esté a la altura del gran aporte que le hacen a los territorios y al medio ambiente tal y como se describió en el apartado anterior. Dicha autopercepción está mediada por el sentirse importante, útil, reconocido y apreciado, **es importante mencionar que el concepto que forjamos de nosotros mismos no solo nace del fuero interno, por el contrario, en gran parte depende de la valoración que la sociedad tiene para con nosotros, Honnet, lo denomina como “solidaridad social”.**(Zúñiga y Valencia, 2018).

En ese sentido, Honneth, advierte que las constantes formas de desprecio y desconocimiento hacia una población puede generar que las personas se acostumbren a interiorizar condiciones de sumisión, dependencia y poca autoestima (Marbolí, 2021, pág. 20) Ahora bien, en una sociedad con patrones culturales encaminados a la estigmatización de las labores de calle, Marbolí (2021) y Delphino (2008) propone el fenómeno “Invisibilidad Pública” descrita como “una percepción humana totalmente deteriorada y condicionada a la división social del trabajo, donde se ve solo la función y no la persona” (pág.4).

Marbolí (2021) luego de detectar las consecuencias de la invisibilidad pública, menciona que una alternativa para combatirla es la solidaridad social por parte de la comunidad hacia los esquemas de aseo que se manifiesta en una palabra de agradecimiento, la buena gestión de residuos, un saludo, entre otros actos de fraternidad que le permitan al trabajador sentirse valorado no solo por su labor sino por el simple hecho de ser persona (pp. 9-17)

Ahora bien, las experiencias internacionales, abren la posibilidad de cristalizar la solidaridad social a través de la institucionalización del Día del Barrendero, así las cosas, se traen a colación la experiencia de México quien celebra el 12 de enero (DGCS, 2023), en Argentina y Chile decretado el 14 de junio (Del usuario, 2020) y en algunas localidades de España se conmemora el 19 de abril (Diario Uno, 2020). Como experiencia adicional, la celebración del Día del Barrendero suele hacerse el 3 de noviembre, alineándose con la conmemoración de la vida y obra de San Martín de Porres, un fraile dominico nacido en Perú en el siglo XVI reconocido como “el santo de la escoba”, un título que, según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, se le otorgó “por su oficio de portero y barrendero del convento en el que vivió” (ACIPRENSA, 2024)

B. Situaciones que impiden el desarrollo de la vida en condiciones dignas y justas

El segundo pilar para dignificar la vida se entiende a partir de las posibilidades y condiciones que le brinda su empleo al trabajador para pensarse un futuro colectivo o individual, de manera tal que existe una relación entre los empleos que se tiene y las proyecciones de vida que cada persona se fija. Así las cosas, independientemente del salario, funciones o sector en el que se labore, todos los trabajadores tienen el derecho de construir el futuro que sueñan. Concatenando las ideas del apartado anterior, los oficios como la limpieza de espacios y la recolección de residuos deben ser vistas como una decisión y vocación de vida, no como la alternativa precaria a la falta de empleo y escolarización; aunque, en caso de que sea una opción de ingreso temporal, debe generar las condiciones necesarias para transitar y progresar hacia el proyecto de vida que se tiene.

1. Condiciones en las que laboran: Riesgos y limitaciones de los operarios.

El lugar que ocupa el lavado manual de vías y la recolección de residuos no aprovechables en la metodología para calcular las tarifas del servicio público de aseo implica una gran presión en el rendimiento exigido a los trabajadores, principalmente porque la base de las tarifas son los kilómetros lineales aseados, sin embargo, estos cálculos no contemplan factores externos que afectan la ejecución de la labor y por tanto la cobertura del servicio y el cumplimiento de metas por trabajador, como temperaturas extremas (frío o calor), la concentración de residuos no aprovechables, sedimentos y lodo urbano, microrutas que se encuentran en pendientes cuyos grados de inclinación ralentizan la marcha de recolección o incluso en zonas donde las condiciones geográficas y de seguridad obstaculizan cumplir con la cobertura de área asignada. Lo anterior ocasiona que los trabajadores se vean obligados a adoptar prácticas perjudiciales para la salud como saltarse descansos, horas de almuerzo y pausas activas para cumplir con la meta, así como, realizar movimientos súbitos nocivos para el cuerpo. Los trabajos que se desarrollan en vías públicas tienen riesgos particulares que los diferencian de otros empleos, dentro de los reportados se encuentran:

- **Riesgos biológicos:** se generan a partir del contacto con bacterias, virus, parásitos, hongos o cualquier organismo que pueda producir infección, alergia o enfermedad
- **Riesgos químicos:** se presentan por la exposición a agentes y contaminantes químicos en forma líquida, gaseosa o sólida
- **Riesgos biomecánicos:** se producen por los trabajos que se realizan en una posición fija, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas o la manipulación constante de cargas
- **Riesgos derivados de las condiciones de seguridad:** están asociados con las condiciones de inseguridad por delincuencia común u organizada en las zonas de trabajo
- **Riesgos psicosociales:** Asociados con factores propios de la organización y el clima laboral como la carga de trabajo, las relaciones interpersonales, la comunicación y la falta de apoyo
- **Riesgos por tráfico vehicular:** se generan dado que su labor se desempeña en parte sobre la malla vial lo que puede ocasionar colisiones y siniestros.

Estos riesgos, tienen consecuencias negativas para la salud como dolor musculoesquelético, laceraciones en manos, infecciones de vías respiratorias, infecciones intestinales, infección cutánea, intoxicación, infección cutánea, virus de la rabia, dengue, hepatitis A,B y C, salmonella, esguinces, fracturas, solcos muscular, agotamiento físico, deshidratación, entre otros. Adicionalmente, existen factores sociales que agudizan los factores de riesgo como el nivel de escolaridad del trabajador, el nivel socioeconómico, largas jornadas laborales, malos hábitos personales, procedimientos inadecuados, falta de capacitación, poca experiencia laboral, insatisfacción laboral y el no uso de los Elementos de Protección Personal - EPP. (Rincón, 2023, pp.17-24)

También, existen riesgos asociados con la manipulación directa de materiales no aprovechables que generan sedimentos urbanos contaminados y cargas contaminantes o material particulado en escorrentía pluvial y urbana.

A modo de diagnóstico, la empresa LIME indica que del año 2022 al 2023 hubo un aumento de accidentes laborales desagregados de la siguiente manera:

Tabla 3. Accidentes laborales reportados a la empresa LIME por tipo de accidente y año 2022-2023

Accidentes de trabajo	2022	2023
Biológico	112	141
Biomecánica	65	70

Mecánico (golpes)	91	64
Caída de mismo o diferente nivel en vía pública	57	52
Material particulado en proyección o en ambiente	19	20
Tránsito	19	22
Mecánico superficiales calientes	0	2
Químico	1	1
Contacto con líquidos calientes	1	0
Psicosocial	0	1
Total	372	383

Fuente: Elaboración propia con datos de Derecho de Petición

Las causas de los accidentes reportados pueden dividirse en tres, en primer lugar se encuentra la mala gestión de residuos desde la fuente, es decir, que la comunidad dispone de forma incorrecta sus residuos no aprovechables en espacios públicos lo que genera accidentes biológicos, de contacto con líquidos calientes y químicos, siendo los biológicos los más frecuentes. Por otro lado, se encuentra la carga laboral y la poca tecnificación para el barrido y aseo de las vías que se expresa en el alto número de accidentes biomecánicos y mecánicos relacionados con lesiones por esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas; y ,finalmente, se tiene como tercer factor de accidentalidad la poca conciencia comunitaria, solidaridad y respeto frente los trabajadores de aseo en vía expresada en los incidentes de tránsito.

Es importante recalcar, que existe una relación directa entre los riesgos y la generación de residuos sólidos, de manera que, si aumentan los residuos, aumentarán los riesgos asociados con su recolección y manejo y disposición (Rincón, 2023, pág.21). Según las proyecciones multianuales de generación de residuos sólidos en el distrito capital 2020- 2032 realizado por la UAESP (2020) se evidencia un incremento anual en la generación de residuos sólidos no aprovechables donde la recolección domiciliaria representa el 89,71% y el barrido en calles el 3,86% del total de residuos proyectados, ahora, en la proyección se calculaba para el 2024 un total de 2.166.612 toneladas de residuos (pág.6), no obstante, según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá produjo para el 2024 3.445.965 de toneladas; así las cosas, el escenario al que se enfrenta la ciudad en materia de gestión de residuos es mucho más crítica de la proyectada. Lo anterior ocurre en una ciudad donde según Greenpeace (2023) los sistemas de gestión de residuos son insuficientes o inadecuados. Con más frecuencia los sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo transitan hacia Modelos Preventivos del Riesgo, en los que tanto trabajadores como empleadores participan activamente en iniciativas en el marco de sistemas de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos. Según la OIT (2014) los pilares de la prevención son la información, el compromiso y la participación, cada uno aporta al proceso de identificar y evaluar los riesgos, tomar conciencia y educar para la adopción de conductas responsables e incentivar la implementación de acciones colectivas compartidas por todos los miembros de la comunidad, asumiendo una disposición propositiva independientemente de que exista un riesgo o no (pág. 18)

Así las cosas, se destacan algunas estrategias preventivas como:

- "La modificación temporal de las condiciones de trabajo y tareas, es decir, que el trabajador tenga la posibilidad de rotar y cambiar de actividades, de tal manera que no exista una carga excesiva y prolongada en la realización de actividades repetitivas; a través de la rotación de los cargos, se puede aliviar la fatiga física, el estrés en grupos musculares y de tendones" (Carballo y Peña, 2018, pág. 63)
- Adoptar Medidas de Control del Riesgo siguiendo el orden jerárquico conforme a su eficiencia decreciente: i) Eliminación del riesgo: se posiciona como la primera opción dentro de las medidas de control, el cual busca suprimir los riesgos en los ambientes laborales; ii) Sustitución del agente o proceso riesgoso: cuando no es posible la eliminación del riesgo, se contempla la posibilidad de sustituir el proceso; iii) Control de la fuente del riesgo: Se refiere a las estrategias de ingeniería y tecnología aplicadas en el origen del riesgo como ventilación localizada; iv) Medidas administrativas: hacen referencia a las decisiones que se toman desde la organización como el tiempo de exposición y la señalización de vectores y; finalmente, v) Uso de Elementos de Protección Personal - EPP: como última medida y como método menos eficaz (OIT, 2014, pág.20)

En los modelos preventivos, se cuestiona la implementación de EPP como única medida para cuidar la integridad de los trabajadores, ya que es una medida de protección y no de prevención, de manera que, estos debe ser complementarios a estrategias preventivas y no una alternativa; adicionalmente, los EPP deben considerar tanto su eficacia como la comodidad para el usuario de modo que la participación de los trabajadores en espacios donde se decide la adquisición de dotación es fundamental (OIT, 2014, pág. 21)

1.2. Atención desigual de riesgos entre las empresas concesionarias y beneficios, así como la gestión social

Haciendo un diagnóstico de la gestión social que realizan las empresas prestadoras del servicio, se encontraron desigualdades frente a las acciones de responsabilidad social que deberían estar enmarcadas en los Planes de Aseguramiento y Gestión Social, por su parte, la empresa Promoambiental ofrece una amplia gama de beneficios a sus trabajadores como préstamos educativos, por calamidad doméstica y de libre inversión, asimismo, cuenta con un fondo educativo para la primera infancia, seguros de vida, un programa de bienestar corporativo y otro de reconocimiento operativo. No obstante, Área limpia, Ciudad Limpia y LIME no ofrecen beneficios a sus trabajadores excusados en que los contratos de sus trabajadores no incluyen provisiones para incentivos o programas de bienestar. Esta disparidad pone en evidencia la necesidad de establecer lineamientos estandarizados que cobijen a los trabajadores independientemente de la empresa con la que estén vinculados (UAESP, a través de un derecho de petición).

Teniendo en cuenta la poca asociación que registra actualmente el gremio de aseo (sin contar las organizaciones de recicladores) se hace énfasis en la necesidad de asegurar el acompañamiento a los trabajadores desde el reconocimiento de los beneficios que trae la organización gremial para la consecución de derechos y las herramientas y procesos necesarios para la consolidación de procesos de base, hasta la inclusión de dichas organizaciones en el sistema de participación distrital, asegurando su participación en espacios relevantes como el Comité de Seguimiento al Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital, Mesas de Trabajo Interinstitucionales, La Mesa Técnica de Residuos Sólidos o El Comité de Integración Territorial y los espacios que en su momento estén activos o se perciban como relevantes para el gremio.

v. Competencia del Concejo de Bogotá

De conformidad con el artículo 313, numeral 1 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el concejo de Bogotá cuenta con competencia para reglamentar las funciones y la eficiente prestación de

los servicios a cargo del municipio así como dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
Por lo que el Concejo de Bogotá es competente para discutir y aprobar el presente proyecto de acuerdo.

vi. Impacto Fiscal

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que implique un gasto o contemple beneficios tributarios debe explicitar su impacto fiscal y garantizar su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para ello, es obligatorio incluir en la exposición de motivos y en las ponencias correspondientes una estimación de los costos fiscales y la fuente de ingresos adicional destinada a su financiación.

En este sentido, es importante señalar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que requiera ajustes en el marco fiscal de mediano plazo, dado que no conlleva un aumento en el presupuesto del Distrito ni implica la creación de nuevas fuentes de financiación. Esto se debe a que los recursos destinados a la ejecución del presente proyecto de acuerdo ya han sido contemplados dentro del marco fiscal establecido en el Plan de Desarrollo Distrital vigente.

PROYECTO DE ACUERDO NO 475 DE 2025**PRIMER DEBATE**

POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA SOLIDARIDAD SOCIAL CON LAS ESCOBITAS DE BOGOTÁ: ACCIONES AFIRMATIVAS ORIENTADAS A LA DIGNIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE ASEO EN VÍA Y ÁREAS PÚBLICAS DE LA CAPITAL ”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1, del Decreto Ley 1421 de 1993

Acuerda

Artículo 1. OBJETO. Adelantar acciones afirmativas que dignifiquen la labor del personal que integra el esquema de aseo y limpieza en los espacios públicos de Bogotá mediante la institucionalización del Día del Barrendero cada 3 de noviembre a nivel distrital y la instauración de medidas y servicios para los integrantes del esquema.

Artículo 2. BENEFICIARIOS. Para efectos del presente acuerdo, se tendrán en cuenta a los integrantes de los esquemas de aseo y limpieza de la ciudad de Bogotá inscritos en el Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo- SIGAB:

- Operarios de barrido, barrenderos o “escobitas”.
- Operario de máquinas de barrido.
- Recolectores de basura o personal de apoyo que presta sus servicios en la operación de los camiones recolectores de basura.
- Conductores de los camiones recolectores de basura.

Parágrafo 1. Núcleo familiar. Para el efecto de este proyecto de acuerdo, se entenderá por núcleo familiar el compuesto por el (la) cónyuge o compañero(a) permanente y los hijos hasta los veintidós (25) años o, a falta de estos, los padres de los miembros de los esquemas de aseo y limpieza de la ciudad de Bogotá.

ARTÍCULO 3. DÍA DEL BARRENDERO. Se establecerá el 3 de noviembre de cada año en la ciudad de Bogotá como el Día del Barrendero, adelantando actos, ceremonias o eventos públicos que conmemoren su rol como protectores del medio ambiente, agentes activos en la construcción de territorios para la vida y trabajadores esenciales en el saneamiento de la ciudad.

Parágrafo 1. Los homenajes deberán ser liderados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y deberán contar con representantes de la sociedad civil que puedan exaltar la labor de los operarios de barrido, tales como expertos en sanidad y salud pública, organizaciones sociales e integrantes de los esquemas de aseo y limpieza de la ciudad.

Parágrafo 2. El Concejo de Bogotá, el 3 de noviembre de cada año otorgará reconocimientos y homenajes a los integrantes de los esquemas de aseo y limpieza de la ciudad que lleven más de 5 años ejerciendo su labor, promoviendo acciones de capacitación entre la ciudadanía que permitan concientizar sobre la importancia del cuidado de las zonas públicas y la labor de los barrenderos.

ARTÍCULO 4º. FORTALECIMIENTO EDUCATIVO. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito - SED y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” podrá avanzar en iniciativas educativas que propendan por el acceso a la educación postmedia y superior para lo cual establecerá los mecanismos de acceso y permanencia a los operarios del esquema de aseo del Distrito Capital.

Asimismo, se extiende éste articulado a la vinculación de programas orientados a la culminación de estudios básicos (primaria y secundaria), para ello, en cabeza de la SED y las Direcciones Locales de Educación- DILES, se buscará articular con las Instituciones Educativas Distritales- IED que ofrezcan jornadas nocturnas.

ARTÍCULO 5. SERVICIO DE GUARDERÍA. La administración distrital, en articulación con la Secretaría Distrital de Educación y Secretaría de Integración Social, priorizará la destinación de cupos en los jardines del distrito a los hijos de los operarios de aseo durante su jornada laboral. Acompañando en los respectivos trámites administrativos la vinculación al sistema educativo distrital.

ARTÍCULO 6. FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. La administración distrital en cabeza del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, impulsará la creación y fortalecimiento de asociaciones, organizaciones e individualidades con voluntad de organizarse conformadas por personas de los esquemas de aseo a fin de promover su participación efectiva en la formulación y deliberación en temas públicos concernientes al ejercicio de su labor.

ARTÍCULO 7. ESTRATEGIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL. La administración distrital, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos podrá incluir en su Programa de Cultura Ciudadana acciones dirigidas a reconocer el aporte en la construcción y el saneamiento de los territorios de la población descrita en el Artículo 2. Las estrategias de sensibilización, capacitación y reconocimiento estarán orientadas a generar solidaridad social, respeto y empatía hacia los trabajadores a partir de la difusión de sus relatos de vida, la importancia de su labor para el cuidado del medio ambiente, entre otras estrategias y temáticas.

ARTÍCULO 8. SERVICIOS PARA CUIDADORAS. La administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, La Secretaría Distrital de la Mujer a través de las Manzanas del Cuidado podrán incluir en sus programas de cuidadoras, infancias y género a las mujeres contempladas en el Artículo 2. creando iniciativas efectivas para la socialización y vinculación a la oferta institucional.

ARTÍCULO 9. EXPOSICIÓN MASIVA DEL ROL QUE DESEMPEÑAN LOS BARRENDEROS Y DEMÁS INTEGRANTES DE LOS ESQUEMAS DE ASEO: Con el fin de promover la difusión de información sobre la importancia del lugar que tiene la población beneficiaria en la construcción y saneamiento de las ciudades mencionada en el Artículo 2., se propone crear un plan de comunicación que contemple:

- a. La creación de un sistema de datos abiertos vinculado a la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP de libre consulta ciudadana, en donde se evidencie la caracterización de la población en cuestión y el impacto de las labores que desempeñan en la ciudad. Dicho sistema deberá concentrar como mínimo la siguiente información.

Distribución de los esquemas de aseo y limpieza por localidad y cargo junto con avances trimestrales en kilómetros lineales intervenidos por trabajador.

Puntos críticos que han sido intervenidos en el último mes, detallados a partir de sistemas de georreferenciación.

Solicitudes de intervención de puntos críticos junto con acciones de respuesta ubicados geoespacialmente.

Número de accidentes laborales en vía pública junto con los riesgos asociados a cada accidente, así como, la ubicación geográfica en donde ocurrió el hecho.

Mapa de riesgos que permita evaluar la magnitud de los peligros identificados y su prioridad a la hora de intervenir

- b. Replicar la información mencionada en el literal a. de una forma creativa y diferencial a través de medios de comunicación masivos y redes sociales a los que tenga acceso la entidad, creando contenidos que permitan visibilizar la importancia de los operadores de barrido y de los demás integrantes de los esquemas de aseo y limpieza de la ciudad.

- c. Propiciar alianzas estratégicas con la comunidad educativa formal e informal para fomentar el desarrollo de investigaciones sobre el gremio barrendero, incentivando el uso de los datos recolectados para el análisis y la construcción de conocimiento que oriente la toma de decisiones futuras encaminadas a la dignificación de la labor, el tránsito hacia modelos preventivos, la tecnificación de las labores y la gestión de residuos, entre otros temas.

ARTÍCULO 10. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. La Alcaldía Mayor de Bogotá remitirá el 3 de noviembre de cada año un informe al Concejo de Bogotá evidenciando el avance y cumplimiento de lo ordenado en este proyecto de acuerdo, para hacerle seguimiento a su implementación.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.

Referencias

ACIPRENSA (2024) Hoy celebramos a San Martín de Porres, patrono de la justicia social y la paz. Extraído de:

<https://www.aciprensa.com/noticias/52942/cada-3-de-noviembre-se-celebra-a-san-martin-de-porres-patrono-de-la-justicia-social>

Álzate, N. Ballesteros, V. (2021). Determinantes Que Afectan La Percepción De Inseguridad: Un Estudio Para Santiago De Cali. Universidad ICESI. Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas.

Bogotá Limpia. (s/f). Bogotá Limpia. Recuperado el 11 de marzo de 2025, de <https://www.bogotalimpia.com/>

Carballo, C. ; Peña, L. (2018) Propuesta para la prevención de los DME en barrenderos vinculados a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá. Universidad ECCI.

Colmenares, C. (s.f.) en Trabajo G&D Consulting Group S.A.S ¿Que son los riesgos biomecánicos y por qué tenerlos presente? Extraídos de: <https://www.gydconsulting.com/que-son-los-riesgos-biomecanicos-y-por-que-tenerlos-presente/>

Costa, FB (2002). Garis: un estudio de psicología sobre la invisibilidad pública. Programa de Postgrado en el Instituto de Psicología. Universidad de São Paulo

DEL SUR DIARIO (2023) Día del Barrendero: por qué se conmemora el 14 de junio. Extraído de:

<https://www.delsurdiario.com/20797-dia-del-barrendero-por-que-se-conmemora-el-14-de-junio#:~:text=Desde%202014%20cada%20a%C3%B1o%20se,limpia%20las%20ciudades%20del%20pa%C3%ADs>

Delphino, P. (2008). Fingí ser un barrendero y viví como un ser invisible. Instituto de Psicología de Universidad de São Paulo.

Diario Uno (2023) Día del Barrendero: ¿ por qué se conmemora el 14 de junio?. Extraído de:

<https://www.diariouno.com.ar/sociedad/dia-del-barrendero-por-que-se-conmemora-el-14-junio-n1116614>

DGCS (2023) Trabajadores de limpia, eslabones fundamentales para el manejo integral de residuos. Extraído de https://www.dges.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_597.html

GreenPeace (2023) Greenpeace Colombia lanza el informe audiovisual: La ruta de la basura. Extraído de:

<https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/issues/contaminacion/greenpeace-colombia-lanza-el-informe-audiovisual-la-ruta-de-la-basura/>

Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos sociales.

Jiménez A. (2024.04.16). Derecho de petición en modalidad de información.file:///C:/Users/kdbustos/Downloads/Rev.RESPUESTA%20DERECHO%20DE%20PETICION%20CONCEJO%20DE%20BOGOTA%20UAESP%20VD.pdf

Marambolí, F. (2021) Barriendo con Reconocimiento. Experiencias de reconocimiento y menosprecio de barrenderos(as). Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Escuela de Psicología. Santiago de Chile, Chile.
Martins, D. Teixeira, D. Felicio, F. Pereira, J. (2020). Invisibilidades en el ámbito del trabajo de limpieza: un estudio en una institución federal de educación superior. Farol – Revista de Estudios Organizacionales y Sociedad. 6(17), 994-1034.

ONU HABITAT (2018) Día Mundial del Hábitat. Extraído de : <https://onu-habitat.org/index.php/dia-mundial-del-habitat-2018>

Ordoñez de Rincón. (2024.02.06). Unidad administrativa especial de servicios públicos.file:///C:/Users/kdbustos/Downloads/20245000028101%20(2).pdf

Organización Internacional del Trabajo (2014) Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) Aportes para una cultura de la prevención.

Rau, M. Castillo, P. (2008). Prevención De La Violencia Y El Delito Mediante El Diseño Ambiental En Latinoamérica Y El Caribe: Estrategias Urbanas De Cohesión Social E Integración Ciudadana. Revista Invi No 64. Volume No 23. Pp 169 – 189.

Rincón, A. (2023) Riesgos Laborales en personal de recolección de residuos sólidos. Politécnico Gran Colombiano

Servicio Barrido Manual – Área Limpia. (s/f). Com.co. Recuperado el 11 de marzo de 2025, de <https://arealimpia.com.co/servicio-barrido-manual/>

Unidad Administrativa Espacial de Servicios Públicos (2020) Capítulo III:Proyecciones en el Informe del Plan de Gestión Integral de Residuos 2020.

Universidad Pedagógica Nacional (2020) Del Aula al Barrio: Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano.

Zuñiga, L., Valencia L. (2018) La teoría del reconocimiento de Axel Honneth como teoría crítica de la sociedad capitalista contemporánea. Universidad Autónoma de Bucaramanga

PROYECTO DE ACUERDO NO 476 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR EL CUAL SE CREA EL EVENTO CULTURAL Y MUSICAL AÑOS DORADOS AL PARQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”*****I. OBJETO**

El presente proyecto tiene como objeto crear el evento cultural y musical Años Dorados al parque en la ciudad de Bogotá D.C., como una estrategia pública de promoción del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y del envejecimiento activo, orientado a preservar el bolero y las baladas como expresión artística de identidad y memoria colectiva. El evento se desarrollará en espacios cerrados, accesibles, seguros y adecuados para el disfrute de las personas mayores, en horarios convenientes para toda la ciudadanía.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mundo se enfrenta a una transformación demográfica significativa, según la organización mundial de la salud “Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%.” (OMS,2024), lo que representa la necesidad de realizar actividades, programas y planes dirigidos a crear espacios de participación, recreación, culturales y comunitarios dirigidos a adultos mayores.

En respuesta a esta realidad, el presente proyecto propone la creación del Evento cultural y musical denominado “Años Dorados al parque”, como una iniciativa de reconocimiento, inclusión y promoción de géneros musicales como el bolero y la balada, que forman parte del patrimonio sonoro de generaciones pasadas y de la cultura de la ciudad.

Esta propuesta se enmarca en la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (2022 - 2031), la cual establece como metas la promoción de acciones artísticas y culturales intergeneracionales y el fortalecimiento de diálogos de saberes entre jóvenes y personas mayores. Asimismo, se articula con servicios existentes como las Casas de Sabiduría, que buscan potenciar las capacidades creativas, fortalecer redes de apoyo y resignificar los imaginarios sobre el envejecimiento.

En este sentido, “Años Dorados al parque” busca consolidarse como un escenario artístico de acceso gratuito, en espacio cerrado y adecuado, en el que las personas mayores sean asistentes, protagonistas e intérpretes.

Cabe recordar el reconocimiento que se le realizó a Bogotá en el año 2012, la UNESCO reconoció a Bogotá como Ciudad Creativa de la Música, destacando su gran diversidad sonora, que incluye expresiones tradicionales, populares, urbanas y un destacado movimiento de música académica y de vanguardia. Demostrando que por décadas la capital ha sido el centro del desarrollo musical y cultural en el país.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Bogotá y su Compromiso con la Historia Musical: Baladas y Boleros

Entre los géneros que marcaron profundamente a varias generaciones están las baladas y los boleros, cuya historia y presencia siguen siendo referentes fundamentales del patrimonio sonoro de la capital.

Entre los años 60 y 80, la balada romántica se convirtió en un fenómeno social que traspasó las fronteras del gusto popular. En Bogotá, emisoras como MIL XX y Melodía Estéreo llevaron este género a los hogares, acompañando las emociones de los jóvenes con letras cargadas de amor y melancolía. La televisión también jugó un papel clave con programas como El Club del Clan y Hola Qué Tal, que ayudaron a difundir estos sonidos románticos entre el público capitalino.

Este género, con influencias de íconos como Frank Sinatra, Nat King Cole y Elvis Presley, llegó a América Latina a través de Cuba y México, para luego consolidarse en Colombia con versiones en español. Bogotá fue una de las ciudades donde más se sintió esta ola musical, impulsada por artistas nacionales como Fausto, Claudia de Colombia, Billy Pontoni y Óscar Golden, quienes encontraron en la capital el escenario ideal para proyectar su arte.

Por su parte, el bolero, originario de Cuba en el siglo XIX, también encontró un hogar en Bogotá gracias al ambiente bohemio y romántico que caracteriza a muchos de sus barrios tradicionales. Su llegada a Colombia a principios del siglo XX coincidió con una época de intercambio cultural, en la que músicos colombianos traían discos desde el extranjero, que luego eran difundidos en emisoras como Ecos del Tequendama. En la capital, el bolero se arraigó en espacios como las serenatas, formando parte del paisaje sonoro de la ciudad durante generaciones.

Hoy más que nunca, es importante que desde el Distrito se fortalezca el compromiso con la memoria musical de la ciudad. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), pueden liderar estrategias que permitan acercar a las nuevas generaciones a estos géneros, promoviendo conciertos, talleres, archivos sonoros y espacios de formación donde las baladas y boleros sigan vivos en el corazón de los bogotanos. En una ciudad que ha sido reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa

de la Música, proteger y difundir estos géneros no solo es un acto de memoria, sino una apuesta por el futuro cultural de Bogotá. Las baladas y los boleros no son solo parte del pasado: son expresiones que siguen teniendo el poder de conectar, emocionar y construir identidad en la capital del país.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA EN BOGOTÁ

Fomentar la cultura musical en Bogotá es una tarea clave para fortalecer el tejido social y promover espacios de encuentro entre los ciudadanos. A través de actividades creativas que integren tanto las tradiciones musicales como las nuevas expresiones artísticas, se puede impulsar el arte y la música como medios para generar bienestar, fortalecer la identidad cultural y enriquecer la vida comunitaria. Estas acciones no solo permiten conservar el patrimonio sonoro de la ciudad, sino que también abren caminos para la innovación y la participación activa de las nuevas generaciones. Así, se reconoce a la música como una herramienta poderosa para celebrar la diversidad y construir una ciudad más unida y consciente de su riqueza cultural.

3. FESTIVALES AL PARQUE

Según la alcaldía de Bogotá (2024), el programa Festivales al Parque se ha consolidado como uno de los programas para visibilizar y fortalecer la creación musical en Bogotá. Iniciado en 1995 con la primera edición de Rock al Parque; a lo largo del tiempo se ha ampliado para incluir diversos géneros musicales, convirtiéndose en un referente cultural de la ciudad.

Hoy en día, el Distrito cuenta con una amplia oferta dentro del marco de Festivales al Parque, entre los que se destacan Joropo al Parque, Hip Hop al Parque, Góspel al Parque, Vallenato al Parque, Jazz al Parque, Rock al Parque, así como espacios dedicados a la música popular y música Colombiana.

Según IDARTES, el desarrollo de los Festivales en 2024 inició en junio con *Joropo al Parque*, que homenajeó los cantos de vaquería y reunió a 41.000 asistentes en torno a las tradiciones de los Llanos Orientales.

En el mes de agosto se realizaron los festivales de *Vallenato*, *Hip Hop* y *Colombia al Parque*, destacándose *Hip Hop al Parque* por su convocatoria de más de 86.000 personas y su variada oferta de actividades relacionadas con el freestyle, el breakdance, el graffiti y otras expresiones de la cultura urbana. Por su parte, *Colombia al Parque* rindió tributo a los sonidos del Pacífico, con una participación de 36.487 asistentes.

La programación continuó en septiembre con *Jazz al Parque*, que reunió a 17.000 aficionados en una edición marcada por la fusión cultural con la participación de músicos

de India, Grecia y Turquía. En octubre, *Salsa al Parque* celebró su edición número XXV con más de 100.000 asistentes, consolidándose como un evento de gran impacto popular.

Rock al Parque, considerado el festival de mayor envergadura, tuvo lugar en noviembre y logró convocar a más de 300.000 asistentes, con la participación de 58 bandas locales, nacionales e internacionales. El ciclo de festivales concluyó con la primera edición de *Popular al Parque*, orientado a la visibilización de la música campesina y tradicional, que reunió a 6.000 asistentes.

A lo largo del año, los Festivales al Parque también ofrecieron una agenda académica, con 28 actividades formativas y de intercambio de saberes, que contaron con la participación de artistas, docentes y expertos, beneficiando a más de 2.000 personas. Según el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, estos festivales representan una apuesta pública sostenida que, desde hace más de 28 años, contribuye a la construcción de ciudadanía, la apropiación del espacio público y la democratización de la cultura en Bogotá. (Instituto Distrital de las Artes - Idartes, 2024).

4. OFERTA INSTITUCIONAL

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, adoptada por el Distrito Capital, establece líneas de acción orientadas a promover el envejecimiento activo, la inclusión y el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos y agentes culturales.

Esta política contempla, entre su plan de acción, la implementación de acciones artísticas y culturales intergeneracionales que favorezcan el buen trato, la participación y la expresión creativa de los adultos mayores (Meta 4.1.12). Así mismo, reconoce la importancia de los espacios de encuentro y aprendizaje compartido, a través de diálogos intergeneracionales entre jóvenes y personas mayores, orientados al intercambio de saberes y al fortalecimiento de capacidades (Meta 5.1.18). (Secretaría Integración Social, s,f)

Este plan refleja el compromiso del Distrito con una visión integral del envejecimiento, que no solo vela por el bienestar físico y social de las personas mayores, sino que también promueve su participación en la vida cultural y comunitaria de la ciudad. En este contexto, las expresiones artísticas tradicionales, los saberes acumulados y la memoria colectiva son reconocidos como elementos fundamentales para construir una Bogotá más incluyente, participativa y culturalmente diversa.

El Distrito Capital ha dispuesto una red de Casas de Sabiduría, según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2025) estas casas son espacios orientados al fortalecimiento de la autonomía, la creatividad y el bienestar de las personas mayores. Estas instancias promueven la construcción de redes de apoyo y cuidado comunitario, así como la resignificación de los

proyectos de vida en la vejez y la transformación de imaginarios adversos sobre el envejecimiento.

Desde una perspectiva de derechos y participación activa, las Casas de Sabiduría ofrecen a las personas mayores oportunidades para explorar y potenciar habilidades en múltiples ámbitos: artístico, cultural, educativo, físico y social. Según datos recientes de la Secretaría Distrital de Integración Social, más de 16.400 personas mayores acceden actualmente a los servicios de atención integral en estos espacios, reafirmando su impacto como nodos de inclusión, creatividad y reconocimiento simbólico en el tejido urbano de la ciudad.

Ahora bien, el *Plan Nacional de Cultura*, acompañado por el Plan Estratégico “Ciudad Creativa de la Música”, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.) tiene como propósito fortalecer las prácticas musicales en la ciudadanía y entre los actores del sector. A través de este plan, se busca fomentar el desarrollo económico, aumentar la competitividad de Bogotá y preservar la memoria colectiva mediante la música. También se promueve el acceso y la participación ciudadana en las diferentes expresiones musicales, entendiendo este arte como un motor clave de la economía creativa y cultural.

Además, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” contempla dos metas específicas relacionadas con el programa “Festivales al Parque”, . Para su implementación en este cuatrienio, se ha asignado un presupuesto de \$125.695,21 millones de pesos.

META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUEST AL FINALES 2024
Desarrollar 5500 Intervención(es) y actividades artísticas y culturales que promuevan la interrelación de la ciudadanía con el espacio público como un lugar de encuentro convivencia pacífica y transformación social	99.84%
Entregar 9702 Estímulo(s) reconocimientos, apoyos, incentivos y alianzas estratégicas en el marco de los distintos programas de fomento, ofertados a las 20 localidades, que puedan incluir enfoque poblacional y territorial, que beneficien a agentes, organizaciones y comunidades	91.4%

Fuente: SEGPLAN, 2024

En el 2024, la Secretaría Distrital de Integración Social organizó la campaña “Cuidemos a las personas mayores porque todos vamos pa’ allá – #VejezSinAbandono”, la cual

promueve el respeto, la protección y la inclusión activa de este grupo poblacional en la vida social y cultural de Bogotá.

Como parte de esta estrategia, el mes de agosto fue declarado como el Mes de la Vejez, y durante 2024 se realizaron eventos que visibilizan las capacidades, experiencias y necesidades de las personas mayores. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:

- Fiesta de las Estrellas:* una celebración que congregó a 700 personas mayores, rindiendo homenaje a quienes han alcanzado los 100 años de vida y visibilizando el envejecimiento activo.

- Eventos recreativos y deportivos descentralizados, torneos en las distintas unidades operativas de la Subdirección para la Vejez, promoviendo el bienestar físico.

- Asistencia a eventos teatrales, donde más de 900 personas mayores participaron activamente en funciones culturales en el Teatro Nacional y el Teatro Bernardo Romero Lozano, reafirmando la importancia del arte como vehículo de inclusión y disfrute colectivo.(Secretaría Distrital de Integración Social, 2024)

A pesar de estos avances, es necesario crear un evento que brinde mayor visibilidad y proyección a las expresiones artísticas propias de los adultos mayores. El evento *“Años dorados al parque”* se propone como una iniciativa que articule estos esfuerzos institucionales, con el fin de preservar géneros musicales emblemáticos como el bolero y la balada, al tiempo que se fomenta el encuentro intergeneracional y la apropiación cultural del espacio público.

IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL DEL EVENTO

El evento “Años Dorados al parque” busca generar un impacto positivo en el ámbito cultural, a partir del reconocimiento y la revitalización de los géneros musicales del bolero y la balada. Esta iniciativa, dirigida especialmente a las personas mayores, promueve su inclusión, reconociéndose como agentes de memoria, creación y transmisión de saberes.

Desde el punto de vista social, el evento favorece la integración intergeneracional, al propiciar espacios de encuentro entre jóvenes, adultos y mayores, que permiten fortalecer los vínculos comunitarios y promover el diálogo entre diferentes generaciones. Asimismo, se constituye como una estrategia de prevención del aislamiento y fortalecimiento de la salud mental y emocional de las personas mayores, al brindarles oportunidades de expresión artística, reconocimiento social y participación activa en eventos de ciudad.

En el plano cultural, el evento contribuye a la preservación del patrimonio de Bogotá, rescatando géneros musicales que han sido fundamentales en la configuración de la identidad cultural capitalina. De esta manera, “Años Dorados al parque” se proyecta como

un evento inclusivo, accesible y sostenible, que promueve el bienestar, la creatividad y la cohesión social a través del arte.

POBLACIÓN BENEFICIADA

La principal población beneficiada del evento cultural y musical "años dorados al parque" serán los adultos mayores residentes en Bogotá, entendidas como aquellas con 60 años o más. Esta población representa un grupo significativo y en crecimiento dentro del contexto demográfico de la ciudad, y requiere mayores oportunidades de participación activa en la vida cultural.

El evento también impactará de manera positiva a músicos, agrupaciones y gestores culturales vinculados con géneros tradicionales como el bolero y la balada. Se espera así fortalecer la cadena de valor cultural mediante procesos de formación, circulación y reconocimiento artístico.

Adicionalmente, la ciudadanía general podrá disfrutar de este evento como parte de una estrategia de integración intergeneracional, promoviendo espacios de encuentro entre diferentes edades, el diálogo de saberes y la valoración del legado cultural de las personas mayores.

ZONAS DE ARTE Y EMPRENDIMIENTO (ZAE)

La Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) es una estrategia impulsada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que tiene como objetivo fortalecer la economía cultural y creativa de Bogotá. Este espacio, habilitado dentro de los Festivales al Parque, permite a emprendedores y gestores culturales visibilizar, comercializar y posicionar sus productos y servicios ante miles de asistentes.

En 2024, la ZAE participó en cinco festivales: Hip Hop al Parque, Colombia al Parque, Jazz al Parque, Salsa al Parque y Rock al Parque. Estos espacios reunieron tanto a asistentes como a artistas nacionales e internacionales, y sirvieron como plataforma para el fortalecimiento del tejido económico cultural de la ciudad (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2024).

Los emprendimientos que participaron debían realizar un aporte económico, que osciló entre \$300.000 y \$950.000, para apoyar la logística, dotación técnica y montaje del espacio. Además, se establecieron criterios de selección orientados a garantizar la diversidad, la pertinencia artística y la sostenibilidad de los productos ofrecidos.

Se excluyeron emprendimientos que comercializarán alimentos, bebidas, tabaco, aerosoles, servicios de modificación corporal o productos de terceros, para garantizar un

enfoque alineado con los principios de cultura viva comunitaria (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2024).

La ZAE ha reportado resultados significativos, en el 2023 en el marco del Festival Rock al Parque “se registraron ventas por más de 200 millones de pesos”

IV. MARCO NORMATIVO

A continuación, se citan y organizan, conforme a su jerarquía normativa, las disposiciones legales que guardan relación directa con el objeto del presente proyecto de acuerdo y que constituyen el fundamento jurídico de esta iniciativa por medio de la cual se establece la creación del evento cultural y musical ***Años Dorados al parque.***

Marco constitucional

El presente proyecto de acuerdo se fundamenta en los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de Colombia que garantizan la promoción de la cultura, la participación ciudadana en la vida cultural, y la protección de las personas mayores. En particular, se sustenta en el deber del Estado de fomentar el acceso equitativo al arte, al patrimonio cultural y los espacios de participación activa para todas las generaciones.

Siguiendo esta línea, el Preámbulo de la Constitución establece que el Estado debe asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento y la libertad dentro de un marco jurídico democrático que garantice un orden social justo. En este sentido, el proyecto promueve el acceso a la cultura como un componente esencial del bienestar y desarrollo humano.

En lo que respecta a los artículos específicos de la Constitución Política que guardan relación directa con la presente iniciativa, resulta pertinente destacar los siguientes:

El artículo 1º define a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, lo que implica la garantía de condiciones para el desarrollo integral de las personas mayores, desde un enfoque de derechos y participación activa.

“ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

El artículo 2º establece como fines esenciales del Estado promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

“ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

El artículo 13 consagra el derecho a la igualdad y la obligación del Estado de adoptar medidas en favor de grupos históricamente marginados, como las personas mayores, cuya participación en espacios culturales debe ser garantizada de forma prioritaria y sin discriminación.

“ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”

El artículo 46 protege al adulto mayor y le impone la carga al Estado de protegerlos y asistirlos para promover su integración a la vida activa y comunitaria, alineándose con la iniciativa aquí presentada.

“ARTÍCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.”

El artículo 70 establece que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura para todos los colombianos, y que la cultura en sus diversas manifestaciones es

base de la nacionalidad. Declara también que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.

“ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”

El artículo 71 señala que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres y que el Estado fomentará las manifestaciones culturales del pueblo colombiano en sus distintas expresiones, mediante políticas sostenidas que integren el arte, la memoria, el talento y la identidad colectiva.

“ARTÍCULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.”

Este marco constitucional refuerza el enfoque del presente proyecto de acuerdo, al contemplar el acceso a la cultura como un derecho y al promover la inclusión activa de las personas mayores en espacios de creación, disfrute y reconocimiento artístico, en condiciones de accesibilidad, equidad y respeto por su dignidad.

Marco legal

Además del fundamento constitucional, esta iniciativa se apoya en una base normativa sólida que respalda la obligación del Estado de garantizar los derechos de los adultos mayores y promover una vejez activa y digna.

En primer lugar, la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida cultural de la Nación y promueve la preservación del

patrimonio cultural inmaterial. Esta norma establece que el Estado debe fomentar las expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas como parte de la identidad colectiva.

“ARTÍCULO 1.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: (...)

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

(...)

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

(...)”

“ARTÍCULO 17.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y as demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.”

Por su parte, la Ley 1850 de 2017 establece las normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas mayores y la obligación del Estado de garantizar entornos adecuados y accesibles para la participación de las personas mayores, promoviendo un envejecimiento digno y saludable.

De igual forma, la Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan disposiciones para la protección integral de las personas adultas mayores determina que los entes territoriales deben desarrollar programas culturales, recreativos y artísticos que promuevan la integración social de los adultos mayores y su reconocimiento como sujetos activos de derechos. El objeto de la ley es:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los

Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia.”

Asimismo, la ley ídem, establece en su artículo 4º los principios que orientarán la norma, dentro de los cuales encontramos la participación activa y la independencia, la autorrealización, la formación permanente y la universalidad, que orientan de igual manera la presente iniciativa.

a) Participación Activa. El Estado debe proveer los mecanismos de participación necesarios para que los adultos mayores participen en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre él, con valoración especial sobre sus vivencias y conocimientos en el desarrollo social, económico cultural y político del Estado;

(...)

g). Independencia y autorrealización. El adulto mayor tiene derecho para decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación en el desarrollo social del país. Se les brindará las garantías necesarias para el provecho y acceso de las oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales y recreativas de la sociedad, así como el perfeccionamiento de sus habilidades y competencias;

k). Formación Permanente. Aprovechando oportunidades que desarrollen plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos educativos, de productividad, culturales y recreativos de la sociedad;

m). Universalidad. Los derechos consagrados en la presente ley son de carácter universal y se aplican a todas las personas residentes en el territorio nacional, sin distinción alguna y sin ningún tipo de exclusión social. Sin embargo el estado podrá focalizar las políticas públicas en las poblaciones mas pobres y vulnerables para reducir las brechas económicas, sociales y culturales que caracterizan el país. (...)”

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada mediante Ley 2055 de 2020. Reconoce el derecho de las personas mayores a la cultura, el esparcimiento, el ocio y la recreación. Establece que los

Estados deben facilitar su participación activa en la vida cultural, artística y comunitaria. El Preámbulo de dicha ley establece:

“(…) Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;

(…) Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

(…) "Envejecimiento activo y saludable": Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población. (...)”

A su vez, la norma establece principios orientadores como la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, la independencia, protagonismo y autonomía, la igualdad, la participación integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad y el bienestar y el cuidado.

Por otra parte, la norma ídem establece como deber general del estado adoptar las medidas afirmativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores de la siguiente manera:

“b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena

integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.”

Normas Distritales

En el ámbito distrital, existen instrumentos normativos que respaldan de manera directa la creación del evento *Años Dorados al parque de Bogotá D.C.*, al promover tanto el ejercicio efectivo de los derechos culturales como la inclusión activa de las personas mayores en la vida artística de la ciudad.

En primer lugar, el Acuerdo 440 de 2010, mediante el cual se crea el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, establece como función esencial la ejecución de políticas, planes y programas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales en el Distrito Capital. IDARTES tiene a su cargo la promoción y circulación de diversas manifestaciones artísticas, entre ellas la música, excluyendo únicamente la música sinfónica, académica y el canto lírico. En este marco, el evento *Años Dorados al parque de Bogotá D.C.* se configura como una iniciativa cultural que puede ser articulada con los programas de circulación musical de IDARTES, pues se centra en géneros tradicionales como el bolero y la balada, que hacen parte de la identidad colectiva y la memoria afectiva de generaciones enteras.

Por su parte, el Acuerdo 564 de 2014 institucionaliza la celebración del Mes del Envejecimiento y la Vejez en Bogotá, con el objetivo de reconocer a las personas mayores como actores sociales valiosos y promover una mayor conciencia ciudadana frente al envejecimiento. Esta celebración, coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social, impulsa acciones simbólicas y participativas en torno a la dignificación de la vejez. El proyecto que aquí se propone se alinea con este acuerdo al ofrecer un espacio permanente, accesible y culturalmente significativo para la expresión y el protagonismo de las personas mayores, en sintonía con el enfoque de envejecimiento activo que promueve el Distrito.

Ambos acuerdos aportan elementos clave para sustentar la viabilidad institucional del proyecto y su articulación con la política pública distrital en materia de cultura y envejecimiento.

Finalmente y para cerrar este capítulo de marco normativo es importante mencionar que el conjunto de disposiciones constitucionales, legales e institucionales aquí desarrolladas

ofrece un fundamento jurídico robusto y coherente para la creación del evento cultural y musical Años Dorados al parque de Bogotá D.C.. Esta iniciativa se enmarca en los principios del Estado social de derecho, en el deber del Estado de garantizar el acceso igualitario a la cultura y en el reconocimiento del envejecimiento como una etapa activa, participativa y digna de la vida humana.

El evento propuesto no solo fortalece la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, sino que materializa derechos fundamentales como la participación, la igualdad, la salud emocional y el reconocimiento simbólico, en especial para la población mayor. Así, esta estrategia se articula plenamente con los marcos normativos nacionales y distritales vigentes, promoviendo la inclusión, la memoria colectiva y la cohesión social en Bogotá.

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con el artículo 313, numeral 1 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el concejo de Bogotá cuenta con competencia para reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio así como dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Por lo que el Concejo de Bogotá es competente para discutir y aprobar el presente proyecto de acuerdo.

VI. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que implique un gasto o contemple beneficios tributarios debe explicitar su impacto fiscal y garantizar su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para ello, es obligatorio incluir en la exposición de motivos y en las ponencias correspondientes una estimación de los costos fiscales y la fuente de ingresos adicional destinada a su financiación.

En este sentido, es importante señalar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que requiera ajustes en el marco fiscal de mediano plazo, dado que no conlleva un aumento en el presupuesto del Distrito ni implica la creación de nuevas fuentes de financiación. Esto se debe a que los recursos destinados a la ejecución del presente proyecto de acuerdo ya han sido contemplados dentro del marco fiscal establecido en el Plan de Desarrollo Distrital vigente.

El artículo Artículo 65 del plan de desarrollo “Bogotá, camina segura” está encaminado al Fortalecimiento de los Festivales al Parque que mantendrán su carácter público.

Artículo 65: La Administración Distrital fortalece y consolida el programa de Festivales al Parque de Bogotá como plataforma creativa y espacio de encuentro entre artistas, productores, emprendedores, sectores comerciales de economías sociales, y ciudadanía en general, que contribuye al desarrollo económico, turístico, artístico, cultural y social de la ciudad en el corto y mediano plazo. El sector Cultura, Recreación y Deporte en los festivales al parque impulsará una estrategia de marketing y promoción de los eventos generando alianzas con entidades públicas y privadas para obtener ingresos adicionales incluyendo la comercialización de productos y servicios, publicidad, entre otras acciones de mercadeo, con el objetivo de aumentar la visibilidad y participación de dichos eventos, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de los mismos.

VII. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 476 DE 2025

PRIMER DEBATE

“Por el cual se crea el Evento Cultural y Musical Años Dorados al parque en la ciudad de Bogotá D.C.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Objeto Crear el evento cultural y musical Años Dorados en la ciudad de Bogotá D.C., como una estrategia pública de promoción del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y del envejecimiento activo, orientado a preservar el bolero y las baladas como expresión artística de identidad y memoria colectiva.

ARTÍCULO 2. Responsabilidad El Sector de Cultura Recreación y Deporte, se encargará de coordinar y llevar a cabo las acciones, actividades, convocatorias y demás disposiciones que se consideren necesarias para realizar el evento cultural y musical Años Dorados al parque, con el propósito de promover y preservar el bolero y las baladas en la capital. El instituto Distrital de las Artes – IDARTES se encargará de habilitar, gestionar los espacios cerrados (teatros o salas concertadas) en los que se llevará a cabo el evento.

ARTÍCULO 3. Difusión y articulación interinstitucional. Con el propósito de garantizar y facilitar la asistencia al evento de toda la ciudadanía, la secretaría de cultura, la secretaría de integración social, las alcaldías locales y los Consejos Locales de Cultura, coordinarán a través de los distintos programas y proyectos la participación del adulto mayor al evento.

Canal Capital, o la entidad distrital que cumpla funciones equivalentes en materia de comunicación pública, será la encargada de apoyar la difusión masiva del evento Años Dorados al parque, promoviendo su cobertura en medios institucionales y garantizando la visibilización de las personas mayores como actores culturales activos y portadores del patrimonio musical.

ARTÍCULO 4. Periodicidad. La administración distrital establecerá anualmente la programación del evento cultural y musical Años Dorados al parque en la ciudad Bogotá D.C., de libre acceso para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la agenda cultural, disponibilidad presupuestal y demás acciones necesarias para la realización del evento.

ARTÍCULO 5. Propósitos. Los propósitos del evento cultural y musical Años Dorados al parque en la ciudad de Bogotá D.C., serán como mínimo los siguientes:

1. Preservar el género musical bolero en la cultura en las futuras generaciones.
2. Reconocer y visibilizar la labor de los músicos y compositores del género
3. Promover los nuevos talentos, visibilizando a los artistas locales, distritales y nacionales.
4. Fomentar la participación activa de personas mayores como intérpretes, compositores, presentadores del evento, reconociendo su rol en la transmisión de saberes culturales.

ARTÍCULO 6. Espacios accesibles. La Administración Distrital procurará realizar el evento “Años Dorados al Parque” en espacios cerrados, culturales y públicos existentes, que cumplan con criterios de accesibilidad, comodidad y seguridad para las personas mayores, como lo establece la normatividad vigente.

ARTÍCULO 7. Zonas de Arte y Emprendimiento. En el marco del evento, la Administración Distrital procurará priorizar en su estrategia ZAE o la estrategia vigente a los emprendimientos de personas mayores. Generando un espacio destinado a la promoción, circulación y comercialización de bienes y servicios culturales, artesanales y creativos desarrollados por personas mayores.

ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

IX. Bibliografía

Organización Mundial para la salud. (OMS). (2024). Envejecimiento y salud. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024, abril 15). *Rock al Parque 2024 con datos curiosos de este evento histórico*. Bogotá.gov.co. <https://bogota.gov.co/que-hacer/cultura/rock-al-parque-2024-con-datos-curiosos-historico>

Instituto Distrital de las Artes - Idartes. (2024, noviembre 21). *Más de 650.000 personas asistieron a los Festivales al Parque 2024.* <https://www.idartes.gov.co/es/noticias/mas-de-650000-personas-asistieron-los-festivales-al-parque-2024> ([Noticias] Más de 650.000 personas asistieron a los Festivales al Parque 2024 | Idartes)

Secretaría Distrital de Integración Social. (s.f.). *Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez*. <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-envejecimiento-y-la-vejez> (¿Qué es la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez?)

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2025, marzo 24). *Casas de la Sabiduría: más de 16.400 personas mayores reciben atención*. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/centros-casas-de-la-sabiduria-en-bogota-atienden-personas-mayores> (Casas de la Sabiduría: más de 16.400 personas mayores ... - Bogotá)

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (s.f.). *Plan Estratégico Ciudad Creativa de la Música Bogotá 2018–2021*. <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-creadora-internacional/bogota-ciudad-creativa-de-la-musica-de-unesco/plan-estrategico-ciudad-creativa-de-la-musica>

Secretaría Distrital de Integración Social. (2024, agosto 18). *700 personas mayores de 60 años vivieron una gala de Hollywood para conmemorar el Mes del Envejecimiento y la Vejez*. <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/101-noticias-vejez/6791-700-personas-mayores-de-60-anos-vivieron-una-gala-de-hollyw>

Secretaría Distrital de Integración Social. (2024, agosto 18). *700 personas mayores de 60 años vivieron una gala de Hollywood para conmemorar el Mes del Envejecimiento y la Vejez*. <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/101-noticias-vejez/6791-700-personas-mayores-de-60-anos-vivieron-una-gala-de-hollywood-para-conmemorar-el-mes-del-envejecimiento-y-la-vejez>

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (2023). *Ciudad Creativa de la Música: Estrategia para el fortalecimiento del ecosistema musical en Bogotá*. IDARTES.

Instituto Distrital de las Artes – Idartes. (2023). Idartes abre invitación cultural para Festivales al Parque 2024. Recuperado de: <https://www.idartes.gov.co/es/noticias/idartes-abre-invitation-cultural-para-festivales-al-parque-2024>

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD. (2024). Invitación cultural para participar en la Zona de Arte y Emprendimiento - Festivales al Parque 2024. Recuperado de: <https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/700>

Instituto Distrital de las Artes - Idartes. (2023). ¡Festival histórico! Más de 390 mil asistentes en Rock al Parque. Recuperado de: <https://www.idartes.gov.co/es/noticias/festival->

historico-mas-de-390-mil-asistentes-en-rock-al-
parque#:~:text=La%20Zona%20de%20Arte%20y,de%20200%20millones%20de%20peso
S.

PROYECTO DE ACUERDO NO 477 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PROMOVER LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL”****I. OBJETO**

El presente proyecto tiene como objeto adoptar medidas para la racionalización de trámites y el fortalecimiento de la democratización en el uso y aprovechamiento de los escenarios deportivos del Distrito Capital.

II. MARCO NORMATIVO

A continuación, se citan y organizan, conforme a su jerarquía normativa, las disposiciones legales que guardan relación directa con el objeto del presente proyecto de acuerdo y que constituyen el fundamento jurídico de esta iniciativa.

Marco constitucional

Este proyecto de acuerdo se fundamenta en los derechos y normas constitucionales asociados al acceso equitativo a los bienes y servicios públicos, la participación ciudadana, la racionalización de trámites administrativos, así como el derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del espacio público, de la siguiente manera:

El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia reconoce el deporte y la recreación como derechos sociales, señalando que su práctica debe ser promovida y fomentada por el Estado, garantizando el acceso de todas las personas sin discriminación.

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.”

El artículo 82, consagra el deber del Estado de proteger el espacio público:

*“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por **su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular**.”*

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”

Por su parte, el artículo 365 dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y deben prestarse con criterios de eficiencia, calidad y racionalización.

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.”

El artículo 209 establece que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, moralidad, economía, imparcialidad y publicidad.

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

Finalmente, el Artículo 93 incorpora al ordenamiento interno los tratados internacionales de derechos humanos. Entre los instrumentos internacionales encontramos el Pacto de San José, ratificado por Colombia el 28 de mayo de 1973 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (PIDESC) ratificado el 29 de octubre de 1969. Estos mecanismos internacionales, consagran el acceso equitativo a los

bienes públicos y el derecho de las personas a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del desarrollo, lo cual incluye el acceso al deporte y la recreación.

Marco legal

En primer lugar, la Ley 9 de 1989 en su artículo 7° establece que:

"(...) los alcaldes municipales y distritales reglamentarán mediante decreto lo concerniente a la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. Así mismo, podrán entregar a particulares la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de uso público, utilizando el mecanismo contenido en el Capítulo XVI de la Ley 489 de 1998. Igualmente podrán expedir actos administrativos que permitan la ocupación temporal de dichos bienes, considerando en ambos casos lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución."

Seguidamente, la Ley 489 de 1998 regula la organización y funcionamiento de la administración pública, y promueve la participación ciudadana y la racionalización de trámites administrativos.

La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

Por otra parte, la Ley 181 de 1995, conocida como la Ley del Deporte, establece el marco normativo para la organización, promoción y fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en Colombia. En su artículo 3, la ley define como uno de sus objetivos especiales:

"Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados."

Esta disposición resulta especialmente relevante en el contexto del presente proyecto de acuerdo, en tanto que la racionalización de trámites y la democratización en el uso de los

escenarios deportivos del Distrito Capital se constituyen en mecanismos efectivos para garantizar el acceso equitativo a dichos espacios, promoviendo con ello hábitos saludables, integración comunitaria y bienestar social, en armonía con los fines y principios de la Ley 181 de 1995.

Adicionalmente la norma en su artículo tercero numeral 12 establece la importancia de crear espacios deportivos y procurar su utilización.

*12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, **procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación.***

Finalmente, la Ley 962 de 2005 establece disposiciones para la racionalización de trámites administrativos, con el fin de hacer más eficiente el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado.

*“La presente ley tiene por objeto **facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública**, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política.”*

Entre los derechos que las personas tienen frente a sus relaciones con la administración están:

(...)

“A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo.

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos.

A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión.

A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

A cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.”

Normatividad distrital

En cuanto a la normatividad distrital, hay cuatro normas clave que le dan sustento jurídico a esta iniciativa. En primer lugar, el Acuerdo Distrital 878 de 2023 que en su artículo 76 derogó el Acuerdo Distrital 13 de 2000 que reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital.

El Acuerdo 878 de 2023, resulta relevante puesto que establece la necesidad de garantizar la participación ciudadana de manera incluyente, lo cual tiene relación directa con la democratización de los espacios deportivos. Recordemos que esta iniciativa busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder y participar equitativamente en actividades deportivas, promoviendo así la integración social y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

Artículo 3. OBJETIVOS. Son objetivos del Sistema Distrital de Planeación los siguientes:

2. Garantizar una participación ciudadana de los diferentes actores sociales de manera inclusiva e incluyente que logre representar la diversidad de Bogotá como Distrito Capital.

Por otra parte, el Decreto Distrital 555 de 2021 por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. Este decreto reconoce los parques como elementos de la Red Estructurante del Distrito, y le atribuye al IDRD la gestión de estos espacios.

“Artículo 67. Parques contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Parques de Borde. Son las áreas destinadas a las actividades de disfrute ambiental y conservación y actividades recreativas y deportivas al interior del suelo urbano y rural, las cuales deben mantener la

funcionalidad y la conectividad ecológica de la Estructura Ecológica Principal. Los parques de la red estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal son todos los que en el anexo “Inventario de Espacio Público Peatonal y Para el Encuentro” se señalan como metropolitanos y los zonales con tipología contemplativa.”

Categoría	Elemento			Declaratoria	Instrumento	Responsable de la administración
Parques contemplativos y de la Red Estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Parques de Borde	Parques contemplativos y de la red estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal			POT	Proyecto específico	IDRD
	Parques de borde	Red de parques del Río Bogotá	Parque lineal del río Bogotá	Acuerdo CAR 37 de 2018	Acuerdo CAR 37 de 2018	CAR
			Áreas complementarias para la adaptación al cambio climático	POT	Proyecto específico	SDA-IDRD
		Parque de Borde de los Cerros Orientales		Resolución 463 de 2005 y Decreto Distrital 485 de 2015	Plan de Manejo - Decreto 485 de 2015	IDRD (SDA)
		Parque de borde de Cerro Seco		POT	Proyecto específico	IDRD (SDA, IDPC, SDE)

El decreto ídem, aclara que la reglamentación de los Parques Contemplativos y parques de la red estructurante que hacen parte de la estructura ecológica principal hacen parte del Sistema de Espacio Público Peatonal y por tanto, hacen parte de componente urbano del plan.

En este sentido, la sección 1 del Decreto 555 de 2021, establece como política Distrital del espacio público y objetivos del sistema de espacio público peatonal para el encuentro lo siguiente:

*“1. Aumentar el Espacio Público **con condiciones adecuadas y equitativamente en todo el territorio distrital.***

*2. **Restituir jurídica, físico-espacial, ambiental, social y culturalmente, los espacios públicos en condición inadecuada para su uso, goce y disfrute por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta el acceso universal y la igualdad de oportunidades.***

3. Aumentar la calidad ambiental del espacio público para reverdecer a Bogotá, adaptarse y mitigar el cambio climático.

4. Consolidar los lineamientos e instrumentos necesarios para la sostenibilidad del espacio público y la gestión e implementación del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.”

En cuanto a los componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro, el artículo 90 del mencionado Decreto determina que este espacio estará constituido por “áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizada en suelo urbano y rural **cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte,** la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza que permiten garantizar una circulación y recorridos seguros autónomos y confortables”. Entre los espacios que conforman este sistema encontramos los Parques de la Red Estructurante y los Parques de Proximidad que son administrados por el IDRD y se definen así:

“1. Parques de la Red Estructurante. Corresponden a los denominados en el inventario como Parques Metropolitanos y Zonales y en general, aquellos de más de una hectárea que proveen una oferta cualificada para el aprovechamiento del tiempo libre que dan soporte a la escala regional y distrital, no solo en términos de las interacciones humanas que ahí tienen lugar, sino también por su aporte a la conectividad ambiental y ecosistémica del territorio bogotano.

2. Parques de la Red de Proximidad. Son principalmente aquellos de menos de una hectárea, que proveen una oferta desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre a escala local, atendiendo criterios de proximidad.”

Dentro de las estrategias del sistema de espacio público peatonal orientado al encuentro, se destaca la sostenibilidad y la gestión enfocada en preservar los valores, calidades y formas de uso del espacio público, con el fin de garantizar su adecuado aprovechamiento, goce y disfrute por parte de la ciudadanía. Esta orientación normativa guarda plena coherencia con el proyecto de acuerdo en curso, en la medida en que la democratización

de los espacios deportivos contribuye directamente a una gestión integral del espacio público, tal como lo establece el marco regulatorio vigente.

“Artículo 91. Estrategias del Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. Entendiendo la función social del urbanismo y reiterando la visión del espacio público como elemento estructurante del territorio y por tanto de la ciudad, son estrategias del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro las siguientes: (...)

*4. Sostenibilidad y gestión orientada a salvaguardar los valores, calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute con enfoque de género. Reconociendo la necesidad de articulación interinstitucional para la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones sobre el espacio público, que **identifiquen instrumentos y normas que permiten alcanzar una gestión integral del espacio público.**”*

Asimismo, la Resolución 379 de 2023, expedida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se integra al marco normativo aplicable al establecer directrices para el aprovechamiento económico de los escenarios deportivos, bajo criterios de transparencia, equidad de género, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Dicha normativa fue modificada posteriormente por la Resolución 344 de 2025, también emitida por el IDRD, la cual constituye la disposición distrital más reciente en esta materia. Esta última resolución refuerza el sustento jurídico de la iniciativa propuesta, al actualizar el marco regulatorio que rige el aprovechamiento económico de los espacios administrados por la entidad. De acuerdo con el artículo primero de la Resolución ídem:

“ARTÍCULO PRIMERO. Modificar las Resoluciones 277 de 2007, 583 de 2008, 338 de 2010, 316 de 2013, 613 de 2014, 190 de 2015, 333 de 2018, 310 de 2019 y 701 de 2019, posteriormente ajustadas mediante la Resolución 178 del 2020 y 189 de 2021 y la Resolución 379 de 2023 en lo relacionado a las definiciones, características condiciones y requisitos de las actividades de aprovechamiento económico en el espacio público administrado por el IDRD, la definición y procedimientos instrumentos para la administración del aprovechamiento económico así como la definiciones, características y fórmula de retribución económica de los espacios públicos administrados por el IDRD, y compilar en la presente Resolución la reglamentación Del aprovechamiento económico del espacio público administrado por el IDRD.

PARÁGRAFO. Hacen parte de esta resolución los siguientes documentos: Anexo 1. Protocolo de aprovechamiento económico (PAE), Anexo 2. Guía para la constitución de pólizas relacionadas con los instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público administrado por el IDRD. Anexo 3 Documento diagnóstico actualización del protocolo de aprovechamiento económico del Instituto distrital de recreación y deporte.

De acuerdo con el anexo 1 de la resolución (Protocolo de Aprovechamiento Económico PAE) el objeto de esta resolución es *“Establecer las condiciones y requisitos de préstamo, los instrumentos de gestión y los requisitos para el aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD, así como las condiciones para la gestión de actividades de aprovechamiento económico permitidas, en condiciones de transparencia, equidad de género, inclusión social, sostenibilidad ambiental y probidad en la actuación de la administración pública, con estricta observancia de los fines esenciales del Estado”*. De acuerdo con el mismo documento, las disposiciones reglamentan las actividades permitidas dentro del aprovechamiento económico del espacio público, entre ellas las actividades deportivas.

El PAE cuenta con los siguientes objetivos específicos:

- a. Brindar a la ciudadanía un instrumento de fácil comprensión, que defina las condiciones generales para el uso, goce, administración y/o aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD.*
- b. Definir los instrumentos de gestión de aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD e indicar las condiciones para ser beneficiario de cada uno de ellos, sin perjuicio de los que para el efecto determine la normatividad.*
- c. Establecer lineamientos para el cálculo de valores de retribución económica del aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD y su respectivo esquema, para que contribuya al mantenimiento y sostenibilidad de los parques y escenarios, entre otros.*

Así mismo, el mencionado documento también establece los principios bajo los cuales se orientará la gestión del PAE, entre ellos la equidad, la universalidad, la participación y la transparencia:

“2.2 Principios orientadores de la gestión del aprovechamiento económico del IDRD

(...)

b. Igualdad y no discriminación: el espacio público es universal. En virtud de este principio, el IDRD garantizará el acceso a todas las personas, en igualdad de condiciones, a los espacios administrados, salvo las situaciones reguladas en el presente protocolo

e. Principio de favorabilidad: consiste en aplicar a los préstamos para el uso y aprovechamiento económico del espacio público bajo la administración de la entidad, el aporte institucional que el beneficiario considere más favorable.

f. Principio precautorio: para los fines del presente protocolo, este principio implica la posibilidad de considerar y analizar el contexto económico, político, jurídico, social, cultural, de salud pública y seguridad de la ciudad, para la toma de decisiones institucionales, en el marco de la gestión del aprovechamiento económico, que incluyan la adopción de medidas transitorias en cuanto al esquema de retribución, en aras de afrontar casos fortuitos.

g. Principio de integralidad: el presente protocolo contempla una visión integral de la retribución, derivada del aprovechamiento económico de los espacios administrados por el IDRD, que puede contemplar diferentes elementos, como el recaudo en efectivo, los beneficios que representa para la comunidad y el sector deportivo y recreativo de la ciudad, entre otros.

h. Principio de reciprocidad: de acuerdo con el presente protocolo, este principio garantiza que las actividades con motivación económica que desarrolle un particular en el Sistema Distrital de Parques, deberán retribuir económicamente al IDRD, y que las que carezcan de dicha motivación sean exentas.

i. Principio de transparencia: en virtud del presente principio, los responsables de los escenarios deberán reportar mensualmente la totalidad de los usos, con y sin aprovechamiento económico, de los escenarios administrados por el IDRD. ”

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene como propósito la racionalización de trámites y el fortalecimiento de la democratización en el uso y aprovechamiento de los escenarios deportivos del Distrito Capital. La administración y distribución de estos espacios han sido objeto de múltiples desafíos, entre ellos la falta de transparencia en los procesos de asignación, la existencia de trámites innecesarios que dificultan el acceso a la ciudadanía y la ausencia de criterios claros para garantizar una distribución equitativa de los espacios.

Actualmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es el encargado de la gestión de los escenarios deportivos en Bogotá, según lo establece el Decreto 555 de 2021. Sin embargo, el proceso de asignación de espacios ha evidenciado dificultades administrativas y barreras burocráticas que afectan el acceso de ciudadanos, clubes deportivos y organizaciones comunitarias. De acuerdo con la Resolución 379 de 2023, el aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD debe garantizar condiciones de transparencia, equidad de género, inclusión social y sostenibilidad ambiental, principios que requieren fortalecimiento a través de medidas concretas.

a. Contextualización parques y escenarios deportivos en Bogotá

En atención a las competencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, de acuerdo con lo indicado en el documento “Sistema de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro del Componente Urbano” soporte del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”; los elementos del espacio público conocidos como parques, administrados por el IDRD, se catalogan como Parques de Red Estructurante y Parques de la Red de Proximidad:

“5.1.2.1 Parques de la red estructurante: tienen un reconocimiento en el modelo de ordenamiento a escala urbana y regional. Cumplen una función ambiental enfocada en mantener el equilibrio entre las áreas ocupadas y libres de la estructura urbana al

tiempo que pueden generar conectividad con la estructura ecológica y los sistemas urbanos. Garantizan una variada oferta recreativa, deportiva y cultural en el ámbito urbano y regional y cuentan con infraestructuras de gran escala para albergar mayor población. Se articulan con el transporte público colectivo de integración urbana y regional que facilita el acceso de los usuarios. Reúnen los denominados parques metropolitanos y zonales del Decreto 190 de 2004.

5.1.2.2 Red de proximidad Parques de la red de proximidad: ofrecen espacios para el desarrollo de actividades principalmente recreativas cercanas a la población en el contexto barrial. Por encontrarse en el ámbito local deben proveer una oferta diversa dirigida principalmente a la población de primera infancia, infancia y adultos mayores, así como facilitar la accesibilidad de la población a través de diferentes medios de transporte, priorizando la accesibilidad mediante infraestructura peatonal, en bicicleta y a través del sistema de transporte público colectivo en un rango de proximidad. Reúnen los denominados parques vecinales y de bolsillo del Decreto 190 de 2004 así como las identificadas como zonas verdes en el inventario de inmuebles del Distrito”⁸.

El IDRD ejerce administración directa con responsabilidades de mantenimiento a los parques de la Red Estructurante, es decir Parque Regional, Parques Metropolitanos, Parques Zonales y Escenarios especiales; parques contemplativos y de la red estructurante que hacen parte de la Estructura Ecológica; y Parques de Borde.

Por su parte, la atención y mantenimiento a parques vecinales y de bolsillo (Parques de la Red de Proximidad) son competencia de las Alcaldías Locales, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 544 de 2012, modificado por el Decreto 219 de 2013 y el Acuerdo 740 de 2019, que en su artículo 5, literal 4 “Competencias de los Alcaldes Locales”, reza lo siguiente: “Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo”; según las disposiciones para la ejecución de obras con cargo al presupuesto del Fondo de

⁸ Documento técnico de soporte Plan de Ordenamiento Territorial, Libro 2, Componente Urbano, Julio 2021, pág 31.

Desarrollo Local; así como las gestiones relacionadas con la seguridad, la convivencia y la protección del espacio público en estos espacios.

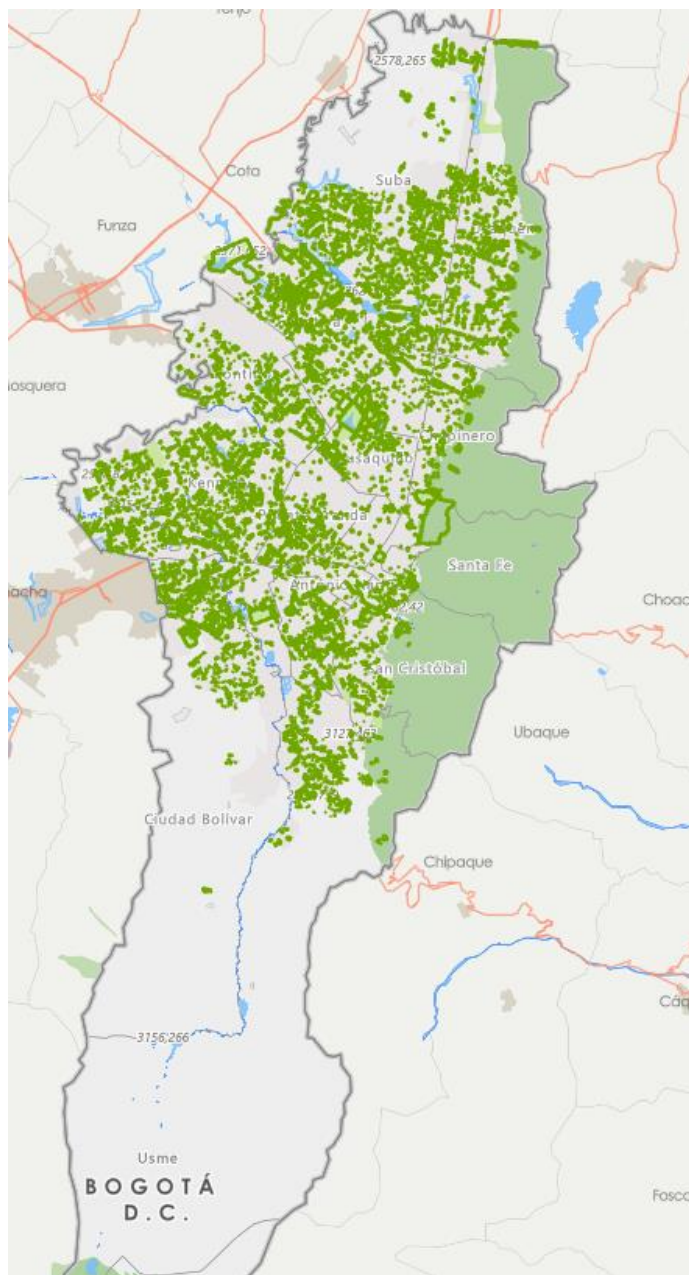
En este sentido, el IDRD cuenta 5.294 escenarios deportivos en la ciudad de Bogotá⁹, dentro de los cuales cuentan con 92 parques en la red de parques estructurantes, ubicados de la siguiente manera:

TABLA 1: Elaboración propia con base en la información brindada por el IDRD

MAPA SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS EN BOGOTÁ

PARQUES ESTRUCTURANTES POR LOCALIDAD			
BOSA (10)	Parque Campo Verde		Parque Gimnasio del Sur
	Parque El Recreo		Estadio Olaya Herrera
	Parque Tibanica	USME (6)	Parque Bosque San Carlos
	Parque Autopista Sur		Parque Virrey Sur
	Parque Urbanización La Esperanza		Parque La Andree
	Parque Claretania		Parque La Aurora II
	Parque Palestina		Parque San Cayetano
	Parque Naranjos		Parque Valles de Cafam
ENGATIVA (9)	Parque El Porvenir	BARRIOS UNIDOS (5)	Parque Villa Alemana
	Parque San Jose de Maryland		Parque de los Novios
	Parque La Florida		Parque Deportivo El Salitre
	Parque Villas de Granada		Complejo Acuático Simón Bolívar
	Parque El Carmelo	PUENTE ARANDA (5)	Plaza de Artesanos
	Parque La Serena		Parque Canal del Río Negro
	Parque San Andrés		Unidad Deportiva La Alquería
	Parque Villa Luz		Parque Ciudad Montes
KENNEDY (9)	Parque Juan Amarillo	LOS MÁRTIRES (4)	Parque El Jazmín
	Parque Bonanza		Parque Ecológico Aguaviva
	Parque Tabora		Parque Milenta Tejar San Eusebio
	Parque La Amistad		Parque Eduardo Santos
	Parque El Tintal	USAQUÉN (4)	Parque El Renacimiento
	Parque Patio Bonito		Parque de la Reconciliación
	Parque Dindalito Bellavista		Parque Santa Isabel
	Parque Cayetano Cañizares		Parque El Country
SUBA (9)	Parque Timiza	ANTONIO NARIÑO (3)	Parque Servita
	Parque Marsella Costado Norte		Parque Altablanca
	Parque La Igualdad		Parque La Vida
	Parque Clima Jiménez		Parque La Fragua
	Parque San José De Bavaria	FONTIBÓN (3)	Parque Villa Mayor
	Parque Niza XII		Parque Ciudad Jardín
	Parque Atabanza		Parque Atehuelpa
	Parque Casa Blanca		Parque Zona Franca
CIUDAD BOLIVAR (6)	Parque del Indio o de Las Cometas	SAN CRISTÓBAL (3)	Parque Sauzalito
	Parque Morato		Parque San Cristóbal
	Parque La Gaitana		Parque Deportivo Primero De Mayo
	Parque Tibabuyes	SANTAFE (3)	Parque La Victoria
	Parque Fontanar del Río		Parque Tercer Milenio
	Parque Altos De La Estancia		Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
	Parque Illimani		Parque La Independencia - Bicentenario
	Parque El Taller	TEUSAQUILLO (3)	Parque Simón Bolívar
RAFAEL URIBE URIBE (6)	Parque Arboleda Alta		Parque Virgilio Barco
	Parque Candelaria La Nueva	CHAPINERO (2)	Parque Nicolás de Federman
	Parque La Joya		Parque Gustavo Uribe Botero
	Parque Pijaos		Parque de los Hippies
	Parque Molinos II	TUNJUELITO (2)	Parque El Tunal
	Parque Quiroga		Parque Nuevo Muzú

⁹ Anexo inventario detallado de los escenarios deportivos de la ciudad de Bogotá – IDRD - 2025



Mapa 1: Sistema Distrital de Parques y Escenarios - IDRD

Actualmente la localidad de Bosa encabeza la lista con 10 parques estructurantes, seguido de las localidades de Engativá, Kennedy y Suba las cuales cuentan con 9 parques, en tercer lugar las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, y Usme con 6 parques, las localidades de Barrios Unidos y Puente Aranda que cuentan con 5 parques, los Mártires y

Usaquén con 4 parques estructurantes, Antonio Nariño, Fontibón San Cristóbal, Santafé y Teusaquillo con 3 parques en su localidad y por último Chapinero y Tunjuelito con 2 parques.

b. Procedimiento y condiciones para la Asignación, Préstamo y Alquiler de Escenarios Deportivos

Para acceder a los escenarios deportivos, es necesario realizar una reserva o solicitar un permiso previo. El uso de estos espacios es gratuito cuando se destina a actividades recreativas sin fines comerciales, como encuentros deportivos entre amigos o familiares. Sin embargo, los clubes y escuelas que ofrecen cursos o entrenamientos a cambio de una tarifa deben pagar un alquiler, dado que están utilizando el espacio con un propósito lucrativo. Asimismo, quienes organicen torneos que incluyan árbitros y uniformes deberán cubrir una tarifa establecida para el uso del escenario. Estas tarifas diferenciadas se establecen según el tipo de usuario

Es importante tener en cuenta que el préstamo o alquiler de estos escenarios está sujeto a disponibilidad. En este sentido la asignación por grupo o persona no podrá superar una hora. Si se quiere utilizar el espacio por más tiempo, es necesario obtener un nuevo turno.

Para evitar el subarriendo, las personas que soliciten el espacio deben ser las mismas que la utilicen. No está permitido que los solicitantes se retiren del lugar y cedan el espacio a terceros.

Para hacer uso del escenario deportivo, es necesario presentar la cédula de ciudadanía y registrar los siguientes datos de cada persona que participará en la actividad:

- Nombre completo
- Número de celular y teléfono fijo
- Dirección de residencia

- Correo electrónico

Estos datos estarán sujetos a verificación por parte del IDRD.¹⁰

Actualmente la solicitud del permiso para el uso de los escenarios deportivos se debe realizar ingresando al portalciudadano.idrd.gov.co, allí se selecciona el espacio a reservar y se realiza la solicitud formal especificando el tipo de actividad, número de asistentes y requerimientos específicos. El IDRD verifica el cumplimiento de los requisitos, la disponibilidad del escenario y la naturaleza del evento o actividad.

Sin embargo, completar estas solicitudes se ha vuelto cada vez más difícil debido a las constantes fallas en el Portal Ciudadano. Gran parte del tiempo, esta plataforma presenta errores o se encuentra en mantenimiento, lo que impide que los usuarios puedan concretar su solicitud y obtener el permiso a tiempo para el uso de los espacios deportivos. Estas dificultades han generado múltiples inconformidades, las cuales se reflejan en el reporte de PQRs del Portal Ciudadano, proporcionado por el IDRD y presentado a continuación.

REPORTE - PQRSD PORTAL CIUDADANO 2023 - 2024

Asunto	Año 2023	Año 2024
Fallas ingreso al portal ciudadano	32	7
Fallas en el código de verificación para el registro o inicio de sesión	26	3
Fallas para realizar pagos en la plataforma	2	2
Fallas en la inscripción a los servicios	2	3

Tabla 2: Elaboración propia con base en la información brindada por el IDRD.

Para el año 2023 se tuvo un total de 62 PQRs liderando las fallas al ingresar al portal ciudadano con 32 reportadas, seguido de las fallas en el código de verificación para

¹⁰ <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/como-reservar-una-cancha-sintetica-en-el-distrito-con-el-idrd>

registrarse o iniciar sesión en la plataforma con 26, en tercer lugar, se encuentran las fallas para realizar pagos de los servicios en las plataformas con 2 fallas reportadas y por último las fallas en la inscripción a los servicios ofertados con 2 reportadas. Aunque en el 2024 disminuyeron significativamente los reportes, las fallas al ingreso del portal ciudadano IDRD siguen siendo las más reportadas.

c. Criterios de distribución

La asignación de los escenarios deportivos se fundamenta en criterios que buscan optimizar su uso y garantizar que diferentes sectores de la población puedan acceder a ellos. Entre estos criterios, se incluyen:

1. **Tipo de usuario:** Se da prioridad a instituciones educativas, ligas deportivas y organizaciones comunitarias, considerando su impacto social y formativo.
2. **Disponibilidad del escenario:** La asignación depende de la programación previa y de los horarios disponibles en cada escenario.
3. **Capacidad del escenario:** Se evalúa el aforo y las condiciones de cada espacio para garantizar un uso adecuado según la cantidad de usuarios.
4. **Equidad en el acceso:** Se busca distribuir los escenarios de manera equitativa entre diferentes localidades, evitando la sobreutilización de ciertos espacios en detrimento de otros.
5. **Finalidad del uso:** Se priorizan actividades de formación deportiva, torneos organizados y eventos comunitarios sobre el uso con fines comerciales.

Estos criterios y procedimientos buscan hacer más eficiente la gestión de los escenarios deportivos y promover un acceso equitativo, evitando la concentración del uso en ciertos grupos y garantizando la transparencia en la asignación. Sin embargo, la existencia de trámites burocráticos y posibles inequidades en la distribución refuerzan la necesidad de optimizar el proceso, como lo plantea el proyecto de acuerdo en discusión.

Finalmente para la entrega del escenario se asignan responsables para verificar que el uso del escenario cumpla con las normas establecidas y se haga un correcto mantenimiento después de su uso.

Para préstamo y alquiler a ciudadanos, escuelas u organizaciones se ofrecen los siguientes espacios en la ciudad de Bogotá:

ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA PRESTAMO Y ALQUILER	
Escenarios	Numero de escenarios
Canchas de grama sintética	179
Asadores	35
Canchas de grama natural	33
Canchas de Tenis	63
Gimnasios	4
Piscinas	11

Tabla

3: Elaboración propia con base en la información brindada por el IDRD.

En la tabla se destaca una mayor disponibilidad de canchas de grama sintética (179), lo que sugiere una alta demanda de estos espacios para la práctica deportiva. En contraste, los gimnasios (4) y las piscinas (11) tienen una oferta significativamente menor, lo que podría indicar limitaciones de infraestructura o menor frecuencia de uso en comparación con otros escenarios. Asimismo, la cantidad de asadores (35) y canchas de tenis (63) refleja una oferta diversificada para actividades recreativas y deportivas. En general, los datos muestran una priorización de escenarios para deportes de equipo, aunque con una oferta relativamente equilibrada en distintos tipos de espacios.

d. Centros de Felicidad (CEFE) en Bogotá: Espacios para la Recreación, el Deporte y la Cultura

Los Centros de Felicidad (CEFE) son una iniciativa reciente en Bogotá que se han convertido en íconos arquitectónicos y espacios de integración comunitaria. Su objetivo es brindar a la ciudadanía una variada oferta recreativa, cultural y deportiva sin distinción de edad, género o capacidad económica.

Desde el año 2020, estos espacios han estado disponibles para su uso y alquiler, permitiendo a la comunidad disfrutar de instalaciones de alta calidad en diferentes localidades de la ciudad.

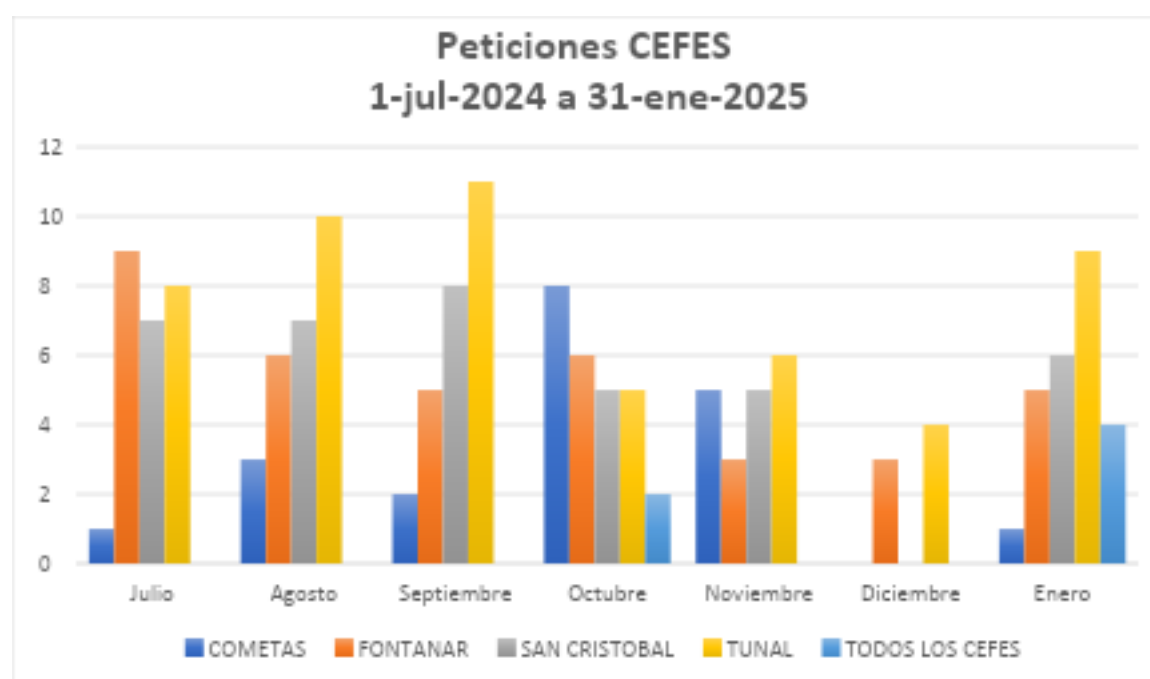
Actualmente se encuentran terminados y entregados los Centros Felicidad Tunal, Fontanar del Río, Centro de Felicidad Cometas y San Cristóbal. En obra se encuentra el Centro de Alto Rendimiento manzana del cuidado del Porvenir Gibraltar.

Oferta de los Centros de Felicidad

- **Espacio deportivo:** Incluye una piscina olímpica, piscina recreativa, polideportivo y gimnasio completamente equipado para entrenamientos funcionales, de fuerza y cardio. Además, estos escenarios están diseñados para favorecer la práctica lúdica y la actividad física en la comunidad.
- **Espacio recreativo:** Cuenta con salones de uso múltiple, salas de aprendizaje y una ludoteca infantil destinada a niños de 0 a 5 años, promoviendo el desarrollo físico, motriz y cognitivo. Estos espacios están diseñados para fomentar la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de manera sana y enriquecedora.
- **Espacio cultural:** Ofrece escenarios lúdicos y participativos como bibliotecas, salones de clase, salas de artes plásticas, danza, música y una sala de cine, con el propósito de fortalecer el aprendizaje, la creatividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Estos espacios representan un avance en la democratización del acceso a la recreación y el deporte, garantizando oportunidades de bienestar y desarrollo para toda la comunidad bogotana.¹¹

A continuación, se presentan las peticiones realizadas para el uso de los CEFE entre julio de 2024 y enero de 2025.



Gráfica 1: Elaboración propia con base en la información brindada por el IDRD

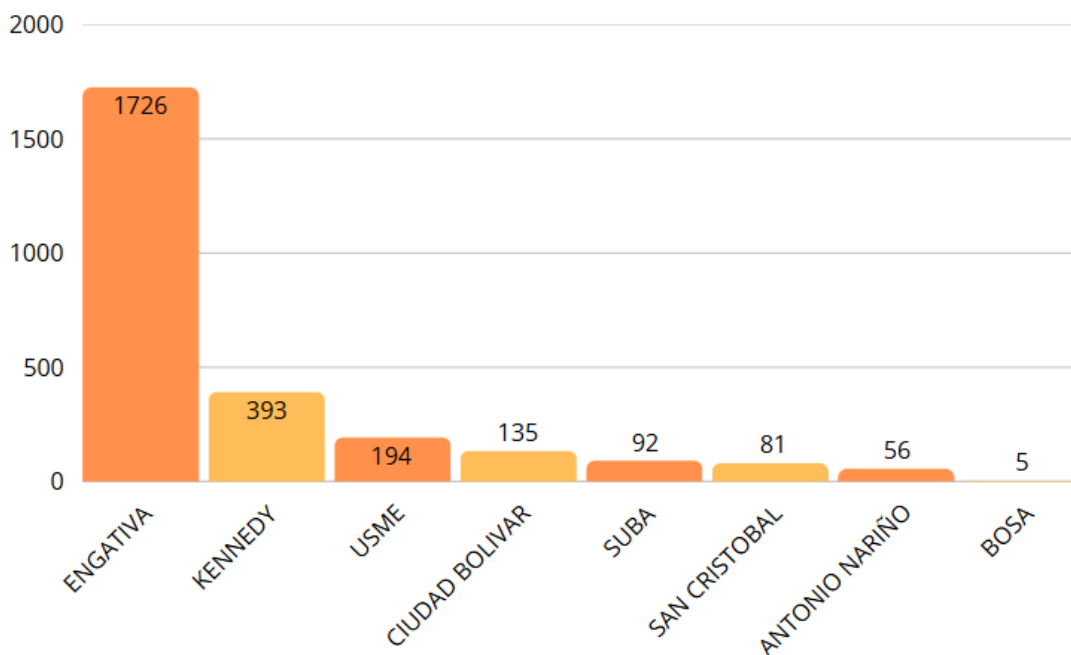
El gráfico muestra la cantidad de peticiones realizadas CEFES entre julio de 2024 y enero de 2025, evidenciando fluctuaciones en la demanda de escenarios deportivos en diferentes periodos. Se observa que los meses de septiembre y enero presentan el mayor número de solicitudes, lo que indica una alta necesidad de acceso a estos espacios. La disparidad entre los diferentes CEFES resalta la importancia de implementar medidas que optimicen la asignación y el uso de estos escenarios, tal como lo propone el proyecto de acuerdo, buscando la racionalización de trámites y la democratización en su acceso. La variabilidad

¹¹ <https://www.idrd.gov.co/construcciones/centros-felicidad-bogota>

en las peticiones sugiere que factores como la disponibilidad, la burocracia en la asignación y la falta de transparencia pueden estar afectando el uso equitativo de los escenarios deportivos, reforzando la necesidad de políticas que garanticen su aprovechamiento eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

Según la información proporcionada por el IDRD, las canchas de fútbol y microfútbol, tanto sintéticas como de área dura y área verde, fueron los escenarios deportivos más solicitados por ciudadanos, escuelas y organizaciones. Durante el año 2023, se otorgaron un total de 2.682 permisos para su uso o préstamo. La siguiente gráfica muestra la distribución de estas solicitudes por localidad, evidenciando cuáles fueron las zonas con mayor demanda de estos espacios deportivos:

Número de permisos para uso o préstamo de escenarios deportivos por localidades.



Gráfica 2: Elaboración propia con base en la información brindada por el IDRD

Se evidencia que la localidad de Engativá lidera con una demanda significativamente mayor, acumulando 1.726 permisos, lo que representa una diferencia considerable en comparación con otras zonas. Le siguen Kennedy con 393 permisos y Usme con 194, mientras que localidades como Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal presentan cifras más bajas, con 135, 92 y 81 permisos respectivamente. Finalmente, Antonio Nariño y Bosa registran la menor cantidad de solicitudes, con 56 y 5 permisos, respectivamente. Estos datos sugieren que la demanda de escenarios deportivos no es homogénea en la ciudad y que factores como la accesibilidad y la complejidad en los procesos de solicitud de permisos podrían influir en la variabilidad de los permisos otorgados.

La Contraloría realizó el seguimiento respectivo para verificar el cumplimiento del IDRD de lo establecido en el instructivo para evaluar el Informe de Balance Social y se evidenció la subutilización de los espacios recreo-deportivos debido a la falta de programas que incentiven la participación y utilización de estos.

d. Ejemplos nacionales:

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) ha implementado una plataforma en línea para la reserva de escenarios deportivos, facilitando a los ciudadanos el acceso a más de 860 espacios sin necesidad de desplazarse físicamente para realizar la reserva.

- Funcionamiento de la Plataforma:

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial del INDER Medellín y acceder a la sección de reservas de escenarios. Allí, es posible seleccionar el espacio deseado, verificar su disponibilidad y completar el proceso de reserva en línea.

Para utilizar la plataforma de reservas, los usuarios deben seguir estos pasos:

1. **Acceso al portal:** Ingresar al sitio web oficial del INDER Medellín y seleccionar la opción de reserva de escenarios.

2. **Registro o inicio de sesión:** Si es la primera vez que utiliza el servicio, deberá registrarse proporcionando sus datos personales. Los usuarios registrados pueden iniciar sesión con sus credenciales.
3. **Selección del escenario y horario:** Una vez autenticado, el usuario puede buscar el escenario deportivo de su interés, verificar la disponibilidad en el calendario y seleccionar la fecha y hora deseadas.
4. **Confirmación de la reserva:** Después de elegir el espacio y el horario, se confirma la reserva. El sistema puede enviar una notificación o comprobante al correo electrónico registrado.

- **Eficiencia y Actualizaciones:**

Aunque no se disponen de estadísticas públicas recientes que evalúen la eficiencia actual de la plataforma de reservas delINDER Medellín, se destaca que en 2023, el instituto alcanzó la cifra más alta de atención, con más de un millón de usuarios que disfrutaron de la oferta y de los escenarios deportivos. Además, se invirtieron más de \$132.000 millones en el mantenimiento de 369 escenarios deportivos, impactando a unos 680.000 usuarios.

En enero de 2018, el servicio de reserva en línea fue suspendido debido a cambios en la plataforma. Durante este periodo, los usuarios debieron realizar las reservas de manera presencial en las instalaciones deportivas. Sin embargo, en abril de 2018, elINDER reactivó el servicio web, permitiendo nuevamente las reservas en línea y mejorando la eficiencia del proceso.

Esta reactivación ha optimizado la gestión de los escenarios deportivos, ofreciendo a los ciudadanos una herramienta ágil y accesible para planificar sus actividades deportivas. La plataforma en línea ha contribuido a una mayor organización en la asignación de espacios y ha facilitado la participación de la comunidad en actividades recreativas y deportivas.

En conclusión, la plataforma de reserva de escenarios deportivos delINDER Medellín ha demostrado ser una herramienta efectiva para la gestión y acceso a los espacios deportivos de la ciudad, mejorando la experiencia de los usuarios y promoviendo la actividad física en la comunidad.

e. Antecedentes internacionales:

Como antecedentes internacionales, se identifican experiencias exitosas en seis países que han implementado sistemas de reserva y gestión de escenarios deportivos. Estas iniciativas tienen en común el objetivo de promover la eficiencia administrativa, la equidad en la asignación de espacios y la accesibilidad universal, permitiendo que toda la población, sin distinción, pueda disfrutar de los beneficios del deporte y la recreación en instalaciones públicas. (Estados Unidos, Finlandia, Brasil, Argentina)

Madrid, España – Portal de Inscripción y Reserva de Espacios Deportivos.

La Comunidad de Madrid ofrece un portal en línea que permite a los ciudadanos inscribirse en actividades deportivas, reservar espacios deportivos y adquirir entradas para eventos deportivos.

Además, cuenta con la aplicación móvil DEPORTESCM, disponible para iOS y Android, que facilita estas gestiones. Las reservas de temporada se realizan telemáticamente a través del portal Tramita. Los centros escolares, clubes deportivos y organismos públicos tienen derecho a una tarifa reducida en el alquiler de espacios, pero deben realizar la reserva en las oficinas de la instalación correspondiente.

Toronto, Canadá – Sistema de Reservas de Instalaciones Recreativas

El 6 de noviembre de 2024, la Ciudad de Toronto lanzó un nuevo sistema en línea para la inscripción en actividades recreativas y culturales, así como para la reserva de instalaciones

y membresías. Este sistema reemplazó al anterior eFun, ofreciendo una experiencia más amigable y accesible para los usuarios.

Este sistema se caracteriza por su diseño accesible ya que es compatible con dispositivos móviles, mejorando la accesibilidad para personas con discapacidades, cuenta con opciones de autoservicio mejoradas y centralización de servicios que permite a los residentes y visitantes encontrar y registrarse fácilmente en una gama amplia de actividades y reservar instalaciones deportivas y culturales.

Este sistema ha mejorado significativamente la eficiencia en la gestión de recursos recreativos, promoviendo una mayor participación comunitaria y optimizando el uso de las instalaciones disponibles.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con el artículo 313, numeral 1 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el concejo de Bogotá cuenta con competencia para reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio así como dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Por lo que el Concejo de Bogotá es competente para discutir y aprobar el presente proyecto de acuerdo.

V. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que implique un gasto o contemple beneficios tributarios debe explicitar su impacto fiscal y garantizar su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para ello, es obligatorio incluir en la exposición de motivos y en las ponencias correspondientes una estimación de los costos fiscales y la fuente de ingresos adicional destinada a su financiación.

En este sentido, es importante señalar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que requiera ajustes en el marco fiscal de mediano plazo, dado que no conlleva un aumento en el presupuesto del Distrito ni implica la creación de nuevas fuentes de financiación. Esto

se debe a que los recursos destinados a la ejecución del presente proyecto de acuerdo ya han sido contemplados dentro del marco fiscal establecido en el Plan de Desarrollo Distrital vigente.

VI. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 477 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PROMOVER LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL”
EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1, del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto adoptar medidas para la racionalización de trámites y el fortalecimiento de la democratización en el uso y aprovechamiento de los escenarios deportivos del Distrito Capital.

Artículo 2. Medidas. La Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD, dispondrá de las acciones necesarias para concretar las siguientes medidas en la búsqueda de promover y democratizar el uso de los escenarios deportivos del Distrito Capital:

- 1. Unificación y sistematización del protocolo de asignación de espacios deportivos:** la Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD propenderá por la creación de un sistema único de asignación de los espacios deportivos, a través de una plataforma tecnológica abierta, simple, intuitiva y de fácil comprensión, que le permita a la ciudadanía reservar el uso de dichos espacios en condiciones de transparencia, igualdad y equidad. Los responsables de la administración de cada escenario no podrán autorizar la asignación de espacios deportivos por medios distintos al sistema único al que se refiere el presente numeral.
- 2. Simplificación y racionalización en las condiciones de acceso y uso de los espacios deportivos:** la Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD, realizará una caracterización de la totalidad de los trámites que resultan innecesarios o que se consideren barreras de acceso para el uso y goce de los espacios deportivos. Posteriormente, se eliminarán o modificarán cada uno de los trámites identificados con el propósito de garantizar el uso, y disfrute de los espacios deportivos en condiciones de transparencia, igualdad y equidad por parte de los distintos tipos de solicitantes (sector público, organismos deportivos, otros sectores, personas naturales, entre otros).
- 3. Definición de franjas horarias y criterios de equilibrio para el uso de los espacios deportivos:** la asignación de los escenarios deportivos deberá atender

criterios de equidad y proporcionalidad dependiendo del tipo de actividad que allí se desarrolle (actividades recreativas, deportivas y de práctica libre), así como del tipo de solicitante. En todo caso, la Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD definirá un mínimo de horas de asignación de prácticas libres por cada escenario administrado. El mínimo de horas definido para prácticas libres deberá obedecer a un análisis diferencial riguroso de demanda de cada escenario y debe garantizar equilibrio en los horarios hábiles para su uso.

4. **Prevalencia de la gratuidad:** la asignación de los espacios deportivos se realizará con un criterio de gratuidad para la modalidad de práctica libre por parte de personas naturales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD propenderá porque la totalidad de las actividades deportivas y recreativas, individuales o grupales susceptibles de la modalidad de práctica libre solicitadas por personas naturales, se puedan realizar con reserva (a través del sistema único de asignación de los espacios deportivos al que se refiere el numeral primero del presente artículo) y sin pago.

Para aquellos casos excepcionales en los que los altos costos de mantenimiento, la especialización técnica requerida, o la operación y administración en algunos escenarios no permita su uso sin pago, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD definirá una estrategia de transición hacia la gratuidad que contemple un cronograma preciso para la reducción progresiva de los valores ofrecidos a la ciudadanía.

Para los casos excepcionales enunciados, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD, definirá una estructura de costos diferencial para el cobro de las tarifas por el servicio de práctica libre de los escenarios deportivos. Dicha estructura de costos para el cobro de tarifas por el servicio de práctica libre deberá considerar las condiciones socioeconómicas del entorno de cada escenario deportivo garantizando la equidad en el acceso a los servicios de recreación y deporte en todo el territorio de la ciudad.

5. **Acceso universal sin distinción de edad:** La Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte—IDRD, garantizará que todas las personas, sin distinción de edad, puedan acceder a los espacios deportivos del Distrito Capital de manera fácil, rápida y equitativa. Para ello, se deberán implementar mecanismos inclusivos en la plataforma tecnológica de asignación, así como canales de atención alternativos que permitan la participación efectiva de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y demás grupos etarios, asegurando que las condiciones tecnológicas o de tramitación no constituyan una barrera para el ejercicio de su derecho al deporte y la recreación.

Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

VII. Bibliografía

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Norma 119582. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Cómo reservar una cancha sintética en el Distrito con el IDRD. Recuperado de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/como-reservar-una-cancha-sintetica-en-el-distrito-con-el-idrd>

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). (s.f.). Centros Felicidad Bogotá. Recuperado de <https://www.idrd.gov.co/construcciones/centros-felicidad-bogota>

Instituto para la Recreación y la Educación del Distrito (INDER). (s.f.). Reserva de escenarios. Recuperado de <https://www.inder.gov.co/destacado/reserva-escenarios/>

Comunidad de Madrid. (s.f.). Portal de inscripción en actividades y reserva de espacios deportivos. Recuperado de <https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/portal-inscripcion-actividades-reserva-espacios-deportivos>

Ciudad de Toronto. (2024, 23 de octubre). City of Toronto to launch new, user-friendly system for recreation and cultural program registration and facility bookings on November 6. Recuperado de <https://www.toronto.ca/news/city-of-toronto-to-launch-new-user-friendly-system-for-recreation-and-cultural-program-registration-and-facility-bookings-on-november-6/>

PROYECTO DE ACUERDO NO 478 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA "AULAS DOMICILIARIAS"

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto garantizar el derecho a la educación de niños y niñas que se encuentran vinculados al sistema escolar oficial de la ciudad y que, por su estado de salud, cuidados, gestión de la enfermedad y demás razones médicas debidamente comprobadas por las instituciones de salud oficialmente acreditadas deben permanecer en su domicilio o lugar de residencia. Por estas razones, no pueden ejercer su derecho a la educación de manera presencial en las aulas de las instituciones educativas, ni en hospitales o centros de salud donde opera el programa de *aulas hospitalarias*.

II. MARCO NORMATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

LEYES

LEY 115 DE 1994. Ley General de Educación

Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio Público Educativo.

ARTICULO 8.- LA SOCIEDAD La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.

La sociedad participará con el fin de:

- a.-Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultura de toda la Nación;
- b.-Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación;
- c.-Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación.
- d.-Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;
- e.-Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y
- f.-Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

CAPITULO 4º ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ARTICULO 85.- JORNADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna. Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración. La jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la educación de adultos de que trata el título III de la presente ley.

PARAGRAFO: El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los plazos dentro de los cuales deberán ajustarse a los dispuesto en este artículo.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

Artículo 2º.- Responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán estas obligaciones los términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las autoridades competentes.

El carné estudiantil expedido a nombre del menor, será el medio para acreditar la condición de estudiante. Las autoridades podrán exigir su presentación cuando lo consideren pertinente para verificar el cumplimiento de la obligatoriedad constitucional y legal.

Artículo 3º.- Obligaciones de la familia. En desarrollo del mandato constitucional que impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley.

Los jueces de menores y los funcionarios administrativos encargados del bienestar familiar, conocerán de los casos que les sean presentados por las autoridades, los familiares del menor o cualquier otro ciudadano interesado en el bienestar del menor. Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por la incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación.

Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia

ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

ARTÍCULO 3o. SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

ARTÍCULO 4o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente código se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.

(...)

ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

(...)

ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.

No obstante, lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. **Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción** cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, **educación**, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

(...)

ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. **Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica**. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.

ACUERDOS DISTRITALES

ACUERDO 453 DE 2010: “Por medio del cual se crea el servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud”.

ART. 1º—Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto facilitar el proceso de educación formal de los niños, niñas y jóvenes, que por enfermedad o tratamientos médicos, se encuentren hospitalizados o incapacitados.

ART. 2º—Beneficiarios. Los niños, niñas y jóvenes en edad escolar que se encuentren hospitalizados e incapacitados, en la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud recibirán apoyo pedagógico escolar, de acuerdo con su estado de salud y grado de escolaridad.

ART. 3º—Funcionamiento. El apoyo pedagógico escolar se ofrecerá en la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud cuando sea requerido por parte de los padres o acudientes de los menores escolares, en cuyo caso se deberá acompañar a la solicitud el concepto favorable del médico tratante.

PARAGRAFO. La Secretaría Distrital de Educación, para cumplir con el objeto del presente acuerdo, también podrá realizar convenios con entidades del sector privado que presten servicios hospitalarios.

ART. 4º—Implementación. La administración distrital reglamentará y coordinará la ejecución del presente acuerdo, estableciendo mecanismos que permitan el desarrollo progresivo de su contenido, según la disponibilidad de recursos presupuestales asignados a las secretarías distritales de educación y de salud, más los que ingresen de otras fuentes.

ART. 5º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

ACUERDO 927 DE 2024. Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 2. Visión 2027 - Bogotá será la ciudad del bien- estar. Bogotá será la ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Será una ciudad diversa, accesible, incluyente, segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos tengamos la posibilidad de ser y hacer.

En esta capital global, incluyente, productiva e innovadora, la ciudadanía será la protagonista de un proyecto de desarrollo sostenible que nos una, comprometido con la acción climática y la justicia ambiental.

En Bogotá seremos capaces de resolver nuestros problemas y de construir una visión conjunta de futuro.

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano: Una educación de calidad es la responsable de brindarles a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes formación en las habilidades emocionales y académicas que los convierten en ciudadanos integrales que aportan valor público, social y económico a la sociedad, con participación de las comunidades de padres, madres y cuidadores.

III. COMPETENCIAS DEL CONCEJO

El Concejo de Bogotá tiene la competencia de dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes, en especial por las atribuciones conferidas en el Decreto Ley 1421 de 1993:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 313. *Corresponde a los Concejos.*

*1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
(...)*

DECRETO LEY 1421 DE 1993

Artículo 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien en Bogotá se ha avanzado de forma significativa en el concepto denominado “educación inclusiva” los esfuerzos en materia de política pública deben ser constantes y la aplicación de sus acciones deben responder a las necesidades de los niños y niñas de Bogotá. Por esta razón queremos presentar al Honorable Concejo de Bogotá, este proyecto de acuerdo que persigue tener un avance significativo en materia de brindar acceso real de educación formal a niños y niñas que padecen enfermedades de difícil atención y que por la complejidad de los tratamientos y cuidados, no permanecen en unidades de salud hospitalaria de la red distrital de salud, sino que por el contrario deben pasar largos espacios de tiempo en sus hogares y bajo el cuidado estricto de sus padres.

Estas enfermedades en su gran mayoría afectan aspectos vitales tales como movilidad, estabilidad y concentración, pero también es cierto que en un gran porcentaje no alteran del todo los componentes psicológicos y cognitivos lo que sin duda, le permite a los niños tener un desarrollo aceptable de criterios de aprendizaje, memoria y comprensión. Sin

embargo, la política pública de educación no ha orientado su mirada ante esta problemática y solamente ha llegado a normatizar estrategias como “aulas hospitalarias” las cuales han sido exitosas en su aplicación, pero sin duda han tenido que recorrer un largo camino de legitimación, entendimiento e incluso de aceptación y apoyo por parte de diferentes actores de la comunidad educativa.

En comunicación de la Secretaría de Educación del Distrito, desde el 2010, el Distrito Capital desarrolla el Programa de Aulas Hospitalarias en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. Esta iniciativa brinda apoyo pedagógico y escolar desde la educación formal en todos los niveles educativos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de enfermedad que se encuentran hospitalizados o en incapacidades de larga estancia. De esta manera, se materializa el derecho a la educación a partir de la generación de ambientes dignos para el aprendizaje que mejoran la calidad de vida de los pacientes-estudiantes.

Este programa se ajusta a las necesidades, potencialidades y al contexto hospitalario, familiar y social, en el que se encuentran los pacientes-estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y afianzar sus conocimientos mediante el desarrollo de metodologías y técnicas diversas, basadas en un currículo flexible, un plan de estudios por ciclos curriculares, campos de pensamiento y dimensiones del desarrollo humano.

En la actualidad, Bogotá atiende a 5.133 pacientes-estudiantes e implementa el programa en 34 clínicas, hospitales y fundaciones adscritas al sistema distrital de salud. Allí se cuenta con 36 aulas y 61 maestras y maestros pertenecientes a 27 colegios. Siete aulas se abrieron en esta administración.

En los 13 años de funcionamiento de esta estrategia se ha atendido a 51.939 beneficiarios, entre niñas, niños y adolescentes estudiantes en hospitalización, apoyo escolar, atención domiciliaria y casa pedagógica.

Logros destacados

- Se evidencia una respuesta positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje, con avances en las competencias pedagógicas que se han flexibilizado dentro de su proceso pedagógico.

- También se observa una disminución en los niveles de ansiedad del paciente-estudiante.

Se han dignificado los ambientes de aprendizaje de acuerdo con las particularidades del paciente y el aula hospitalaria.

- El programa ha ayudado a mejorar el manejo del dolor y a olvidar su condición médica.

-La comunicación entre familia, personal médico y maestros se ha fortalecido y ha aportado al mejoramiento del proceso pedagógico en el aula.

-Hay más sentido de pertenencia por parte de las instituciones educativas que acogen el aula hospitalaria.

-Se ha logrado aumentar paulatinamente el número de aulas en el Distrito, mejorando de esta manera la cobertura y atención a más niñas, niños, jóvenes y adolescentes en condición de enfermedad.

Sin embargo, el objeto de este proyecto de acuerdo va mucho más allá de la estrategia de Aulas Hospitalarias. En este momento no es claro saber a ciencia cierta cuántos niños y niñas en Bogotá se encuentran en sus casas atendiendo los rigores de diferentes patologías que impiden su asistencia de forma presencial en un ambiente escolar. Tampoco se sabe el impacto que pueden generar modelos de aprendizaje flexibles a la estabilidad emocional y física de menores con este tipo de enfermedades.

La propuesta entonces partirá en determinar desde la Secretaria de Educación Distrital y la Secretaria de Salud en Bogotá, cuántos niños y niñas pueden estar requiriendo de un servicio escolar en sus viviendas, hacer una georreferenciación que permita saber las localidades y UPZ donde están ubicados sus hogares, principalmente con el fin de establecer a qué IED le corresponderá ingresar al niño dentro de su matrícula oficial y finalmente tener disponible la planta docente con la experticia necesaria y suficiente para atender la necesidad educativa en relación con la patología correspondiente.

Este tipo de propuestas tiene su sustento jurídico y procedimental en el Código de Infancia y Adolescencia, donde se señala que los niños y niñas son sujetos de derechos y, por tanto, las Administraciones Municipales deberán implementar acciones en materia de protección integral que permita el desarrollo de políticas y estrategias que prevengan su amenaza o vulneración, en función del desarrollo del principio del interés superior

Además, el Plan de Desarrollo de la anterior administración se aborda este tema de la siguiente manera:

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

ACUERDO 927 DE 2024. Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 2. Visión 2027 - Bogotá será la ciudad del bien- estar. Bogotá será la ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Será una ciudad diversa, accesible, incluyente, segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos tengamos la posibilidad de ser y hacer.

En esta capital global, incluyente, productiva e innovadora, la ciudadanía será la protagonista de un proyecto de desarrollo sostenible que nos una, comprometido con la acción climática y la justicia ambiental.

En Bogotá seremos capaces de resolver nuestros problemas y de construir una visión conjunta de futuro.

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano: Una educación de calidad es la responsable de brindarles a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes formación en las habilidades emocionales y académicas que los convierten en ciudadanos integrales que aportan valor público, social y económico a la sociedad, con participación de las comunidades de padres, madres y cuidadores.

- Se garantizará la continuidad del programa de aulas hospitalarias y se formulará la estrategia de “Atención Educativa Domiciliaria”, esto con el fin de avanzar en el ejercicio del derecho a la educación por parte de aquellos niños y niñas que estén vinculados al sistema educativo distrital, y que, por razones médicas debidamente certificadas, no pueden asistir de manera presencial a las aulas de las instituciones educativas distritales.

En general, el objetivo será identificar necesidades particulares y promover la atención pertinente; esto permitirá, así mismo, reconocer y atender otras poblaciones históricamente discriminadas, como las víctimas del conflicto y las mujeres trabajadoras sexuales.

El presente proyecto de acuerdo se articula a la implementación de este programa y la posterior realización de proyectos enfocados a su cumplimiento.

V. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva exposición de motivos deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se generaría para financiar tales costos.

En atención a lo anterior, este proyecto de acuerdo no tendría impacto fiscal toda vez que el artículo 12 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, el cual está vigente y estableció como una de las metas de los objetivos estratégicos del programa 16; la de *“Garantizar que el 100% de los estudiantes de básica y media reciben el servicio educativo oportunamente, incluyendo los estudiantes sujeto de especial protección constitucional, como **la población con necesidades educativas especiales**, estudiantes víctimas del conflicto armado o de violencia intrafamiliar, migrantes, entre otros.”* Según la información de la Secretaría Distrital de Planeación, esta meta presenta una programación presupuestal de cerca de \$18.430.033 millones.

Sobre este asunto, se sugiere que la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Presupuesto, pueda pronunciarse previamente a la discusión de esta iniciativa con el fin de conocer el respectivo concepto de viabilidad que debe emitir como entidad asesora del Concejo de Bogotá según el artículo 11º, literal f del Decreto Distrital 601 de 2014.

Aún con este contexto, para el caso concreto de esta iniciativa normativa se recuerdan los contenidos de la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, en donde puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en impedimento para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa en los siguientes términos:

“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Presentado por el Honorable Concejal,

OSCAR RAMÍREZ VAHOS
Concejal de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO NO 478 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA "AULAS DOMICILIARIAS"**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, en sus artículos 1 y 25

CONSIDERANDOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Título II se configura la base jurídica que orienta al estado colombiano a crear mecanismos de protección para la garantía de derechos de todas las poblaciones y en especial las del transcurrir vital de la infancia, adolescencia y juventud.

Que la Ley 1098 de 2006 – Código de infancia y adolescencia, señala que los derechos de los niños y niñas son universales, prevalentes e interdependientes.

Que el Concejo de Bogotá, como máxima autoridad del Distrito Capital, tiene la facultad de definir las condiciones jurídicas e institucionales para la implementación y puesta en marcha de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria'; con el fin de facilitar el acceso a la educación formal a niños y niñas que presenten enfermedades complejas que les impidan el desplazamiento de los estudiantes a las Instituciones Educativas Distritales (IED).

Que el derecho a la educación debe aplicarse de forma universal para todos los niños y niñas del Distrito Capital, sin distinción por sus condiciones fisiológicas o psicosociales diferenciales.

ACUERDA,

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Dictar los lineamientos que promuevan la formulación de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria', con el fin de avanzar en el ejercicio del derecho a la educación para aquellos niños y niñas que estén vinculados al sistema educativo distrital y que, por razones médicas debidamente certificadas, no pueden asistir de manera presencial a las aulas de las instituciones educativas distritales; lo anterior por motivos de cuidado y atención de la respectiva discapacidad desde el ámbito hogar.

PARÁGRAFO: La solicitud que realice la familia o acudiente para ser parte de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria' deberá contar con concepto previo del médico o la institución de salud tratante.

ARTÍCULO 2. RESPONSABILIDADES: La Secretaría de Educación del Distrito liderará la reglamentación y puesta en marcha de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria'. Para ello definirá las bases pedagógicas, técnicas y financieras requeridas para la atención final de aquellos grupos poblacionales que demanden de este tipo de intervenciones educativas, teniendo en cuenta los principios de integralidad, reconocimiento de la diversidad y flexibilidad pedagógica.

La Secretaría Distrital de Salud como autoridad sanitaria del Distrito Capital, acompañará el desarrollo de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria', a partir de la certificación de los conceptos médicos emitidos por médicos y/o instituciones de salud debidamente autorizados.

Artículo 3.- FINES DEL ACUERDO. Se encuentran dentro los fines del presente Acuerdo:

- a. Garantizar el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, en lo que corresponde con las distintas dimensiones que comprenden el derecho a la educación.
- b. Evitar la deserción escolar debido a condiciones de salud que son objeto de cuidado y atención permanente en el ámbito hogar.
- c. Desarrollar modelos y/o estrategias pedagógicas flexibles que tengan en cuenta las particularidades médicas, edades, grados escolares y condiciones cognitivas asociadas a la enfermedad de la población a beneficiar.
- d. Reducir la segregación y exclusión de la población vulnerable, que por temas de salud no pueden participar dentro de los esquemas regulares del sistema público escolar.
- e. Fortalecer las redes de apoyo al interior de las comunidades educativas que cuentan.

- f. Vincular al sistema educativo una población invisibilizada para la mayoría de la ciudadanía y por ende olvidada por los diversos actores sociales de los entornos académicos.

ARTÍCULO 4° - ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN. Los escenarios definidos para el proceso de implementación de este modelo de inclusión educativa serán como mínimo, los siguientes:

- a. Espacio Institucional: en donde toda la comunidad docente y estudiantil conocen y reconocen a los(as) estudiantes que hacen parte del sistema educativo, así no estén al interior de las aulas físicas bajo el modelo tradicional.
- b. Espacio Socio-Cultural: es el que permitirá consolidar la movilización de todos(as) los(as) agentes estratégicos que se vinculan con el proceso de formación académica, intelectual y física de la población sujeto de atención del presente acuerdo.
- c. Espacio de Inclusión: En donde se permitirá por primera vez a niños (as) que padecen enfermedades críticas, raras o de difícil atención, tener acceso al conocimiento y educación formal, como parte de su inclusión a la sociedad en términos generales.

ARTÍCULO 5° FINANCIAMIENTO. La Administración Distrital, según disponibilidad presupuestal, programará durante cada vigencia los recursos necesarios que promuevan la formulación, implementación, desarrollo y evaluación de la estrategia 'Atención Educativa Domiciliaria'.

ARTÍCULO 6° DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NORMA. Le corresponde a la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Educación del Distrito, velar por la promoción y difusión de los contenidos previstos en el presente Acuerdo.

ARTICULO 7° VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 479 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El presente Acuerdo tiene como objeto denominar “**DIANA NAVARRO SAN JUAN**” al tramo vial comprendido sobre la Calle 22, desde la Carrera 14 hasta la carrera 17 de la ciudad de Bogotá, como un reconocimiento a la diversidad sexual y de géneros en la ciudad, con la exaltación de la memoria de una de sus principales referentes social y políticas como lo fue la activista transgénero Diana Navarro San Juan.

CONTEXTO

La ciudad de Bogotá, como ciudad capital de las colombianas y de los colombianos, ha sido el epicentro no solo del desarrollo del país, escenario de grandes transformaciones sociales y políticas y a su vez, testigo y epicentro de situaciones de la conflictividad social como el desplazamiento, la discriminación, la xenofobia, la homofobia y la transfobia entre otras expresiones de desigualdad social que son evidentes no solo en las cifras de denuncias de estos flagelos, sino también, en la vida concreta de personas que representan grupos sociales históricamente marginados, a quienes el distrito debe reconocer su aporte a la sociedad, a la lucha por la igualdad y el trabajo por superar múltiples condiciones de marginación, discriminación y exclusión.

Diana Navarro San Juan, aportó de manera significativa a la lucha por la igualdad social de las personas lesbianas, gays, bisexuales y especialmente las personas transgénero más empobrecidas y marginadas, como lo son quienes viven, habitan y trabajan en el barrio Santafé de la Localidad de Mártires.

Fue reconocida por su liderazgo en diferentes ámbitos de la vida social. Así se destacó en la defensa de los derechos de quienes habitan el Barrio Santafé, en la Localidad de Los Mártires, donde impulsó la creación del Decreto que estableció allí una zona de alto impacto para usos referidos a la prostitución y actividades afines. También impulsó la creación en esta zona de la Casa LGBTI se la Secretaría Distrital de Integración Social que hoy lleva su nombre y la creación de la Unidad Contra la Discriminación en la Subdirección para Asuntos LGBTI, en la misma entidad. En el barrio Santafé es recordada por sus gestiones, ejercicios de incidencia y la elaboración de documentos jurídicos (derechos de petición, acciones de tutela, demandas, entre otros) para proteger a personas transgénero, personas en ejercicio de la prostitución, personas en habitabilidad de calle, migrantes, vendedores ambulantes, entre otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Dicho trabajo se extendió a lo largo del país.

Como activista por los derechos de las personas de los sectores LGBTI fue fundadora y directora de la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Hacer, la segunda organización de personas trans en tener personería jurídica en el país. Desde allí Co- lideró la creación de la Red Distrital de Personas Trans y la Red Nacional de Personas Trans con otras activistas. También participó y fue coordinadora de la Mesa LGBT de Bogotá, en donde ayudó en la organización de la Marcha por Ciudadanía Plena LGBTI y la Gala León Zuleta. Así mismo, apoyo y movilizó la organización de la Fiesta Roja Navidad Trans, la Alfombra Roja y Gala Rosa por la no transfobia, la realización de la Jornadas Distritales De No Violencias Contra Las Mujeres Trans, proyecto misión Bogotá (inclusión socio laboral trans en el sistema Transmilenio, y otras entidades del gobierno en Bogotá durante la Bogotá Humana) entre otros procesos enfocados a visibilizar los derechos de las personas transgénero y las organizaciones que trabajan en su defensa.

Se destacó por su trabajo de articulación con la Policía Nacional de Colombia y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en la capacitación de funcionarios para la protección de los derechos de las personas de los sectores LGBTI privadas de la libertad o bajo custodia del Estado y fue asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Por todo ello, fue incluida en el listado de activistas de esta población a quienes el Senado de la República entregó un reconocimiento en el marco de la conmemoración del 28 de junio en 2022.

Este liderazgo social también se tradujo en un activismo político que la llevó a ser la primera persona trans al hacer parte de la dirección nacional de un partido político en Colombia, al ser elegida integrante de la Junta Nacional de Polo Democrático Alternativo en 2006. También fue candidata la Junta de Administradora Local de Los Mártires en 2007

Diana Navarro San Juan, como servidora pública y desde la institucionalidad, diseñó y ejecutó acciones afirmativas para transformar al Estado. Siendo asesora del Gobierno de Bogotá, fue quien lideró procesos en garantía derechos, como el “litigio estratégico”, entre Grace Kelly Bermúdez y la Secretaria de Integración Social de Bogotá, la cual benefició a las personas transgénero con la eliminación del requisito de la libreta militar para ser contratadas por todas las entidades del distrito.

Como servidora pública trabajó en la implementación de la Política Pública LGBTI de Bogotá en la Secretaría Distrital de Integración Social y en los primeros ejercicios para diseñar la Política Pública LGBTI Nacional en el Ministerio del Interior, en donde impulsó la Creación de la Mesa de Casos Urgentes para atender a las situaciones de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI.

El activismo de Diana Navarro San Juan, entrecruzaba todas las esferas de su vida, es por esto, que es difícil delimitar el accionar de Diana como activista social y como activista en el servicio público, porque el activismo de Diana era su misión de vida, y pese a que en Colombia existe la Política Pública Nacional LGBTI desde mayo de 2018, Diana en la 39 Asamblea General de la OEA en San Pedro Zula, Honduras 2009, instó al entonces Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, para que invitara al Estado Colombiano a formular una Política Publica integral para las personas de los sectores sociales LGBTI, y fue tan persuasiva que ese mismo año 2009, el vicepresidente Angelino Garzón, convocó al movimiento social para adelantar las primeras acciones de discusión sobre la pertinencia de que esta política estuviera dentro de la agenda pendiente del movimiento a nivel nacional.

Además de sus habilidades como cabildera, Diana Navarro Sanjuan, también impulsó importantes avanzadas jurídicas, es así como estuvo detrás de la acción de tutela que derivó en la sentencia T-314 de 2011 en la cual

la Corte Constitucional exhortó al Estado colombiano para que “(...) *Ministerio del Interior y de Justicia para que articule... una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas.*”

Posterior a la adopción del decreto que adopto en 2018 la Política Pública Nacional LGBTI, Diana Navarro San Juan, co - lideró acciones de control político y social a la gestión del estado, y es así como en 2019 empezó a promover y participar en espacios de estudio e investigación sobre la implementación de Políticas Públicas, esfuerzos que en 2020 se cristalizaron en la conformación de la primera Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI de la cual Diana Navarro San Juan fue co-fundadora y a la cual aportó sus reflexiones y trabajo hasta el año 2022.

Diana Navarro San Juan, no solo se destacó por su activismo en defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y los aportes en el diseño e implementación de política pública LGBTI Nacional y en Bogotá, sino también se debe resaltar que realizó ejercicios de exigibilidad de derechos, activismo social e incidencia en función de otras movilizaciones sociales y políticas públicas, entre las que se destacan las étnicas (lídero al estrategia Ubuntu por la paz, intervención interseccional en personas NARP con enfoque de orientaciones sexuales e identidad de géneros diversos), mujeres y equidad de género (fue Miembro del Consejo Distrital Consultivo de Mujeres Curul Mujeres Diversas), personas vinculadas a actividades sexuales pagadas, prevención de la trata de personas, prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, VIH/sida (fue miembro del Mecanismo Coordinador País Proyecto Fondo Global de la lucha contra el sida, tuberculosis y malaria). Su liderazgo social y político, no solo lo ejerció en Colombia, sino que estuvo involucrada en procesos en la región de América Latina y el Caribe, y de manera global.

Incluso, como figura pública y referente cultural, Diana Navarro San Juan, encarna la diferencia y la diversidad en Bogotá, ella representa a un sector la lucha por la justicia social, fue la gran primera voz de las personas LGBTI en situación precariedad, y en especial las personas transgénero en Colombia.

Su imagen y discurso han sido immortalizados en diferentes cintas, libros, artículos y entrevistas, y actualmente, Diana se perfila como un icono de la lucha diversa y como la protagonista de una historia que merece ser contada y que debe permanecer en la memoria de la ciudad de Bogotá.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo busca hacer un reconocimiento a la población LGB y en especial a la población Transgénero de Bogotá, con base en la normatividad legal vigente y como un acto político institucional de reconocimiento a un liderazgo social de la ciudad.

En el contexto internacional más cercano, han sido varios los pronunciamientos de las Naciones Unidas y una serie de organismos multilaterales que han evidenciado la necesidad de tener acciones afirmativas, de reconocimiento y visibilización de los derechos de personas con identidades de género u orientaciones sexuales no hegemónicas. Dos ejemplos de ello son; la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011), que fue la primera resolución relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, y la Resolución 32/21 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2016) que establece un mandato para un experto independiente en protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad

de género. También en 2018, la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11, 2018).

Previamente, en 2006 se presentaron los principios de Yogyakarta, que habla de las obligaciones de los Estados en esta temática y exalta el derecho a la participación en asuntos políticos y públicos, además la lucha contra los estereotipos y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, de ello deriva la necesidad de acciones concretas de los Estados por resarcir, reparar física y simbólicamente a los grupos discriminados, así mismo, desde 2008 la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución sobre derechos humanos, orientaciones sexuales e identidades de género, instando a los Estados a desarrollar acciones en función de estas poblaciones.

La cual se ha venido ratificando anualmente, igualmente, se creó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Colombia, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de la cual Colombia es signataria y se encuentra en proceso de ratificación, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

A su vez, al Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-24/17 (2017) reconoce el derecho al cambio de nombre, imagen y corrección de género en registros y documentos. Además, en la sentencia del Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras reconoce la discriminación por identidad de género e insta a tomar medidas para su prevención.

Por otra parte, las Naciones Unidas desde el Comité de DECS (Observación General No.10 de 2009) y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Recomendación General No. 28 de 2010), insta a los Estados a desarrollar programas contra las situaciones de discriminación por identidad de género.

En el contexto colombiano, ha sido reiterado el ejercicio de protección de la Corte Constitucional al reconocimiento del derecho a la identidad de género. Algunos ejemplos de su extensa jurisprudencia sobre la materia son las siguientes sentencias: La Sentencia T-594/93, que fue una de la primera sentencia en la que la Corte reconoció el derecho a la identidad sexual y de género. En ella, la Corte protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre en el registro civil.

La Sentencia T-551/99, en la que la Corte protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La Sentencia T-1031/07, en la que la Corte reconoció el derecho de las personas trans a definir su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con esa identidad.

La Sentencia T-911/09, en la que se protegió el derecho de una persona trans a ser tratada de acuerdo con su identidad de género en el ámbito laboral. Sentencia T-532/12, en la que la Corte reconoció el derecho de las personas trans a acceder a tratamientos médicos relacionados con su identidad de género. Sentencia T-478/15, en la que se protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de presentar pruebas médicas o psicológicas. Sentencia SU-337/17, en la que la Corte reconoció que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional debido a la discriminación histórica que han enfrentado.

Desde el año 2018 se estableció la Política Pública Nacional LGBT por medio del Decreto 762 de este año, indica en uno de sus artículos específicamente **Reconocimiento garantía y acceso a derechos. (artículo 2.4.4.2.1.6) establecer medidas que permitan “8. Promover el ejercicio pleno de derechos de los sectores**

sociales LGBTI víctimas del conflicto armado y de otro tipo de violencias, por medio de mecanismos para la protección, prevención, atención, asistencia y reparación integral”, por ello el distrito en correspondencia con la memoria y reparación simbólica a una población tan victimizada tanto por la sociedad como por el Estado, por acción y omisión de garantía de derechos, puede reparar simbólicamente con la exaltación de la memoria de una persona referente de los sectores LGBTI.

La Política Publica LGBT de Bogotá desde el acuerdo 371 de 2009 y el decreto 062 de 2014, establece lineamientos para la vivencia plena de derechos de las personas LGBT en el distrito, donde el derecho a la vida, seguridad, la cultura y la participación son clave en la nivelación y compensación de derechos que han sido históricamente negados a la población de los sectores LGBT, de allí que algunas unidades operativas como el centro de atención a la diversidad sexual y de géneros de Teusaquillo “Sebastián Romero” creada mediante el Decreto 149 de 2012 con la puesta en marcha de la Sub dirección para asuntos LGBT lleva este nombre en reconocimiento y homenaje a un activista de dicho movimiento, así mismo, lo han hecho de manera posterior algunas unidades operativas de la Secretaria de Integración social con personas de estas poblaciones y en otros casos y contextos la Secretaria de Educación con los colegios oficiales entre otros.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

POR QUÉ LA CALLE 22 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 17 DEBE NOMBRARSE “DIANA NAVARRO SAN JUAN”

La zona elegida para la denominación de la calle “Diana Navarro San Juan”, está ubicada en el barrio Santafé de la Localidad de los Mártires, zona en donde habitan y trabajan un número significativo de mujeres trans que han encontrado en dicho espacio un escenario para reconstrucción de sus vidas, después de ser marginadas y desplazadas o simplemente desechadas por una parte de la sociedad que no comprende su construcción identitaria, por lo cual, desde las actividades de peluquería, actividades sexuales pagas y trabajos en hotelería o simplemente desde la construcción de segundos hogares han desarrollado sus nuevas vidas.

El proyecto no genera costos adicionales para el distrito, la denominación de la calle se hará por medio de la proclamación del acuerdo del concejo de Bogotá y las entidades ajustarán el nombre en documentos oficiales del distrito, tanto en su documentación como en los momentos de fijación de nomenclatura y señalización de la calle en mención

BIBLIOGRAFÍA.

- Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) Por una ciudad de derechos. Lineamientos generales de la PPLGBTI.
- Alcaldía Mayor de Bogotá (2019) Línea de base de la Política Pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBTI.
- Concejo de Bogotá (2009) Acuerdo 371. Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- Constitución Política de Colombia, 1991
- Naciones Unidas (2007) Principios de Yogyakarta.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La Constitución Política de Colombia, establece que:

Artículo 1 “...El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos...”

En concordancia con el artículo antes citado, la misma Ley 397 estableció en el Artículo 2° que las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

De otra parte la Ley antes citada en el Artículo 4° definió “...el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura...”

Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Artículo 72: *“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”*

En consecuencia, el legislador expidió la Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

Decreto 1421 de Julio 21 de 1993

Con plena observancia de las atribuciones conferidas al Concejo de Bogotá, por el Decreto 1421 de Julio 21 de 1993, Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, es competencia de la corporación, regular la preservación y defensa del patrimonio cultural, tal y como lo establece el numeral 13 del Artículo 12. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

Ley 136 de 1994.

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993 :

ARTÍCULO.- 2o. Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

Artículo 32. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012).

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

[...]

Parágrafo 2º. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO:

En el Concejo de Bogotá, no se han presentado iniciativas de proyectos de acuerdo que establezcan reconocimiento de la memoria de la activista Diana Navarro San Juan.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es importante precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos, por lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo.

La Secretaria Distrital de Movilidad, incluirá en la señalización regular de la calle 24 entre carrera 14 y 17 el nombre de la vía, esto no genera gastos extraordinarios sino que hace parte de sus actividades de señalización en vía.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO. ____ DE 2025

POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO LEY 1421,

CONSIDERANDO:

Que en Bogotá existe una Política Pública LGBT (acuerdo 379 de 2009), que establece una serie de acciones y lineamientos para reivindicar los derechos de las personas LGBT en el distrito capital, ante la segregación y la desigualdad social de las que han sido víctimas a raíz de la discriminación por orientación sexual e identidad de género,

Que Bogotá está comprometida con el cambio cultural, por ello desde hace más de 10 años promueve la campaña en “Bogotá se Puede ser” para reivindicar los derechos de las personas LGBT.

Que la exaltación de la memoria de la activista Diana Navarro San Juan, es una forma de reivindicación no solo de su vida sino de personas y comunidades de la población LGBT que trabajan por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en Bogotá.

Autores**HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO**

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Unión Patriótica

ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Colombia Humana

JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA

Concejal de Bogotá D. C.
Partido Colombia Humana

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal de Bogotá D. C.
Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social

QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

ROCÍO DUSSAN PÉREZ

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

Concejal de Bogotá D.C
Partido Alianza Verde

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Concejal de Bogotá D.C
Partido con toda por Bogotá

VI. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 479 DE 2025**PRIMER DEBATE**

POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Nómbrase la calle 22 en el tramo comprendido entre la Carrera 14 y la carrera 17 “Diana Navarro San Juan”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se llevará a cabo mediante la inclusión en la nomenclatura del Distrito la asignación del nombre de la calle Diana Navarro San Juan, en el tramo establecido.

ARTÍCULO TERCERO VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 480 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS TRANS A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS CON PLENA GARANTÍA DE DERECHOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO

Este Proyecto de Acuerdo tiene como objeto garantizar el derecho de las personas trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas dentro de las entidades del Distrito.

Los lineamientos creados desarrollan la Política Pública LGBTI del Distrito, estableciendo acciones afirmativas para uno de los sectores poblacionales más vulnerados en todos sus derechos, como en este caso lo son las personas trans.

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Por iniciativa de la Administración Distrital en el año 2009, el Concejo de Bogotá creó y aprobó el Acuerdo 371 de 2009, que establece los lineamientos de Política Pública LGBTI del Distrito, como la primera política pública de su tipo en la Nación y que ha posibilitado derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Así mismo en el periodo 2020 – 2023 se presentó el proyecto de acuerdo 294 de 2023 por parte de los Concejales Heidy Sánchez, Luis Carlos Leal y Martín Rivera concertado con la administración distrital y que establecía acciones afirmativas para las personas Trans y que tuvo ponencia positiva por parte de los ponentes Julián Rodríguez Sastoque y Pedro Julián López, que, sin embargo, no alcanzó a ser debatido en plenaria para segundo debate.

<i>Título</i>	<i>Estado del proyecto</i>
<i>Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones</i>	371/2009 aprobado y sancionado
<i>“Por medio del cual se establecen lineamientos para garantizar el derecho de las personas</i>	294/2023 Aprobado en primer debate y

trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas dentro de las entidades del Distrito.”

archivado por cierre del periodo constitucional.

La Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual MIDS de la Política Pública LGBT en marzo de 2021, elaboró y presentó a Bancada de la Diversidad Sexual y de Géneros del Concejo de Bogotá D.C, el documento “*Propuesta de acciones afirmativas para personas trans en Bogotá*” el cual es base fundamental del presente proyecto de acuerdo.

3. NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

De acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-143 de 2018 el derecho a tener una identidad de género se ha conceptualizado como “*la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales*”. Todo ello basado en los conceptos adoptados por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso los principios de Yogyakarta.

Sin embargo, en Colombia las violencias contra las personas trans están profundamente internalizadas en diversos estamentos de la sociedad. Esto basándose, en unas creencias discriminatorias construidas a partir de una normalidad cisgénero y heterosexual. Todas las expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales que se salgan del orden establecido, son repudiadas generando la imposibilidad de ejercer los derechos más primarios y fundamentales, como lo son, la vida y el derecho a ser.

Las violencias contra la población trans, aun cuando están documentadas y a partir del activismo están siendo poco a poco más visibles no son fácilmente denunciadas y a su vez, son poco sancionadas. Este tipo de violencias configuran claramente una vulneración a los derechos humanos y a la dignidad humana. Todas estas violencias, producen unas barreras de acceso a derechos que impiden el goce efectivo de los mismos.

Por todo lo anterior, es urgente proteger la vida y todos los derechos fundamentales de las personas con identidades y expresiones de género diversas, garantizando una vida libre de violencias. Por tal motivo se requiere que la ciudad de Bogotá, cuente con un núcleo normativo que contenga medidas y acciones afirmativas que se materialicen en la prevención de hechos de violencia y en la inclusión a fin de que en la ciudad las personas trans puedan diseñar y llevar a cabo un proyecto de vida en condiciones dignas.

Las personas trans han sido históricamente vulneradas y constantemente se han visto abocadas a barreras de acceso y garantía de derechos. Esto permeado por la discriminación sistemática que sufren día a día. Diversas situaciones afectan gravemente sus derechos humanos.

Por lo tanto, es necesaria la intervención de las entidades públicas para garantizar el ejercicio pleno y la protección de estos derechos, por medio de la concertación e implementación de acciones afirmativas que faciliten y permitan ser en Bogotá.

3.1. Contexto y situación actual de las personas trans en Colombia

El panorama actual de la población trans en Colombia es preocupante. A continuación, se exponen una serie de ámbitos en los cuales existe la necesidad de una intervención que garantice y proteja los derechos de las personas trans.

En el ámbito de la violencia, los delitos contra la población están en aumento. La Defensoría del Pueblo muestra que: “*quienes sufrieron con mayor rigor la violencia por prejuicios fueron mujeres transgénero (27 casos); hombres gays (14); mujeres lesbianas (8), un hombre transgénero y en 27 casos no se identifica la orientación sexual e identidad de género*” (Defensoría del Pueblo, 2021). Para lo que ha transcurrido de 2022 el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo ha registrado cerca de 14 homicidios contra la población LGBTIQ+, de los cuales nueve corresponden a hombres gay, cuatro a mujeres trans y una mujer lesbiana (Caribe Afirmativo, 2022).

En el plano político-social, es preocupante la posición discriminatoria de la sociedad colombiana frente a la identidad de género. La encuesta de cultura política del DNP muestra que, si bien los colombianos en mayoría consideran que la población LGBTIQ+ tiene los mismos derechos que las demás personas; solo el 60% considera que se les debe reconocer tales derechos (Bernal & Patiño, 2020).

Esto quiere decir que, si bien la mayoría reconoce que “existen” unos derechos, que no son más que los que tiene cualquier ciudadano; apenas seis de cada diez encuestados está de acuerdo con que estos derechos se reconozcan o materialicen. Ello genera un entorno social fuertemente hostil hacia la población, que se traduce en una discriminación sistemática.

El informe del DNP “*diagnóstico de sobre la situación de discriminación de la población LGBTI en Colombia*” muestra que, dentro de la encuesta de cultura política, la mayoría de encuestados no cree que se haya avanzado en la no discriminación de la población LGBTIQ+ y también que esta discriminación es transversal, es decir, que se evidencia en espacios que van desde el hogar, las instituciones y el espacio público (Bernal & Patiño, 2020, pág. 11). En la siguiente gráfica del informe, se logra ver todos los espacios de sociabilidad donde las personas han percibido una discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

Gráfica 3. Porcentaje de personas que reportan haber presenciado hechos de violencia o discriminación ocurridos en razón de la orientación sexual o identidad de género de otra persona.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social).

Como lo muestra la gráfica, el 40% de las personas encuestadas fue discriminada por un amigo, el 32% por un vecino, el 30% por profesores y compañeros de clase y el 20% en espacios familiares. Bajo todas las miradas, ello es profundamente preocupante, ya que solo demuestra que los entornos que deberían fungir como protectores, se constituyen como expulsos o agresores.

En el plano educativo la situación es grave, pues es un espacio de sociabilidad fundamental para el desarrollo de la persona. Sin embargo, desde el colegio hasta la universidad, la población LGBTIQ+ se encuentra en situación de vulnerabilidad ante hechos de discriminación. Especialmente, por la ausencia de una pedagogía de inclusión y de educación frente a la diversidad. Igualmente, por la ausencia de mecanismos eficientes de

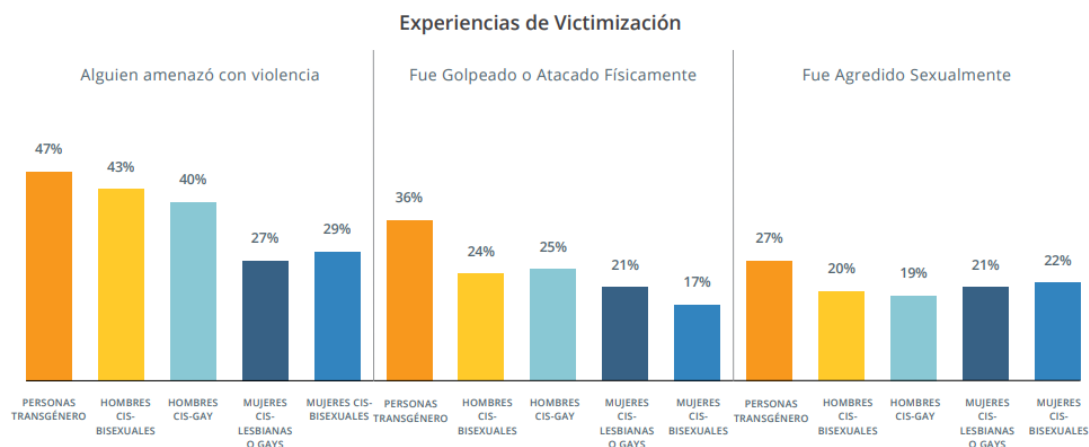
protección que permitan la sanción de actitudes y acciones violatorias de los derechos. En este sentido, el informe del DNP muestra que, según la Encuesta de Clima Escolar LGBT, el 37,2% de los estudiantes con orientación sexual o identidad de género diversa se ha sentido agredido por parte de un profesor por esta razón.

Pero, lo más alarmante es que el aparato institucional de los planteles educativos fomenta la discriminación y la revictimización:

“Es preocupante ver que en muchos casos las autoridades educativas no solo no intervienen frente a hechos discriminatorios como pueden ser los comentarios homofóbicos y el lenguaje excluyente, sino que ellos mismos tienen estas prácticas de discriminación. De acuerdo con la misma encuesta, el 39.9 % de quienes respondieron a la pregunta de con qué frecuencia los profesores u otros miembros del personal del colegio intervinieron en caso de estar presentes cuando sucedían comentarios discriminatorios expresó que el personal nunca intervino. El 75,4% de los estudiantes LGBT manifestaron que alguna vez escucharon comentarios homofóbicos por parte de sus profesores u otro personal de la institución durante el último año” (Bernal & Patiño, 2020). Se evidencia que los estudiantes pertenecientes a los sectores sociales LGBTIQ+ se encuentran en un estado de indefensión en sus planteles educativos que no garantizan la protección de sus derechos.

En el ámbito laboral las situaciones también son preocupantes. Solo 4 de cada 100 hombres y mujeres trans tiene un contrato laboral formal (Bernal & Patiño, 2020). Además, entre abril y diciembre de 2021 la población LGBTIQ+ tenía una tasa de desempleo de 15,2 %, mientras que la general fue del 13 % (DANE). En el ámbito de la salud encontramos graves consecuencias de todas las anteriores situaciones, de tal modo que la dignidad humana de la población trans se ve afectada. La Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, por medio de su Instituto Williams, publicó un informe titulado “Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia. Resultados de una encuesta nacional que ofrece un panorama preocupante.

El estudio, de casi cinco mil personas LGBTIQ+ encuestadas, muestra cinco conclusiones: 1. el 72% de los encuestados reportaron angustia psicológica moderada 2. El 55% de había tenido pensamientos suicidas en su vida 3. Uno de cada cuatro (25%) había intentado suicidarse al menos una vez 4. Las mujeres bisexuales (33%) y las personas transgénero (31%) tuvieron una tasa más alta de intentos de suicidio 4. Uno de cada cinco encuestados LGBT (21%) ha recibido tratamiento de alguien que intentó cambiar su orientación sexual o hacer que se identificaran con su sexo asignado al nacer (“terapia de conversión”) 5. (35%) de los encuestados transgénero informaron haber recibido este tratamiento (Williams Institute, 2019). En el mismo informe muestran las experiencias de victimización:



Los encuestados señalan que también han sentido agresión verbal y física por parte de policías y funcionarios públicos.

Todos estos ámbitos muestran que el panorama de la población trans en Colombia es sumamente grave, porque se enfrentan a una sociedad que los discrimina por su identidad de género. Esto deriva en altas cifras de asesinato, precariedad laboral, rechazo en el colegio y los círculos sociales, todo con consecuencias en la salud mental y física.

3.2 Contexto y situación actual en Bogotá

La situación de la población trans en Bogotá también es una representación de la gravedad del panorama nacional. La Mesa intersectorial de Diversidad Sexual de marzo de 2021 identificó una serie de recomendaciones de política pública que se pueden adoptar para solucionar problemas de la población. El documento divide las acciones necesarias de intervención de política por derechos, de tal modo que ofrece un panorama de la situación de la población en el Distrito:

Derecho a la salud

El derecho a la salud en Colombia es un derecho fundamental. La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha destacado su importancia por su conexión con el derecho a la vida, la integridad y la dignidad humana; también porque garantiza el derecho a la salud para sujetos de especial protección constitucional; y por último es un ámbito básico para la protección de una vida digna.

En la población trans es un derecho que muchas veces se ve vulnerado porque el sistema de salud está pensado para personas cisgénero. Esta es una de las barreras que se les presenta al momento de querer ser parte de este sistema, la siguiente barrera la encuentran en el momento que acceden al sistema de salud ya que la mayoría de veces se convierte en un espacio inseguro, porque el trato de los prestadores de salud suele ser discriminatorio y prejuicioso. Al ser pensado por y para personas cisgénero, se falla en la prestación de exámenes y consultas urológicas o ginecológicas, pues no reconocen que hay hombres con vulva y mujeres con pene que necesitan de estos exámenes/consultas médicas.

En consecuencia, documento de la Mesa Intersectorial de la Diversidad identifica que, por las dinámicas propias de la población trans, el sistema de salud no se ajusta a las necesidades de la población, pues está diseñado para personas cisgénero y en muchas ocasiones los procesos médicos suelen ser victimizantes y discriminatorios. Por lo tanto, dentro de la población LGBTQ+, las personas trans tienen mayores percepciones negativas sobre el servicio de salud. El documento afirma que: “Sobre su propia percepción de estado de salud, las personas transgénero son quienes más sienten que su salud es mala o muy mala, en mujeres transgénero se ubica en el 5,8%, en hombres transgénero 31,4%, mientras que en hombres gay 1%, mujeres lesbianas 2,2%” (Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, 2021).

El precario servicio de la salud a personas trans y la inseguridad que sienten al recurrir a este, las ha orillado a auto medicarse o a recurrir a consejos de conocidos o de internet para seguir con su tránsito hormonal. La automedicación es más recurrente en las mujeres transgénero por la facilidad de adquirir pastillas hormonales a través de los anticonceptivos, esto es peligroso en su proceso de afirmación de género. En una muestra estadística de población transgénero 17,6% de los participantes, reportaron haber recurrido a procedimientos invasivos no médicos para la modificación corporal (1 participante relató haber intentado la automutilación genital, 1 participante refirió la inyección de aceite de avión en los glúteos y un tercer participante la inyección de silicona cosmética en glúteos y mamas) (Cañaveral J, 2020, Estudio comparativo de las condiciones de salud de las personas transexuales con asistencia médica y otro tipo de apoyo en su proceso de afirmación de género, Universidad de Caldas).

Además, la población trans, como lo muestra la Mesa Intersectorial en el tema de las enfermedades mentales, las personas que son cis-heterosexuales tienen un 1,9% de diagnóstico de enfermedades mentales; mientras que, las mujeres transgénero tienen un 3,4%, casi el doble de incidencia. A esto se le puede sumar el hecho de que el informe “Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia: Resultados de una encuesta nacional” muestra que las personas transgénero tuvieron una tasa más alta de intentos de suicidio (31%).

Derecho a la educación

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho y un servicio público. Sin embargo, las personas trans son más afectadas por el acceso a la educación y el sostenimiento en el sistema.

Como se analizó en el panorama nacional, en el sistema educativo las situaciones de discriminación y violencia para las personas trans son sistemáticas. La Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual muestra que, según los datos de la Política Pública LGBTI, las mujeres transgénero son las que menos estudian dentro de la población LGBTIQ+, como se muestra en la gráfica:

Porcentaje de personas LGBTI que actualmente estudia.		
Sector	Si	No
Lesbianas	14.3%	85.7%
Gais	13.2%	86.8%
Bisexuales	19.0%	81.0%
Mujeres transgénero	10.0%	90.0%
Hombres transgénero	20.5%	79.5%
Intersexuales	15.8%	84.2%
LGBTI	15.0%	85.0%

Fuente: Observatorio de la PPLGBTI con base en la EM2017

A esto se suma que el 51% de los hombres transgénero alcanzó solo la básica secundaria, para las mujeres transgénero fue el 39%. Dentro de los factores que influyen en estas bajas tasas de nivel educativo están la necesidad de conseguir un trabajo, el embarazo y también el ambiente discriminatorio presente en las instituciones educativas.

Derecho a la vivienda

Frente al tema de la vivienda, la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual muestra que las personas trans tienen dificultades en la consecución de una vivienda digna. Puesto que, la mayoría de personas viven en pequeños cuartos y por la dificultad de acceder a crédito y capital, tienen dificultades para acceder a vivienda propia. Principalmente, por la precariedad laboral de las personas. Esto genera una débil estabilidad en materia de vivienda y por eso se encuentran en situaciones de vulnerabilidad donde son expulsados y discriminados frecuentemente por los vecinos y habitantes de los lugares donde viven.

Derecho a la vida digna

La Corte Constitucional ha determinado que la dignidad humana equivale a: 1) Al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y 2) A la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde a su condición humana. Qué una persona se deba enfrentar a un sistema que definitivamente no está hecho para ella es una humillación por la cual personas cisgénero y heterosexuales no pasan. En otros derechos que son fundamentales y básicos para la dignidad humana, también se ha visto esta lucha constante de la población LGBTIQ+ para hacer valer sus derechos.

Derecho a la seguridad

Se evidencia que las noticias de violencia contra la población LGBTIQ+ en Bogotá se incrementaron en los últimos años. Estos hechos ocurren principalmente por no ajustarse a los “roles de género tradicionales” contruidos, por lo que los crímenes se han denominado homofobia o transfobia. Se evidencia que gran parte de la población realiza las denuncias de maltrato por medios diferentes a las instituciones oficiales, porque por en estas la población presenta discriminación y marginación. Dentro de estas violencias y vulneraciones que vive la población se destacan las siguientes:

- Verbales.

- Físicas.
- Sexuales.
- Psicológicas: podemos encontrar la intimidación, el acoso, amenazas, etc.
- Indiferencia.

La vulneración y violencias que vive a diario la población LGBTIQ + afecta sistemáticamente los otros derechos de la población. Entendemos que, sin la seguridad correspondiente para estas poblaciones, no se podrá gozar de una estabilidad dentro de la sociedad.

Derecho al Trabajo

El panorama del derecho al trabajo en Bogotá para la población trans es preocupante. La Mesa Intersectorial identifica que las mujeres transgénero en un 24% han recibido tratos humillantes en sus sitios de trabajo, mientras que gays y bisexuales tienen tasas de 5,3% y 3% respectivamente. El informe también identifica que 10,7% de mujeres transgénero han recibido amenazas de despido en el ambiente laboral, por lo tanto, si se tiene en cuenta que esto es casi 8 veces más que la media de los otros grupos, encontramos que esto se debe a su identidad sexual.

Derecho a la participación

La población trans en su día a día se enfrenta a barreras que generan temor en el momento de querer participar activamente en proyectos públicos y sociales. Hay testimonios de personas transgénero que cuentan cómo han vivido en carne propia la violencia por parte de la población civil y otras veces por la fuerza pública. La violencia policial ha hecho que se desconfe de proyectos públicos donde pueda participar la población transgénero. En una encuesta hecha en 2007, dentro de la población LGBTIQ+, se encontraba la mayor proporción de personas que nunca han votado (46,9% entre los entrevistados nunca había participado en unas elecciones) (Castillo, 2009). Las experiencias participativas de las personas trans son gracias a organizaciones de colectivos hechos por y para trans.

Derechos culturales

Las personas trans expresan sus vivencias y su memoria a través de procesos culturales y recreativos que tienen un mensaje de unidad, resistencia y amor propio. Por lo tanto, es importante que la Administración Distrital fomente estos espacios por medio de políticas concretas.

4. MARCO JURÍDICO

Se presenta a continuación un compendio de normas que soporta la competencia y viabilidad del presente proyecto de acuerdo, evidenciando mandatos claros para el Estado, la Administración Distrital y el Concejo de la Ciudad de desarrollar acciones y políticas públicas encaminadas al restablecimiento y garantía de los derechos de los sectores sociales objeto de la presente iniciativa, al igual que a la realización de acciones que den respuesta a las formas de desigualdad económica y simbólica que han experimentado.

4.1. MARCO CONSTITUCIONAL

En materia de normativa nacional, con ocasión del presente debate, es preciso poner de presente en primera medida los siguientes artículos y mandatos de la Constitución Política de Colombia:

- Artículo 1. Se establece que *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*
- Artículo 2. Consagra dentro de los fines esenciales del Estado *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en*

la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

Así mismo consagra este artículo que *“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (...)”*

- Artículo 13. Frente al particular y para los fines del presente proyecto de acuerdo, establece que *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”*

Señalando de forma expresa que *“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”*

- Artículo 5. *“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (...)”*
- En concordancia con los anteriores mandatos, el artículo 16. dispone que *“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad (...)”*
- Artículo 43. Establece que *“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”*.
- Artículo 70. Entre otras, dispone que *“(...). El estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las personas que conviven en el país.”*
- Artículo 313. Corresponde a los concejos: *“1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (...)”*
- Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. *“(...) A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio. (...)”*

4.2. DISPOSICIONES INTERNACIONALES

A nivel internacional, se encuentra un amplio postulado de normas y acuerdos relativos a las poblaciones minoritarias en el mundo, que son hoy fuente de derecho y soporte de las acciones promovidas en el presente proyecto de acuerdo:

- Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en 1948, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), y en la que reunió los instrumentos necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de todo ser humano. Aunque la Declaración no constituye un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sí ha tenido repercusión en la elaboración de pactos y convenciones internacionales.

- Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, definidos como PIDESC (ONU, 1966) y el Protocolo de San Salvador (OEA, 1988) obligan a los Estados a tomar medidas positivas para mejorar las condiciones sociales y reducir las brechas de desigualdad entre grupos históricamente marginados.
- Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 1º la obligación de los Estados Parte de “(...) *respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*”.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ratificado por Colombia el 26 de octubre de 1969 y adoptado por Naciones Unidas, el contenido de este Pacto sienta las bases en los principios de libertad, justicia, paz y reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, considerando que los Estados tienen la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.
- Del mismo modo, mediante la Declaración “*Preparativos de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia*”; se reafirma el compromiso de los países adscritos a abordar manifestaciones que atenten contra las orientaciones sexuales de los individuos y se reconoce además que algunas personas y grupos poblacionales pueden experimentar otras formas de discriminación (ONU, 2000).
- En cuanto a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, la “*Convención sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*” (CEDAW), resuelta el 18 de diciembre de 1979, obliga a los Estados que la ratifiquen a la realización de acciones que contribuyan a la erradicación de las violencias contra las mujeres (ONU, 1979). Del mismo modo la “*Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres*”, conocida también como la “*Convención Belém do Pará*” promulgada en 1994, afirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los Derechos Humanos y limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. (OEA, 1994).
- En el 2002, Colombia se compromete a través de la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, a reafirmar su decisión de combatir cualquier forma de discriminación, incluida la discriminación por la orientación sexual. Es relevante destacar que esta Carta ubica a las personas con orientaciones sexuales no hegemónicas dentro de los grupos sujetos de protección especial, por lo que en los artículos 52 y 53 reconocen que las personas, sin distinción de su orientación sexual, poseen los mismos Derechos Humanos. Además, indica que combatirán toda forma de discriminación por razones de orientación sexual, a través de acciones que incluyen la modificación de la normatividad interna de los países. (Consejo Presidencial Andino en Guayaquil, 2002).
- Los Principios de Yogyakarta (2006) se ocupan de los Derechos Humanos y de su aplicación en las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Se busca que los Principios de Yogyakarta que afirman las normas legales internacionales, sean vinculantes para todos los Estados.
- Las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General No.10 de 2009) y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Recomendación General No. 28 de 2010), enfatizan que la identidad de género deber ser protegida contra la discriminación e insta a los Estados a crear políticas y programas que eliminen las

situaciones de discriminación por identidad de género.

- El Estado colombiano firmó en marzo de 2011 la Declaración Conjunta con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la finalización de los actos de violencia y violaciones de los Derechos Humanos relacionados sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género.
- Por otra parte, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH, 2015) reconoce que *“la orientación sexual es una parte fundamental de la vida privada de las personas y que está relacionada con el desarrollo de la identidad y el proyecto de vida que cada uno tenga, incluyendo su personalidad y las relaciones que establece con otros seres humanos”* (Colombia Diversa, 2019, p. 12).
- La Comisión IDH cuenta con una Relatoría Especial para los derechos de las personas LGBTI en las Américas concluye que es constante y mayoritaria la vulneración de los derechos de las personas con identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino.
- Entre 2008 y 2016 la Organización de Estados Americanos (OEA) promulgó ocho resoluciones denominadas *“Derechos humanos, orientación sexual, identidades de género y expresiones de género”*; en las cuales se reiteran las preocupaciones por las vulneraciones de Derechos Humanos de esta población en los Estados miembros y se solicita a estos Estados garantizar la plena garantía y goce de los derechos por parte de la población LGBTI. (OEA, Organización de Estados Americanos, 2008-2016).
- En la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la Organización de Naciones Unidas estableció en su Meta 8.5 la necesidad de contar con condiciones de inserción laboral plenas e incluyentes y en las Metas 10.2 y 10.3 la de potenciar y promover la inclusión social y económica de todas las personas sin discriminación por identidad de género u orientación sexual.

4.3 MARCO LEGAL

En torno a la garantía de derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, en Colombia se han expedido las siguientes leyes:

- Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
- Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Con ocasión del presente proyecto de acuerdo se resaltan las siguientes:

“Artículo 6: IGUALDAD. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.

ARTÍCULO 13. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria,

atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.”

- Ley 1482 de 2011, llamada ley antidiscriminación, tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
- Ley 1620 de 2013, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación.
- Ley Estatutaria 1751 de 2015, a través de la cual se regula y garantiza el derecho a la salud como un derecho fundamental, establece el acceso en igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, obliga al Estado a adoptar políticas para la igualdad de trato y para evitar la violación de este derecho y determinar el régimen sancionatorio. De igual manera establece que este derecho comporta los principios de universalidad, prohomine, prevalencia de los derechos, libre elección, y la necesidad de acciones afirmativas para grupos vulnerables.
- Ley 1753 de 2015, la cual en su artículo 30 establece que el Gobierno Nacional a través de sus entidades, implementará y hará seguimiento de la Política Pública Nacional para el grupo LGBTI a través del Ministerio del Interior.
- Finalmente, la Ley 1752 de 2015, que tiene como fin sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.

4.4 DECRETOS DEL ORDEN NACIONAL

- Mediante el Decreto 762 de 2018, el Gobierno Nacional adoptó la política pública que tiene por objeto la promoción y garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En este decreto se formularon como objetivos específicos:
 1. *“Promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y a una tutela judicial efectiva.*
 2. *Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI.*
 3. *Promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.”*

Así mismo, se plantean los siguientes ejes estratégicos:

1. *“Fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales para la atención con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.*
2. *Promoción del reconocimiento e inclusión de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.*
3. *Respeto, protección y garantía de derechos.”*

- Decreto 1066 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior*”, mediante la cual se definen, para efectos del presente debate, los siguientes principios:

“Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar el respeto y la garantía del derecho a la igualdad, y procederán a brindar la misma protección y trato a los familiares de las víctimas, sin distinción de etnia, identidad de género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, discapacidad, opinión política o filosófica, condición social o económica, entre otras.

Enfoque diferencial. Las autoridades públicas deberán adoptar medidas que reconozcan las particularidades poblacionales, principalmente de los sujetos de especial protección constitucional, es decir, aquellos que por sus características culturales, étnicas, de género, orientación sexual, situación de discapacidad, condición económica, social, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad y vulneración manifiesta y que requieren una atención y protección diferenciada y la implementación de políticas de acción afirmativa, acordes con su situación.”

4.5 JURISPRUDENCIA

Para la población trans la Corte Constitucional ha generado un lineamiento jurídico que ha marcado precedentes importantes en materia del reconocimiento de derechos. Para ilustrar las consideraciones jurisprudenciales se relacionan alguna sentencia y los derechos reconocidos, las cuales servirán de faro para el análisis y debate del presente proyecto de acuerdo al interior del Concejo de Bogotá:

Según Colombia Diversa, quienes realizan parte del análisis jurisprudencial que se transcribe a continuación, de acuerdo con las sentencias resueltas sobre casos trans es posible destacar que los derechos que reclaman los demandantes son principalmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación, a la intimidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libre identidad sexual, la salud, la seguridad social y la educación. Los casos provienen desde diversos ámbitos; no obstante, las vulneraciones más recurrentes van dirigidas a la negación de entidades ante el cambio de nombre y cambio del componente “sexo” en el documento de identidad, la negación de procedimientos de reasignaciones sexuales, las exclusiones laborales, las discriminaciones en espacios públicos y la prohibición del acceso a la educación. Como consecuencia ante estas situaciones, la Corte Constitucional determinó, en concordancia con la restitución de los derechos afectados, ordenar a las entidades pertinentes abstenerse de realizar actos discriminatorios, agilizar los debidos procesos, etc., tal como se puede leer en las sentencias: T-063/15, T-804/14, T-086/14, T-562/13 T-771/13, T-552/13, T-918/12, T-977/12, T-876/12, T-314/11, T-062/11, T-152/07, SU-476/97, T-594/93, T-143/2018, T-622/2014, T-476/2014, T-152/2007.

- “Sentencia C-371 de 2000, en la cual la Corte Constitucional establece la definición de las acciones afirmativas como políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, y determinados campos de acción para dichas políticas, en primer lugar, eliminar o reducir las desigualdades que afectan a determinados grupos, y por otra parte, lograr mejor representación de las personas o grupos que han sido discriminados. En la misma sentencia determinó que: “*Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables.*” (Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 29 de

marzo de 2000.)

- Sentencia C-044 de 2004, sostiene que una de las bases del Estado Social de Derecho es la búsqueda de la igualdad material, es decir real y efectiva entre los administrados, lo cual únicamente se obtiene al implementar políticas y medidas que benefician en mayor medida a las personas o grupos de personas que históricamente han sido vulnerados de tal manera que la brecha existente en el disfrute de los derechos se elimine o disminuya. (Sentencia C-044 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería, 27 de enero de 2004).
- Sentencia T-562/2013, falló a favor de una estudiante transgénero y consideró necesario que las autoridades académicas en una primera etapa realicen un acompañamiento que le brinde una adecuada adaptación a la estudiante transgénero y en una segunda etapa, que se debe incluir en el proceso a la comunidad educativa, para evitar que se vulneren derechos, y que se presente el matoneo escolar.
- Sentencia T-552 de 2013: ordenó cubrir los procedimientos médicos necesarios para estas transformaciones a dos tutelantes, que el sistema de salud cubra las transformaciones corporales necesarias para afirmar la identidad de género de las personas transgénero, las instituciones de salud todavía les exigen un certificado psiquiátrico para que puedan acceder a estos servicios.
- Sentencia T-48 de 2015, a raíz del caso Sergio Urrego en Colombia una sentencia de la Corte Constitucional obligó a las instituciones educativas a revisar los manuales de convivencia y a crear una serie de protocolos para garantizar la integridad de las personas con diferente orientación sexual. -La sentencia T-562 de 2013 tuteló el derecho de un estudiante transgénero a estudiar con el uniforme correspondiente a su identidad de género.
- Sentencia T-804 de 2014: Respecto del derecho a la educación a las mujeres transgénero. Diferenciación entre orientación sexual e identidad de género. Adicional a lo anterior, es importante resaltar que, a lo largo de los 10 años de implementación de la PPLGBTI, la DDS ha observado con preocupación que las personas transgénero, tanto hombres como mujeres son el sector poblacional que cuenta con menos oportunidades laborales lo cual crea unas condiciones de vulnerabilidad muy profundas. En este sentido también se ha manifestado la Corte Constitucional al concluir que dentro del sector LGBTI es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos. Las personas transgénero expresan su identidad de una forma que supone una mayor manifestación hacia la sociedad, generalmente a través de transformaciones físicas, lo que ha generado que se encuentren en mayor medida expuestos a prejuicios sociales y actos discriminatorios. (Sentencia T-804 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
- Sentencia T-063 de 2015, a través de la cual se reconoce el derecho a la corrección del sexo en el Registro Civil y demás documentos de identidad de las personas transgénero. En este sentido también se ha manifestado la Corte Constitucional al concluir que dentro del sector LGBTI es justamente la población trans la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos. Las personas transgénero expresan su identidad de una forma que supone una mayor manifestación hacia la sociedad, generalmente a través de transformaciones físicas, lo que ha generado que se encuentren en mayor medida expuestos a prejuicios sociales y actos discriminatorios. (Sentencia T-804 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

- Sentencia T-063 de 2015, mediante la cual se reconoce que las personas transgénero enfrentan graves obstáculos para ejercer el derecho al trabajo debido a los prejuicios sociales sobre su identidad, lo cual conlleva que no tengan las mismas oportunidades que el resto de la población para acceder y permanecer en el mercado laboral y ocasiona graves dificultades para su vida pues se ven abocados a situaciones de pobreza, enfermedad y aislamiento permanente. Aun cuando se logra alcanzar buen nivel educativo, las oportunidades se ven truncadas por condiciones de discriminación.
- Sentencia T-099 de 2015, según la cual las mujeres transgénero no son destinatarias del servicio militar obligatorio. Aplicación de un enfoque diferencial que tenga en cuenta la protección constitucional de la identidad de género y la orientación sexual frente a prohibición de obligar a prestar el servicio militar a las mujeres transexuales.
- Sentencia T-392 de 2017, “en la que la H. Corte Constitucional tuteló los derechos de la ciudadana, y en la parte motiva retoma la especial protección que se atribuye a las personas transgénero dada la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran habida cuenta de la exclusión y discriminación que han sufrido históricamente.
- Sentencia T-804 de 2019, ordenó el reintegro de un estudiante transgénero a quien se le había negado un cupo en un colegio.”
- Sentencia T 033 de 2022 - en la cual se realiza un análisis del avance en el reconocimiento de derechos de personas No Binarias a nivel mundial y se define como obligación al Gobierno Nacional y a la Registraduría a actualizar la normatividad y generar un escenario para garantizarla actualización del esquema de identificación con el componente de sexo no binario

4.6 NORMATIVA DISTRITAL

La constante discriminación y otras formas de violencia en la ciudad han demandado y requieren de mayores acciones y medidas en el Distrito de Bogotá, a continuación, se relacionan el desarrollo local a la fecha:

- Acuerdo 371 de 2009, *"Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"*, establece en sus artículos 2° Principios - literal b, y 5° Proceso estratégico *"Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales"*, la necesidad de crear acciones afirmativas e institucionalizarlas en favor de la población objeto del presente proyecto.
- La Política Pública LGBTI – PPLGBTI- de Bogotá fue creada mediante Acuerdo 371 del año 2009 y sus estrategias adoptadas a través del Decreto 062 de 2014.
- El Plan de desarrollo *"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"* reconoce las particularidades y características propias de diferentes sectores sociales y poblacionales, por lo que aplica el Enfoque diferencial en su diagnóstico y solución a problemáticas:

Artículo 6 ... "Enfoque diferencial. Reconoce que existen grupos y personas que han sido históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, identidad de género, creencia religiosa, ubicación geográfica, discapacidad, situación socioeconómica, o de la intersección de diversos sistemas de discriminación que, como el racismo, la discafofia, el clasismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia y la intolerancia religiosa; impiden el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. Este tipo de discriminación se sustenta en imaginarios, estereotipos, prejuicios y comportamientos construidos social y culturalmente que impiden la garantía

plena de derechos. Su fin es hacer ajustes a la oferta institucional para garantizar adecuadamente el acceso a los bienes y servicios reconociendo las particularidades y especificidades de los distintos grupos sociales o personas". (Alcaldía de Bogotá, 2020)

Se establece también una meta plan que representa un desafío en la construcción de competencias institucionales para la creación de una cultura que reconozca las necesidades de personas LGBTI enfocadas en personas transgénero.

"Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos".

- Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación: por medio de la cual se dan lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital.
- Documento CONPES D.C. No. 16 del Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital, por medio del cual se actualiza del Plan de Acción de la "Política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital" 2021-2032.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ:

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. el Concejo de Bogotá D.C. es competente para:

"Artículo. - 12°. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...) 25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa **no genera un impacto fiscal** que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

"Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite

respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Referencias

Bernal, J., & Patiño, C. (2020). *Documento de diagnóstico de sobre la situación de discriminación de la población LGBTI en Colombia*. Bogotá: DNP.

Defensoría del Pueblo. (25 de junio de 2021). *Defensoría del Pueblo*. Obtenido de Defensoría del Pueblo: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10218/Entre-2020-y-2021-asesinaron-a-98-personas-con-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-diversas-OSIGD-dEFENSOR%C3%8DA.htm#:~:text=Entre%202020%20y%202021%20asesinaron,g%C3%A9nero%20diversa>

Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual. (2021). *Propuesta de acciones afirmativas para personas trans en Bogotá*. Bogotá: Alcaldía de Bogotá.

Unidad de Víctimas. (18 de mayo de 2017). *Unidad de Víctimas*. Obtenido de Unidad de Víctimas: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/mas-de-dos-mil-victimas-del-conflicto-son-lgtbi/34826>

Williams Institute . (2019). *Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia. Resultados de una encuesta nacional*. Los Ángeles: Facultad de Derecho de la Universidad de California.

Atentamente,

HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Unión Patriótica

ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Colombia Humana

JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA

Concejal de Bogotá D. C.
Partido Colombia Humana

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal de Bogotá D. C.
Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social

QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

ROCÍO DUSSAN PÉREZ

Concejala de Bogotá D. C.
Partido Polo Democrático Alternativo

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

H. Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Concejal de Bogotá
Partido con toda por Bogotá

II. TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO

PROYECTO DE ACUERDO NO 480 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS TRANS A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS CON PLENA GARANTÍA DE DERECHOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo de Bogotá D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para que la Administración Distrital implemente acciones afirmativas para las personas trans de la ciudad, en especial, frente a los derechos más vulnerados a este grupo poblacional.

Parágrafo. Con el término “personas trans” se hace referencia a todas las experiencias de vida trans. Esto es: transgénero, transexual, travesti, no binario, y las demás identidades de género diversas.

ARTÍCULO 2. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA SALUD. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la salud de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Gestionar e implementar un programa encaminado a los tránsitos saludables, asistidos y con bienestar para personas trans desde la estructura en salud del sector público y alianzas público privadas.
2. Disponer y/o adecuar baños neutros en las instalaciones de atención en salud que hacen parte de la Red de Servicios de Salud del Distrito.
3. Crear un programa para promover, fortalecer y acompañar la participación y movilización en salud de las personas trans, en aras de la garantía de este derecho, desde procesos de innovación, co-creación, gestión del conocimiento, la memoria y los saberes, investigación basada en experiencias de vida trans, cuidado, autocuidado, socio cuidado, el empoderamiento de los tránsitos y la salud integral en las personas trans.
4. Conformar un equipo de replicadores integrado por personas trans, entre otras, que generen un efecto multiplicador en los centros de salud para la difusión y apropiación de las guías de salud trans.
5. Generar un programa en derechos sexuales y derechos reproductivos para personas trans, que incluya planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), procesos de fertilidad, parto y posparto y todas las demás características que conlleva la salud, la construcción y el ejercicio de la sexualidad en el marco de los derechos.

ARTÍCULO 3. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la educación de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Generar oportunidades diferenciales de acceso y permanencia a la Educación Superior mediante la generación de puntos adicionales a personas trans en las convocatorias desarrolladas por la Secretaría de Educación del Distrito, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) y otras ofertas de educación superior que brinde el Distrito.
2. Apoyar cuando así lo solicite, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Bogotá, para la revisión de sus procesos y/o procedimientos de ingreso, acompañamiento, permanencia y bienestar a personas trans, en garantía del Enfoque Diferencial por Identidades de Género.
3. Impulsar un equipo de investigación y docencia interdisciplinario, integrado por personas trans o con conocimiento en temática de género y diversidad sexual, en concertación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que lleve a cabo procesos de investigación sobre problemas sociales que enfrentan

las personas trans en Bogotá, aportando conocimiento para el diseño e implementación de políticas públicas en la ciudad.

4. Incluir en los programas de becas educativas del Distrito, una línea para personas trans, para la garantía de asistencia, sostenimiento y permanencia en el sistema de educación superior: técnicos, tecnológicos, pregrados y postgrados.

5. Crear e incluir un programa de inclusión socio laboral en el sistema educativo del Distrito, enfocado en la promoción de entornos educativos inclusivos y sin discriminación, seguimiento a la deserción escolar por razones de orientación sexual e identidad de género, involucrando procesos pedagógicos y de sensibilización con familias, cuidadores, profesores, orientadores escolares, personal administrativo y directivo de establecimientos educativos.

6. Crear e implementar un programa distrital de garantías para la permanencia de estudiantes trans en las instituciones educativas, en todos sus niveles, con acompañamiento psicosocial, ajustes administrativos de reconocimiento de la identidad, y promoción de una cultura educativa del respeto y el reconocimiento por la diversidad.

7. Establecer protocolos sobre violencias basadas en género que incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de géneros en las instituciones educativas de la ciudad.

8. Incluir como parte de la implementación de la Ley 1620 de 2013, procesos de formación sobre sistema sexo/género para maestros y maestras de las instituciones públicas de básica y media.

9. Incluir en las escuelas de familias de las instituciones educativas oficiales procesos formativos contra todo tipo de discriminación en cumplimiento de la Ley 1482 de 2011, explicitando la discriminación por orientación sexual e identidades de género.

10. Generar herramientas para los colegios distritales para que puedan hacer acompañamiento académico y psicosocial a los y las estudiantes que decidan hacer tránsitos de género garantizando el bienestar de estas personas.

11. Garantizar en las instituciones educativas oficiales el cambio de nombre en los documentos académicos y administrativos (carnets, listas de asistencia, certificados, diplomas, etc.) cuando así lo soliciten estudiantes y padres de familia o acudientes. Igualmente, se deben generar las condiciones para que se respete el nombre identitario de la o el estudiante sin que sea necesario su cambio legal.

12. Garantizar que los y las docentes trans del Distrito puedan ejercer su derecho a expresar libremente su identidad de género

diversa en los espacios laborales docentes, sin perjuicio de discriminación por parte de sus superiores, compañeros y compañeras docentes, estudiantes, padres de familia y en general de la comunidad educativa y de esta manera fomentar espacios laborales libre de violencias hacia las personas trans docentes

ARTÍCULO 4. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA VIVIENDA. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Hábitat, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la vivienda de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Crear programas para acceder prioritaria y diferencialmente a subsidios de vivienda de interés social y arrendamiento, teniendo en cuenta las configuraciones de familia de las personas trans, así como oportunidades eco materiales que disminuyan el compromiso de endeudamiento, en atención a sus dinámicas de vida y vulnerabilidad permanente.

2. Diseñar e implementar programas de vivienda colectiva y otras tipologías, que atiendan las formas particulares de habitar de las personas trans y garanticen que la vivienda corresponda con las relaciones basadas en la economía solidaria, la autogestión y la participación comunitaria.

3. Diseñar mecanismos alternativos de financiación ajustados a las dinámicas de vida de las personas trans y su vulnerabilidad económica, para facilitar el cierre financiero u otros mecanismos económicos que garanticen el derecho a la vivienda.

4. Diseñar e implementar programas para el fortalecimiento y el apoyo a la difusión de las organizaciones populares de vivienda conformada por la población trans.

5. Diseñar e implementar un programa de hogares de paso o casas refugio, que haga parte de la estrategia de atención integral a casos de violencia o emergencia habitacional.

ARTÍCULO 5. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LOS DERECHOS A LA VIDA Y SEGURIDAD. La Administración Distrital, en cabeza de las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia y de la Mujer, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía de los derechos a la vida y la seguridad de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Conformar un equipo que incluya personas trans en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que atienda territorialmente las situaciones de violencia que enfrentan las personas trans, de tal manera que recepcionen, enruten, hagan seguimiento de las denuncias correspondientes y adelanten procesos de convivencia en las localidades y con los actores involucrados en las situaciones de conflicto que se identifiquen.

2. Transversalizar el enfoque trans para el acompañamiento en las diferentes rutas del Distrito que atienden situaciones para la garantía de derechos, en articulación con la Unidad contra la Discriminación, con el fin de incluir un enfoque diferencial, interinstitucional e intersectorial de respuesta y seguimiento a casos de personas trans, relacionados con la seguridad, convivencia, violencias, abuso sexual correctivo, abusos de la fuerza pública y transfeminicidio, Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNA), trata de personas, entre otros hechos que atenten contra la integridad física, psicológica, económica y sexual de las personas trans.

3. Atender con enfoque diferencial a las personas trans en el marco de la implementación de la Estrategia de Atención a Víctimas de Violencia(s) en Razón a su Orientación Sexual e Identidad de Género Casa Refugio LGBTI, la Ruta de Atención Interna de las Víctimas de Trata de Personas (VTP) y la Ruta de Atención y Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

4. Identificar y atender diferencialmente a personas trans en el marco de la implementación de acciones frente a casos de abusos de autoridad.

ARTÍCULO 6. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO AL TRABAJO. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco de sus competencias, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho al trabajo de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Generar un sistema de cuotas y cupos diferenciales para la vinculación socio laboral de personas trans en las entidades del Distrito, a través de órdenes de prestación de servicios, plantas temporales, cargos directivos y provisionalidad; teniendo en cuenta los sistemas de equivalencias; las experiencias y saberes empíricos; y el reconocimiento de las identidades trans en los procesos de selección, nombramiento, precontractuales y contractuales.

2. Fortalecer los programas para la tramitación de los cambios de nombre, sexo y/o género en los documentos de identidad y libreta militar de las personas trans que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica en articulación con las entidades públicas del orden nacional competentes.

3. Fortalecer el desarrollo y sostenibilidad de micro, pequeñas y medianas empresas de personas trans o que las incluyan de manera significativa, así como de emprendimientos, proyectos productivos, de economía popular, y de generación de ingresos en procura de su seguridad económica, estabilidad y vida digna.

4. Realizar una caracterización socio laboral de personas trans en términos de sus barreras y sus necesidades.

5. Formar en habilidades para el trabajo (blandas, transversales, y/o laborales) que amplíen las posibilidades de inserción laboral de las personas trans, en articulación con la escuela de desarrollo de capacidades para la inclusión socio laboral trans para el desarrollo de procesos de convocatoria y selección de potenciales beneficiarios a los programas de formación.

6. Realizar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial a las personas trans que son vinculadas laboralmente para evitar la deserción laboral y fortalecer capacidades a través de la gestión público privada

7. Crear una estrategia de promoción y difusión de la normatividad para la formalización laboral desde la perspectiva trans para el ecosistema empresarial de la ciudad.

ARTÍCULO 7. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC), en el marco de sus competencias, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la participación de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Crear un programa de incentivos, becas y estímulos económicos para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y artística de personas trans, constituidas y no constituidas jurídicamente, cuyas iniciativas y procesos aporten a la inclusión de las personas trans en Bogotá, la transformación de imaginarios y representaciones sociales; la incidencia política; la participación social; la producción, circulación, investigación y movilización de expresiones artísticas y culturales.

2. Los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías Locales acogerán los lineamientos técnicos elaborados por la Secretaría Distrital de Planeación desde la Dirección de Diversidad Sexual para la formulación de proyectos de inversión local, en donde se incluye población LGBTI y se deberá atender especialmente a personas trans.

3. Crear procesos de incidencia política, formación y fortalecimiento de nuevos liderazgos de personas trans que contribuyan a su postulación y elección en espacios políticos

ARTÍCULO 8. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LOS DERECHOS CULTURALES. La Administración Distrital, en cabeza del Sector de Cultura, Recreación y Deporte, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía de los derechos culturales de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Fortalecer la escuela de Artes y Oficios trans, a partir de alianzas público-privadas y/o comunitarias para garantizar en el diseño e implementación su sostenibilidad.

2. Implementar procesos de cualificación y/o formación con personas trans en arte, cultura, patrimonio, recreación y/o deporte.

3. Crear la línea de fomento para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y artística de personas trans, cuyas iniciativas y procesos, aporten a la inclusión de las personas trans en Bogotá, que potencia la creación, desarrollo y circulación de las expresiones artísticas, patrimoniales y culturales.

4. Fomentar y promover el respeto por las identidades y experiencias de vida trans y transgénero en las prácticas deportivas, amateur y profesionales, generando procesos de sensibilización en las distintas categorías y en las diversas disciplinas deportivas, buscando la inclusión de personas trans a las distintas ligas deportivas del distrito. Aumentar el indicador de personas trans que practican un deporte en el distrito

ARTÍCULO 9. SEGUIMIENTO. La Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual de la Política Pública LGBTI (MIDS), su unidad técnica trans (MIDS UTA TRANS), el Consejo Consultivo LGBT y las organizaciones de la sociedad civil que representan a estos sectores, establecerán la batería de indicadores para medir el avance y hacer seguimiento a la implementación de los lineamientos definidos en este Acuerdo.

ARTÍCULO 10. INFORMES. La Administración Distrital desde la Secretaría Distrital de Planeación y la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual (MIDS), presentará al Concejo de Bogotá informe anual de balance de cumplimiento del presente acuerdo y del Acuerdo 379 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas - LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el primer día hábil de junio de cada año, en el marco del mes de la diversidad sexual en el Distrito.

Artículo 10. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE